



TESIS DOCTORAL

Justicia ambiental y espacios verdes:

***Un análisis a través de la ‘European
Green Capital’ Vitoria-Gasteiz***

Autora:

Alicia Arriaga Legarda

Directora:

Dra. Mercedes Pardo Buendía

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SOCIAL

Getafe, noviembre 2015



TESIS DOCTORAL

JUSTICIA AMBIENTAL Y ESPACIOS VERDES: UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA 'EUROPEAN GREEN CAPITAL' VITORIA-GASTEIZ

Autora: Alicia Arriaga Legarda

Directora: Dra. Mercedes Pardo Buendía

Firma del Tribunal Calificador:

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Calificación:

Getafe, de de 201

A mis padres

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a la directora de esta tesis, la Dra. Mercedes Pardo Buendía y al Departamento de Análisis Social, por su apoyo, orientación y comprensión durante todos estos años.

También quiero agradecer al Departamento *Urban and Environmental Policy and Planning*, de la Universidad de Tufts, y en especial al profesor Julian Agyeman, por su acogida y apoyo durante los meses de mi estancia como investigadora visitante.

A mis amigos y compañeros, por su confianza y paciencia.

A mis padres.

INDICE

ÍNDICE DE TABLAS	XIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XV
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN	1
I.1. Antecedentes.....	1
I.2. Objetivos de la investigación	4
I.3. Estructura de la investigación	5
CAPÍTULO II: LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.....	9
II.1. ¿Cómo se define el concepto de desarrollo sostenible?	11
II.2. Desarrollo Sostenible: Ambiguo, Neutral, Unificador, Disputado	14
II.3. La Dimensión Social del Concepto de Desarrollo Sostenible	17
II.4. Consideraciones Finales	29
CAPÍTULO III: JUSTICIA AMBIENTAL	31
III.1. El Camino Recorrido desde el Movimiento Ecologista al Movimiento por la Justicia Ambiental	32
III.2. Los Orígenes de la Justicia Ambiental: Un Fenómeno Estadounidense	39
III.3. Elementos de Controversia	44
III.4. El Marco del Discurso de la Justicia Ambiental	47
III.5. La Justicia Ambiental en Europa	49
III.5.1. El Mapa Institucional Europeo de la Justicia Ambiental	50
III.5.2. ¿Existe Evidencia de Injusticia Ambiental en Europa?	53
III.5.2.1. Reino Unido	54
III.5.2.2. Alemania y Francia	55
III.5.2.3. España	56

III.5.3. La Construcción de la Justicia Ambiental en los Estados Unidos y Europa: Diferencias y Similitudes.....	58
III.6.3.1. 'de abajo hacia arriba' versus 'de arriba hacia abajo'	58
III.5.3.2. Etnia versus Renta	60
III.5.3.3. Contaminación Industrial y Tóxica Versus un Amplio Rango de Temas	64
III.5.4. ¿Un Nuevo Paradigma de Justicia Ambiental para Europa?	67
III.6. Consideraciones Finales.....	68
 CAPÍTULO IV: TERRENO COMÚN ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUSTICIA AMBIENTAL.....	71
IV.1. Buscando un Terreno Común entre el Desarrollo Sostenible y la Justicia Ambiental.....	72
IV.2. 'Re-pensar' un nuevo paradigma.....	77
 CAPÍTULO V: ESPACIOS VERDES URBANOS.....	85
V.1. Reivindicando la Ciudad: Hacia la Ciudad Justa	85
V.2. El valor de los espacios Verdes Urbanos	89
V.2.1. Beneficios medioambientales.....	92
V.2.2. Beneficios sociales.....	93
V.2.3. Beneficios económicos.....	96
V.3. Un Sistema de Espacios Verdes Urbanos Sosteniblemente Justo.....	98
V.3.1. El Papel del Espacio Verde en una Sociedad cohesionada socialmente: Cuestiones de Inclusión y Exclusión.....	98
V.3.2. Distribución Equitativa de la Naturaleza	101
 CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA.....	105
VI.1. Fases de la Investigación	106
VI.1.1. Preguntas de la investigación.....	107
VI.1.2. Objetivos de la investigación	107
VI.1.2.1. Objetivos generales	107
VI.1.2.2. Objetivos intermedios.....	107
VI.2. Estudio Cualitativo	108
VI.3. Enfoque metodológico: Estudio de Caso.....	110
VI.3.1. Fundamentos Teóricos del Estudio de Caso	111
VI.3.2. La Elección de Vitoria-Gasteiz como Caso	115
VI.4. Decisiones Muestrales	116
VI.4.1. Selección de la Muestra	117
VI.4.2. Tamaño de la Muestra.....	118
VI.4.3. Análisis descriptivo de la muestra	120
VI.5. Recogida de datos: La Entrevista en Profundidad.....	121
VI.5.1. Guion de la Entrevista	122
VI.5.2. Contacto y Presentación	122
VI.5.3. Realización de las Entrevistas.....	123
VI.5.4. Registro y Transcripción de los Datos	123

VI.6. Análisis e Interpretación de Datos.....	124
VI.7. Criterios de Calidad.....	126
VI.7.1. Credibilidad	128
VI.7.2. Transferibilidad.....	129
VI.7.3. Dependencia	129
VI.7.4. Confirmabilidad	130
CAPÍTULO VII: VITORIA-GASTEIZ: 'EUROPEAN GREEN CAPITAL 2012'	131
VII.1. El desarrollo urbano de Vitoria-Gasteiz.....	131
VII.2. El compromiso de Vitoria-Gasteiz con la Sostenibilidad Local	134
VII.3. La Infraestructura Verde en Vitoria-Gasteiz	138
VII.3.1. Zona urbana: parques y jardines de la ciudad	140
VII.3.2. Zona periurbana: Anillo Verde.....	140
VII.3.3. Zona rural	145
CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS Y RESULTADOS	149
VIII.1. Perspectivas sobre los espacios verdes urbanos en Vitoria-Gasteiz	150
VIII.2. Referencias sobre el término justicia ambiental	159
VIII.3. Percepción sobre Los espacios verdes como factor para la sostenibilidad local y la justicia ambiental en Vitoria-Gasteiz.....	163
CONCLUSIONES.....	185
BIBLIOGRAFÍA.....	191
ANEXO 1: EXECUTIVE ORDER 12898 (11 DE FEBRERO 1994)	217
ANEXO 2: GUION DE LA ENTREVISTA.....	223
ANEXO 3: CONTACTO CON LOS PARTICIPANTES	225
ANEXO 4: AGENDA LOCAL 21 – CAPÍTULO 28.....	227
ANEXO 5: INDICADORES DE LA AGENDA LOCAL 21 DE VITORIA-GASTEIZ	229
ANEXO 6: COMPROMISOS DE AALBORG+10	235

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Principios de justicia ambiental	43
Tabla 2. Beneficios de los espacios verdes urbanos	97
Tabla 3. Características tipológicas de los participantes	120
Tabla 4. Criterios de calidad	128
Tabla 5. Cronología de las actuaciones de Vitoria-Gasteiz hacia la sostenibilidad.....	134
Tabla 6. Las 11 líneas estratégicas del Plan de Acción Local de Vitoria-Gasteiz	138
Tabla 7. Perspectivas sobre los espacios verdes urbanos en Vitoria-Gasteiz	150
Tabla 8. Conocimiento del término justicia ambiental	160
Tabla 9. Objetivos de los huertos urbanos municipales	170

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diseño del método	113
Figura 2. Ubicación geográfica de Vitoria-Gasteiz	132
Figura 3. Parques del Anillo Verde	141
Figura 4. Parque de Salburua	142
Figura 5. Parque del Zadorra	143
Figura 6. Parque de Zabalgana	143
Figura 7. Parque de Armentia	144
Figura 8. Parque de Olarizu	145
Figura 9. Parque de Errekaleor	145
Figura 10. Vista de la zona rural del municipio de Vitoria-Gasteiz	146
Figura 11. Huertas de Olarizu y Urarte	169
Figura 12. Huertos ecológicos en los Centros Cívicos	172
Figura 13. Participantes de la iniciativa 'Las raíces del mañana'	175

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

I.1. ANTECEDENTES

Vitoria-Gasteiz fue premiada por la Comisión Europea para ostentar la Capitalidad Verde Europea durante el año 2012. Este premio ha sido, sin duda, la culminación de una trayectoria dedicada al compromiso institucional continuo por el fomento y la implementación de políticas que acercasen a la ciudad hacia la consecución de la sostenibilidad local. Este nivel de compromiso da constancia de que la ciudad considera que la reducción del impacto ambiental negativo que provoca en el medio ambiente local es prioritario en sus políticas, lo que también indica la aspiración genuina de que sus ciudadanos, cada vez más, cuenten con niveles de calidad de vida mayores y mejores. Bien es cierto, que Vitoria-Gasteiz fue una de las primeras ciudades españolas en firmar la Carta de Aalborg en 1995.

Quizás, la seña de identidad de Vitoria-Gasteiz es su red de espacios verdes, que fue, por otro lado, un factor determinante para la obtención de la *European Green Capital*. La ciudad es completamente consciente de la necesidad de defender, mantener y desarrollar su estructura verde, ya que las zonas verdes representan una contribución muy

significativa para el desarrollo sostenible de la ciudad al mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, desde diferentes ámbitos, el medioambiental, el social y el económico.

La ciudad, a través de su compromiso con el desarrollo sostenible, es también sensible al papel que juegan los espacios verdes en mejorar el espacio urbano. El proceso de planificación de la red de espacios verdes en la ciudad ha sido positivo, ya que las áreas verdes se han incrementado significativamente siendo su dotación actual prácticamente el doble que hace 35 años, en parte debido al gran recurso natural que posee Vitoria-Gasteiz, como es su Anillo Verde, donde se sitúan ecosistemas reconocidos internacionalmente por su gran valor ambiental.

Esta voluntad continua de la ciudad por mejorar los niveles de calidad de vida de sus ciudadanos a través de la promoción de la sostenibilidad local, le llevó a adherirse a los compromisos de la Carta de Aalborg+10 – la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad – y, por lo tanto, comprometiéndose, a su vez, al fomento del principio de la justicia ambiental, destacado en su principio número 10. Los compromisos de Aalborg sitúan al concepto de la justicia ambiental dentro de un marco de desarrollo sostenible local. Debe ser importante, por tanto, descubrir un terreno común donde estas dos nociones se encuentren, ya que han evolucionado a partir de discursos y experiencias políticas diferentes.

Diversos autores abogan por la compatibilidad de estos conceptos dentro de un marco común de actuación. Según CIEL (2002: 6), los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental son “enteramente compatibles” y “simbióticamente relacionados y deberían ser perseguidos en tándem”. Esto es así porque “el desarrollo sostenible es el marco principal para la mejora de la calidad de vida” (CIEL, 2002: 6). Agyeman *et al.* (2002: 157) sugieren que el concepto de justicia ambiental debería convertirse en un factor integral de los esfuerzos por la sostenibilidad porque “una sociedad verdaderamente sostenible es una donde cuestiones más amplias de las necesidades sociales y del bienestar, y de la oportunidad económica están íntimamente conectadas con las cuestiones medioambientales”. Low y Gleeson (1998: 14) se muestran de acuerdo al afirmar que “el desarrollo sostenible sin justicia ambiental es una fórmula vana”. Por lo tanto, el reto que se plantea es el de lograr que la sostenibilidad y la justicia social se logren de manera simultánea.

El concepto de desarrollo sostenible se ha convertido desde su aparición en 1987, en el eje vertebrador en el que se sustenta la alianza que forman la economía, la justicia

social y la protección del medio ambiente. No obstante, la literatura sobre esta noción se ha enfocado principalmente en su dimensión medioambiental o ecológica, seguida de su aspecto económico, y en detrimento de su perspectiva social. Sin embargo, se debe resaltar la importancia de la dimensión social en su contribución a un cambio de paradigma de la noción de desarrollo sostenible, en particular a través de conceptos como los de justicia ambiental.

La justicia ambiental ha comenzado a posicionarse, en las últimas tres décadas, de forma clara en el ámbito internacional, convirtiéndose en un elemento importante del discurso medioambiental. Esta conceptualización combina tanto elementos sociales como medioambientales y reconoce la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de los impactos medioambientales negativos como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de las normativas y políticas públicas en materia de medio ambiente.

En los últimos años, el discurso de la justicia ambiental ha llegado a los debates europeos donde se han comenzado a llevar a cabo investigaciones, tanto desde el ámbito académico como desde el institucional, en el contexto particular de Europa. Sin embargo, aunque existen similitudes entre los marcos estadounidenses y europeos, también se dan diferencias. En Europa, la política medioambiental está fundamentada en la consecución de la sostenibilidad y, por tanto, los estudios en Europa tienden a basarse no solo en las consecuencias derivadas de las plantas industriales contaminantes, de las instalaciones de residuos tóxicos y de la calidad del aire, en contraste con lo que ha sido la tónica dominante en los Estados Unidos, pero también en un amplio espectro de otros temas muy significativos relacionados con las desigualdades medioambientales (Stephen *et al.*, 2001; Elvers *et al.*, 2009), como el acceso a los recursos medioambientales que generan una mayor calidad de vida en los individuos.

En Europa, bajo el 'paraguas' de la sostenibilidad, la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas, las instituciones y el mundo académico han comenzado a considerar otros temas susceptibles de incurrir en injusticias ambientales. Este es el caso de los espacios verdes en las ciudades, cuyos beneficios se reconocen que abundan en el logro de una mayor calidad de vida para los ciudadanos. Los espacios verdes no solo proporcionan beneficios sociales, como son las oportunidades que ofrece a las comunidades en cuestiones de recreación y estética; éstos también juegan un papel muy importante en mantener la calidad ambiental en las zonas urbanas.

Dada la escasez de investigaciones que relacionen los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental en el marco español, se percibe que la investigación que en este trabajo se expone sobre los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz y su contribución a los objetivos de la sostenibilidad local y de la justicia ambiental, deviene interesante como aportación académica.

I.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fruto de años de estudio exhaustivo en diferentes materias, todas ellas relacionadas con el desarrollo sostenible y su problemática en diversos ámbitos, surgió la idea de realizar esta investigación. Al comienzo de mi formación académica, el concepto de desarrollo sostenible estaba en auge y la literatura al respecto era muy prolífica y variada. Esta circunstancia me permitió el estudio del desarrollo sostenible desde muy diversas fuentes y puntos de vista. Finalmente, casi por casualidad, cayó en mis manos un artículo en que su autor defendía la tesis de que la justicia ambiental, debo admitir que era un concepto desconocido hasta ese momento para mí, debía ser una parte importante de la sostenibilidad. Las numerosas posibilidades que esta nueva teoría aportaban a una visión del desarrollo sostenible vista desde un prisma diferente, encendieron la chispa que me permitió profundizar en el tema.

El resultado de este nuevo interés me llevó a ahondar, cada vez más, en el concepto de la justicia ambiental, originario de EE. UU., y sobre todo, en las posibilidades que éste tenía para la el logro de la sostenibilidad local en el ámbito europeo. Al mismo tiempo, como vitoriana, reflexionaba sobre el compromiso que las instituciones locales de mi ciudad habían aceptado para construir una Vitoria-Gasteiz cada vez más cercana a la sostenibilidad, llegando la ciudad a obtener el premio de European Green Capital otorgado por la Comisión Europea. Indagué, por tanto, en las políticas que se estaban llevando a cabo en la ciudad y comprobé que la seña de identidad de este compromiso, los espacios verdes, podrían ser el marco ideal para realizar un estudio que relacionase cuestiones de sostenibilidad y justicia ambiental. Descubrí también, de este modo, un posible vacío en la literatura relacionada que podía resultar de interés para la comunidad científica.

Como consecuencia de todas estas reflexiones, se pretendió llevar a cabo una investigación que diera respuesta principalmente a dos preguntas:

- * ¿Contribuyen las infraestructuras verdes urbanas a la sostenibilidad local y la justicia ambiental? ¿Y en particular la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz?
- * ¿Los actores sociales pertenecientes a una sociedad cuyas instituciones están fuertemente comprometidas con la responsabilidad ambiental perciben que los espacios verdes contribuyen a la sostenibilidad local y la justicia ambiental?

Para dar respuesta a estas preguntas, se ha llevado a cabo una investigación basada en el análisis de la literatura internacional de las reflexiones, teorías y experiencias, tanto del desarrollo sostenible, como de la justicia ambiental, así como un análisis cualitativo a través de la realización de entrevistas en profundidad a los agentes sociales seleccionados para este estudio. En esta investigación, la exploración a fondo del compromiso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con la justicia ambiental y la sostenibilidad local será el principal objetivo, y no persigue la transferibilidad de los resultados a otros contextos. Sin embargo, aquellas aportaciones que puedan derivarse de esta investigación pueden resultar de interés para aquellos profesionales cuya labor se centre en conseguir que las ciudades se aproximen cada vez más a un futuro sostenible.

En el Capítulo VI se detallan los objetivos generales, así como los objetivos intermedios y la metodología utilizada para conseguir dichos objetivos.

I.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio de investigación comienza con el presente capítulo introductorio y consta, adicionalmente, de otros 7 capítulos y un apartado final dedicado a las conclusiones de la investigación. Este total de 9 capítulos se han estructurado en 2 partes diferenciadas que corresponden, en primer lugar, a la revisión bibliográfica de la literatura existente y, en segundo lugar, al estudio de caso. Seguidamente, realizaré una breve exposición del contenido de cada uno de los capítulos que componen esta tesis doctoral.

El Capítulo II recogerá el estudio teórico realizado de la dimensión social del concepto de desarrollo sostenible. Se comenzará definiendo este concepto para tratar de esclarecer qué es lo que realmente ‘significa’ el desarrollo sostenible, mediante un breve recorrido por sus diferentes definiciones. Este apartado nos permitirá evaluar las bases en las que se fundamenta el Informe Brundtland y, por consiguiente, afirmar que el eje

vertebrador del concepto de desarrollo sostenible es esencialmente el producto derivado de la alianza entre la justicia y equidad social y la protección medioambiental. Seguidamente, se llevará a cabo un debate sobre si el concepto de desarrollo sostenible es realmente impreciso o simplemente está sujeto a oposición argumentativa. La conclusión que se alcanza se refiere al gran trabajo que el Informe Brundtland ha realizado para que este concepto haya sido masivamente aceptado, a pesar de las dudas que ha suscitado acerca de su significado.

Es en la segunda parte de este capítulo donde se tratará la dimensión social del desarrollo sostenible y donde se expondrán las razones por las que la ésta (y particularmente los aspectos de justicia y equidad social) se consideran de crucial importancia para el concepto. Sin embargo, aunque se evidenciará en este trabajo cómo el Informe Brundtland ha asignado una importancia significativa a la sostenibilidad social, esta dimensión no ha tenido en la literatura referente al desarrollo sostenible el mismo peso que la dimensión ambiental y económica. ¿Es la perspectiva social, y concretamente la justicia y la equidad social de la sostenibilidad la gran olvidada? Este apartado intentará dar respuesta a esta pregunta, además de dar las razones que se derivan de la omisión del aspecto social del concepto de desarrollo sostenible en la literatura.

El Capítulo III rastreará, en primer lugar, el camino que el medioambientalismo moderno ha recorrido durante las décadas pasadas, hasta el surgimiento del movimiento social por la justicia ambiental. Los orígenes del movimiento por la justicia ambiental han sido, sin ninguna duda, un fenómeno estadounidense. Este Capítulo examinará cuestiones relacionadas con esta génesis en su segunda parte, a la que le seguirá una breve discusión del estado de la cuestión de la justicia ambiental en Europa centrándose principalmente en el contexto español. La justicia ambiental en Europa ha comenzado a tener relevancia en los últimos años, y en sus estudios ya se pueden percibir semejanzas, pero sobre todo diferencias, respecto a la experiencia estadounidense. La noción de la justicia ambiental ha recibido, a lo largo de sus más de tres décadas de experiencia, no pocas críticas. Este capítulo analizará y discutirá aquellas que más adeptos han tenido. Finalmente, se llevará a cabo un necesario análisis del marco de la justicia ambiental antes de perfilar algunas consideraciones finales.

Aunque, según se pone de manifiesto a través de los Capítulos II y III, los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental se han originado de forma paralela, en el Capítulo IV se pretende llevar a cabo un análisis en el que se intentará demostrar cómo éstos pueden acercar posiciones para encontrar un terreno común y crear así un corpus

teórico que las aglutine. Este capítulo se centrará, principalmente, en las argumentaciones realizadas por el profesor de la Universidad de Tufts, Julian Agyeman, principal precursor del Paradigma de la Sostenibilidad Justa en el que, a través de la premisa de que el concepto de justicia ambiental debe convertirse en un factor integral de los esfuerzos por el logro de la sostenibilidad, se incorporan cuestiones más amplias de justicia social en el marco de la misma.

El Capítulo V nos centrará el estudio en el ámbito urbano. En primer lugar, comenzará realizando una exposición sobre como las ciudades son causa y consecuencia de la degradación ambiental que sufren, al mismo tiempo que la mayor parte de la población mundial reside en ellas. Posteriormente, el análisis tratará de reivindicar la ciudad sosteniblemente justa. En una segunda parte, este capítulo nos adentrará en los espacios verdes urbanos, realizando un estudio sobre su valor tanto medioambiental, social y económico, así como éstos contribuyen a la justicia ambiental y a la sostenibilidad local.

El estudio del método escogido para este estudio de investigación se detallará, de forma extensa, en el Capítulo VI. Se propondrá una investigación cualitativa con un enfoque metodológico de estudio de caso fundamentado en la entrevista en profundidad. En este capítulo también se indicarán las decisiones muestrales implementadas en el estudio, el método de recogida de datos escogido, el análisis e interpretación de los datos llevado a cabo, así como los criterios de calidad tenidos en cuenta.

El Capítulo VII presentará a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a la que la Comisión Europea otorgó el premio European Green Capital en 2012, cuyos espacios verdes han sido objeto de estudio de esta investigación. En primer lugar, se realizará una breve exposición del desarrollo urbano ocurrido en la ciudad, para continuar examinado el compromiso que las autoridades locales de Vitoria-Gasteiz han tenido, desde los orígenes del concepto de desarrollo sostenible, por el logro de la sostenibilidad local. En una segunda parte, se analizará con detalle la infraestructura verde de la ciudad.

Los resultados generados a través del análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad a los diferentes agentes sociales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, así como su discusión, se examinarán en el Capítulo VIII.

Finalmente, el último apartado expondrá las conclusiones obtenidas a través del análisis empírico.

La parte bibliográfica y los anexos ocuparán las páginas finales de esta tesis doctoral.

CAPÍTULO II

LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La literatura, tanto académica como la relativa a las políticas públicas, sobre el concepto de desarrollo sostenible, desde su popularización en 1987 a través del Informe Brundtland (WCED, 1987), y caracterizada por ser marcadamente interdisciplinar, ha sido especialmente prolífica¹. Casi treinta años después de este trabajo seminal, el concepto de desarrollo sostenible sigue siendo una fuente inagotable de debates y argumentaciones, principalmente sobre su conceptualización y sus diversas dimensiones.

Es un concepto particularmente complejo y con grandes retos que superar, incluso en la actualidad, relativos a su marcada ambigüedad. No existe consenso sobre el significado del término desarrollo sostenible. Se podría señalar que este hecho se corresponde con una situación excepcional, ya que los conceptos fundamentales son, con frecuencia, relativamente sencillos y fáciles de comprender (Jacobs, 1991)². No obstante, a

¹ Al cierre de esta tesis doctoral, tiene lugar en Nueva York la nueva Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible donde se adoptará la nueva agenda de desarrollo para los próximos años.

² Citado en Dresner (2002: 66).

pesar de esta reconocida ambigüedad y complejidad, este concepto ha gozado de una gran aceptación entre diferentes agentes, pertenecientes a diversos ámbitos (desde el económico y el político, al social), con agendas discordantes y, en ocasiones, opuestas (O’Riordan, 1988³; Torgerson, 1995). Es un concepto, por tanto, caracterizado por su gran naturaleza paradójica.

El concepto de desarrollo sostenible se fundamentó en la idea referida a los efectos negativos que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente bio-geofísico. Sin embargo, el Informe Brundtland ha tratado, principalmente, de dar un sentido social más amplio al concepto de sostenibilidad⁴, ya que ha logrado plasmar la noción de que los problemas medioambientales son causa y a la vez que consecuencia de una profunda desigualdad económica y social, que afecta no solo al contexto de las relaciones Norte-Sur, sino también al contexto de desigualdad dentro de una misma nación y, en definitiva, de las sociedades contemporáneas en general.

Por un lado, el Informe Brundtland señala cómo el consumismo conspicuo, que caracteriza a las sociedades económicamente más desarrolladas, afecta de forma particularmente severa a las naciones más pobres del planeta, así como a los grupos más desfavorecidos de la sociedad de las naciones industrializadas (WCED, 1987). Por lo tanto, el Informe Brundtland nos informa de que una sociedad injusta no podrá, en ningún caso, ser una sociedad medioambientalmente sostenible.

³ Citado en Dresner (2002: 64).

⁴ En este estudio, los términos ‘desarrollo sostenible’ y ‘sostenibilidad’ (a veces denominado ‘sustentabilidad’) se tratarán y discutirán indistintamente, como viene siendo la tendencia desde hace algún tiempo, y ya que la discusión relativa a la ‘intercambiabilidad’ de los conceptos no es crucial para la presente argumentación. Sin embargo, para algunos autores estas conceptualizaciones son diferentes. Por ejemplo, O’Riordan (1988; citado en Dresner, 2002: 65) establece una clara distinción entre sostenibilidad y desarrollo sostenible: el concepto de desarrollo sostenible se diferencia del de sostenibilidad ya que el primero prioriza el desarrollo, mientras que el segundo se refiere esencialmente al medio bio-geofísico. Moffatt (2007: 319) también reconoce la diversidad de estos dos conceptos al argumentar que “el concepto de desarrollo sostenible es más amplio que el de sostenibilidad y destaca tanto la idea la sustentación de una actividad durante un largo periodo de tiempo para las generaciones actuales y futuras, como la vinculación de esta actividad al desarrollo en lugar de al crecimiento económico per se”. Sin embargo, en la retórica de la conceptualización, los términos de desarrollo sostenible y sostenibilidad se utilizan, generalmente, de forma intercambiable. Además, según Jacobs (1995; citado en Connelly, 2007: 262) la tendencia ha sido utilizar el concepto de sostenibilidad como una abreviación del de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, el reciente informe elaborado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2013), referente científico más importante sobre el Cambio Climático y base para la construcción de los acuerdos políticos de lucha contra el mismo, sitúa la necesidad del desarrollo sostenible como una relevancia no solo científica, sino también social, al concluir y corroborar la gravedad de los problemas del Cambio Climático y de su conexión con el impacto socio-ambiental, así como al situar las medidas de mitigación y de adaptación de las sociedades en una posición estratégica central.

No obstante la literatura sobre el concepto de desarrollo sostenible se ha preocupado de la dimensión medioambiental del concepto, seguida de la económica, y en detrimento de la dimensión social.

II.1. ¿CÓMO SE DEFINE EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

Existen numerosas definiciones y una literatura muy fecunda del término desarrollo sostenible que ha tratado de recopilar definiciones de este concepto en diferentes contextos y marcos teóricos (Redclift y Woodgate, 1997). Por ejemplo, Pearce *et al.* (1989) ofrecieron un amplio abanico de definiciones para el término desarrollo sostenible, muchas de ellas incompatibles entre sí. Esta amalgama de interpretaciones fue también señalada por Gow (1992: 51) al equipar el desarrollo sostenible con la felicidad: “todo el mundo cree en ella y cada uno tiene una definición diferente”.

The World Conservation Strategy con frecuencia ha sido considerado el primer documento en ofrecer una definición del término desarrollo sostenible:

[...] the modification of the biosphere and the application of human, financial, living and non-living resources to satisfy human needs and improve the quality of human life. For development to be sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as economic ones; of the living and non-living resource base; and of the long term as well as the short term advantages and disadvantages of alternative actions (IUCN-UNEP-WWF, 1980: 1).

Sin embargo, según Langhelle (2000) la manifestación más temprana del concepto se puede encontrar en un informe realizado en 1976 por *The World Council of Churches*, la cual, afirma este autor, podría considerarse una citación del Informe Brundtland por su gran semejanza:

The twin issues around which the world's future revolves are justice and ecology. 'Justice' point to the necessity of correcting maldistribution of the products of the Earth and of bridging the gap between rich and poor countries. 'Ecology' point out to humanity's dependence upon the Earth. Society must be so organized as to sustain the Earth so that a sufficient quality of material and cultural life for humanity may itself be sustained indefinitely. A sustainable society which is unjust can hardly be worth sustaining. A just society that is unsustainable is self-defeating. Humanity now has the responsibility to make a deliberate transition to a just and sustainable global society" (World Council of Churches, 1976)⁵

No obstante, el concepto de desarrollo sostenible es comúnmente definido (la definición estándar) como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (WCED, 1987: 8). Esta definición fue ofrecida por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la publicación de la obra seminal *Our Common Future*, también conocida como el Informe Brundtland.

Esta definición incluye dos conceptos claves. En primer lugar, el "concepto de las necesidades, en particular las necesidades básicas de los más desfavorecidos del planeta, a los cuales se debería dar la máxima prioridad" (WCED, 1987:8). La pobreza y la distribución desigual de los recursos se identifican en este informe como las causas principales de la degradación medioambiental:

Un mundo en el que la pobreza y la desigualdad son endémicas siempre será proclive a las crisis ecológicas o de cualquier otro tipo. El desarrollo sostenible requiere satisfacer las necesidades básicas de todos y extender a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones de una vida mejor (WCED, 1987: 44).

Esta definición, sin embargo, ha sido frecuentemente criticada por ser elusiva y poco estratégica (Dresner, 2002: 64), precisamente, según nos indican Pearce *et al.* (1989), por la aparente imposibilidad de determinar qué son exactamente necesidades es el principal obstáculo para poner en práctica la definición del Informe Brundtland.

En segundo lugar, nos habla del concepto de las limitaciones, en este caso no se refiere a límites absolutos, sino a "las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social de los recursos medioambientales e impuestas por la capacidad de

⁵ Citado en Langhelle (2000: 298).

la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas” (WCED, 1987: 8). En este sentido, es preciso, por tanto, expresar estas limitaciones en términos de niveles máximos y mínimos, de manera que debería existir un nivel máximo de degradación ambiental por encima del cual no sufran ni las sociedades ni los individuos, y, análogamente, debe existir un nivel mínimo de calidad medioambiental que la sociedad tiene derecho a disfrutar. Es obvia la necesidad de concreción de dichos niveles máximos y mínimos, abriéndose un amplio campo de investigación y de políticas que permite la construcción de un corpus de conocimiento científico y empírico relevante. En este sentido, ha sido muy importante la labor al respecto de economistas ecológicos como Daly (1990) o Constanza (1991).

Al mismo tiempo, el Informe Brundtland nos señala que “al menos, el desarrollo sostenible no debe poner en peligro los sistemas naturales que sustentan la vida en la Tierra: la atmosfera, el agua, el suelo, y los seres vivos” (WCED, 1987: 45). Por lo tanto, el desarrollo sostenible no solo debe satisfacer las necesidades de toda la humanidad y conducir a la satisfacción de sus aspiraciones para una vida mejor, sino que también debe mantener los sistemas naturales de la Tierra. En consecuencia, nos dicen Moffatt *et al.* (2001: 3), el Informe Brundtland identifica como el reto al que tiene que enfrentarse el desarrollo sostenible como la necesidad de hacer frente a la integración de los aspectos económicos, ecológicos, sociales y éticos en una “visión coherente del mundo en el que tanto las generaciones actuales como las futuras, así como también otros organismos, puedan mantenerse indefinidamente”.

Esta conocida definición se fundamenta, principalmente, en el concepto de equidad (por ejemplo, Riechmann (1995) entiende el desarrollo sostenible como un principio ético-igualitario y Turner (1993) pone de relieve su dimensión psicosocial) entre las generaciones actuales y las generaciones futuras, como criterio de la interacción generacional (Foladori, 1999: 19) y quedando así en cuestión los principios de eficiencia, como ha pretendido el movimiento de la economía neo-clásica basado en el libre mercado, la competitividad y el crecimiento económico, como las principales vías para conseguir el desarrollo sostenible (Hanley *et al.*, 2001).

El informe Brundtland, en consecuencia, emplaza a la justicia social junto con la protección medioambiental como el eje vertebrador del concepto de desarrollo sostenible, siendo evidente el avance respecto a la definición de desarrollo sostenible en su momento presentada por *The World Conservation Strategy* (IUCN-UNEP-WWF, 1980), caracterizada por un enfoque ante todo ecológico, que no vincula la sostenibilidad con cuestiones más amplias, como las sociales o las económicas (Baker, 2006).

Por otro lado, la creciente preocupación social por las cuestiones medioambientales y la protección medioambiental⁶ está representando la condición necesaria para el impulso y la redefinición continua del concepto de desarrollo sostenible, así como para su progresiva incorporación al debate social y político.

II.2. DESARROLLO SOSTENIBLE: AMBIGUO, NEUTRAL, UNIFICADOR, DISPUTADO

El concepto de desarrollo sostenible se fundamentó con el claro propósito de incorporar en el ámbito de la política pública la progresiva preocupación medioambiental existente en la sociedad en ese momento histórico (Dresner, 2002).

Las concepciones medioambientalistas tradicionales⁷ han sido consideradas, por la mayoría de sectores, por poseer una manifiesta inflexibilidad en su discurso (Naredo, 1996). Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible se ha distinguido por ser marcadamente más elástico y por proponer una visión integral e integradora del bienestar de las sociedades (Dresner, 2002), lo que le ha llevado a tener una gran aceptación en todos los ámbitos y a todos los niveles. A este respecto, no conviene olvidar que el propósito del desarrollo sostenible, tal y como señala Dresner (2002: 63), no es detener el proceso actual de desarrollo de la sociedad moderna, tal y como propone la facción del movimiento medioambientalista más radical, sino que trata de redirigirlo mediante la transformación de las estrategias de desarrollo existentes.

Existe consenso al afirmar que gran parte del atractivo del concepto de desarrollo sostenible es el resultado tanto de su vaguedad (García, 1999) como de su ambigüedad (Naredo, 1996). El propio García (1999: 8) afirma del término desarrollo sostenible que es “científicamente inconstruible. Culturalmente desorientador, porque esconde las ideas y valores alternativos y no altera los términos del dilema planteado en la civilización industrial. Políticamente es engañoso: reconoce que hay alguna cosa equivocada pero sugiere que el

⁶ Ver, por ejemplo, desde la inmensa legislación desarrollada al respecto por la Unión Europea y los países miembros (Unión Europea, 2015a), hasta la consideración de la opinión pública donde el medio ambiente es una de las preocupaciones principales de los europeos a través de los Eurobarómetros especiales sobre medio ambiente (Unión Europea, 2015b).

⁷ Por ejemplo, el enfoque de prohibir todo tipo de actividad económica o social en parques naturales es una de ellas.

error puede corregirse con dosis mayores de las mismas medicinas”. Esta imprecisión ha sido percibida como la base en la que se fundamentaría la fortaleza del concepto de desarrollo sostenible, su fuerza política, la cual nos conduce a argumentar y a participar más del amplio debate medioambiental (Cohen *et al.*, 1998). Dale (2001) ha denominado a esta ambigüedad “constructiva” ya que promueve el dialogo entre varios sectores.

Por otro lado, Jacobs (1995)⁸ señala que la clave reside en que el desarrollo sostenible no es únicamente un concepto ambiguo, sino esencialmente un concepto que está sujeto a oposición argumentativa y que permite una gran variedad de interpretaciones y concepciones. En este sentido, lo son, por ejemplo, los objetivos políticos de libertad, justicia social y democracia; conceptos ampliamente aceptados pero en conflicto en relación a su implicación en la política pública (Jacobs, 1991)⁹. Se tratan éstas, junto con la equidad, de nociones abstractas y universales que implican una visión de la deseabilidad de un mundo justo (Sneddon *et al.*, 2006: 264).

Existen, no obstante, algunos autores que han percibido esta ambigüedad como un peligro o una debilidad, ya que puede ser utilizado para llevar a cabo políticas medioambientales y sociales desfavorables (Lélé, 1991). Dresner (2002) apunta que algunos autores han percibido esta imprecisión como un sinsentido; reclamando prácticamente cualquier cosa como parte del desarrollo sostenible (O’Riordan, 1988¹⁰; Lélé, 1991). También existe una cierta tendencia a convertir el término en un eslogan político, cuando menos, superficial (Carter, 2007; Richardson, 1997). Por lo tanto, según afirma Connelly (2007: 260), mientras que el desarrollo sostenible sea percibido como “todo o nada”, éste es un concepto debilitado para su aplicación como objetivo político.

El atractivo del desarrollo sostenible parece ser igualmente reforzado por la aparente neutralidad del término (Carter, 2007) y por su tendencia a ser utilizado por agentes con diferentes intereses y formaciones¹¹. Es un concepto con una naturaleza aparentemente unificadora. Esta tendencia fue señalada por Lélé (1991) ya en los primeros debates sobre la conceptualización del término. Este autor apunta que el desarrollo sostenible fue el marco adecuado para que individuos que partían de posiciones opuestas,

⁸ Citado en Connelly (2007: 262).

⁹ Citado en Dresner (2002: 66).

¹⁰ Citado en Dresner (2002: 64).

¹¹ Por ejemplo, asociaciones ecologistas como Greenpeace y asociaciones empresariales como World Business Council for Sustainable Development, entre otras.

como era el debate desarrollo versus medio ambiente, encontraran un terreno común en el que ya no tenían que argumentar ni negociar constantemente sus posiciones relativas.

Esta reflexión es también compartida por Torgerson (1995) quien señala que la ambigüedad del término desarrollo sostenible provoca que actores de diferentes ámbitos progresen incluso cuando no están de acuerdo sobre una acción particular y por Estes (1993)¹² que afirma que el concepto ha conseguido unir perspectivas teórica e ideológicas diversas en un mismo marco conceptual. Sería lógico razonar, por tanto, que esta imprecisión sugiere una falta de supremacía entre diferentes discursos como son el ecologismo y los partidarios del desarrollo (Dresner, 2002), cuando es obvio que se está lejos de un balance equilibrado entre ambos polos.

A pesar de que el término desarrollo sostenible ha sido muy atractivo para la comunidad política internacional y también extensivamente aceptado, la vaguedad del significado esencial y sus opuestas “concepciones del concepto”, aunque legítimas, son incompatibles en el plano práctico y, también, objeto de disputas (Connelly, 2007: 262).

En consecuencia, Campbell (1996) se pregunta sobre la utilidad del concepto de para ser aplicado en la práctica. Según este autor, la respuesta a esta pregunta es muy variada por dos razones centrales. En primer lugar, Campbell (1996) señala cómo el objetivo de la sostenibilidad puede resultar demasiado distante y holístico para ser operativo y, por lo tanto, podría no ser fácilmente traducido en medidas reales e inmediatas. En segundo lugar, el autor sostiene que incluso en el caso de que fuéramos capaces de definir el concepto de desarrollo sostenible, puede que no fuéramos capaces, sin embargo, de medirlo con rigor. No obstante, Campbell (1996: 301) suscribe el éxito del término al argumentar que “en la batalla de las ideas públicas, la sostenibilidad ha ganado: la tarea de los próximos años es simplemente trabajar en los detalles y reducir la brecha existente entre la teoría y la práctica”.

En conclusión, el desarrollo sostenible continúa siendo un concepto desconcertante. Es una conceptualización que se caracteriza por tender puentes entre muy diversos sectores de la sociedad aunque consiguiendo, al mismo tiempo, ser una fuente de constante división argumentativa. No obstante, a pesar de que todas las críticas sobre la vaguedad de este término son aceptadas, de una forma u otra, Dresner (2002: 64) señala, después de una entrevista con Nitin Desai, que “el problema en el acuerdo sobre el

¹² Citado en Dale (2001: 3).

significado del desarrollo sostenible no se refiere principalmente a acordar una definición precisa, sino a acordar los valores que subyacerían en cualquier definición de este tipo". Sin embargo, Jacobs (1999: 26) apunta que "[N]o es necesario intentar asegurar un acuerdo universal sobre un significado único para el término. Esto nunca sucederá, ya que aquellos que lo utilizan tienen diferentes intereses y valores políticos".

II.3. LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los principios de equidad y justicia social son, por tanto, fundamentales para el concepto de desarrollo sostenible. Y, por ello, esta noción debe abordar las injusticias sociales a fin de lograr sus principios básicos establecidos en el Informe Brundtland; para ello debe resolver el problema de la equidad no solo entre las generaciones actuales, sino también entre las futuras.

Deviene conveniente, por tanto, en este punto, y con anterioridad a la inmersión en detalle del tema que nos ocupará en este apartado, es decir, la dimensión social del desarrollo sostenible, tratar la cuestión relativa al debate de las generaciones presentes y futuras en el marco de la sostenibilidad.

La literatura sobre el concepto de desarrollo sostenible ha dedicado principalmente su atención al principio de la equidad intergeneracional, en detrimento del principio, igualmente importante, de la equidad intra-generacional. Esto es así como consecuencia de la finitud de ciertos recursos naturales mundiales y del temor generalizado a un posible agotamiento de los mismos, lo que resignaría a las generaciones futuras a vivir condenadas a niveles de bienestar más bajos de los que las generaciones actuales gozamos. Por otro lado, el principio de equidad intra-generacional, aun cuando el análisis de la equidad dentro de cualquier sociedad es una cuestión previamente desarrollada en otras materias (Beckerman, 1999) así como reconocida en la teoría económica (Stymne y Jackson, 2000), ha recibido escasa atención en la literatura dedicada al desarrollo sostenible. Igualmente, algunos autores están de acuerdo en que la definición de desarrollo sostenible más frecuentemente citada, no se refiere abiertamente a la equidad intra-generacional (Agyeman, 2005).

El concepto de desarrollo sostenible, como hemos visto, es un concepto orientado hacia el futuro (Langhelle, 2000), ya que uno de sus objetivos principales se basa en

asegurar que las generaciones futuras no estén en peor situación, en términos de justicia social y de calidad de vida, que las generaciones actuales. Por lo tanto, para este autor, el desarrollo sostenible es más una cuestión de equidad intergeneracional, que únicamente una cuestión de eficiencia intergeneracional, como también se ha discutido anteriormente en este artículo. Norgaard (1992) ya reconoció que el discurso referente al concepto de desarrollo sostenible contempla la distribución de los recursos y los servicios medioambientales entre generaciones, pero no contemplo, sin embargo, cómo son de eficientes las generaciones actuales respecto al uso de sus derechos actuales en materia de recursos naturales. También, Norgaard (1992) reconocía que una asignación eficiente de recursos en el contexto inter-temporal depende de la distribución intergeneracional del derecho a esos mismos recursos.

El argumento sobre la justicia social intergeneracional, por lo tanto, se refiere a que la sociedad actual debe comprometerse, de maneras diversas, a que la capacidad de las generaciones futuras sea tal, que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Del mismo modo, el legado heredado por las generaciones futuras debería ser suficiente para que a éstas se les permita generar, por sí mismas, un nivel de bienestar social que no sea menor que el que las generaciones previas han gozado (Turner, 1993).

Por lo tanto, según Turner (1993:6) es necesario un tipo de “contrato social intergeneracional”, ya que nuestra relación con otras generaciones futuras crea obligaciones. Sin embargo, algunos autores como John Pezzey¹³ argumentan sobre la imposibilidad de un contrato intergeneracional, alegando que uno mismo no puede intercambiarse por alguien que ha vivido hace cien años o por alguien que vivirá dentro de cien años. Para este autor se estaría llevando a cabo una hipótesis sobre una situación que es completamente inviable y, por lo tanto, según Dresner (2002) sería imposible la ejecución de cualquier contrato intergeneracional.

Por otra parte, el Informe Brundtland, se ha centrado principalmente, y con mayor entusiasmo, sobre el hecho de que el comportamiento insostenible actual se concreta en reducir las opciones que estarán disponibles para las generaciones futuras, en lugar de concentrarse en la forma en la que las generaciones actuales podrían asistir a las generaciones venideras (Baker, 2006).

¹³ Citado en Dresner (2002: 125).

Es por ello que la justicia social intergeneracional plantea numerosos desafíos. En primer lugar, existe incertidumbre sobre hasta dónde se extenderán nuestras obligaciones morales hacia las generaciones futuras (Baker, 2006). La base temporal en la que muchos problemas y procesos medioambientales operan es larga y parecería inadecuado mostrar preocupación únicamente por la generación siguiente (Baker, 2006). Por poner algunos ejemplos que son ya de conocimiento general entre los ciudadanos, el aumento de las concentraciones de gases invernadero, como resultado de la actividad humana, son solo apreciables después de un largo periodo de tiempo transcurrido. Igualmente, la contaminación de las aguas subterráneas, causada por el uso de pesticidas y fertilizantes en la producción agrícola, no se elimina hasta después de un periodo de cientos de años.

En segundo lugar, una cuestión política muy importante y compleja surge del interés por la equidad intergeneracional. Esto es, cómo la toma de decisiones y la política actual pueden dar a las generaciones futuras el derecho a ser escuchadas, y concretamente, el derecho al voto (Baker, 2006). Asimismo, Baker (2006) también señala la difícil tarea de averiguar en la actualidad, el tipo de necesidades que tendrán las generaciones futuras. Obviamente, como Munasinghe (2001) indica, todas las decisiones medioambientales que se llevan a cabo, particularmente aquellas concernientes al cambio climático, son realizadas por las generaciones actuales. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de que los derechos de las generaciones futuras necesitan ser protegidos, ya que éstas no están representadas en el proceso de toma de decisiones ni en la política actual (Munasinghe, 2001). Este autor todavía va más allá, y afirma que será difícil para las generaciones actuales compensar a las generaciones futuras por aquellos errores irreversibles cometidos en la actualidad. No obstante, Munasinghe (2001) también reconoce que dado que las generaciones tienden a superponerse (por ejemplo, padres e hijos), es probable que esta situación conduzca a la incorporación automática de las preocupaciones intergeneracionales en el proceso de elaboración de políticas medioambientales.

No cabe duda de que el Informe Brundtland considera a la justicia social fundamental para la sostenibilidad, y a la equidad intra-generacional la primera prioridad del desarrollo sostenible (Langhelle, 2000). La primera frase de la definición más popular del término desarrollo sostenible se refiere a la equidad intra-generacional: “[...] el desarrollo que satisface las necesidades del presente [...]” (WCED, 1987: 8). La justicia intra-generacional se entiende como la justicia entre las generaciones actuales, ya que todas las personas a través de la sociedad, tanto desde lo local a lo global, comparten las mismas necesidades, la cuales deben ser tenidas en cuenta (Langhelle, 2000). La equidad intra-

generacional, en el contexto de la sostenibilidad social, engloba lo que se conoce como el concepto de la justicia ambiental.

Como se ha mencionado anteriormente en este texto, la justicia social es el objetivo clave del concepto de desarrollo sostenible. Por tanto, con el fin de lograr un desarrollo medioambientalmente sano, debe ser necesaria una reducción positiva de la pobreza (WCED, 1987). En consecuencia, hay una relación funcional entre la justicia social y el desarrollo sostenible. Dobson (1998) considera de suma importancia a esta funcionalidad de la relación. Por el contrario, Langhelle (2000) no está de acuerdo con la importancia dada a la misma. Este autor afirma que la preocupación mostrada en el Informe Brundtland por los más pobres del planeta es, al mismo tiempo, independiente de la tesis que relaciona pobreza y medio ambiente (Langhelle, 2000). Langhelle (2000: 300) argumenta que “incluso si esta tesis se demuestra incorrecta y no existe una clara dependencia entre pobreza y degradación medioambiental, el marco fundamental de *Our Common Future* aún daría lugar a una priorización de las necesidades básicas de los más pobres del mundo en nombre de la justicia social (y del desarrollo sostenible)”. Por lo tanto, la relación entre la justicia social y el desarrollo sostenible no es solo funcional, sino también normativa, ya que se basa en principios éticos (Langhelle, 2000).

La preocupación actual sobre la equidad reconoce la desigualdad en el acceso y la utilización de los recursos, tanto entre ricos y pobres dentro de una sociedad dada (en un país) como entre el ‘Norte’ y el ‘Sur’. Como se ha mencionado anteriormente, el Informe Brundtland, afirma que “la desigualdad es el principal problema medioambiental del planeta” (WCED, 1987: 6). La pobreza, sostiene, puede generar la sobre-explotación de la base de recursos naturales de un entorno determinado con el fin de satisfacer las necesidades básicas e inmediatas de la población.

En la discusión planetaria sobre el desarrollo sostenible que tiene lugar en los últimos treinta años, la dimensión social, de los muchos aspectos que podría abarcar, queda ante todo representada por la justicia y la equidad social, que junto con la conservación del medio ambiente, constituyen los principios fundamentales establecidos en el concepto de desarrollo sostenible expuestos en el Informe Brundtland (Amundsen y Asheim, 1991: 10).

Con todo, este axioma no es exclusivo del Informe Brundtland, al quedar recogido en otros trabajos e informes, tanto anteriores como posteriores al mismo, así como en Cumbres mundiales sobre desarrollo humano. Entre las mismas destacan, por su especial repercusión en la reflexión en torno a la sostenibilidad global, la Cumbre de la Tierra de

Estocolmo (1972) y la Conferencia de Río (1992), poniéndose de manifiesto que la perspectiva social del desarrollo sostenible ha estado, en mayor o menor medida, siempre presente:

La defensa y la mejora del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa para la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de paz, y el desarrollo económico y social en todo el mundo. Declaración de Estocolmo (Naciones Unidas, 1973: apartado 6).

Del mismo modo, el párrafo 6 de la Declaración de Copenhague, celebrada en 1995, expone:

Estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes de desarrollo sostenible interdependientes y que se fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Un desarrollo social equitativo que reconozca que los pobres deben tener el poder necesario para utilizar de modo sostenible los recursos ambientales es el fundamento necesario del desarrollo sostenible. También reconocemos que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de amplia base y sostenido, en el contexto del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1995: párrafo 6).

De lo expuesto anteriormente cabe poner de relieve dos consecuencias inmediatas. Por un lado, en el Informe Brundtland, ambos principios – el de justicia y el de equidad social – reciben un valor sustantivo *per se*, al otorgarles una autonomía y centralidad en el concepto de desarrollo sostenible, fortaleciendo así la dimensión social. No obstante, por otro lado, la dimensión social se ha ceñido, ante todo, a estos dos conceptos y no a criterios más amplios, y al no ser considerada plenamente, supone una visión ‘estrecha’ de la sostenibilidad.

De tal modo que se ha llegado a calificar a la dimensión social del desarrollo sostenible como su pilar más débil (Lehtonen, 2004), y cuando ésta se ha tenido en cuenta, lo ha hecho integrada en la categoría del bienestar social y como algo suplementario, sin ningún vínculo a la protección medioambiental (Boström, 2009). Esto ha llevado a que muchos autores aseveren que los análisis relativos a la interacción entre la dimensión social y la medioambiental han sido escasos (Littig y Grießler, 2005; Lehtonen, 2004).

La dimensión social se presenta, no obstante, como una visión o aportación relevante, o más aún, necesaria, y a la que igualmente el Informe Brundtland dedica un amplio apartado, como a continuación se muestra con un análisis más dilatado con el fin de definir el papel del ámbito social en el desarrollo sostenible. Los principios básicos del concepto de desarrollo sostenible apelan a la distribución justa de, en particular, aquellos recursos naturales que son finitos, y así en la literatura al respecto el principio de equidad atiende ante todo a las consecuencias de su interacción con el pilar medioambiental.

El principio de equidad, en cuanto a su definición, se basa en este ámbito en la idea del acceso equitativo a los recursos medioambientales globales, y se ha concentrado, en lo que atañe a los esfuerzos por el desarrollo económico, principalmente en sus consecuencias distributivas, las cuales han afectado sobre todo a aquellos grupos sociales que sufren exclusión social (Gow, 1992).

La equidad es también un aspecto fundamental de las políticas medioambientales: cualquier consideración que los gobiernos llevan a cabo con el fin de paliar el deterioro medioambiental, está evaluada por sus repercusiones distributivas (Miller, 2004). Por lo tanto, los principios de equidad y justicia social deben ser relevantes tanto para las cuestiones de procedimiento (cómo se toman las decisiones), como para las cuestiones derivadas del consecuencialismo (el resultado de estas decisiones) en materia medioambiental (Munasinghe, 2001). Igualmente, los principios básicos del concepto de desarrollo sostenible tratan de buscar una distribución justa de aquellos recursos naturales que son finitos, con el propósito de reducir el impacto que esta escasez supone tanto en las estructuras y organizaciones sociales como en los individuos.

A su vez, al poner la atención en la dimensión empírica del principio de equidad, autores de la corriente de la economía ecológica como Boyce (1994; 2007), afirman y corroboran con estudios que la desigualdad es causa de la degradación del medio ambiente y, por tanto, la equidad social no solo sería importante como fin en sí mismo, sino también como un medio para la protección medioambiental.

Las asimetrías sociales espaciales y temporales, o desigualdades en la utilización que hacen los humanos del medio ambiente, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas, o bien de la localización de los residuos (O'Connor y Martinez Alier, 1998), hacen que "la dimensión social sea crítica, dado que una sociedad injusta es poco probable que sea sostenible en términos ambientales o económicos a largo plazo" (Haughton, 1999: 64).

Esta correlación se teoriza desde la sociología según la teoría de los valores post-materialistas desarrollada por Inglehart (1971). A su vez, investigaciones empíricas como las de Torras y Boyce (1998)¹⁴ corroboran esta idea: la mayor conciencia ambiental en las sociedades contemporáneas resulta en una menor tolerancia de la población hacia los problemas que son el resultado de la contaminación ambiental (si bien no necesariamente en un cambio significativo de los estilos de vida). El término “impacto ambiental” se amplía de esta manera al incorporar un amplio abanico de conflictos socio-ambientales (Martínez Iglesias, 2014), como, por ejemplo, la localización de industrias contaminantes, la construcción masiva en las costas, la deforestación, la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, la contaminación atmosférica en las ciudades, entre otras.

La tendencia mencionada a reducir la cuestión de la equidad social a sus implicaciones sobre el espacio medioambiental se debe en gran medida al hecho de que el Informe Brundtland asume que la pobreza y la desigualdad pueden ser parte causante de la insostenibilidad medioambiental; del mismo modo que la reducción de la pobreza y una mayor equidad y justicia social pueden contribuir al logro del desarrollo sostenible. A su vez, el Informe muestra una preocupación especial por la cuestión de la degradación medioambiental que sufren los países empobrecidos o en vías de desarrollo, y así por la vertiente global de esta problemática y por el papel central que juega la noción de justicia social en todo ello. La relación entre la justicia social y el vínculo ‘pobreza - medio ambiente’ que pone de relieve, se refiere, básicamente, a que la redistribución internacional de los recursos en favor de países económicamente menos desarrollados es necesaria si el objetivo es reducir la degradación medioambiental.

Las injusticias medioambientales están presentes en todo tipo de sociedades. Sin embargo, existen determinadas comunidades, en general aquellas compuestas por minorías étnicas y/o con un perfil socioeconómico bajo, que soportan la carga de los riesgos medioambientales de forma más desproporcionada que otros colectivos, los cuales pueden permitirse actuar, más fácilmente, en contra de estas injusticias. Las instalaciones tóxicas y los residuos peligrosos tienen más probabilidades de estar situados en los barrios en los que residen las comunidades más desfavorecidas, que en los barrios de los sectores mejor posicionados económica y socialmente, y por lo tanto incrementando la posibilidad de que ocurran enfermedades entre la población de estas comunidades menos favorecidas (ver por ejemplo: Bullard, 1983; McLaren, 1999; Steger, 2007).

¹⁴ Este estudio se presentará más adelante con más detalle.

Es obvio expresar que las comunidades más ricas presentan mayor flexibilidad que las más pobres, así como más capacidad de organizar sus entornos individuales con el fin de vivir con estándares de vida más altos. Por ejemplo, estas comunidades tienen la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre la ubicación de su lugar de residencia; por lo general tienden a adquirir viviendas en aquellos barrios donde la degradación medioambiental no es acusada aunque el precio de la vivienda sea más alto.

El principio de equidad ha sido, y sigue siendo, un principio extensivamente estudiado y documentado en la literatura. En las últimas décadas, muy a menudo, autores de los más diversos ámbitos se refieren al trabajo seminal de John Rawls, *A Theory of Justice*, publicado en 1971. En este trabajo, Rawls (1971) señala lo que él denomina ‘el velo de ignorancia’ con el fin de argumentar que en una situación de escasez moderada, y donde los individuos no son conscientes de su posición relativa en la sociedad, una decisión distributiva justa sería aquella realizada bajo ‘el velo de ignorancia’, en la que el individuo es incapaz de situarse a sí mismo en el proceso distributivo¹⁵.

Las ideas de Rawls, aunque fueron inicialmente propuestas con el fin de referirse a la equidad entre generaciones actuales, éstas también han sido aplicadas a la equidad entre generaciones futuras (Moffatt *et al.*, 2001).

Efectivamente, Jacobs (1999: 32) entendía que esta concepción “igualitaria” del desarrollo sostenible fue la que motivó el Informe Brundtland, que también reconoce que “la desigualdad es el principal problema medioambiental del planeta” (WCED, 1987: 6). Esta idea se encuentra también en autores de la corriente de la economía ecológica como Boyce (1994) quien afirma, y corrobora empíricamente, que la desigualdad es la causa de la degradación del medio ambiente y, por tanto, la equidad social no solo sería importante como fin en sí mismo, sino también como un medio para la protección medioambiental. Esta idea también se refleja en un estudio llevado a cabo por Torras y Boyce (1998) sobre la correlación existente entre los niveles de ingresos, de desigualdad y de contaminación. En él se concluye que la alfabetización, los derechos políticos y las libertades civiles parecen ser predictores especialmente fuertes de los niveles de contaminación en los países con una renta per cápita baja. Del mismo modo, se encontró que aquellos casos estudiados de países con mayores ingresos per cápita están asociados con unos niveles de

¹⁵ Existe una amplia literatura alrededor de la obra de Rawls, de la cual aquí solo mencionamos su aplicabilidad a la equidad intergeneracional.

contaminación menores, probablemente como consecuencia de una mayor demanda social de calidad ambiental, la cual aumentaría con el nivel de ingresos.

Es razonable argumentar, entonces, que el Informe Brundtland asume que la pobreza y la desigualdad pueden ser parte causante de la insostenibilidad medioambiental y, por el contrario, la reducción de la pobreza y una mayor equidad y justicia social pueden contribuir al logro del desarrollo sostenible. Sin embargo, Dobson (1998: 15) no está de acuerdo con esta argumentación y sostiene que el Informe Brundtland no expresa claramente que una menor desigualdad es condición necesaria para conseguir la sostenibilidad, ni que la eliminación de la pobreza tampoco implica necesariamente una mayor igualdad, sino que únicamente implicaría que más personas tendrán acceso a recursos finitos.

De este modo, en un mundo con recursos naturales finitos, el hecho de que más personas tengan acceso a estos recursos implica menos recursos para todos, y, por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos naturales, tal y como constató Hardin (1968) en su referente análisis *La Tragedia de los Comunes*. Esto es lo que se conoce en la economía neo-clásica como una asignación eficiente de los recursos o la solución óptima de Pareto: con el fin de que otros individuos tengan acceso a aquellos recursos que son escasos, otros individuos tienen que renunciar al acceso de estos recursos (Bowers, 1997). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la solución óptima de Pareto es esencialmente una medida de eficiencia, y por lo tanto, debemos ser extremadamente cautelosos al asemejar este término con el de equidad.

El concepto de desarrollo sostenible ofrecido en el Informe Brundtland está especialmente preocupado por la cuestión de la degradación medioambiental que sufren los países empobrecidos o en vías de desarrollo. En este contexto, la noción de justicia social es fundamental. Esta idea de justicia social que el Informe pone de relieve en relación con el vínculo 'pobreza-medio ambiente' se refiere, básicamente, a que la redistribución internacional de los recursos en favor de países económicamente menos desarrollados es necesaria si el objetivo es reducir la degradación medioambiental. Por lo tanto, el Informe llama la atención sobre el impacto medioambiental de las relaciones Norte-Sur, ya que afirma que el consumo conspicuo a nivel global conduce a la degradación medioambiental, la cual influye significativamente en las comunidades más desfavorecidas del mundo (WCED, 1987: 27-28). Según Riechmann (1995: 3) "el desarrollo sostenible no es solo una cuestión del Sur, ni fundamentalmente del Sur, sino sobre todo del Norte, de un Norte maldesarrollado".

No obstante, el Informe Brundtland, incluso cuando pretende incluir cuestiones de justicia social en los debates medioambientales, hasta ese momento ignoradas por el movimiento medioambientalista clásico y hegemónico, no lo hace de una manera integral. Pese a que el Informe Brundtland afirma que el consumismo acérrimo del que hace gala el Norte es una consecuencia directa de la insostenibilidad global actual (WCED, 1987), éste no se compromete sobre la necesidad de realizar cambios fundamentales en los modelos de consumo de los países industrializados (Carter, 2007).

Sin embargo, Dobson (1998) en su crítica a esta síntesis, pone de manifiesto cómo las comunidades más pobres del planeta no siempre están rodeadas por condiciones de escasez de recursos naturales, y por lo tanto, este argumento defendido por el Informe Brundtland no es relevante de forma generalizada. Además, continúa defendiendo Dobson (1998: 15-16), estas comunidades tienden a ser especialmente cuidadosas con la sobreutilización de los recursos naturales presentes en sus entornos, y, por tanto, han desarrollado históricamente estrategias sostenibles con el fin de afrontar el problema de la escasez de recursos que sufren.

De igual manera, no cabe duda de que la justicia social no es únicamente una cuestión que concierne al nexo Norte-Sur, aunque Hurrell y Kingsbury (1992: 39) señalan que, en la era de las políticas del medio ambientalismo global, “la principal fisura se encuentra entre el mundo desarrollado y el no desarrollado, y el medio ambiente global tiene el potencial de ser la mayor fuente de confrontación entre el Norte y el Sur como asunto fundamental en política internacional”.

En particular, en el ámbito de la sostenibilidad global se dan distintos retos propios de la interacción entre los países ricos y los países pobres, en cuanto a 1] la responsabilidad moral de los primeros sobre los segundos (Achterberg, 1996: 158), 2] la erradicación de la pobreza en el mundo, un cambio de las pautas de consumo, 3] desarrollar la tecnología para posibilitar la transición hacia el desarrollo sostenible global, además de llevar a cabo políticas de protección del entorno natural igualmente de los países en vías de desarrollo (Lafferty *et al.*, 1999), 4] o más aún, tampoco se puede plantear que todo vale en la lucha contra la pobreza, si ello produce mayor deterioro ambiental (Pardo, 2010).

En los países industrializados del Norte, también son significativas cuestiones como el desempleo, la mala calidad de vida, la inaccesibilidad a un sistema sanitario universal y la exclusión social por motivos de raza, género, clase social, religión, entre otros. Por

ejemplo, según muestra el índice de pobreza humana¹⁶ en 2009, generado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para los países desarrollados, entre un 6% (Noruega) y un 28% (Italia) de la población de los países desarrollados vive en la pobreza (UNDP, 2009). No obstante, en el Informe Brundtland, la cuestión de justicia social en el contexto de los países del Norte está mucho menos destacada, y en general es ignorada (Jacobs, 1999). Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible debe abordar estas injusticias sociales si persigue lograr los principios fundamentales establecidos en el Informe Brundtland. Es decir, los objetivos sociales y medioambientales deben 'ir de la mano' para que el desarrollo sostenible, definido en el Informe Brundtland, pueda lograrse.

El concepto de desarrollo sostenible debe, por tanto, abordar estas injusticias sociales si persigue lograr los principios fundamentales establecidos en el Informe Brundtland, mediante el equilibrio adecuado de los objetivos sociales, económicos y medioambientales, tanto en los países en vías de desarrollo como en las economías desarrolladas (WCED, 1987; Daly, 1990)

No obstante, y como ya se ha indicado, la fértil literatura sobre el concepto de desarrollo sostenible se ha ocupado principalmente de la dimensión medioambiental o ecológica del concepto, seguida de la dimensión económica, generalmente relegando a un tercer plano la perspectiva social. Más aún, en la práctica, el concepto tiende a aplicarse desde la priorización tan solo de las consideraciones económicas en detrimento de las cuestiones medioambientales o sociales.

En resumen, lo que aquí se plantea es un cambio de paradigma en el proceso de reflexión y análisis de las problemáticas a las que se enfrentan las sociedades contemporáneas (García, 1999, 2004).

Ulrich Beck (1992) acuña el término 'sociedad del riesgo con el fin de 'repensar' los riesgos de nuevo cuño a los que nos enfrentamos: los peligros invisibles o dispersos, como, por ejemplo, los residuos nucleares, el tráfico, la alimentación moderna, los desastres naturales, las inundaciones, o el cambio climático, entre otros; y su comparación con los riesgos añadidos de la complejidad tecnológica en las sociedades modernas, el riesgo

¹⁶ El índice de pobreza humana es un indicador social que mide el nivel de pobreza de acuerdo a tres variables: supervivencia, educación y una calidad de vida digna. Es calculado de forma separada entre los países en vías de desarrollo y las economías en transición, y por otro lado, para los países que pertenecen a la OECD (UNDP, 2009).

técnico-institucional como parte del desarrollo, y que da lugar a un importante despliegue teórico.

De esta manera, negar la dimensión social llevaría a las instituciones a no ser capaces de responder a las necesidades de la sociedad, que deberían apoyarse sobre elementos propios de la esfera social e institucional como la equidad, la movilidad social, la participación, la atribución de poder o empoderamiento (*empowerment*), la identidad cultural y el desarrollo cultural, todo ello formando parte de la dimensión social de la sostenibilidad (Serageldin, 1996)

Bebbington y Dillard (2009: 157) señalan dos razones a la hora de explicar la escasez de atención recibida en la literatura sobre los aspectos sociales de la sostenibilidad. Por una parte, sostienen que la dimensión social parece que presenta retos diferentes y más complicados de cara a su especificación, comprensión y comunicación que los expuestos para la sostenibilidad medioambiental. Miller (2004) añade a este respecto la dificultad que se deriva de la evaluación en concreto de la justicia social en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, o para definir el término justicia social.

A su vez, otra de las razones esgrimidas por estos autores es que la noción desarrollo sostenible tiene sus orígenes modernos en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental, de modo que las cuestiones sociales han sido, en algunas ocasiones, percibidas con una importancia secundaria o relacionadas únicamente con elementos propios de los países económicamente empobrecidos o en vías de desarrollo.

En definitiva, tal y como señalan Agyeman *et al.* (2003) en todas las partes del mundo, los sectores de la población con escaso poder político y económico son los más marginados y vulnerables, y en esta misma línea argumentativa, previamente Murphy (1994) crea la categoría de 'clases medioambientales'. La noción de clases medioambientales, o estructura de clases ambientales, que introduce Murphy (1994) hace referencia a la existencia de dos clases sociales diferenciadas: una clase social privilegiada que disfruta y se beneficia de entornos de alta calidad ambiental, y otra clase explotada que es la que ante todo sufre las consecuencias negativas de la degradación medioambiental (tanto en calidad de vida como en costes económicos).

A pesar de lo anteriormente expuesto, cabe reconocer en el concepto de desarrollo sostenible la búsqueda de la integración de estas cuestiones desde sus orígenes, tal y como se ha podido observar en el proceso de definición y delimitación del concepto. ¿Cómo

puede, por tanto, el desarrollo sostenible contribuir a un cambio de paradigma que le acerque a la dimensión social? Los siguientes capítulos tratarán de dar respuesta a esta pregunta.

II.4. CONSIDERACIONES FINALES

El concepto de desarrollo sostenible, con su definición en el Informe Brundtland, se presenta en los años 80 como una noción, o más aún, como una propuesta epistemológica que, frente a muchas otras presentes en la literatura, ha mostrado su potencial para desafiar la visión de la economía neo-clásica del desarrollo humano hasta entonces hegemónica.

Sin embargo, por otra parte, la ambigüedad, vaguedad y, en definitiva, amplitud han sido las características predominantes, porque en la literatura se han atribuido en especial al concepto de desarrollo sostenible, y que en gran medida han hecho de catalizadoras del debate sobre la sostenibilidad, tanto para consolidarlo como concepto conciliador entre posturas diferentes, como para restarle validez operativa. En este sentido, la normatividad que concierne a esta noción, y en particular el conjunto de principios y valores que lo ensalzan, y con los que se provoca el distanciamiento de los propios de la economía de mercado, trazan las líneas de acción en la consecución de un horizonte más sostenible.

Si bien la aproximación inicial al desarrollo sostenible o sostenibilidad ha jugado un papel relevante (aunque no suficiente), no ya en el ámbito de la protección medioambiental, sino que antes aún por su contribución hacia la consolidación de la visión social de un mundo y una sociedad sostenibles, la misma ha olvidado en gran medida la dimensión social del desarrollo sostenible. En el marco de la sostenibilidad, la escasa relevancia que se da a los conflictos sociales, y que en gran medida perdura hasta la actualidad, no es resultado principal o únicamente del énfasis que en el Informe Brundtland se da a las ya mencionadas consecuencias de la actividad humana sobre el entorno natural, sino que, ante todo, es consecuencia del rumbo que ha tomado la discusión en la literatura en torno a la sostenibilidad, a la forma que ha adoptado el proceso de construcción social de este concepto.

Así, por una parte, en el Informe se reconoce la importancia de la dimensión social al definir las nociones de necesidades de las generaciones actuales y futuras, integrada en la definición de desarrollo sostenible, y que apela a la pobreza y la distribución desigual de

los cada vez más escasos recursos naturales como la causa del deterioro medioambiental, en particular entre las economías del mundo más desarrolladas y las menos desarrolladas; a la vez que introduce la noción de equidad o distribución intra e intergeneracional, al igual que la idea de los límites. Asimismo, al apelar a las condiciones de las generaciones venideras y de los ecosistemas, incorpora la importancia de la visión a medio y largo plazo en la conceptualización del desarrollo sostenible, así como de la solidaridad con las generaciones actuales y las futuras.

A su vez, en la discusión en torno al desarrollo que tiene lugar en los siguientes treinta años al referente Informe Brundtland, cabe reconocer nociones interrelacionadas que van a contribuir notablemente, aunque no de manera suficiente, a amplificar la dimensión social de la sostenibilidad, tanto conceptual como empíricamente.

La dimensión social del desarrollo sostenible, si bien ha experimentado un avance, sigue así contando con importantes carencias, tanto teóricas como empíricas, y quedan pendientes cuestiones como las de incorporar a la descripción de la integridad e integración de los ámbitos económico y ambiental, indicadores más precisos relativos a los conflictos socio-ambientales y socio-económicos; revertir el sentido o sentidos hasta ahora presentes en la conceptualización de la sostenibilidad, para contemplar la dimensión social como punto de arranque en la interpretación de los procesos económicos y ambientales; insistir en la importancia de la sostenibilidad social, en los criterios de justicia social y solidaridad en el marco de un desarrollo sostenible, y así viable a medio y largo plazo; en este sentido, difícilmente se pueden legitimar los valores dirigidos a la protección ambiental sin hacerlo también, o antes incluso, con los sociales; y finalmente, la idea por la cual entre los riesgos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, cabe contemplar no ya los derivados del desarrollo tecnológico, o en estrecha relación con este, del deterioro medioambiental, sino la pobreza y desigualdades sociales en el mundo como fuente creciente de conflictos que afectarían a la estabilidad económica, política y social de los países.

CAPÍTULO III

JUSTICIA AMBIENTAL

En las últimas décadas, cada vez más países han comenzado a interesarse por el fenómeno conocido como 'justicia ambiental', un fenómeno que combina tanto elementos sociales como medioambientales. Este concepto reconoce la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de los impactos medioambientales negativos como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de las normativas y políticas públicas en materia de medio ambiente. Son los grupos sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, aquellos caracterizados por perfiles socioeconómicos bajos y los formados por minorías étnicas, los que sufren, en mayor medida, esta desigual carga de los impactos medioambientales negativos, debido a la proximidad de sus lugares de residencia o de trabajo a localizaciones que presentan niveles contaminantes elevados. Son, por lo general, los sectores de la población sin poder político y económico, los más marginados y vulnerables, y también, de forma significativa, los más sensibles a la actual crisis medioambiental (Agyeman *et al.*, 2003).

Durante las últimas tres décadas, la noción de justicia ambiental ha aparecido cada vez más como un elemento importante del discurso medioambiental¹⁷ preponderante

¹⁷ Es preciso, en este punto, realizar una diferenciación, de forma breve pero aclaratoria, de los términos 'ecologismo' y 'medioambientalismo', siguiendo para ello, la distinción realizada por Andrew Dobson (1997:

(Taylor, 2000). El concepto de justicia ambiental surgió en Estados Unidos a través del activismo de base, en el movimiento por los derechos civiles. Las organizaciones de justicia ambiental han intentado, desde entonces, ampliar el discurso predominante del medio ambiente convencional, basado en torno a la gestión medioambiental, con el fin de incorporar cuestiones de justicia social y equidad (Agyeman 2007). Por lo tanto, según nos indica Warner (2002: 36), la escala del concepto de justicia ambiental trasciende la forma en la que se distribuyen tanto la vulnerabilidad medioambiental como los riesgos tóxicos, con el objetivo de incorporar cuestiones relacionadas con la equidad social, económica y racial, no solo en relación con el medio ambiente natural, sino también con las formas en las que creamos y gestionamos el territorio. Es importante subrayar, por tanto, la dualidad del concepto de justicia ambiental, en cuanto a su importancia como movimiento social y como objeto de actuación pública.

III.1. EL CAMINO RECORRIDO DESDE EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA AL MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL

El siglo XX ha sido testigo de un aumento significativo de la preocupación medioambiental, que se ha traducido en lo que se denomina 'medioambientalismo moderno'. Las organizaciones medioambientales modernas tienden a ser percibidas de manera que comparten una agenda y unos principios comunes; sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que la gama de creencias, valores y objetivos de la agenda de estas organizaciones es muy amplia y, a menudo, con intereses en conflicto (Rhodes, 2003).

El origen de la historia del movimiento medioambiental comenzó como un movimiento de conservación de la naturaleza basado en la diversidad, debido a las ideas opuestas de John Muir y Henry Thoreau, quienes abogaron por una visión romántica,

22) en su libro *Pensamiento Político Verde*. Por un lado, el medioambientalismo se presenta como una aproximación administrativa a los problemas medioambientales y no considera que el problema medioambiental deba ser resuelto mediante una reforma radical de los valores o modelos económicos y de producción actuales. El ecologismo, por otro lado, es para una ideología política que intenta llevar a cabo las actuaciones necesarias, normalmente en forma de cambios significativos, con el objetivo de paliar la raíz del problema medioambiental: "supone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural no humano y en nuestra forma de vida social y política" (Dobson, 1997: 22). Destaca también este autor que el medioambientalismo también defiende un cambio en la sociedad, si bien no tan fundamental como el que el movimiento ecologista pretende. Como resultado de esta reflexión sobre cada uno de los términos, en este trabajo no se tendrá en cuenta esta diferenciación y ambos términos se utilizarán indistintamente.

basada en intereses estéticos, de la conservación del medio ambiente, y Gifford Pinchot, el cual promovió una conservación utilitaria y eficiente del medio ambiente (Schlosberg, 1999; Rhodes, 2003). A pesar de las diferencias fundamentales en sus puntos de vista sobre asuntos de gestión medioambiental, las preocupaciones medioambientales, tanto de Muir y Thoreau como de Pinchot, eran una reacción a la creciente industrialización que se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos durante el siglo XIX, donde el cambio desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas (de la agricultura a la industria) condujo al desarrollo de los grandes centros urbanos (Rhodes, 2003). Al mismo tiempo, según recoge en su monografía Schlosberg (1999), la esfera del medioambientalismo urbano se desarrolló y amplió; y se centró fundamentalmente en los residuos urbanos y las aguas residuales, en la salud pública y en las enfermedades derivadas de la industria. Sin embargo, afirma este autor, la literatura relacionada con la historia medioambiental a menudo lo excluye de la narración.

El movimiento medioambiental moderno se nutrió del movimiento conservacionista del siglo XIX, que se centró en una visión romántica (Europa) y trascendental (Estados Unidos) del medio ambiente (Pepper, 1984). Los valores y creencias románticas y transcendentales se concentraron, no solo en la conservación de la naturaleza como respuesta a la gran preocupación existente sobre la pérdida de naturaleza virgen, también atribuyeron a la naturaleza independencia respecto del ser humano, ya que la naturaleza era percibida de manera que tenía “integridad en sí misma” (Pepper, 1984: 79). Este autor también señala que el movimiento romántico se erigió en contra de las consecuencias perjudiciales que se derivaban del capitalismo industrial, como eran la contaminación y la pobreza, dando lugar a una tendencia contraria a la noción de urbanismo. Sin embargo, algunos autores sostienen que los fundamentos de la filosofía tanto romántica como trascendental carecen de un interés genuino por aquellos temas relacionados con la justicia social. En consecuencia, Rhodes (2003) denuncia que el movimiento medioambiental moderno, descendiente directo de los anteriores, no fue capaz de incorporar en su agenda inicial elementos de justicia social.

La interrelación de factores sociales, económicos, tecnológicos y aquellos relacionados con la salud, contribuyeron de forma significativa a la materialización del movimiento medioambiental en las décadas de 1960 y 1970 (Rhodes, 2003). Todos estos factores formaban parte de la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente que comenzaba a crearse en las sociedades occidentales (Rhodes, 2003). En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron grandes cambios sociales en las sociedades occidentales, que contribuyeron a sentar las bases del movimiento medioambientalista

(Rhodes, 2003). Durante las décadas de 1950 y 1960, el nivel de ingresos de la población se incrementó significativamente, lo que generó un aumento paralelo del uso de los recursos naturales y, en consecuencia, de los problemas medioambientales (Rhodes, 2003). Esta nueva preocupación por el deterioro medioambiental del Planeta dio lugar a que una gran parte de la sociedad comenzara a priorizar sus valores sociales y a considerar que la calidad medioambiental desempeñaba un papel importante en la propia calidad de vida de los individuos (Rhodes, 2003), como consecuencia de la creación de una nueva conciencia pública sobre los peligros medioambientales generados por la contaminación, tanto del aire como de los suelos y del agua.

Pepper (1984) nos confirma que al final de periodos de crecimiento económico prolongado, los individuos tienden a ser más reactivos a los valores materialistas. Según el trabajo seminal de Ronald Inglehart (1977), la sociedad tiende a dirigirse hacia unos valores 'post-materialistas', al aumentar su riqueza y seguridad económica. Por lo tanto, el creciente apoyo social que recibe el movimiento medioambiental es un indicador de un cambio intergeneracional de las sociedades post-industriales, que está generando un cambio cultural. Este cambio cultural se muestra a través de la priorización de los valores 'post-materialistas', aquellos que ponen el énfasis en cuestiones relacionadas con la calidad de vida, pertenencia, estética, autorrealización, autoestima, etc., contra valores 'materialistas', aquellos relativos a la supervivencia y la seguridad del individuo (Pardo, 1998).

El movimiento medioambiental moderno ha recibido numerosas críticas a lo largo de las últimas décadas. Autores como Byrne *et al.* (2002), apuntan que éste ha concebido una agenda formada, en gran parte, por el interés propio, y por cuestiones ecológicas simbólicas. Esta argumentación es corroborada por Bullard y Wright (1986), quienes afirman que, hasta principios de 1980, el movimiento medioambiental moderno ha estado encabezado y compuesto, principalmente, por grupos de personas pertenecientes a un estatus socioeconómico medio-alto, con un destacado nivel de estudios y de raza blanca (de hecho, las minorías étnicas han sido prácticamente inexistentes dentro de las principales organizaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente). No han existido referencias claras en las agendas medioambientales sobre cuestiones tales como la raza, la etnia, la clase social o la pobreza; además de una falta de conciencia de los efectos desiguales que han producido las condiciones y políticas ambientales (Bullard y Wright, 1986).

Novotny (2000) señaló que estudios llevados a cabo confirmaban esta tendencia de las organizaciones medioambientales a no realizar esfuerzos en la contratación de personal

perteneciente a grupos sociales minoritarios y con un perfil social y económico bajo, Por ejemplo, Jordan y Snow (1991) confirmaron en su estudio que el Presidente del Sierra Club, J. Michael McCloskey, declaró que no existían personas de color ni asiáticos contratados en la organización, la cual empleaba alrededor de 250 trabajadores. La misma situación se manifestaba en la organización Audubon¹⁸, donde solo tres personas de color formaban parte del personal de esta organización, que contaba con más de 350 trabajadores en su plantilla.

Como se ha mencionado anteriormente, el matrimonio entre el medioambientalismo y el principio de justicia es un fenómeno relativamente reciente. El argumento fundamental del concepto de justicia ambiental se refiere a que los grupos con altas concentraciones de minorías raciales o étnicas, o de familias con bajos ingresos económicos, están mucho más expuestos a una serie de problemas y riesgos medioambientales, que aquellos grupos con un perfil socio-económico más alto. Del mismo modo, estos grupos tampoco se benefician equitativamente de aquellas implicaciones positivas derivadas de la política y regulación ambiental. Por lo tanto, el movimiento de la justicia ambiental busca, no solo asegurar que todas las comunidades tengan igual protección contra los riesgos medioambientales, en relación con cuestiones de salud y calidad de vida, sino que también pretende que todas las comunidades puedan disfrutar de su derecho a vivir en un medio ambiente que sea seguro, independientemente de su etnia o nivel de ingresos económicos (Agyeman, 2007; Agyeman, 2005; Bullard, 2005). La innovación más significativa del movimiento por la justicia ambiental es el hecho de que ha transformado el marco del discurso del medioambientalismo moderno, al incorporar el elemento de la justicia social (Agyeman, 2007).

De todas formas, es justo aclarar que existen otros criterios que ya habían relacionado cuestiones de justicia social y medio ambiente, como son los conceptos de espacio ambiental, deuda ecológica y huella ecológica, entre otros, y que son, indudablemente, herramientas de acción pública muy útiles para entender y promover el concepto de justicia ambiental ya que se caracterizan por ser términos medibles (Agyeman, 2005). Éstos se fundamentan, en primer lugar, en el reconocimiento de distribuciones medioambientales no equitativas; y en segundo lugar, en un uso de los recursos más justo.

¹⁸ Las organizaciones Club Sierra y Audubon son dos de las organizaciones ecologistas más grandes e importantes de los Estados Unidos.

Pezzullo y Sandler (2007: 1) consideran que es razonable argumentar que el movimiento medioambiental y el movimiento de justicia ambiental deberían ser "aliados naturales", ya que ambos son movimientos sociales que se dedican, el primero a la conservación del medio ambiente, y el segundo a la justicia y la equidad en la distribución de los beneficios y los costes medioambientales. Sin embargo, estos autores reconocen la existencia de una falta de cooperación entre los dos movimientos, así como una cierta división entre ellos, a pesar de que existen una gran variedad de oportunidades para que esa asociación se produzca y pueda dar lugar a mejoras en "la salud ambiental, la sostenibilidad y la integridad" (Pezzullo y Sandler, 2007: 1).

Aunque la percepción general es que las injusticias ambientales existen, algunos analistas tienen posiciones encontradas, lo que ha producido un amplio debate, sobre si la mencionada distribución no equitativa, tanto de los riesgos como de los beneficios medioambientales asociados a la política y la toma de decisiones, se ha generado como consecuencia del racismo, el clasismo o la injusticia, o más bien, quizás, debido a razones diferentes, con connotaciones menos negativas (Cole y Foster, 2001)¹⁹.

a) Falta de diversidad en los movimientos medioambientalistas

Una primera racionalización, alegada por Rhodes (2003), sostiene que el actual movimiento medioambientalista transfiere la responsabilidad sobre la falta de diversidad en la composición del personal de las organizaciones medioambientales, a los propios colectivos minoritarios y de bajo perfil social y económico. Como se señaló anteriormente, el movimiento medioambiental, que surgió durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, se asoció a grupos de élite, con altos niveles educativos y clase media-alta, los cuales no eran conscientes de las dificultades sociales cotidianas de los grupos menos favorecidos en los Estados Unidos. Esta noción asume que los grupos minoritarios no han mostrado ningún interés en los asuntos medioambientales, y que no han jugado ningún papel significativo en la cruzada medioambiental. Por ejemplo, Milbrath (1984), en su estudio sobre el medioambientalismo de la posguerra, señaló que muchas personas de color son simplemente indiferentes al medio ambiente, o Mitchell (1980) quien argumenta que un

¹⁹ En el apartado siguiente se utiliza como referencia la argumentación realizada por Cole y Foster respecto a las diferentes racionalizaciones sobre la injusticia ambiental.

porcentaje menor de personas de color respecto a blancos afirmaban que eran simpatizantes o activos en el movimiento medioambiental (43% y 64% respectivamente).

Estas afirmaciones llevan a la consiguiente falta de interés, por parte de las organizaciones medioambientales, sobre cuestiones como la raza y la pobreza y su implementación en las agendas medioambientales, así como a la falta de representación de las minorías en las filas y en los puestos directivos del movimiento (Rhodes, 2003). Ha sido, por lo tanto, la aparición del movimiento social por la justicia ambiental, el cual se ha concentrado en los problemas medioambientales que los sectores más desfavorecidos sufren, el que ha desafiado aquellos estudios que, en su mayor parte, asumen que estos grupos son indiferentes a temas relacionados con el medio ambiente (Novotny, 2000).

Bullard y Wright (1986) también argumentaron que las cuestiones y los intereses que los residentes de vecindarios con amplia población de color veían como preponderantes, no estaban en un lugar prioritario en las agendas de las organizaciones orientadas al medio ambiente. Bullard y Wright (1986) y Novotny (2000) también afirman que, dado el hecho de que los colectivos más desfavorecidos tienen que enfrentarse a enormes problemas de pobreza y desempleo, existe la posibilidad de que estos grupos tengan que priorizar cuestiones como los derechos civiles, el abuso de drogas, la delincuencia o el desempleo, sobre cuestiones medioambientales.

Si nos fijamos en la obra seminal de Maslow (1954) sobre la jerarquía de las necesidades, se puede argumentar que el individuo que carece de las necesidades más básicas, como son el sustento, el empleo y la vivienda, es muy improbable que concentre su atención en aquellas necesidades que podrían ser desplazadas a un rango inferior. El trabajo de Maslow señala que, con frecuencia, una vez que una necesidad es satisfecha, el individuo transfiere su atención hacia otra, no antes. Esta situación ha sido también generalmente explicada de acuerdo a la tesis de los valores post-materiales de Inglehart (1977), mencionada anteriormente, la cual sugiere que aquellos individuos que viven en un estado de pobreza están demasiado preocupados con satisfacer sus necesidades más básicas, como para poder pensar de forma reflexiva en cuestiones medioambientales.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, ha sido cuestionada esta creencia de que los grupos con perfiles socio-económicos bajos, minorías y grupos étnicos, no demuestran interés por temas medioambientales. Por ejemplo, autores como Mohai (1990) han encontrado pruebas de que estos grupos no son tan indiferentes a las cuestiones ambientales como estaba mayoritariamente asumido. Mohai (1990) examinó un estudio

independiente estadounidense sobre la indiferencia de grupos minoritarios en relación a temas medioambientales, y concluyó que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre personas de color y blancos, o entre los grupos socioeconómicos.

b) Estilo de vida

Una segunda racionalización argumentaría el estilo de vida como causalidad. Se refiere a que la escena social en la que participan algunos grupos, los lleva a una sobreexposición a entornos más contaminados (Cole and Foster, 2001). Helfand y Peyton (1999: 73) están de acuerdo con este razonamiento, aunque se refieren a él como 'efectos renta' cuando tratan de entender las causas que producen las diferencias en el disfrute de la calidad del medioambiente. Estos autores afirman que, en general, la demanda de calidad ambiental está positivamente correlacionada con ciertos niveles de riqueza y, por lo tanto, colectivos formados por minorías y personas con niveles socioeconómicos bajos, en contraste con los sectores más ricos, son más propensos a aceptar abusos medioambientales. Para Helfand y Peyton, esta situación tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, las minorías y los colectivos más pobres estarían dispuestos a tolerar instalaciones contaminantes por un coste de reparación menor. En segundo lugar, éstos muestran una mayor conformidad a la proximidad de estas instalaciones tóxicas, ya que son más proclives a aceptar puestos de trabajo relacionados con dichas instalaciones.

c) Dinámica de mercado

La dinámica del mercado como causalidad es la tercera racionalización que objeta evidencia de injusticia ambiental y es la que más frecuentemente se utiliza. El argumento de la dinámica del mercado, en relación con la injusticia ambiental, explica que el emplazamiento de instalaciones contaminantes y de riesgo, en los sectores más desfavorecidos, se produjo antes de que estos grupos específicos se asentaran en el área contaminada. Según Cole y Foster (2001) esta causalidad es análoga a la formulación de la cuestión: '¿qué fue antes, el huevo o la gallina?', la cual se referiría a qué ocurrió en primer lugar: la estructura socio-económica del vecindario o la amenaza medioambiental. La razón subyacente es que estos colectivos, frecuentemente, en su búsqueda de viviendas asequibles, deciden, voluntariamente, vivir cerca de una instalación contaminante, ya que

los precios de las viviendas son más baratos, debido a que su entorno medioambiental es menos atractivo (Been, 1994).

Para Cole y Foster (2001), las interpretaciones de causalidad, como estilo de vida y dinámica de mercado, se basan en una explicación causal de las disparidades raciales en la investigación de la justicia ambiental, característicamente descriptiva, en lugar de normativa.

III.2. LOS ORÍGENES DE LA JUSTICIA AMBIENTAL: UN FENÓMENO ESTADOUNIDENSE

El movimiento por la justicia ambiental es un fenómeno enraizado y basado, principalmente, en los Estados Unidos. La mayoría de autores abordan el amplio movimiento por la justicia ambiental sustentándose en un doble origen: el movimiento por la justicia ambiental de las personas de color, y la lucha de la clase obrera contra la contaminación tóxica; sin embargo, esta dualidad no captura todo lo que existe bajo el amplio paraguas del activismo por la justicia ambiental en los Estados Unidos (Schlosberg, 2007). Cole y Foster (2001) argumentan que el movimiento surgió desde seis corrientes diferentes: el movimiento por los derechos civiles, el movimiento anti-contaminación, el ámbito académico, la lucha de los indígenas americanos, el movimiento obrero y los ecologistas tradicionales. Faber y McCarthy (2003) también dan una lista de los movimientos de los que el movimiento por la justicia ambiental se ha nutrido; estos autores, en lugar de incluir la esfera académica y los ecologistas tradicionales, incorporan el movimiento de solidaridad y el movimiento por la justicia social y económica. Schlosberg (2007) afirma que no hay que olvidar que gran parte del movimiento de justicia ambiental también ha surgido a través de los trabajadores agrícolas y los derechos de los inmigrantes, y los movimientos por el medioambiente urbano. Cole y Foster (2001) definen muy adecuadamente el establecimiento del movimiento por la justicia ambiental en los últimos años, como un río que se ha alimentado a través del tiempo por muchos afluentes.

Desde el comienzo de los tiempos, desde las antiguas civilizaciones, los seres humanos siempre han generado, desechado y dejado fuera de la vista, todo tipo de residuos (Melosi, 2004). La injusticia ambiental ha estado presente desde que los primeros humanos habitaron la Tierra, no solo desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con la producción de residuos tóxicos, por lo que puede ser entendida como un proceso socio-

histórico (Pellow, 2000). Según Melosi (2004), las aguas residuales y los residuos urbanos, han sido concentrados, principalmente, en las áreas donde las clases más pobres, las minorías étnicas y los grupos políticamente más desfavorecidos han residido, ya desde la antigua Roma, Grecia, Egipto y más tarde en la Edad Media Europea. Pellow (2000) profundiza en este argumento afirmando que los trabajos más peligrosos y no deseados han sido también llevados a cabo por estos mismos grupos a lo largo de la historia.

Durante las últimas dos décadas, la noción de la justicia ambiental ha aparecido, cada vez más, como un elemento importante del discurso medioambiental. El concepto de justicia ambiental surgió en los Estados Unidos:

[a] través del activismo de base, en el movimiento por los derechos civiles, y fue el resultado de la lucha de la clase baja, a menudo comunidades de personas de color en contra de incineradoras y vertederos de residuos tóxicos que, por accidente, y con frecuencia intencionalmente, fueron situados cerca de sus lugares de residencia (Guha y Martínez Alier, 1997: 31).

Como ya hemos comentado anteriormente en este capítulo, las organizaciones de justicia ambiental han intentado, desde entonces, ampliar el discurso predominante del medioambientalismo moderno, fundamentado en torno a la gestión medioambiental, con el propósito de incorporar consideraciones de justicia social y de equidad.

Con frecuencia se indica la dificultad para situar una fecha o un episodio concreto que impulsara el movimiento por la justicia ambiental. A pesar de que hubo determinados acontecimientos que despertaron el movimiento, éste creció en sí mismo, como resultado de cientos de luchas locales e incidentes y también como el resultado de una serie de otros movimientos sociales (Cole y Foster, 2001). No cabe duda, según nos indica Pellow (2000), de que la desigualdad medioambiental siempre ha existido, y que ha habido una resistencia general a ésta; no comenzó con los movimientos de justicia anti-toxicidad y medioambientales de las décadas de 1970 y 1980.

En cualquier caso, según argumenta Bullard (2005), el caso de Warren County, en Carolina del Norte, y las protestas llevadas a cabo por sus residentes contra un vertedero de materiales tóxicos en 1982, se puede considerar como el proceso que impulsó la fundación del movimiento por la justicia ambiental. Sin embargo, Commoner (1987) afirma que las preocupaciones sobre los impactos ambientales negativos, la protección del medio ambiente y la justicia social ya fueron reconocidas por la gente de color en los Estados Unidos, incluso antes de la década de 1970. Por ejemplo, Bullard (2005) señala que el

reverendo Martin Luther King Jr. reparó en esta relación de desigualdad, y alega que viajaba a Memphis con la intención de apoyar una huelga llevada a cabo por trabajadores empleados en vertederos, la cual exigía la igualdad salarial, así como mejores condiciones de trabajo, cuando fue asesinado en 1968. Además, Robert Bullard también sostiene que ya en 1967, un grupo de estudiantes inició una protesta con el fin de mostrar su censura y condena por la muerte de una niña de ocho años, que murió ahogada en un vertedero situado en una zona residencial de Houston, Texas (Cole y Foster, 2001).

Ferris y Hahn-Baker (1995) proporcionan una breve revisión histórica de los principales hitos del movimiento por la justicia ambiental:

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos produjo, en 1978, un folleto – *Our Common Concern* – relativo al impacto desproporcionado que la contaminación estaba teniendo sobre las personas de color. Un año más tarde, en 1979, la *National Urban League* y el *Sierra Club* pusieron en marcha la *City Care Conference* en Detroit, que reunió a dos movimientos con intereses contrapuestos: el movimiento medioambiental y el movimiento por los derechos civiles. En esta conferencia, se trató de conceptualizar una definición más amplia del medio ambiente que incluiría cuestiones más extensas, conjuntamente con las preocupaciones dominantes sobre la naturaleza y la fauna silvestre.

Asimismo, a principios de la década de 1970, se desarrolló una extensa literatura, que aportó pruebas sobre la existencia de desigualdades medioambientales en los Estados Unidos. Estos hallazgos fueron más tarde ampliados y complementados por tres estudios de referencia, que aumentaron la comprensión de lo que la justicia ambiental representa, y proporcionaron apoyo empírico a las demandas de la justicia ambiental. Como consecuencia de todo ello, se desarrolló su influencia en la toma de decisiones políticas. El movimiento por la justicia ambiental también alcanzó interés nacional, el cual se centró en la ubicación de localizaciones de residuos peligrosos (Bullard, 2005; Cole y Foster, 2001; Ferris y Hahn-Baker, 1995).

El primer estudio fue realizado por la *US General Accounting Office* (USGAO) en 1983, y fue provocado por las protestas que se llevaron a cabo en el condado de Warren. El objetivo de este estudio fue "determinar la correlación existente entre la ubicación de vertederos de residuos peligrosos y la situación racial y económica de las comunidades residentes circundantes" (USGAO, 1983: 2). Este estudio informó que el 75% de los vertederos de residuos peligrosos estudiados en ocho estados sureños de los Estados

Unidos, se encontraban situados, principalmente, en áreas con mayoría afroamericana. A esta investigación le continuó otro estudio realizado por *The United Church of Christ Commission for Racial Justice* titulado *Toxic Waste and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites* (1987). Este informe fue el primer estudio nacional en relacionar la localización de instalaciones tóxicas y características socioeconómicas. Se encontró que el factor más importante para la ubicación de estas instalaciones de residuos fue la raza, estando ésta por delante de la pobreza, el valor de los terrenos y la propiedad de las viviendas, ya que casi el 40% de los vertederos de los Estados Unidos estaban situados cerca de barrios afroamericanos (Commission for Racial Justice, 1987). Igualmente, este estudio sostiene que la población afroamericana tenía de dos a tres veces más probabilidades de vivir cerca de un lugar medioambientalmente peligroso (Commission for Racial Justice, 1987).

El tercer estudio de referencia sobre la interrelación entre la localización de sitios medioambientalmente peligrosos y la desigualdad social en los Estados Unidos, fue el de Bullard (1983), que documentó que 21 de las 25 instalaciones de residuos ubicadas en Houston estaban localizadas en barrios predominantemente afroamericanos. Estudios sucesivos mostraron evidencias similares sobre el hecho de que nativos americanos y latinoamericanos tienen que enfrentarse a los efectos desiguales causados por vulnerabilidades medioambientales. Estos resultados fueron confirmados posteriormente, ratificados y ampliados por una variedad de estudios (Bullard, 1990; Mohai y Bryant, 1992ab).

Posiblemente, el punto de inflexión del movimiento de la justicia ambiental se produjo en 1991, en el *First National People of Color Environmental Leadership Summit*, celebrada en Washington D.C. El reverendo Benjamin Chavis Jr. declaró, una vez finalizada la Cumbre, que ésta no había sido un acontecimiento independiente, sino un paso importante y fundamental, en un proceso crucial, por el que las personas de color y sus comunidades se están organizando en torno a los temas centrales de la justicia ambiental (Commission for Racial Justice, 1991)²⁰. A partir de este momento, el concepto de la justicia ambiental alcanzó estatus nacional y, más importante aún, se trazaron los Principios de Justicia Ambiental. Diecisiete principios acordados por los delegados asistentes a la Cumbre, y que desde entonces han funcionado como el documento fundamental para el movimiento de la justicia ambiental (ver Tabla 1). Estos principios fueron desarrollados como

²⁰ Citado en Pezzullo and Sandler (2007: 5)

"una guía para la organización, la creación de redes, y referidos a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales" (Bullard, 2005: 21).

Tabla 1. Principios de justicia ambiental

ENVIRONMENTAL JUSTICE ...	
PRINCIPLE 1:	Affirms the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the interdependence of all species, and the right to be free from ecological destruction
PRINCIPLE 2:	Demands that public policy be based on mutual respect and justice for all peoples, free from any form of discrimination or bias.
PRINCIPLE 3:	Mandates the right to ethical, balanced and responsible uses of land and renewable resources in the interest of a sustainable planet for humans and other living things.
PRINCIPLE 4:	Calls for universal protection from nuclear testing, extraction, production and disposal of toxic/hazardous wastes and poisons and nuclear testing that threaten the fundamental right to clean air, land, water, and food.
PRINCIPLE 5:	Affirms the fundamental right to political, economic, cultural and environmental self-determination of all peoples.
PRINCIPLE 6:	Demands the cessation of the production of all toxins, hazardous wastes, and radioactive materials, and that all past and current producers be held strictly accountable to the people for detoxification and the containment at the point of production.
PRINCIPLE 7:	Demands the right to participate as equal partners at every level of decision-making, including needs assessment, planning, implementation, enforcement and evaluation.
PRINCIPLE 8:	Affirms the right of all workers to a safe and healthy work environment without being forced to choose between an unsafe livelihood and unemployment. It also affirms the right of those who work at home to be free from environmental hazards.
PRINCIPLE 9:	Protects the right of victims of environmental injustice to receive full compensation and reparations for damages as well as quality health care.
PRINCIPLE 10:	Considers governmental acts of environmental injustice a violation of international law, the Universal Declaration On Human Rights, and the United Nations Convention on Genocide.
PRINCIPLE 11:	Must recognize a special legal and natural relationship of Native Peoples to the U.S. government through treaties, agreements, compacts, and covenants affirming sovereignty and self-determination.
PRINCIPLE 12:	Affirms the need for urban and rural ecological policies to clean up and rebuild our cities and rural areas in balance with nature, honoring the cultural integrity of all our communities, and provided fair access for all to the full range of resources.
PRINCIPLE 13:	Calls for the strict enforcement of principles of informed consent, and a halt to the testing of experimental reproductive and medical procedures and vaccinations on people of color.
PRINCIPLE 14:	Opposes the destructive operations of multi-national corporations.
PRINCIPLE 15:	Opposes military occupation, repression and exploitation of lands, peoples and cultures, and other life forms.
PRINCIPLE 16:	Calls for the education of present and future generations which emphasizes social and environmental issues, based on our experience and an appreciation of our diverse cultural perspectives.
PRINCIPLE 17:	Requires that we, as individuals, make personal and consumer choices to consume as little of Mother Earth's resources and to produce as little waste as possible; and make the conscious decision to challenge and reprioritize our lifestyles to insure the health of the natural world for present and future generations.

Fuente: Environmental Justice Network (2015)

De acuerdo con Cole y Foster (2001), la Cumbre permitió que se formaran alianzas únicas e impensables hasta ese momento, ya que "amplió el movimiento más allá de su enfoque original en contra de los residuos tóxicos para incluir cuestiones de salud pública, seguridad laboral, uso del territorio, transporte, vivienda, asignación de recursos y la potenciación de la comunidad" (Bullard, 2005: 20). Asimismo,

[l]os participantes forjaron vínculos conceptuales entre luchas que aparentemente diferían, mediante la identificación de temas comunes de racismo y la explotación económica de las personas y de la tierra. Muchos de los asistentes lograron

comprender sus intereses particulares en el contexto de un movimiento más amplio, y a un nivel más profundo que anteriormente (Cole y Foster: 2001: 32).

En respuesta a esta creciente atención y preocupación, emergieron gran cantidad de académicos y activistas en el ámbito de la justicia ambiental. Entre otros muchos, el ex Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firmó, el 11 de febrero de 1994, la *Environmental Justice Executive Order 12898: Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations*²¹, solicitando a la Agencia de Protección Medioambiental y a todos los organismos del gobierno federal, que incorporasen la justicia ambiental como un asunto principal dentro de su marco de acción, y por lo tanto, reforzando la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Bullard, 2005).

En un período más cercano en el tiempo, vale la pena destacar el caso del huracán Katrina, que golpeó la costa de Nueva Orleans en agosto de 2005, y en el que los factores relacionados con la clase social y la raza fueron determinantes en la respuesta que se llevó a cabo, tanto humana como institucional, con el fin de paliar el desastre (Elliott y País, 2006). Las secuelas del huracán Katrina muestran una gran importancia para los estudios de justicia ambiental. Según Sze (2006) el marco de la justicia ambiental podría ser una herramienta valiosa para determinar y entender las consecuencias ambientales, sociales y raciales, tanto presentes como futuras, que produjo el huracán Katrina.

III.3. ELEMENTOS DE CONTROVERSIA

La noción de la justicia ambiental no está libre de críticas y en este apartado se abordarán dar voz a las más importantes desde la formación del movimiento.

El propósito del paradigma de la justicia ambiental es doble: persigue la distribución equitativa, tanto de los efectos ambientales negativos, causados por la producción industrial, como de las implicaciones ambientales positivas, derivadas de las regulaciones y actuaciones gubernamentales, en diferentes áreas, independientemente de la raza, clase, género, o características sociales y económicas de sus habitantes. A pesar del interés que la justicia ambiental ha demostrado por la justicia y la equidad social dentro del discurso medioambiental, han surgido numerosas críticas en relación con el nivel de compromiso

²¹ El texto completo se puede consultar en el Anexo 1.

que este paradigma manifiesta hacia el sentimiento general sobre la reducción de la contaminación, tan arraigado actualmente en las sociedades contemporáneas.

El argumento que la crítica reclama sería que el paradigma de la justicia ambiental permitiría a la industria seguir generando el mismo nivel de residuos tóxicos, siempre y cuando esta contaminación sea distribuida de forma equitativa en la sociedad (Dobson, 1998)²². Por lo tanto, según este argumento, el movimiento por la justicia ambiental solo pretende reasignar los impactos medioambientales negativos en lugar de eliminarlos por completo, como el movimiento medioambiental predominante demanda (Dobson, 1998²³; Heiman, 1996). Holifield (2001: 78) profundiza en este tema y sostiene que la Orden Ejecutiva 12898, ratificada por el Presidente Clinton, promueve una concepción de la justicia ambiental que deja espacio para la producción de residuos, siempre que sus efectos negativos no recaigan, de forma desproporcionada, en los sectores sociales más desfavorecidos. En cualquier caso, el movimiento por la justicia ambiental ha confirmado y reiterado públicamente, su dedicación a promover la prevención y la reducción de la contaminación industrial que azota actualmente al planeta.

Una segunda crítica o, quizás, una característica cada vez más preocupante que ha comenzado, recientemente, a atraer la atención sobre la narrativa de la justicia ambiental, particularmente en el contexto de los Estados Unidos, es el aspecto potencialmente desestabilizador del marco de la justicia ambiental y que ha sido desarrollada por Dawson (2000). Este argumento reconoce el potencial que el paradigma de la justicia ambiental posee para promover la movilización a favor de cuestiones relacionadas tanto con el medio ambiente como con la justicia social. Sin embargo, también exige que se considere la posibilidad de que se generen divisiones en la sociedad, como resultado de la síntesis de estas dos causas. Dawson (2000) sostiene que el movimiento medioambiental ha sido ampliamente percibido como una fuerza unificadora de la sociedad, aunque, sin embargo, en la actualidad, se ha convertido más bien en una fuerza divisoria, principalmente por el surgimiento del movimiento por la justicia ambiental. Esta autora prosigue argumentando que el movimiento por la justicia ambiental no lucha por un mejor medio ambiente para todos; por el contrario, adquiere su poder al fomentar un nuevo debate en el ámbito medioambiental, en el que el 'nosotros', las víctimas, están en contra del 'ellos', los culpables. Dawson (2000) también declara que debería prestarse mayor atención al hecho de que el movimiento por la justicia ambiental parece estar utilizando el

²² Citado en: Agyeman, J. y Evans, B. (2004: 159)

²³ Citado en: Agyeman, J. y Evans, B. (2004: 159)

medioambientalismo de una manera instrumental, y por lo tanto, podría llevar a un recrudecimiento de esta tendencia divisoria de la sociedad.

Otra de las críticas, ampliamente sostenidas en contra el movimiento por la justicia ambiental, es la negación de evidencia en relación con aquellas injusticias ambientales llevadas a cabo en determinadas zonas, compuestas, principalmente, por minorías y familias de bajos ingresos. Posiblemente, la dinámica del mercado, como causalidad de las injusticias ambientales, es la más reconocida²⁴, aunque también han sido objeto de gran crítica los supuestos errores metodológicos cometidos en las investigaciones existentes sobre las injusticias ambientales.

Boerner y Lambert (1995: 65-68) identificaron tres grandes errores metodológicos. El primer error referiría a la definición del término 'grupo' en estos estudios. Estos autores cuestionan la idea de clasificar a un grupo minoritario como aquel donde el porcentaje de los residentes 'no-blancos' supera el porcentaje medio de la población de 'no-blancos' a nivel nacional. Estos autores reconocen que, según la clasificación anterior, Staten Island, un condado neoyorkino donde está localizado el vertedero más grande de Estados Unidos, se considera una comunidad minoritaria, ya que el 20 por ciento de sus residentes son 'no-blancos'.

Un segundo error identificado por Boerner y Lambert (1995) indicaría que los estudios realizados sobre cuestiones relacionadas con injusticias ambientales ignoran las densidades de población. Estos autores argumentan que, si bien estos estudios muestran unas proporciones por encima de la media nacional de residentes pertenecientes a grupos minoritarios o con perfiles sociales y económicos bajos, que viven en las inmediaciones de vertederos tóxicos, esta información, en realidad, no indica el número total de personas expuestas a los peligros ambientales. Obviamente, estos autores sostienen, que no es lo mismo un 20 % de población 'no-blanca', en una comunidad de 1000 habitantes, que un 15 %, en una comunidad de 6000 habitantes. La primera comunidad sería considerada una minoría, mientras que la segunda, no. Sin embargo, el número de 'no-blancos' expuestos a riesgos medioambientales en la segunda comunidad sería mayor que en la primera, 900 contra 200. Es, por tanto, para los defensores de este argumento, más importante la cantidad total de personas afectadas por la exposición a los efectos medioambientales negativos, que el porcentaje de 'no-blancos' que residen cerca de una instalación peligrosa.

²⁴ Crítica debatida anteriormente en este capítulo.

Boerner y Lambert (1995) presentan una tercera vulnerabilidad en las investigaciones realizadas sobre injusticias ambientales ya que éstas no manifiestan de forma clara, el riesgo real que existe en las proximidades de este tipo de instalaciones peligrosas, ya que no se presenta una información fiable sobre los peligros asociados a vivir cerca de tales instalaciones. Bryant (1995: 9), por el contrario, defiende el argumento de que el hecho de que un estudio no sea capaz de demostrar la causalidad entre las comunidades minoritarias que viven en ambientes de riesgo y los efectos relacionados con la salud, no significa que la correlación causa y efecto no exista, ya que puede significar únicamente que no se ha podido probar todavía. Bryant continúa su argumento sosteniendo que demostrar causalidad es un fenómeno muy complejo, pero que la incapacidad de demostrar un grado de riesgo estadísticamente significativo, no debería traducirse en el cese de la acción política. Cabe aquí recordar que esta argumentación se podría relacionar con el novedoso principio de 'precaución' en las cuestiones medioambientales.²⁵

III.4. EL MARCO DEL DISCURSO DE LA JUSTICIA AMBIENTAL

Definir la justicia ambiental no es tarea fácil, ya que existen muchas definiciones posibles (Agyeman y Evans, 2004). La justicia ambiental es una conceptualización compleja, ya que combina factores sociales, políticos y económicos, y son todos estos factores los que contribuyen a la relación positiva entre las comunidades más desfavorecidas y los efectos ambientales negativos (Helfand y Peyton, 1999). Tal y como se define por Bryant (1995: 6), la justicia medioambiental "se refiere a las normas y los valores culturales, reglas, reglamentos, conductas, políticas y decisiones de apoyo a comunidades sostenibles, donde la gente puede interactuar con la confianza de que su entorno es seguro, cuidado y protegido".

En lo que la mayoría de las definiciones del concepto de justicia ambiental coinciden es que el término no solo es reactivo a los 'males' medioambientales, sino lo que es más importante, también es proactivo al logro de los beneficios medioambientales, como son las comunidades sostenibles y el disfrute de una mayor calidad de vida (Agyeman y Evans,

²⁵ Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución [COM (2000) 1 final de 2.2.2000] sobre el principio de precaución en materia de medio ambiente y que reza: "puede invocarse el principio de precaución cuando un fenómeno, un producto o un proceso puede tener efectos potencialmente peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva, si dicha evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente certeza".

2004). El término de justicia ambiental es, indudablemente, de carácter distributivo ya que su argumento básico se refiere a la preocupación que se deriva sobre cómo los impactos medioambientales, positivos y negativos, se distribuyen entre los distintos miembros de la sociedad. Las cuestiones de procedimiento también son centrales a la justicia ambiental: aquellas relacionadas con la justicia y la equidad en el acceso a los procesos de toma de decisiones medioambientales; así como en el acceso a los derechos y recursos del derecho medioambiental (Agyeman, 2005).

De igual forma, es evidente que se puede encontrar una explicación al concepto de justicia ambiental, tanto en razonamientos deontológicos como en razonamientos derivados del consecuencialismo (Ikeme, 2003). Con el fin de hacerlo así, y de acuerdo con Baden y Coursey (2002)²⁶ una definición de la justicia ambiental debe reconocer la distinción entre 'la injusticia en resultado (ex post)', y 'la injusticia en intención (ex ante)'. La injusticia en resultado (ex post) tiene su base en el consecuencialismo, ya que se centra en las consecuencias de la acción; por el contrario, la injusticia en intención (ex ante), muestra un enfoque sobre la ética de la acción, en lugar de sobre las consecuencias; y por lo tanto, está basado en un análisis deontológico (Ikeme, 2003).

Por otra parte, el concepto de justicia ambiental es antropocéntrico en su orientación, ya que emplaza al ser humano, en lugar del medioambiente bio-geofísico, en el centro de las interrelaciones de las dimensiones sociales, económicas, políticas y ecológicas (McDonald, 2002)²⁷. Algunos han acusado al movimiento por la justicia ambiental de ser demasiado antropocéntrico. La réplica a esta recriminación la pone Agyeman (2005: 95), al afirmar que este antropocentrismo "es una reacción contra décadas de activismo medioambiental centrado en la naturaleza, mientras que en los barrios, compuestos mayoritariamente por personas de color y de bajos ingresos, la tendencia existente era la desinversión progresiva".

La gran importancia que el movimiento medioambiental moderno da a la preservación y conservación del medio bio-geofísico lleva a un análisis fragmentado de la situación, donde prevalece la ausencia de elementos sociales y políticos. Pellow (2009) considera que las cuestiones ambientales son abordadas a través de una lente ecológica única, y por lo tanto su análisis se parcela respecto a puntos de vista más amplios:

²⁶ Citado en: Ikeme (2003: 197).

²⁷ Citado en: Patel (2006: 685).

Social inequality by race, class, gender, citizenship, and nation (among other categories of difference) is the primary driver of our ecological crises. So if we approach environmental inequalities through a purely ecological lens, not only do we ignore the social basis of these problems, we implicitly accept the “techno-fix” orientation that much of the mainstream environmental movement has embraced for the past four decades. Pellow (2009: 3-4, énfasis en el original).

Sin embargo, el discurso de la justicia ambiental ha ampliado el debate medioambiental tradicional, basado en la preservación y conservación medioambiental, y el control de la contaminación, mediante la incorporación de cuestiones de justicia social y equidad. Según nos apunta Taylor (2000: 42), el paradigma de la justicia ambiental ha sido el primero “que ha vinculado el medio ambiente con cuestiones relacionadas a la raza, la clase, el género y la justicia social en un marco explícito”. Por lo tanto, la justicia ambiental intenta redefinir el término ‘medio ambiente’, con el objetivo de que el enfoque actual, basado en la naturaleza y los recursos naturales, incorpore cuestiones como la desinversión urbana, el racismo, el acceso a viviendas, puestos de trabajo, barrios y comunidades (Agyeman, 2007: 172). El movimiento por la justicia ambiental pone de relieve que la justicia social y el medio ambiente son inseparables, tanto conceptual como políticamente (Grass, 1995).

La justicia ambiental, como se ha argumentado anteriormente, se basa en el reconocimiento de que los costes y beneficios medioambientales no se distribuyen de manera justa y equitativa; y por lo tanto, según se apunta en la exposición de Ikeme (2003), lo que pretende es resolver la injusticia reinante en la distribución de estos costes y beneficios medioambientales, así como erradicar aquellas condiciones que puedan resultar no equitativas. Por lo tanto, uno de los puntos más fuertes del movimiento por la justicia ambiental se fundamenta en su intención de desplazar el interés desde el medio ambiente hacia la dotación de mayor peso a los individuos, en particular a las comunidades (Kameri-Mbote y Cuttet, 1996).

III.5. LA JUSTICIA AMBIENTAL EN EUROPA

El discurso de la justicia ambiental ha llegado a los debates europeos en los últimos años. El movimiento por la justicia ambiental es claramente un fenómeno estadounidense pero con un gran potencial para ser aplicado a nivel internacional (Martínez-Alier, 2003). Sin embargo, antes del comienzo del segundo milenio, las investigaciones sobre justicia

ambiental en Europa, tanto desde el ámbito académico como desde el institucional, eran muy escasas. Esta situación está cambiando de forma muy rápida y los investigadores han comenzado a llevar a cabo estudios sobre las justicias o injusticias ambientales en el contexto Europeo. No obstante, sería necesario precisar que existen diferencias significativas en cómo los debates y los marcos de la justicia ambiental están siendo ensamblados entre los Estados Unidos y Europa (Agyeman, 2002).

III.5.1. EL MAPA INSTITUCIONAL EUROPEO DE LA JUSTICIA AMBIENTAL

Una de las principales preocupaciones de la política de la Unión Europea descansa en la protección, preservación, y mejora del medio ambiente. Las políticas de la Unión Europea son cada día más severas y priorizan la protección medioambiental con el objetivo de asegurar que sus ciudadanos disfruten de una mayor calidad de vida. Sin embargo, a pesar de los avances que se han realizado en la mejora de áreas tales como la calidad del aire, el agua y el suelo, la Unión Europea reconoce que aún existen muchos retos que afrontar, como son la mejora del medioambiente y los problemas relacionados con la salud (European Environment Agency, 2010).

Parece que la Unión Europea no se ha enfocado todavía abiertamente en la noción de la justicia ambiental como la conocemos de la experiencia de los Estados Unidos. No existe una Oficina en la Agencia Europea Medioambiental cuyo principal objetivo sería tratar con las cuestiones de justicia ambiental europeas, como es el caso de la Oficina de la Justicia Ambiental en la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Esta ausencia puede ser una consecuencia de la escasez de investigaciones llevadas a cabo sobre las injusticias ambientales en el contexto europeo, aunque desde la pasada década esta tendencia está cambiando como consecuencia de la creciente aparición de una literatura que aborda este tema. No obstante, es posible encontrar indicios de justicia ambiental en muchas de los documentos institucionales de la Unión Europea, aunque frecuentemente referidos con un léxico diferente como son la cohesión social, la igualdad o equidad ambiental. Estos documentos tratan, en esencia, de fomentar y sostener la justicia ambiental dentro del marco diverso que es la Unión Europea.

El primer documento institucional que explícitamente menciona la conceptualización de la justicia ambiental es el *European Sustainable Cities Report*, publicado en 1996 por el *Expert Group on the Urban Environment of the European*

Commission. El párrafo 20 del 5º capítulo de este informe declara en su encabezado que “[L]a calidad medioambiental en las ciudades está distribuida desigualmente” y desarrolla esta idea al afirmar que:

[...] high density also accentuates negative social and welfare effects of economic activities, such as pollution from production and transport. The poorest and most disadvantaged residents of cities often also live in the worst local environmental conditions, while those who can afford to will buy a better local environment elsewhere. The locational concentration of these social and economic problems increases the risk of self-reinforcing cycles of deprivation, dereliction and disadvantage. European Commission Expert Group on the Urban Environment of the European Commission (1996: Capítulo 5, Párrafo 20).

Sin embargo, el documento más importante que introduce la justicia ambiental en el contexto europeo es el Convenio de Aarhus de 1998. El Convenio es un tratado para todos los estados miembros de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es proporcionar a todos sus ciudadanos de derechos substantivos en tres cuestiones medioambientales fundamentales:

In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, [by means of guaranteeing] the rights to access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters. UN Economic Commission for Europe (1998: Artículo 1).

Por lo tanto, el Convenio Aarhus se fundamenta en tres dimensiones clave que han sido legitimadas por los países europeos. La primera dimensión se refiere al acceso a la información medioambiental: las autoridades públicas deben asegurar que la información medioambiental está disponible para el público en general de una forma transparente y efectiva, de tal modo que el ciudadano sin conocimientos específicos sea capaz de tomar decisiones medioambientales informadas (Artículos 4 y 5). La participación pública en las decisiones de actividades específicas (el derecho procesal) es la segunda dimensión: el público en general debe implicarse en el proceso de toma de decisiones, al permitirles involucrarse en las discusiones llevadas a cabo por el gobierno en relación a las políticas medioambientales (Artículos 6 a 8). La tercera y última dimensión es el acceso a la justicia: las decisiones que se tomen concernientes a cuestiones medioambientales pueden ser cuestionadas a petición si la petición de información medioambiental relevante por el público en general no ha sido puesta a disposición del mismo (Artículo 9).

Los defensores de la justicia ambiental consideran que el Convenio Aarhus ha dado importancia a la justicia ambiental en el contexto europeo. El Convenio Aarhus es único en el reconocer abiertamente los derechos de los ciudadanos en relación con el medio ambiente (Agyeman y Evans, 2004; Poustie, 2004). Este Convenio hace disponible los instrumentos que las comunidades en general, pero particularmente las comunidades más desfavorecidas en particular, necesitan para asegurar que disfrutan de una calidad medioambiental en todos los ámbitos de sus vidas.

Asimismo, la *Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea* (European Union Sustainable Development Strategy, 2006: 4) ofrece una oportunidad para fomentar la justicia ambiental ya que uno de sus objetivos, etiquetado como “Equidad y Cohesión Social”, sostiene que:

[p]romover una sociedad democrática, socialmente inclusiva, cohesiva, saludable, segura y justa con respecto a los derechos fundamentales y a la diversidad cultural que cree iguales oportunidades y combata la discriminación en todas sus formas (European Union Sustainable Development Strategy, 2006: 4).

Del mismo modo, una de sus directrices políticas es la “Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales” ya que:

[e]mplaza al ser humano en el centro de las políticas de la Unión Europea, al promover los derechos fundamentales combatiendo todas las formas de discriminación y contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la eliminación de la exclusión social en todo el mundo (European Union Sustainable Development Strategy, 2006: 4).

De forma similar, la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (European Union Sustainable Development Strategy, 2009) reconoce que cada día surgen nuevos retos, ya que, actualmente, existe una mayor exposición a la contaminación atmosférica y una mayor producción de químicos tóxicos que nunca.

El sexto Programa de Acción Medioambiental de la Comisión Europea 2002-2012, que establece un marco para la elaboración de políticas medioambientales en la Unión Europea, también identifica como un área prioritaria para la acción cuestiones de “Medio Ambiente y Salud y Calidad de Vida”. Este programa pretende:

Contributing to a high level of quality of life and social well-being for citizens by providing an environment where the level of pollution does not give rise to harmful effects on human health and the environment [...] European Commission (2002, Article 2.2).

A pesar de que el Programa pone de manifiesto una clara preocupación por los factores medioambientales que pueden causar daños significativos en la salud de los individuos y en su calidad de vida, y se propone reducir estos riesgos medioambientales con iniciativas como las de producir químicos que sean más seguros para la salud humana y el medio ambiente o substituir químicos peligrosos por otros más seguros, no existe una mención específica a la justicia ambiental. Del mismo modo, la Agencia Europea de Medio Ambiente reconoció en 2005 que:

The environment-related share of the burden of disease also depends strongly on socioeconomic aspects such as income, the share generally being higher in lower-income countries (European Environment Agency, 2005: 7).

Los países europeos, de forma individual, también se están asegurando que sus ciudadanos disfruten de mayores derechos en relación con el medio ambiente. El propósito de estos países es que éste no constituya una amenaza para su calidad de vida, sino de la mejora de la misma. Por ejemplo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 45 declara el derecho que todos los españoles tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado que permitirá el desarrollo del individuo (Constitución Española, 1978: Artículo 45).

Por lo tanto, es obvio señalar que existe una variedad de documentos que apoyan el concepto de justicia ambiental integrado en las políticas y estrategias medioambientales que se están implementando en los estados miembros de la Unión Europea, incluso cuando no existe una oficina institucional o un departamento dedicado a la promoción y la monitorización de la justicia ambiental en la Unión Europea como es el caso de los Estados Unidos.

III.5.2. ¿EXISTE EVIDENCIA DE INJUSTICIA AMBIENTAL EN EUROPA?

No fue hasta finales de 1990, cuando se llevaron a cabo estudios empíricos sobre las injusticias ambientales producidas en Europa, principalmente en el Reino Unido

(Agyeman, 2002), aunque más tarde estos estudios se extendieron a otros países europeos, como Alemania, Europa del Este y más recientemente en Francia. Sin embargo, parece que todavía no se han llevado a cabo actuaciones con respecto a cuestiones de prevención de estas injusticias, así como en materia compensatoria a aquellos que están sufriendo sus consecuencias.

III.5.2.1. REINO UNIDO

Stevenson *et al.* (1998) encontraron que en el área de Londres, existía una relación positiva entre tres variables: pobreza, exposición al contaminante aéreo dióxido de nitrógeno y problemas respiratorios. Esta relación, por lo tanto, implicaría que los problemas respiratorios serían una consecuencia de que los impactos medioambientales estarían desigualmente distribuidos.

Sin embargo, uno de los primeros y, más importantes trabajos en materia de justicia ambiental en el Reino Unido lo realizó, en 1999, la organización *Friends of the Earth (FoE)*, quien publicó un informe sobre la relación geográfica entre el ingreso familiar y la localización de las fábricas contaminantes en el Reino Unido (McLaren *et al.*, 1999). Este informe concluyó que en los hogares ingleses y galeses con ingresos por debajo de las 5.000 libras tenían una probabilidad dos veces mayor de vivir cerca de una fábrica contaminante que aquellos hogares con ingresos superiores a las 6.000 libras. También se concluyó que más del 60% de las instalaciones industriales más contaminantes, tanto de Inglaterra como de Gales, se encontraban localizadas en áreas donde los ingresos familiares promedio eran menores a las 5.000 libras. Del mismo modo, el estudio evidenció que más del 99% de las fábricas más contaminantes de Londres estaban situadas en áreas donde las comunidades tenían ingresos menores de la media.

Estos informes fueron seguidos por una serie de estudios que mostraron patrones similares en sus conclusiones, es decir, que existía una correlación positiva entre las comunidades con grandes proporciones de minorías étnicas y la exposición a sustancias peligrosas que se podían encontrar en la atmósfera, así como una relación negativa entre la clase social y la concentración de contaminantes, tanto a nivel nacional – Inglaterra y Gales (McLeod *et al.*, 2000) como a nivel local – Birmingham (Brainard *et al.*, 2002). Pennycook *et al.* (2001), en un informe realizado para *Friends of the Earth* en la ciudad de Bradford, encontró que los efectos nocivos derivados del transporte empeoraban en las

áreas más desfavorecidas de la ciudad y como esta realidad generaba problemas de salud graves y exacerbaba la exclusión social.

Estudios sobre la injusticia ambiental en el Reino Unido no solo han encontrado indicios de distribución desigual, sino que también han encontrado injusticia en la producción de mala calidad de aire. Mitchell y Dorling (2003) encontraron que comunidades donde el ratio de motorización de las comunidades es bajo tienden a ser sobre expuestas a contaminación atmosférica, mientras que aquellos que tienen acceso a más vehículos, se benefician de un aire más limpio.

Adicionalmente, en 2004, un estudio de *Sustainable Development Research Network (SDRN)* concluyó que a pesar de la escasez de investigaciones realizadas sobre desigualdades ambientales en el Reino Unido, debido principalmente a pocas opciones de financiación, “la injusticia ambiental es un problema real y substantivo en el Reino Unido” (Lucas *et al.*, 2004: i).

III.5.2.2. ALEMANIA Y FRANCIA

La literatura sobre las injusticias ambientales en el resto de Europa no está tan bien establecida como en el Reino Unido, aunque la existente muestra claros paralelismos. Existen investigaciones llevadas a cabo en Alemania que demuestran sobre-exposiciones a riesgos medioambientales en relación con rentas bajas y comunidades de minorías. Heinrich *et al.* (2000) estudió la distribución de la exposición a concentraciones de contaminantes atmosféricos, tanto dentro como fuera, en relación a las clases sociales en Alemania (tanto la Alemania del Este como la del Oeste). Estos autores concluyeron que en las clases sociales más altas esta exposición es significativamente más baja que en la que presentan las clases más bajas.

De forma similar, los inmigrantes turcos tienden a vivir en las proximidades de instalaciones industriales extremadamente contaminantes donde también trabajan en condiciones precarias (Steger, 2007). Steger (2007) también identifica que una pequeña y distante ciudad – Gorleben – situada en la antigua frontera entre las dos Alemanias, que se caracteriza por el perfil socioeconómico bajo de sus habitantes, es la encargada de albergar una instalación de residuos nucleares. De acuerdo con este autor, esta instalación nunca se habría localizado en una localidad económicamente mejor y situada en una zona más central de Alemania.

El primer estudio sobre injusticias medioambientales en Francia ha sido llevado a cabo por Laurian (2008). Este estudio revela que las injusticias ambientales en la distribución de la calidad medioambiental ciertamente ocurren en las ciudades francesas. Los resultados demuestran que en las ciudades estudiadas, que también tenían los menores niveles de renta, eran las que mayores probabilidades tenían de albergar instalaciones peligrosas (la autora incluye en esta categoría a las instalaciones nucleares, los vertederos y basureros ilegales, las instalaciones industriales que presentan riesgos medioambientales en caso de accidentes, lugares de compostaje y estaciones de traslado de residuos). Del mismo modo, el estudio de Laurian (2008) encontró evidencias de que en aquellas ciudades donde las concentraciones de población inmigrante eran mayores, también eran las más propensas a albergar instalaciones peligrosas. Sin embargo, a pesar de la clara presencia de injusticias en la distribución a nivel local en Francia, la autora concluye que no es posible demostrar la ocurrencia de injusticia de procedimiento (Laurian, 2008).

III.5.2.3. ESPAÑA

En el contexto concreto de España, parece que la investigación empírica sobre la justicia ambiental es particularmente escasa, aunque a nivel teórico se informó ya sobre la perspectiva de la justicia ambiental por Pardo (1998). La mayoría de los datos obtenidos sobre las desigualdades ambientales en España se centran en la Comunidad Autónoma de Madrid, trabajos realizados por geógrafos. En consecuencia, existe una necesidad urgente de investigar los datos existentes y disponibles, de una manera rigurosa, con el fin de determinar si los grupos más desfavorecidos localizados en ciertas zonas geográficas de España, están siendo expuestos, de una manera desproporcionada, a peligros y riesgos ambientales. Sin embargo, esta falta de pruebas en el resto de España no implica que la injusticia ambiental no esté presente. Lo más probable es que exista una situación similar a la experiencia tanto de los Estados Unidos, como de otros países europeos. Debemos, por tanto, mirar hacia estos países, con el propósito de aprender de sus políticas en relación al tema de la justicia ambiental.

Moreno Jiménez y Cañada Torrecilla (2007) investigaron hasta qué punto las externalidades negativas, derivadas de las concentraciones de contaminación atmosférica por dióxido de sulfuro (SO₂), afectaban de forma desigual a diferentes grupos socioeconómicos en Madrid en dos periodos concretos de tiempo, separados 10 años: en

1995 y en 2005. Durante este periodo de 10 años, tanto los niveles de concentración de SO₂ como la distribución de los niveles de renta en Madrid variaron. Se produjo una reducción de los niveles de concentración de contaminación atmosférica por SO₂ debido a políticas públicas que fomentaron la eliminación de la principal fuente de emisiones contaminantes, la combustión de carbón para su uso en calefacciones. Los resultados mostraron que en 1995, no existía una clara discriminación ambiental en detrimento de las comunidades más pobres. De hecho, se puede observar una correlación positiva entre los niveles medios de contaminación y los niveles de renta. La situación en 2005 muestra resultados similares a los de 1995. Las concentraciones de SO₂ en la atmósfera alcanzan un nivel máximo en aquellas áreas donde las comunidades más ricas tienen sus residencias.

Moreno Jiménez (2007) estudió la relación entre los niveles de ruido urbano nocturno y el estatus económico de los habitantes de la ciudad de Madrid. El principal objetivo de esta investigación fue dilucidar si la injusticia ambiental existía, y en caso de que la respuesta obtenida fuera afirmativa, tratar de detectar en qué grado. El autor concluye que, de acuerdo con los datos disponibles para el estudio, no era posible corroborar la hipótesis de daño desproporcionado hacia las comunidades con perfiles socioeconómicos más bajos debido a una sobre-exposición al ruido urbano nocturno. Sin embargo, sí que parece que las comunidades más ricas disfrutaban de ventajas acústicas, principalmente debido a que tienen mayores posibilidades de elegir la localización de su lugar de residencia.

Bosque Sendra *et al.* (2001-2002) realizaron una investigación en la cual evaluaban el grado de justicia ambiental que existía en la distribución de instalaciones tóxicas y de residuos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este estudio concluyó que, particularmente en el sudeste de Madrid, es posible encontrar casos de injusticia ambiental ya que existe una discriminación en contra de ciertas comunidades de bajos ingresos en el disfrute de la calidad ambiental. Los autores también determinaron que, en el área objeto del estudio, determinados riesgos ambientales se imponen a aquellas personas que son más vulnerables, y por lo tanto, menos capaces de oponerse a la localización de las instalaciones debido a su falta de influencia tanto política como económica.

III.5.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA AMBIENTAL EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EUROPA: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

El crecimiento sostenido en relevancia del movimiento de la justicia ambiental en Europa, particularmente en el Reino Unido y Alemania, está causando una comparación inevitable con las más de tres décadas de experiencia de este movimiento en los Estados Unidos. No obstante, es obvio argumentar que, aunque el ensamblaje de los marcos de la justicia ambiental en los contextos de Estados Unidos y de Europa difieren, también existen similitudes (Agyeman, 2002). En esta sección se analizarán las principales diferencias que se producen entre ambos contextos. Obviamente, las diferencias indicadas a continuación no son todas las que se pueden encontrar pero sí las más significativas y relevantes. Estas se clasifican en: (1) 'de abajo hacia arriba' versus 'de arriba hacia abajo'; (2) etnia versus ingresos; (3) contaminación industrial y tóxica versus un amplio rango de temas.

III.6.3.1. 'DE ABAJO HACIA ARRIBA' VERSUS 'DE ARRIBA HACIA ABAJO'

El movimiento por la justicia ambiental en los Estados Unidos ha sido principalmente un fenómeno caracterizado por ser de 'abajo hacia arriba', en oposición a la experiencia europea – principalmente Reino Unido – donde se ha desarrollado desde una escena 'de arriba hacia abajo'. El movimiento por la justicia ambiental en los Estados Unidos se originó como resultado de un importante activismo anti-tóxico, enraizado en el movimiento por los derechos civiles, en lugar de ser generado por profesionales del medioambientalismo. Por ejemplo, Taylor (2000: 534-535) sostiene que aunque no se identificó como tal, "el activismo relacionado con la justicia ambiental se remonta a los intentos de mejorar las condiciones de las viviendas para las personas de color a principios del siglo XX y se incrementó en las comunidades de color ya entre 1940 y 1960".

El movimiento por la justicia ambiental estadounidense, sin embargo, contrastaba con el movimiento por los derechos civiles, ya que fue frecuentemente organizado por gente sencilla, principalmente mujeres y residentes locales, que no poseían ningún tipo de experiencia en el activismo político, y quien fueron motivadas a entrar en acción con el propósito de liberar a sus familias y a su comunidad de riesgos medioambientales (Cole y Foster, 2001). Este fue el caso de Lois Gibbs, un ama de casa sin experiencia previa en ningún tipo de activismo comunitario, quien se involucró en las causas medioambientales en 1978, cuando se dio cuenta de que la salud de sus hijos estaba siendo puesta en peligro

debido a la localización de un vertedero debajo del colegio al que asistían sus hijos en Love Canal, en el estado de Nueva York (Cole y Foster, 2001).

Por el contrario, en el contexto europeo, particularmente en el Reino Unido, han sido los líderes políticos quienes han reconocido estas desigualdades medioambientales. Ellos han sido los que han destacado la importancia de integrar la justicia ambiental en los programas e iniciativas medioambientales (Mitchell y Dorling, 2003), principalmente en las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible (Agyeman, 2005), junto con organizaciones medioambientales de reconocido prestigio e influencia a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Friends of the Earth Scotland (FoES).

En verdad, el discurso de la justicia ambiental, fuera de los Estados Unidos, ha comenzado recientemente a avanzar en la dirección de la sostenibilidad (Agyeman y Evans, 2004). Al mismo tiempo, estos autores señalan, el discurso de la sostenibilidad está desviándose progresivamente de sus orígenes ‘medioambientales’ para avanzar hacia lo que ellos llaman ‘Just Sustainability’ – un discurso basado en la relación de los conceptos de justicia ambiental y desarrollo sostenible²⁸ (Agyeman y Evans, 2004: 155). Por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Reino Unido reconoce como “el sector público necesita trabajar de forma conjunta y mejor para hacer frente las cuestiones de justicia social y ambiental [...]” (DEFRA, 2005: 119).

El ex Primer ministro de Escocia, Jack McConnell, en un discurso celebrado en 2002, hizo suya la conceptualización de justicia ambiental al reconocer la dinámica real del concepto en Escocia. McConnell también reconoció que las cuestiones de medio ambiente y justicia social serían un aporte importante en las políticas de su gobierno. También destacó la importancia de acoger una agenda de justicia ambiental en Escocia, al reconocer la escasez de investigaciones sólidas sobre las consecuencias de la degradación ambiental en las comunidades más desfavorecidas de su país. Este discurso rezaba:

Too often the environment is dismissed as the concern of those who are not confronted with bread and butter issues. But the reality is the people who have the most urgent environmental concerns in Scotland are those who cope daily with the consequences of poor quality of life, and live in a rotten environment, close to industrial pollution, plagued by vehicle emissions, street filled by litter and walls covered in graffiti. This is true in Scotland and also true in elsewhere in the world. These are circumstances which would not be acceptable to better off communities

²⁸ Este paradigma se examinará con mayor detenimiento en el próximo capítulo.

in our society, and those who have to endure such environments in which to bring up a family, or grow old themselves are being denied environmental justice. [...] there has been far too little research in this country into the social effects of environmental degradation [...] The people who suffer most from a poor environment are those least able to fight back, and I believe government is about standing up for them and changing that situation. In the late 20th century the big political [...] was to develop combined objectives of economic prosperity and social justice. I believe the biggest challenge for the early 21st century is to combine economic progress with social and environmental justice (McConnell, 2002).

No obstante, se han suscitado algunas críticas en relación al compromiso efectivo del ejecutivo escocés con la justicia ambiental en sus políticas. Según Scandrett (2007), el ejecutivo adoptó la justicia ambiental, originalmente en su variante más cercana a la de FoES, pero estas interpretaciones posteriormente se alejaron. El discurso político dominante ha restringido, cada vez más, la justicia ambiental hacia áreas que no retan al crecimiento económico (Scandrett, 2007) como las políticas de FoES pretenden.

Declaraciones similares desde las élites políticas en el Reino Unido sobre la justicia ambiental han sido citadas por Stephens *et al.* (2001), como el Viceprimer ministro del Reino Unido, el Ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, el líder del partido democrático libre y el director de la agencia medioambiental del Reino Unido. Todas las declaraciones coinciden en reconocer el hecho de que los problemas medioambientales están desigualmente distribuidos y que las víctimas de las injusticias ambientales son, frecuentemente, las comunidades más pobres de nuestra sociedad. Ellos son los más vulnerables a los problemas medioambientales. El acceso a los recursos medioambientales es igualmente desigual y principalmente restringido para aquellos miembros menos favorecidos de la sociedad debido a su falta de ingresos.

III.5.3.2. ETNIA VERSUS RENTA

En enfoque de la investigación sobre las injusticias medioambientales también ha diferido entre los Estados Unidos y Europa. Los estudios que se han producido en los Estados Unidos han tendido a enfocarse, al menos en sus orígenes, en el sufrimiento desproporcionado de los impactos medioambientales negativos y en el acceso limitado de las personas de color y las minorías étnicas. Las conclusiones alcanzadas por estos estudios muestran, por lo tanto, que la distribución de los impactos y recursos

medioambientales está más relacionada con cuestiones étnicas, lo que provocó denuncias de racismo ambiental. En contraste, el enfoque de las investigaciones realizadas en Europa Occidental no ha sido explícitamente en la cuestión de la raza, sino en factores de naturaleza socioeconómica, como son las comunidades con bajos niveles de ingresos y la clase social. Se puede, por tanto, afirmar que en Europa Occidental, la distribución de los beneficios positivos e impactos negativos se relaciona con cuestiones de renta.

La sociedad de Europa Occidental incluye diferentes realidades multiculturales que las que se pueden encontrar en la sociedad estadounidense, por lo que en Europa otros factores sociológicos reemplazan a los étnicos como la principal razón de las injusticias ambientales (Agyeman, 2007). De acuerdo a este autor, existen grandes divergencias entre Europa y los Estados Unidos en cuanto a las leyes de planificación y zonificación de ambos contextos. En los Estados Unidos estas leyes han contribuido a la segregación racial en la vivienda. Es generalmente aceptado que la segregación residencial es uno de los principales factores que contribuyen a la creación y continuación de desigualdades raciales en los Estados Unidos (Williams y Collins, 2001). No obstante, el hecho de que el contexto europeo de injusticias ambientales se concentre en mayor medida en un terreno de comunidades deprimidas, no significa que las comunidades minoritarias y étnicas no estén siendo afectadas por la desigual distribución de los problemas medioambientales.

En Europa las desigualdades étnicas también existen. Se han llevado varios estudios con el objetivo de proporcionar un análisis comparativo entre las consecuencias de la degradación medioambiental y las comunidades minoritarias y étnicas. Por ejemplo, Walker *et al.* (2001) examinó las características étnicas de los censos de los barrios que contenían lo que ellos llamaron 'riesgos graves de accidentes' en Inglaterra y Gales. Los autores encontraron que existía una injusticia significativamente estadística en la localización de instalaciones con 'riesgos graves de accidentes' en términos de etnicidad (Walker *et al.*, 2001). De forma similar, Social Exclusion Unit (2001: 14) concluyeron en un informe aplicado a Inglaterra que "el 70% de todas las personas pertenecientes a minorías étnicas viven en los 88 distritos locales más desfavorecidos, en comparación con el 40% de la población en general". Consecuentemente, de acuerdo a esta cifra, los estudios que se han enfocado en la justicia ambiental en el Reino Unido también han considerado a las minorías étnicas, aunque lo hayan hecho basados en términos de renta.

Sin embargo, Walker *et al.* (2001) nos avisan del riesgo de considerar que existe un patrón de cohesión en las investigaciones sobre injusticias ambientales entre Estados Unidos y Europa. Estos autores nos advierten en contra de hacer comparaciones a la ligera

entre injusticias significantes en términos de etnicidad en los Estados Unidos y Europa ya que la escala absoluta de diferencia (encontrada en su estudio) es mucho más pequeña que en muchos de los estudios estadounidenses: “diferencias de 1% y 2% en nuestro análisis, las cuales son grandes en términos relativos, compara en términos absolutos a diferencias del 10% y 15% la investigación estadounidense [...] en parte reflejando el mayor grado de diferenciación espacial a lo largo de líneas étnicas en las morfologías urbanas estadounidenses” (Walker *et al.*, 2001: 14).

En Europa Central y del Este, los estudios sobre injusticias medioambientales se han enfocado principalmente en comunidades étnicas o minoritarias, como la comunidad romaní (comúnmente denominada, gitana). Existen evidencias de una gran correlación entre condiciones económicas y medioambientales deficientes, y la raza. La discriminación hacia las comunidades romaní en Europa Central y del Este es rampante y ha sido constante en el tiempo, lo que ha producido su marginalización hacia las áreas más contaminadas y peligrosas de la región.

De acuerdo con Steger (2007), en países como la República Eslovaca y Rumanía, se ha producido una tendencia desde las autoridades locales en los últimos años, con la intención de recolocar a las comunidades más desfavorecidas, principalmente la comunidad romaní, desde localizaciones urbanas más centrales y hacia la periferia de la ciudad como resultado de la demolición de sus casas en nombre del desarrollo y el progreso. Steger (2007) también señala que ha existido un claro racismo en materia de vivienda que ha producido, a su vez, la segregación racial en estos países a causa de la planificación urbana; lo que Agyeman identifica como “segregación racial residencial” (2002, 43). Estas comunidades han sido colocadas en áreas inseguras donde los riesgos medioambientales son rampantes. Romaníes y grupos con perfiles socioeconómicos bajos han sido transferidos a zonas cercanas a vertederos de basura, áreas industriales y campos de tiro, donde las instalaciones públicas y el transporte, así como el empleo, son inexistentes; y en residencias donde carecen de abastecimiento de agua, calefacción y sistema de basuras (Steger, 2007). Como resultado, esta autora señala, estas comunidades están sobre-expuestas a riesgos medioambientales como materiales tóxicos y contaminantes atmosféricos, así como a condiciones precarias.

Vale la pena destacar el contexto geo-político específico que existe en Europa Central y del Este. Durante el siglo XX, esta región ha sufrido grandes transformaciones políticas, gubernamentales y económicas, al tratar, antiguos países comunistas, de avanzar hacia economías de libre mercado. Estos cambios han generado una creciente segregación

y discriminación en contra de determinados sectores de la sociedad, particularmente en contra de minorías étnicas como la comunidad romaní, lo que ha provocado su mayor empobrecimiento. Además, la relación de la población romaní con la no romaní también se ha visto alterada (Harper, Steger y Filcák, 2009). Según Varga, Kiss y Ember (2002), millones de personas se han convertido en ciudadanos de segunda clase como resultado de la transformación de las fronteras que se llevó a cabo en los países situados entre el mar Báltico y los Balcanes. Estas personas, de forma repentina, se convirtieron en ciudadanos de un país diferente aunque seguían residiendo en las mismas viviendas (Varga, Kiss y Ember, 2002).

Esta es, por ejemplo, la situación de la población de minoría étnica rusa en Letonia. Dawson (2001) documentó como después del colapso de la Unión Soviética y de la economía del socialismo a principios de los años 90, la población de origen ruso fue extensivamente marginalizada en el sur de Letonia como resultado del claro favoritismo en materia de política gubernamental a favor de la población de origen letonio y en detrimento de los rusos. Sin embargo, Dawson (2001) sostiene que esta marginalización sufrida por la población rusa en Letonia, al parecer, no ha producido mayores injusticias medioambientales a la misma. Contrariamente a la creencia general, afirma Dawson (2001: 789; énfasis en el original), para las sociedades post-comunistas de Europa Central y del Este, las instalaciones industriales situadas en estos países no han sido percibidas por determinadas comunidades como potencialmente peligrosas, como es el caso en las sociedades capitalistas consolidadas de Europa Occidental: “lo que es comúnmente percibido como un LULU²⁹ en las sociedades occidentales es de hecho frecuentemente un LWLU (*‘Locally Wanted Land Use’*) para estas comunidades”. En Letonia, ambas comunidades, la rusa y la letona, parece que priorizan los beneficios económicos que se derivan de estas instalaciones industriales que cualquier preocupación medioambiental que puedan tener (Dawson, 2001). Por lo tanto, aquellas injusticias medioambientales que se puedan producir no generan, a su vez, mayor marginalización de los grupos minoritarios en el país (Dawson, 2001).

Es también significativa la aparición de cuestiones como el ‘colonialismo ecológico’ (Smith y Blowers, 1992) o el ‘imperialismo tóxico’ (Harvey, 1996), al introducirse los países de Europa Central y del Este en los mercados internacionales. Estos conceptos se refieren al traslado de materiales tóxicos o nucleares, y sus consecuentes riesgos y problemas medioambientales, desde los países industrializados (o economías más ricas) hacia países

²⁹ Locally Unwanted Land Use.

en vías de desarrollo (o economías más pobres). Esta recolocación de los residuos es frecuentemente realizada como una transacción económica, aunque también se ha realizado, en ocasiones, de una manera ilegítima.

El fenómeno del ‘colonialismo ecológico’ o ‘imperialismo tóxico’ es el resultado de una fuerte oposición de los ciudadanos de los países industrializados al almacenamiento, procesado, eliminación y destrucción de los residuos tóxicos generados en sus propias naciones, en suelo propio (Smith y Blowers, 1992). De acuerdo a estos autores, a pesar de que los residuos peligrosos son generalmente un producto no bienvenido en estos países, su comercio es también una industria muy lucrativa. Las compañías normalmente tratan de encontrar la forma más barata de deshacerse de estos materiales tóxicos y los trasladan desde sus países de origen, donde las regulaciones y las restricciones son muy estrictas, hacia aquellos países donde sus gobiernos son más permisivos y las regulaciones más laxas (Smith y Blowers, 1992).

Por ejemplo, existe evidencia de contratos firmados por las autoridades húngaras con compañías alemanas que permiten a estas últimas deshacerse de sus residuos en suelo húngaro (Steger, 2007). Esta autora también confirma que, en muchos casos, estos contratos han sido firmados sin la participación de los residentes de la zona donde los residuos han sido vertidos en el proceso de decisión (Steger, 2007).

Debido principalmente al colapso del comunismo en Europa Central y del Este y a las extraordinarias circunstancias que siguieron en términos geo-políticos, la investigación ha mostrado como países de Europa Occidental están transfiriendo sus riesgos medioambientales a los países ex comunistas.

III.5.3.3. CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y TÓXICA VERSUS UN AMPLIO RANGO DE TEMAS

Los debates y estudios sobre la justicia ambiental en Europa también han tendido a concentrarse no solo en las consecuencias derivadas de las plantas industriales contaminantes, de las instalaciones de residuos tóxicos y de la calidad del aire, en contraste con lo que ha sido la tónica dominante en los Estados Unidos, pero también en un amplio espectro de otros temas muy significativos relacionados con las desigualdades medioambientales (Stephen *et al.*, 2001; Elvers *et al.*, 2009). Estos temas pueden ser el acceso a los recursos medioambientales que generan una mayor calidad de vida en las personas, y por lo tanto, completan y amplían el concepto de justicia ambiental. El enfoque

estadounidense de centrarse en la contaminación tóxica e industrial desde sus orígenes ha sido ampliamente descrito por Walker *et al.* (2006: 22).

Dos de estas cuestiones son los conceptos de pobreza energética y pobreza alimentaria. La pobreza energética se refiere a aquellas familias que no pueden permitirse calentar sus viviendas a un coste aceptable. En otras palabras, una vivienda es considerada energéticamente pobre se caracteriza por necesitar invertir más del 10% de los ingresos familiares en calentar su vivienda (DEFRA, 2006). Sin embargo, la pobreza energética no está únicamente relacionada con rentas bajas, aunque esta es una de las características más importantes de la vulnerabilidad por pobreza energética. La situación es más compleja, ya que un estatus socioeconómico bajo está vinculado con cuestiones tales como menores niveles de eficiencia energética y altos precios de la energía (EPEE, 2009). La pobreza energética también se caracteriza por las consecuencias graves en la salud, tanto física como psicológica, derivadas del mal equipamiento de muchas viviendas y de la imposibilidad de mejorarlas, así como de un exceso de endeudamiento (EPEE, 2009), lo que expone a estas familias a una mayor exclusión social. A nivel europeo, es sobre todo evidente en el Reino Unido, que el acceso a los recursos ha sido desigual. Por ejemplo, una publicación de 2008 (FPAG, 2008) estima que la cantidad total de viviendas en condiciones de pobreza energética en Inglaterra representa más de 4 millones (cifras de septiembre 2008).

Por otro lado, el concepto de pobreza alimentaria, en el contexto europeo, se refiere principalmente a un desequilibrio nutricional, en lugar de a desnutrición. Una familia alimentariamente pobre en Europa se caracteriza por su falta de acceso a alimentos sanos y, consecuentemente, a una dieta rica nutricionalmente, lo que provoca enfermedades relacionadas con dietas pobres. De acuerdo a Press y Mwatsama (2004) en su estudio sobre nutrición y pobreza alimentaria en el Reino Unido, encontraron que existe evidencia de desigualdades en la salud relacionada con la dieta entre grupos socioeconómicos y étnicos de Inglaterra. De forma similar, estos autores sostienen que se encontraron diferencias en la dieta de las personas dependiendo del grupo socioeconómico al que pertenecían, la localización geográfica de su residencia y el origen étnico (Press y Mwatsama, 2004).

Otra cuestión relativa a las injusticias ambientales, que no ha sido estudiada en los Estados Unidos, al menos en sus orígenes, es la desigualdad espacial a los riesgos de inundación. Con la excepción del desafortunado ejemplo del huracán Katrina, que devastó la costa de Nueva Orleans en el verano de 2005, no se han llevado a cabo estudios de

importancia en los que se relacione la vulnerabilidad a inundaciones y la justicia ambiental en los Estados Unidos. Ha existido, no obstante, una vasta literatura relacionando los desastres naturales y las diferentes características socioeconómicas de la población más vulnerable a los mismos. La implicación sería que la gente con niveles económicos bajos frecuentemente sufre en mayor proporción por las consecuencias provocadas por los desastres naturales. Esta argumentación es especialmente acertada en el contexto de los países en vías de desarrollo.

A diferencia de los Estados Unidos, en Europa, principalmente en el Reino Unido, estudios sobre la relación existente entre los riesgos de inundación y la clase social se han llevado a cabo en los últimos 5 años, concretamente en Inglaterra (Walker *et al.*, 2003; Fielding y Burningham, 2005; Walker *et al.*, 2006) y Gales (Walker *et al.*, 2007; Fielding y Burningham, 2005). Todas estas investigaciones han encontrado patrones similares en sus resultados: las comunidades más desfavorecidas tienen mayores probabilidades de vivir en áreas con riesgo de inundación.

Es también generalmente reconocido que los beneficios de los espacios verdes son abundantes para el logro de una mayor calidad de vida. Los espacios verdes no solo proporcionan beneficios sociales, como son las oportunidades que ofrece a las comunidades en cuestiones de recreación y estética; éstos también juegan un papel muy importante en mantener la calidad ambiental en las zonas urbanas (beneficios ambientales), y por lo tanto, mejoran los estándares de salud de la comunidad. Es obvio pensar que las comunidades que residen cerca de espacios verdes disfrutan de una mayor calidad medioambiental. De hecho, el Natural England's Accessible Natural Greenspace (2011) recomienda que toda persona debería de vivir a menos de 300 metros de un espacio verde; para ser más precisos, los individuos no deberían de tener que caminar más de 5 minutos para alcanzar un espacio verde. Por lo tanto, un acceso justo a los espacios verdes también es contemplado como un derecho medioambiental (Agyeman, 2002). Fairburn y Smith (2008: 97) encontraron que, en el sur de Yorkshire son "los más deprimidos los que tienen las menores cantidades de bosque cerca de ellos, las zonas rurales deprimidas se han beneficiado más de las nuevas plantaciones, pero las cifras reales son demasiado pequeñas".

Aunque esta tendencia ya está siendo transformada, en los Estados Unidos, la investigación sobre las injusticias ambientales ha sido definida por la toxicidad. En Europa, en cambio, bajo el paraguas de la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas,

las instituciones y el mundo académico han comenzado a considerar otros temas susceptibles de incurrir en injusticias ambientales.

III.5.4. ¿UN NUEVO PARADIGMA DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EUROPA?

Los orígenes de la justicia ambiental como concepto, paradigma y movimiento son inequívocamente un fenómeno estadounidense. En cualquier caso, cuestiones de injusticia ambiental han estado presentes en la sociedad desde el mundo Antiguo, cuando primero los Griegos y, más tarde, los Romanos dominaban el mundo (Melosi, 2004). Después de más de tres décadas de activismo, investigación y finalmente implementación política de la justicia ambiental en los Estados Unidos, el debate sobre el mapa de la distribución de la calidad ambiental ha llegado a Europa. Sin embargo, como se ha tratado de explicar en esta sección, ambos conceptos difieren en la forma en la que construyen la noción de la justicia ambiental, aunque, sin duda, estos contextos también comparten numerosas similitudes.

El concepto de justicia ambiental ha evolucionado en los Estados Unidos principalmente como paradigma y movimiento organizado por las comunidades locales desde el activismo de base, el cual ha tratado de demostrar como las injusticias ambientales están formadas principalmente en las comunidades de color. Como resultado de un menor multiculturalismo en Europa, la investigación en este contexto se ha concentrado en las nociones de clase, en lugar de en las de etnicidad, reflejando las diferencias socioeconómicas entre estos dos contextos. No obstante, la situación particular geo-política creada en Europa Central y del Este como resultado de sus países en transición hacia economías de libre mercado, también ha señalado que las minorías étnicas – aquellas que existían y las que se han creado a partir del colapso del comunismo – están sufriendo las injusticias ambientales de forma desproporcionada.

La noción de la justicia ambiental en Europa, particularmente en Europa Occidental, también se ha desarrollado desde una base diferente, en la que las grandes élites políticas han sido quienes han lanzado a la escena política el discurso sobre las diferencias en la distribución de los impactos positivos y negativos del medio ambiente. Este discurso ha sido basado en la premisa de que el desarrollo sostenible y la justicia ambiental están en sintonía, hasta el punto que la justicia ambiental es considerada como un elemento vital del desarrollo sostenible. En verdad, Martínez-Alier ha considerado a la justicia ambiental como la principal fuerza del desarrollo sostenible (Martínez-Alier, 2000). En este sentido, como la política

medioambiental de la Unión Europea está enraizada en la implementación de la noción de desarrollo sostenible, la búsqueda de la justicia ambiental debe ser inherente a la política pública ambiental.

Esta reflexión nos lleva a aceptar que un nuevo paradigma de justicia ambiental es posible en Europa, que considere las particularidades, diferencias y similitudes de este contexto. Ya que la construcción de la justicia ambiental en los Estados Unidos y en Europa difiere más que se parece, una cuestión de vital importancia surge: ¿existe la necesidad de encontrar un paradigma diferente para la justicia ambiental en Europa? Investigaciones deben realizarse para explorar la viabilidad de esta cuestión.

III.6. CONSIDERACIONES FINALES

El medioambientalismo moderno en el mundo occidental se ha convertido, a lo largo de su experiencia vital, en un movimiento con numerosas y diversas agendas de actuación. Sin embargo, sería justo sostener que el movimiento medioambiental moderno no ha estado completo hasta que el elemento de la justicia social se ha incorporado en su discurso. Anteriormente, el movimiento medioambiental estaba orientado hacia la protección de la naturaleza y la gestión de los recursos naturales de las actividades nocivas llevadas a cabo por los seres humanos. La naturaleza ha sido percibida, tradicionalmente, como separada, dividida y des-cohesionada del ser humano. El movimiento medioambiental, ha estado, por tanto, limitado en su enfoque central desde sus orígenes, y solo será realmente efectivo si está dispuesto a expandir el concepto del medio ambiente, más allá de la preservación de la naturaleza, para incluir los elementos de justicia y equidad social.

Como consecuencia de esta crítica al movimiento medioambiental predominante, se originó la noción del movimiento por la justicia ambiental, basado en el reconocimiento de que no todos los miembros de la sociedad parten de una situación de igualdad ante los problemas medioambientales. Este cambio de discurso, en dirección hacia la justicia ambiental, pretende llevar a cabo un ejercicio de re-conceptualización del impacto medioambiental. Por ello, supone para el movimiento medioambientalista abordar las cuestiones medioambientales también como cuestiones de justicia social. Sin embargo, este movimiento no implica únicamente un cambio conceptual, sino que también comporta un alcance político claro. La cuestión distributiva es el eje vertebral de este paradigma y el aspecto fundamental de las políticas medioambientales públicas. Consecuentemente, la

incorporación de la noción de la justicia social y la equidad en el movimiento medioambientalista clásico, supone que tanto cuestiones de procedimiento como aquellas derivadas del consecuencialismo pasen a ser relevantes.

En este capítulo sobre el estado de la cuestión de la justicia ambiental también se ha pretendido realizar un breve análisis del marco teórico en el que se sustenta este concepto. El objetivo que se busca es ofrecer una base sólida y rigurosa para aquellos investigadores y profesionales de las instituciones medioambientales en España, que pretendan llevar a cabo investigaciones futuras o decisiones políticas en el ámbito de la justicia ambiental. Para ello, se ha considerado que era necesario recopilar, reunir y analizar la literatura disponible sobre la experiencia estadounidense en materia de justicia ambiental, por ser la experiencia más amplia hasta el momento.

CAPÍTULO IV

TERRENO COMÚN ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y JUSTICIA AMBIENTAL

Los Capítulos II y III han llevado a cabo la exploración particular de los antecedentes conceptuales y teóricos de los conceptos de desarrollo sostenible, desde su dimensión social, y de justicia ambiental, respectivamente. Se ha discutido, sistemáticamente, la manera desde la que estas dos ideas han evolucionado a partir de diferentes discursos y experiencias políticas.

Agyeman (2005) llevó a cabo un análisis muy completo de las diferencias existentes entre los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental, así como de las razones que se encontraban detrás de esta brecha. Quizás la diferencia más significativa tiene sus raíces en la forma en la que ambos conceptos se han originado en la escena global: como ya hemos visto anteriormente en el Capítulo II, la noción de desarrollo sostenible, a pesar de su operacionalización desde el nivel local, está caracterizada por ser un fenómeno consolidado principalmente ‘de arriba hacia abajo’, encarnado por expertos internacionales y estructuras gubernamentales (Agyeman, 2005).

Por el contrario, el movimiento por la justicia ambiental se originó desde el activismo comunitario de base y es, por lo tanto, generalmente referido por su enfoque 'de abajo hacia arriba'³⁰ (Agyeman, 2005). Según este autor, también existen diferencias en cuanto a la estructura y la sintaxis de sus discursos: el discurso del desarrollo sostenible "es mucho más académico, requiriendo conocimientos y habilidades individuales; contrariamente, el discurso relacionado con la justicia ambiental está caracterizado por ser comunitario y muy directo (Agyeman, 2005). No obstante, este autor señala cómo el desarrollo sostenible y la justicia ambiental implican cuestiones similares de inequidad, clasismo y racismo dentro del marco medioambiental. Si es así, por lo tanto, argumenta Agyeman (2005), puede ser posible la existencia de un terreno común entre estos dos conceptos.

IV.1. BUSCANDO UN TERRENO COMÚN ENTRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA JUSTICIA AMBIENTAL

El concepto de desarrollo sostenible fue ampliamente reconocido y extendido en el ámbito internacional después de la publicación del Informe Brundtland en 1987 (WCDE, 1987) y cinco años más tarde, con celebración de la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 1992. A pesar de la multitud y diversidad de definiciones de este concepto que se pueden encontrar en la literatura (algunas de ellas ampliamente analizadas en el Capítulo II), prácticamente todas coinciden en los elementos clave: en primer lugar, el desarrollo sostenible es reconocido por buscar la integración de las cuestiones medioambientales, sociales y económicas. En segundo lugar, es crucial reconocer, que al igual que la justicia ambiental, aunque ésta se haya desarrollado desde diferentes orígenes tanto conceptuales como teóricos, persigue cinco objetivos basados en la justicia o equidad³¹ y que se exponen a continuación.

En primer lugar, es obligatorio hablar de la *justicia distributiva*, o de la distribución equitativa y justa, social y espacial, de tanto los efectos medioambientales negativos,

³⁰ Vale la pena destacar en este punto que en la sección dedicada al estado de la justicia ambiental en Europa, localizada en el Capítulo III, ya se destacó que el enfoque europeo de la justicia ambiental es diferente al de los Estados Unidos, ya que fue introducido en la escena pública por las élites políticas.

³¹ Haughton (1999: 235-237) habla de 5 principios de equidad, fundamentales e interconectados, que representarían la dimensión de la justicia ambiental en el concepto de desarrollo sostenible: equidad inter e intra-generacional, geográfica, de procedimiento y entre especies. En el análisis que se realiza a continuación se han utilizado cuatro de estos principios.

derivados de los procesos de industrialización, y de las implicaciones positivas resultantes de las regulaciones y acciones llevadas a cabo por los gobiernos, a través de las diferentes comunidades. En segundo lugar, nos encontramos con el objetivo de la *justicia substantiva*, basada en la premisa de que se debería de conseguir, al menos, un nivel mínimo de calidad medioambiental, adecuado para mantener la salud humana y de los ecosistemas. Finalmente, la *justicia de procedimiento*, o la equidad en los procesos de toma de decisiones que determinan la asignación de la calidad medioambiental, esencialmente cuestiones relacionadas con la transparencia y la participación de las comunidades afectadas. La *justicia intrageneracional e intrageneracional* se refiere a la noción de equidad entre las generaciones actuales y las futuras. Y la *justicia geográfica* que amplía la preocupación y la responsabilidad a la esfera internacional.

En consecuencia, la pregunta que surge una vez revisado los elementos clave desde los cuales los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental están basados, es si existe un terreno común entre estos conceptos con el propósito de llegar a un paradigma en el que ambos conceptos puedan estar completamente integrados. Parece obvio afirmar que la respuesta a esta pregunta debe ser afirmativa ya que fundamental para ambos es la preocupación por la mejora de la calidad de vida de los individuos (Kameri-Mbote y Cullet, 1996) a través del medio ambiente. Del mismo modo, en el centro de ambas también se puede encontrar su deseo de buscar una distribución justa de la calidad medioambiental entre las generaciones actuales y futuras. La calidad medioambiental es un elemento clave en la mejora de la calidad de vida de las personas. Tiene implicaciones en prácticamente todos los aspectos de la política pública ya que consisten en tanto elementos positivos como negativos que son distribuidos entre los niveles locales, regionales y globales. Es, por lo tanto, una cuestión vital de la justicia (Low y Gleeson, 1998). Lo que es más significativo, la justicia social es la faceta más importante del desarrollo sostenible.

Según CIEL (2002: 6), los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental son “enteramente compatibles” y “simbióticamente relacionados y deberían ser perseguidos en tándem”. Esto es así porque “el desarrollo sostenible es el marco principal para la mejora de la calidad de vida” y la “justicia ambiental puede ser identificada como un componente del desarrollo sostenible” (CIEL, 2002: 6). CIEL (2002: 9) también reconoce que “el desarrollo sostenible es un concepto que conduce a un desarrollo y una justicia global y no puede ser alcanzado hasta que la justicia ambiental sea también lograda. El logro de la justicia ambiental es un prerequisite fundamental para la consecución del desarrollo sostenible”. Low y Gleeson (1998: 14; énfasis en el original) se muestran de acuerdo al afirmar que “el desarrollo sostenible sin justicia ambiental (*la justicia de la distribución de*

medioambientes entre las personas) es una fórmula vana”. Por lo tanto, el reto que se plantea es el de lograr que la sostenibilidad y la justicia social se logren de manera simultánea.

Agyeman *et al.* (2002: 157) sugiere que el concepto de justicia ambiental debería convertirse en un factor integral de los esfuerzos por la sostenibilidad porque “una sociedad verdaderamente sostenible es una donde cuestiones más amplias de las necesidades sociales y del bienestar, y de la oportunidad económica están íntimamente conectadas con las cuestiones medioambientales”. Es esta, por tanto, una relación funcional donde las sinergias pueden surgir, y por tanto, se les debería dar más atención. A pesar de que ambos conceptos tienen grandes retos que asumir, también tienen un gran potencial para provocar un cambio duradero en una serie de niveles, desde lo local al global (Agyeman, 2005) ya que en la medida en la que se han dado la convergencia y la cooperación entre ellos, los resultados han sido excelentes (Agyeman *et al.*, 2002). Se argumenta que existe un área de compatibilidad teórica, conceptual y práctica entre ellos (Agyeman, 2005).

Por ejemplo, en el estudio realizado por Torras y Boyce (1998), mencionado en el Capítulo II, sobre la correlación existente entre los niveles de ingresos, de desigualdad y de contaminación, se encontró que aquellos casos estudiados de países con mayores ingresos per cápita están asociados con unos niveles de contaminación menores, probablemente como consecuencia de una mayor demanda social de calidad ambiental, la cual aumentaría con el nivel de ingresos (Torras y Boyce, 1998). De acuerdo con Agyeman *et al.* (2002), los impactos medioambientales negativos presionan excesivamente a las comunidades más desfavorecidas, mientras que las comunidades mejor posicionadas económicamente pueden asegurar que sus hijos respiran un aire más limpio y que no sufran por suministros de agua contaminada; aquellos situados en la parte inferior de la escala socio-económica son menos capaces de evitar las consecuencias de los ‘males’ medioambientales.

En otro análisis sobre las correlaciones entre la distribución de poder, el medio ambiente y la salud pública de 50 estados de los Estados Unidos, Boyce *et al.* (1999) también concluye que una mayor desigualdad de poder lleva a una mayor degradación medioambiental, ya que permite políticas medioambientales más débiles. La implicación, argumenta el autor, es que la democratización que se mueve hacia una distribución más equitativa del poder puede fomentar la protección medioambiental (Boyce *et al.*, 1999). Esta conclusión es totalmente consistente con la de un estudio anterior, también realizado por Boyce en 1994 y que ya ha sido mencionado en el segundo capítulo: en este estudio se concluye que la desigualdad es la causa de la degradación del medio ambiente y, por tanto,

la equidad social no solo sería importante como fin en sí mismo, sino también como un medio para la protección medioambiental (Boyce, 1994).

En este terreno común entre el desarrollo sostenible y la justicia ambiental se encuentra el paradigma llamado 'Just Sustainability' o 'Sostenibilidad Justa' (Agyeman *et al.*, 2003; Agyeman, 2005). Este paradigma incorpora consideraciones más amplias de justicia social y equidad como un elemento esencial del concepto de desarrollo sostenible y surge de la siguiente definición de sostenibilidad: "la necesidad de garantizar una mejor calidad de vida para todos, ahora y en el futuro, de una manera justa y equitativa, al mismo tiempo que se vive dentro de los límites de la capacidad de los ecosistemas" (Agyeman *et al.*, 2003: 5).

Para Agyeman (2005) el paradigma de Sostenibilidad Justa simboliza un puente entre la visión tradicional e internacionalmente extendida del desarrollo sostenible – percibida como sostenibilidad medioambiental – y la justicia ambiental, ya que ambos discursos son complementarios. Con el fin de servir de canal, el paradigma de Sostenibilidad Justa también tiene en cuenta cómo el discurso de sostenibilidad medioambiental ha fracasado en crear un "proyecto político realista y basado en la justicia" y cómo, en contraste, el movimiento por la justicia ambiental ha crecido al "incorporar la justicia en la agenda medioambiental" (Agyeman, 2005: 99).

El mensaje que Agyeman (2008a: 752; énfasis en el original) trata de ilustrar es que "si la sostenibilidad intenta convertirse en un proceso con el poder de *transformar*, a diferencia del enfoque *medioambiental*, *de gestión* o *de reforma* actual, la justicia y la equidad necesitan ser incorporados in su mismo centro". Este autor nos alerta sobre la hegemonía de esta visión reduccionista ya que, argumenta, la tendencia ha sido disociar dos conceptos inseparables como la sostenibilidad medioambiental y la justicia social. Esta tendencia, por tanto, implica un "déficit de equidad", el cual está actualmente presente en los discursos oficiales y las subsecuentes prácticas políticas y de planificación en los Estados Unidos" (Agyeman, 2008b: 11).

Este cambio de paradigma, de la sostenibilidad medioambiental tradicional hacia una noción que relacione los conceptos de desarrollo sostenible y de justicia ambiental está cada vez más defendido por autores de diversos orígenes: Walker y Bulkeley (2006: 657) afirman que "[...] perseguir la justicia ambiental está manifiestamente comprendido, si no es central a, el marco más amplio del desarrollo sostenible"; Miller (2004) considera a la justicia ambiental como la tercera dimensión del desarrollo sostenible; Warner (2002: 36) remarca

que “al igual que las dimensiones sociales han ampliado el ámbito del medioambientalismo, la justicia ambiental debería convertirse en un elemento integral de los esfuerzos por la sostenibilidad”; “[A]vanzar hacia el desarrollo sostenible requiere conseguir sistemas económicos y sociales que fomenten la gestión medioambiental de los recursos para el largo plazo, reconociendo la interdependencia de la justicia social, el bienestar económico y la gestión medioambiental. La dimensión social es crítica ya que una sociedad injusta es improbable que sea sostenible en términos medioambientales o económicos en el largo plazo, [...]” (Haughton, 1999: 64). Asimismo, Schellenberger y Nordhaus (2004) anotan el fracaso del movimiento de sostenibilidad medioambiental al concluir en su estudio *The Death of Environmentalism*:

Why, for instance, is a human-made phenomenon like global warming – which may kill hundreds of millions of human beings over the next century – considered “environmental”? Why are poverty and war not considered environmental problems while global warming is? What are the implications of framing global warming as an environmental problem – and handling off the responsibility for dealing with it to “environmentalist?” Schellenberger and Nordhaus (2004: 12).

Sin embargo, existen voces en contra de la alianza entre la justicia ambiental y el desarrollo sostenible. Posiblemente el mayor detractor de esta asociación es Andrew Dobson. Este autor ha llevado a cabo en la última década una cuidadosa evaluación sobre la relación teórica que existe entre la sostenibilidad medioambiental (a la cual él se refiere como la agenda verde) y la justicia social (agenda roja) (Dobson, 2003). Dobson (2003) concluye esta investigación defendiendo la incompatibilidad de ambos conceptos ya que, aunque ambos tratan cuestiones medioambientales, sus objetivos en relación al medio ambiente difieren enormemente. Esto se debe principalmente a dos razones.

En primer lugar, la sostenibilidad medioambiental y la justicia ambiental tienen diferentes objetivos esenciales: el primero se refiere fundamentalmente a la reducción de la contaminación y los residuos mientras se preserva la salud y la calidad medioambiental, en relación a cuestiones referidas a la biodiversidad. El segundo, en cambio, argumenta Dobson (1999), se concentra en la distribución justa y equitativa de los riesgos medioambientales, los cuales, en última instancia, no se refieren a su eliminación, y por lo tanto, declara que la justicia ambiental no se refiere a la sostenibilidad. Anteriormente en este estudio, se ha debatido sobre la hipótesis que considera que la justicia ambiental únicamente tiene en cuenta la distribución del riesgo en lugar de su reducción.

La segunda razón argumentada por Dobson (2003) sobre su incompatibilidad se refiere a la debilidad de la evidencia empírica en relación a aquellas sinergias que puedan alcanzarse como resultado de la alianza de ambos conceptos: “La investigación empírica eficaz tendría que examinar la compatibilidad entre la justicia ambiental y la sostenibilidad medioambiental en toda la gama de sus significados en vez de únicamente uno o dos de ellos” (Dobson, 2003: 84), así como el acercamiento de ambos conceptos “solo será temporal y transitorio” y esto es así “simplemente, aunque crucialmente, porque el rojo y el verde tienen objetivos diferentes” (Dobson, 2003: 83). El discurso de la justicia ambiental se concentra en la cuestión de la justicia social, mientras que el discurso de la sostenibilidad medioambiental se enfoca en cuestiones verdes (Dobson, 1999).

Scruggs (1998) también reta la idea referida a que una distribución más justa de los recursos resultaría en un incremento de la demanda de calidad medioambiental por parte de la sociedad. Este autor argumenta que no hay razón para negar que la justicia social y la sostenibilidad no sean conceptos compatibles, aunque afirma que no existe una relación funcional entre ellos, al declarar que la equidad no trae consigo necesariamente la sostenibilidad. Scruggs (1998) explica este argumento al afirmar que “los análisis empíricos no hacen un buen trabajo al explicar las variaciones en la calidad medioambiental”. Asimismo, Heerink *et al.* (2001: 365) demuestran a través de su análisis “la importancia de la distribución del ingreso como la variable explicadora en la degradación medioambiental causada por los hogares”. Sin embargo, este autor también señala que la redistribución del ingreso desde los hogares más ricos hacia los más pobres disminuye la calidad medioambiental, en lugar de mejorarla (Heerink *et al.*, 2001).

IV.2. ‘RE-PENSAR’ UN NUEVO PARADIGMA

Se ha argumentado que el actual paradigma de sostenibilidad, enfocado principalmente en cuestiones de índole medioambiental, trata únicamente de modificar las políticas existentes, y por lo tanto, sería necesario *repensar* (Agyeman y Evans, 2003; Foley, 2004; Jiménez Beltrán, 2008), es decir, sería necesario idear un nuevo paradigma en el que la sociedad y los valores sociales se antepongan a la economía y se alejen de los actuales modelos de desarrollo, basados en los mercados y en la eficiencia de los recursos (Agyeman y Evans, 2003). Para que esto se cumpla se exige que la sostenibilidad adquiera una función redistributiva (Agyeman 2008a: 752). El paradigma de ‘Sostenibilidad Justa’, sostiene Agyeman (2005), no solo se centra en el discurso medioambientalista de

costumbre, a pesar de su importancia, en el que se argumenta sobre la necesidad de ser más eficientes económica y tecnológicamente a fin de lograr sociedades más sostenibles; sino que también se concentra, principalmente, en los desequilibrios estructurales de la economía globalizada y por tanto desafiaría el actual *statu quo*.

Según Foley (2004), tendemos a medir el progreso en bienestar humano utilizando indicadores económicos restrictivos, como es el caso del Producto Interior Bruto (PIB) y del desempleo, los cuales están basados en el consumo privado. Foley (2004) también sostiene cómo las personas están también satisfechas con otro tipo de productos, tales como los medioambientales, los cuales no necesitan ser comprados privadamente y los cuales también mejoran su calidad de vida³².

Existen muchos ejemplos de estos bienes medioambientales; por ejemplo, el acceso y el disfrute de los espacios verdes, que será el enfoque empírico de esta tesis. Por lo tanto, “[S]i queremos desarrollar un entendimiento del desarrollo sostenible como un brazo importante de la justicia social, entonces como sociedad tendremos que re-conceptualizar cómo medimos el desarrollo humano y la calidad de vida” (Foley, 2004: 11). Y consecuentemente, mientras que la equidad y la justicia no se sitúen en el escenario central de los discursos de sostenibilidad, no existe una oportunidad real de un futuro más sostenible (Agyeman, 2005).

No hay duda de que la asociación de los conceptos de sostenibilidad y justicia ambiental está substancialmente determinada por la categoría de sostenibilidad que se describe, los principios específicos de la justicia ambiental resaltados, así como las teorías económicas aprobadas (Agyeman y Evans, 2003):

True sustainability with a full regard of environmental justice would be best reached by advancing sustainability ideals towards strong sustainability or eco-centric

³² Es necesario, en este momento, realizar una nota aclaratoria sobre la notable diferencia entre los conceptos de calidad de vida y estándar de vida (en inglés ‘quality of life’ versus ‘standard of life’). Ambos términos han sido utilizados de forma intercambiable, aunque difieren enormemente y no deberían ser equiparados en su significado. Amartya Sen realizó en 1985 una diferenciación que exponemos a continuación. La calidad de vida se refiere al bienestar general de las personas y sociedades, donde un amplio rango de cuestiones, frecuentemente difícil de medir en estándares monetarios normales, están representadas como son la felicidad, los intereses sobre el medio ambiente, entre otros. Por el contrario, el concepto de estándar de vida, aunque también se refiere al confort de las sociedades, está siempre influenciado por medios económicos (Sen, 1985: 36), es decir, medidos por términos monetarios. Se puede concluir que la calidad de vida se refiere al dominio público, mientras que el estándar de vida se refiere al dominio privado (Roseland, 2005).

theories while highlighting environmental justice theories that incorporate intergenerational, intra-generational, international, and interspecies equity, and supporting economic reforms that value community economic development with redistributive values and policies. Agyeman and Evans (2003: 37).

Baker *et al.* (1997: 12-18) llevaron a cabo un análisis integral de las diferentes maneras de alcanzar el desarrollo sostenible, las cuales se traducen en términos de una escalera con cuatro niveles. El enfoque 'Treadmill' está situado en el escalón más bajo de esta escalera y muestra poca o ninguna preocupación o interés por las consecuencias medioambientales, hasta el punto de que en este enfoque no existe un propósito por alterar las políticas actuales e instituciones. Además, en cuanto a cuestiones relacionadas con la redistribución, la desigualdad no se percibe como un problema. El siguiente nivel de la escalera está relacionado con la sostenibilidad débil³³. Este enfoque tiene como premisa la integración del crecimiento capitalista con las preocupaciones medioambientales y el desarrollo económico y es considerado un prerrequisito para la protección medioambiental. En este nivel, la cuestión de equidad es prácticamente marginal. Este enfoque concuerda con el concepto de la solución óptima de Pareto, basada en cuestiones de eficiencia, en vez de equidad.

Por otro lado, nos encontramos la visión más fuerte del desarrollo sostenible, sostenibilidad fuerte³⁴, la cual concibe la protección medioambiental como una condición

³³ La sostenibilidad débil basa su teoría en el requerimiento de que la sostenibilidad es equivalente a un capital total no decreciente (Cabeza Gutiérrez, 1996). Los recursos naturales pueden decrecer en cantidad siempre que esta depreciación sea reemplazada por una inversión, aún más grande, en las otras formas de capital, el capital humano y el producido, de tal forma que el valor de los recursos totales permanezca constante o incluso se incremente en el tiempo (Pearce, 1993; Barbier *et al.*, 1994). Esta visión claramente presume, en primer lugar, que podemos agregar estas tres formas de capital en las mismas unidades y, en segundo lugar, que éstas son perfectas substitutas entre sí (Hanley *et al.*, 2001).

³⁴ Por otro lado, podemos encontrar la visión opuesta a la sostenibilidad débil, llamada sostenibilidad fuerte. Esta perspectiva considera que el capital natural no es sustituible por las otras dos formas de capital, el humano y el productivo (Cabeza Gutiérrez, 1996). De acuerdo a este enfoque, la trayectoria actual del desarrollo genera el agotamiento del capital natural, lo que tiene consecuencias negativas para el bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto, se puede argumentar que el actual desarrollo económico es insostenible. Esto es inevitable, siempre que las actuales generaciones no compensen a las generaciones futuras por la pérdida de capital natural en la actualidad (Barbier *et al.*, 1994). Además, debido a la incertidumbre sobre el valor que las generaciones futuras puedan emplazar sobre los recursos naturales cada vez más escasos, se trataría de poner restricciones para determinar si podemos compensar las futuras generaciones para el agotamiento del capital natural de hoy (Pearce y Barbier, 2000: 24). Por lo tanto, es difícil determinar si podemos compensar, y en qué cantidad, a las generaciones futuras, por lo que, al menos debemos asegurar

previa al desarrollo económico. En esta perspectiva existe una clara preocupación por aquellos problemas asociados con una redistribución de los recursos equitativa. Finalmente, el Modelo Ideal se emplaza en la parte superior de la escalera y pretende un cambio estructural en la sociedad, la economía y los sistemas políticos; un cambio radical en la actitud de la humanidad hacia la naturaleza. El Modelo Ideal tiene en cuenta la equidad intergeneracional e intrageneracional.

Estos dos puntos de vista están de acuerdo con los conceptos de justicia social y ambiental. El Modelo Ideal y la Sostenibilidad Fuerte son consistentes con las premisas de la relación entre la justicia ambiental y el desarrollo sostenible ya que, según Baker *et al.* (1997), y totalmente de acuerdo con los argumentos emplazados por Foley (2004), el crecimiento debe ser percibido en términos cualitativos (calidad de vida) en vez de en términos cuantitativos (estándar de vida), con el objetivo de que la humanidad pueda vivir de acuerdo a los límites establecidos por la propia naturaleza. Por otro lado, el debate central del desarrollo sostenible, basado principalmente en la sostenibilidad medioambiental, ha sido tradicionalmente entendido en términos de Sostenibilidad Débil.

Sin embargo, existen voces en contra del Modelo Ideal o Zero Sustainability como Turner (1992:34) lo refiere. Este autor considera que este enfoque de sostenibilidad “no es una condición necesaria para el mantenimiento de una adecuada cantidad y calidad de los bienes y servicios medioambientales [...] ya que es atrofiante del desarrollo y trae consigo un gran riesgo de costes sociales inaceptables en términos de beneficios de desarrollo para los miembros más pobres de la comunidad, ahora y en el futuro”.

En la agenda del paradigma de Sostenibilidad Justa, el cual posee “un rango más amplio de soluciones progresivas, proactivas y basadas en la política, así como herramientas políticas”, se pueden encontrar el principio de precaución, y los conceptos de espacio ambiental, huella ecológica y deuda ecológica (Agyeman, 2005:102). En el centro de este paradigma también se puede apreciar el concepto de sostenibilidad basado en la equidad: el concepto de suficiencia (Agyeman, 2005; García, 1999), el cual se refiere a la mejora de la calidad de vida de las personas mientras se consume menos (McLaren, 2003). Según Agyeman (2005), el concepto de suficiencia es complementario con el de eficiencia, el cual es actualmente la base de la agenda medioambiental europea.

que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros disfrutamos hoy en día (Barbier *et al.*, 1994).

Se podría decir que el principio de precaución es un área muy prometedora para aquellos paradigmas que están defendiendo la creación de un terreno común entre la justicia ambiental y el desarrollo sostenible. Se define como:

When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause-and-effect relationship are not fully established scientifically. In this context the proponent of an activity, rather than the public, should bear the burden of proof. The process of applying the Precautionary Principle must be open, informed and democratic and must include potentially affected parties. It must also involve an examination of the full range of alternatives, including no action. Wingspread Conference's Statement on the Precautionary Principle (1998)

El principio de precaución también se menciona en el texto de la Agenda Local 21, principal documento para promover la sostenibilidad a nivel local:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Agenda 21: Principio 15 (1992)

El principio de precaución es uno de los 5 puntos fundamentales propuestos como la base de un marco jurídico nacional para la justicia ambiental: “El marco de la justicia ambiental descansa sobre el principio de precaución que protege a los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas” (Bullard, 2005: 28).

El principio de precaución es también totalmente concordante con el paradigma de ‘Sostenibilidad Justa’ por varias razones. En primer lugar, este principio se refiere a la paliación de la tensión que se ve sometido el medio ambiente bio-geofísico como resultado de los patrones actuales de desarrollo y crecimiento, “quedando claro desde el principio que el mundo precaucionario se sitúa más allá del horizonte del optimismo evolutivo” (Ramos Torre 2003: 24). Si tomamos como referencia la definición del paradigma de ‘Sostenibilidad Justa’ en la que se señala “la necesidad de garantizar una mejor calidad de vida para todos, [...] al mismo tiempo que se vive dentro de los límites de la capacidad de los ecosistemas” (Agyeman *et al.*, 2003: 5), se puede dirimir que este principio es consistente con ella. Ramos Torre (2003: 25) también nos informa de la impopularidad de la conceptualización precaucionaria ya que ésta propone medidas que “pueden poner en cuestión la continuidad

del proceso de desarrollo sobre el que se ha edificado el consenso social en el último siglo” que sería coherente con la tesis propuesta por Agyeman sobre el cambio hacia un nuevo paradigma que desafíe el *statu quo* actual.

En segundo lugar, si se quiere proteger no solo a las generaciones actuales, sino también a las futuras, es necesario enmendar las implicaciones negativas que las acciones sociales actuales causan al medio ambiente, así como conseguir que el daño que éstas realizan no sea irreparable como se señala en la definición de ‘Sostenibilidad Justa’: “[...] ahora y en el futuro” (Agyeman *et al.*, 2003: 5). Por último, la Declaración de la Conferencia Wingspread, mencionada arriba, se refiere a la necesidad de que el principio de precaución deba ser accesible, educado e igualitario: “[...] de una manera justa y equitativa” (Agyeman *et al.*, 2003: 5).

Por otro lado, las conceptualizaciones de espacio ambiental (Spangenberg, 1995) y huella ecológica (Wackernagel and Rees, 1996) también son consistentes con la operacionalización del nexo entre lo social y lo medioambiental en el marco del desarrollo sostenible (Agyeman, 2005). Ambas nociones se basan en un uso de los recursos ambientales equitativo y reflejan, en esencia, un análisis preventivo del límite de los ecosistemas.

La huella ecológica es una herramienta que mide la cantidad total de suelo y océano demandada por una población humana concreta o por una economía (Wackernagel and Rees, 1996) y es un análisis que se basa, por tanto, en términos medioambientales y biogeofísicos en lugar de en términos monetarios (Rees y Westra, 2003) como ha sido la tónica en los últimos 30 años desde la génesis del desarrollo sostenible. WWF (2007) ejemplifica este concepto afirmando que desde 1980 la huella ecológica del planeta ha superado en un 25% su capacidad biológica. También en este estudio se analiza el caso particular de España, donde el incremento de su huella ecológica ha aumentado significativamente, desde un 2,43 en 1970 hasta un 5,36 en 2003 (WWF, 2007).

De forma similar, la conceptualización del espacio ambiental (Spangenberg, 1995) integra completamente el principio de equidad y justicia social en la sostenibilidad ya que refleja la necesidad de limitar el ritmo al que se consumen los recursos del planeta si queremos que exista una distribución justa de ellos en todas las partes del mundo. El enfoque del espacio ambiental, en consecuencia, “concibe la sostenibilidad en términos del acceso que todos tenemos a una distribución justa de los recursos de los que una calidad de vida saludable depende” (McLaren, 2003: 19).

Este concepto fue desarrollado por el Instituto Wuppertal, en Holanda, y fue extendido a través de la publicación *Towards a Sustainable Europe* en 1994. Bajo la premisa de que el espacio ambiental del planeta es limitado y que está desproporcionadamente distribuido entre el segmento de los ricos (el Norte) y de los pobres (el Sur), este informe concluye sobre la necesidad de establecer objetivos de espacio ambiental si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible. Estos objetivos tienen como misión reducir el consumo de los recursos naturales en las siguientes proporciones:

Según McLaren (2003) el paradigma de Just Sustainability podría ser reforzado por el concepto de espacio ambiental ya que éste “sugiere cómo las políticas de desarrollo sostenible pueden incorporar explícitamente cuestiones de equidad y reunir a los agentes y actores tanto medioambientales como sociales” (McLaren, 2003: 34). Los conceptos de huella ecológica y espacio ambiental reflejan, en esencia, una clara evaluación precaucionaria de los límites de los ecosistemas.

Existe otra conceptualización, la deuda ecológica, algo más joven que las anteriores en sus orígenes, que también es completamente consistente con la sostenibilidad social (Acción Ecológica, 2011). Si la población del planeta consumiera y generara residuos al ritmo que los países industrializados lo hacen actualmente; con el fin de lograr satisfacer nuestras necesidades, sería necesario más de un planeta. Esto nos lleva a la inevitable pregunta, identificada por muchos autores, Martínez-Alier uno de los más prominentes, que se formula de la siguiente manera: ¿quién debe a quién? La única respuesta posible para los seguidores de esta conceptualización es que la sociedad industrializada y consumidora de la mayor parte de los recursos del planeta, es acreedora de una deuda histórica, social y ecológica con los países menos desarrollados (Acción Ecológica, 2011). McLaren (2003: 34) define a la deuda ecológica como un “espacio ambiental con historia y justicia”³⁵. Rees y Westra (2003) también añaden:

[...] quantifying the ecological deficits of rich countries should force recognition of the fact that much of the ecological damage afflicting developing countries and their peoples is caused not by consumption to satisfy local needs, but rather by intensive export-oriented production to satisfy developed world demand. Consumption by

³⁵ El concepto de deuda ecológica se está empezando a utilizar también en el plano político. Fue el caso sonado del presidente de Bolivia, Evo Morales, en la COP 16 (16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en Cancún (Méjico) en diciembre de 2010.

the world's wealthy causes much ecological destruction around the world. Rees and Westra (2003: 110).

Las conceptualizaciones presentadas anteriormente ofrecen un marco integrador a la hora de comprender y promover tanto el desarrollo sostenible como la justicia ambiental (McLaren, 2003: 34). El reto que se plantea es, por tanto, la manera de integrar dos conceptos políticos como la justicia social y el medio ambiente de una manera eficaz.

Para concluir esta sección, me gustaría citar a Martínez Alier (2000), en su comentario a las preocupaciones referidas por Bryant y Bailey sobre la falta de alternativa al discurso tradicional del concepto de desarrollo sostenible. Este autor afirma que la justicia ambiental (local y global) es la principal fuerza para la sostenibilidad.

CAPÍTULO V

ESPACIOS VERDES URBANOS

El novelista español, Eduardo Mendoza, en una entrevista a un periódico local, señalaba cómo la naturaleza, al ser un elemento derrotado en la cruzada de la industrialización, tiene que convertirse ahora en un inmigrante en las ciudades si quiere conseguir ser parte del espacio urbano de nuevo: “La ciudad ha ganado la batalla a la naturaleza, pero ahora tiene que recuperarla. Es ella la que va a tener que convertirse en un inmigrante en las ciudades”³⁶. Si nuestro objetivo es el de incorporar la naturaleza en el dominio urbano, se debe considerar a la gestión medioambiental urbana como un elemento relevante en el desarrollo y la planificación de las ciudades.

V.1. REIVINDICANDO LA CIUDAD: HACIA LA CIUDAD JUSTA

El espacio urbano es un oxímoron de ventajas que nos conducen al logro del desarrollo sostenible. Por un lado, es obvio reconocer que las ciudades son percibidas tanto

³⁶ Entrevista realizada en el Diario de Noticias de Álava, 2 de diciembre de 2010.

como ejecutoras como víctimas de la degradación medioambiental (OECD, 1994). La mayor parte de la población mundial vive en las ciudades y esta tendencia continuará en el futuro.

Según Naciones Unidas (2007) y el Banco Mundial (2007), el siglo veinte y uno está siendo testigo de una rápida urbanización de la población mundial. En 1900, los habitantes urbanos constituían únicamente el 13% de la población global. Esta cifra se incrementó hasta el 29% en 1950 y alcanzó el 49% en 2005 (3,2 billones de personas). Se espera que para 2030, el 60% de la población global resida en los centros urbanos. La población urbana de Europa, Sudamérica y el Caribe, América del Norte y Oceanía actualmente alcanza el 70%. África y Asia son las regiones menos urbanizadas del planeta, ya que únicamente el 40% de ella es urbana, pero en el año 2030 una mayoría de esta población se espera que viven en áreas urbanas. Además, actualmente, el ratio de crecimiento medio anual de la población urbana en los países en vías de desarrollo (2,7%) es prácticamente 4 veces la de los países desarrollados (0,6%).

Todo el mundo es consciente de que la gran mayoría de los problemas medioambientales que afectan al planeta actualmente están principalmente originados y centrados en el propio ámbito urbano, donde estos problemas son más severos, como en los alrededores industriales de las ciudades. Las ciudades demandan grandes cantidades de recursos y de energía. Éstas también son grandes consumidoras de recursos naturales y generadoras de residuos. Del mismo modo, las ciudades producen la mayoría de los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático global que ya estamos experimentando

A continuación indicamos algunos datos que nos pueden servir como ejemplo: las áreas urbanas, a pesar de representar únicamente el 2% de la superficie de la Tierra, son responsables del 75% del consumo de energía mundial y del 75% de la producción de residuos (Giradet, 1999). Del mismo modo, por ejemplo, se ha encontrado que la huella ecológica de Londres es de 49 millones de hectáreas globales, el doble de la superficie del Reino Unido y aproximadamente la extensión de España (BFF, 2002). No obstante, no debemos olvidar que la destrucción medioambiental es también el resultado de las industrias rurales y extractivas, así como de la propia agricultura (OECD, 1994: 22). Las cuestiones medioambientales en el contexto urbano son muchas y muy diversas:

Air quality is often below the required standard, noise is increasing and becoming more widespread, and ground-water pollution is becoming more and more evident. Soil is contaminated in many derelict industrial areas, and sewage systems are

inadequate. Municipal waste disposals continue to increase, and landfill sites are becoming scarcer, more expensive, and full of toxic and non-recyclable materials. High energy costs and emissions from incineration are a serious problem. Cities lack adequate reserves of water [...] OECD (1994: 83).

Por otro lado, las áreas urbanas constituyen un “importante activo físico” el cual, además de producir consecuencias negativas para el medio ambiente también representan un “recurso irremplazable para el desarrollo social, cultural y económico” (OECD, 1994: 14). Las ciudades también son percibidas, de forma general, como los nodos centrales de las principales redes de producción, distribución y consumo de la humanidad (Prats, 2008). Esta noción, por ejemplo, no es compartida por Castells (1977)³⁷ quien afirma que las ciudades no son las fuentes de producción ya que éstas son típicamente una función regional.

Las áreas urbanas y sus ciudadanos también constituyen el punto central de información, innovación, coexistencia y la difusión de valores sociales (Prats, 2008). Al mismo tiempo, las ciudades poseen los recursos de gestión y la proximidad social, así como las capacidades de transformar la realidad de nuestra sociedad, y por lo tanto, las ciudades deben poner estas capacidades al servicio de la sostenibilidad y fijar las bases para los cambios que los nuevos retos demanden (Prats, 2008).

El Informe Brundtland, analizado extensivamente en el Capítulo II, ya reclamaba la importancia que las ciudades tienen en la búsqueda del desarrollo sostenible: “El futuro será predominantemente urbano, y las preocupaciones medioambientales más inmediatas de la mayoría de los ciudadanos serán urbanas” (WCED, 1987: 255). Sin embargo, fue la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro quien considero que las ciudades jugaban un papel importantísimo en el logro de la sostenibilidad. Esta noción de la ciudad es un elemento crucial en la consecución del desarrollo sostenible y tiene su reflejo político en lo que se ha llamado la Agenda Local 21.

Uno de los más importantes académicos que trabajan en el campo de la sostenibilidad urbana afirma que los esfuerzos locales son cruciales para el desarrollo sostenible. Este autor nos señala que:

Despite appearances, [sustainability] is not primarily global. To be sure, the world's the stage; a sustainable community or nation surrounded by unsustainable

³⁷ Citado en Fainstein, (2006: 4)

neighbors is a brave failure [...] but we believe communities are the primary locus of responsibility for creating a sustainable world. The admonition to Think Globally, Act Locally retains its wisdom despite years of bumper-sticker over-exposure. Directed sustainability will come about in the neighborhoods or not at all. Human seem evolved for communities of manageable size, and most of the individual behaviors and attitudes that support sustainability are best nurtured at the community level. The political structure and process necessary for a regionally, nationally, and globally sustainable society must be built on a foundation of local communities. Prugh et al. (2000: xv-xvi).

Ciertamente, parece lógico afirmar que el logro de un futuro más sostenible para nuestro planeta descansa en las ciudades: Para poder hacer frente a los numerosos retos medioambientales a los que el planeta se está enfrentando en la actualidad, se requiere una agenda operativa, efectiva y coherente, en donde las ciudades se emplacen como el elemento vital.

En el pasado, las ciudades y los pueblos de todo el mundo existieron por largos periodos de tiempo porque “fueron capaces de desarrollar y mantener una relación de constante equilibrio entre sus actividades internas, tanto sociales como económicas, y, externamente, con su medio natural y agrario” (Levine *et al.*, sin fecha). No obstante, las ciudades han evolucionado tremendamente desde aquellos periodos en los que conseguían ser sostenibles. La tecnología ha facilitado significativamente las condiciones de vida en el planeta, aunque este nuevo estilo de vida haya traído como consecuencia una amenaza creciente a sus recursos naturales.

Para muchos defensores de la sostenibilidad, la justicia social y la equidad deben convertirse en parte integral de los esfuerzos por conseguir el desarrollo sostenible. Obviamente, el carácter central de la justicia social y la equidad también ha sido reconocido y destacado junto con el potencial de la ciudad sostenible. Esta visión se ha visto reflejada en varios documentos de la política europea como el *European Commission's First Sustainable Cities* (European Union Expert Group on the Urban Environment, 1994) donde se afirma que la equidad social, junto con la sostenibilidad económica son condiciones para la sostenibilidad medioambiental. Del mismo modo, *The Conference on European Sustainable Cities and Towns*, celebrada en Aalborg en mayo 1994, reconoció que la sostenibilidad urbana puede ser únicamente alcanzada a través de la justicia social, economías sostenibles y sostenibilidad medioambiental lo cual muestra que “la equidad social finalmente se acuerda como una precondition para alcanzar la sostenibilidad” (Mega, 1996: 139). Además, Mega (1996: 137) va más allá al afirmar que “justicia social es de gran

importancia para las ciudades dispuestas a preservar su integridad, a absorber las ondas de choque social y a asegurar la futura atracción para las personas y el capital”.

Fainstein (2005: 14-15) enumera “una serie de valores necesarios para la ciudad justa”, los cuales “deben alcanzar un nivel mínimo”. Los valores a los que Fainstein (2005) se refiere son la democracia, equidad, diversidad, crecimiento y sostenibilidad. No obstante, esta autora en un trabajo posterior reconoce que estos valores “son problemáticos ya que todos ellos tienen potenciales o riesgos indeseados” (Fainstein, 2006: 3).

Un estudio llevado a cabo por Portney (2002) sobre las razones por las que algunas ciudades se toman el objetivo de la sostenibilidad más seriamente que otras, nos demuestra cómo las consideraciones de equidad no son generalmente abordadas en muchas de las ciudades que afirman trabajar con el objetivo de lograr un futuro más sostenible. Del mismo modo, Portney señala, en las ciudades donde las cuestiones de equidad son incorporadas en sus iniciativas de sostenibilidad, no queda del todo claro la razón por la que la equidad y la sostenibilidad están a veces relacionadas o lo hacen únicamente de una forma superficial (Portney, 2002). Portney (2002) también argumenta que los indicadores de equidad utilizados por estas ciudades son medidas sencillas e incompletas, como por ejemplo la desigualdad en la renta, ya que éstas no describen la naturaleza fundamental del medio ambiente y la justicia social; esto es, indicadores que midan las diferencias en las exposiciones a la contaminación medioambiental.

V.2. EL VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS

¿Qué entendemos por espacios verdes urbanos³⁸? Es importante, en este punto, tratar de dar una definición amplia de este término el cual ha sido analizado y aprobado tanto por medioambientalistas, ecologistas y planificadores urbanos.

³⁸ Es necesario clarificar el significado de dos términos diferentes que son usados frecuentemente de forma intercambiable lo que ha producido una cierta confusión en la terminología: espacio abierto y espacio verde. Waters y Smith (2002: 7) describen ‘espacio verde’ como una sub-categoría del término inclusivo de ‘espacio abierto’, el cual es usado para clasificar “land of potential natural heritage value”. En este sentido, estos autores definen ‘espacio abierto’ como “cualquier terreno abierto (es decir, no construido) el cual provee, o tiene el potencial de proveer, beneficios medioambientales, sociales y/o económicos a las comunidades, tanto de forma directa como indirecta, dentro de las áreas urbanas”. También definen ‘espacio verde’ como “cualquier

Urban green spaces are understood as public green spaces located in urban areas, mainly covered by vegetation (as opposed to other open spaces) which are directly used for active or passive recreation, or indirectly used by virtue of their positive influence on the urban environment, accessible to citizens, serving the diverse needs of citizens and thus enhancing the quality of life in cities or urban region. URGE (2004: 13).

Greenspaces are the 'green lungs' of our towns and cities contributing to improving people's physical and mental health by providing places for informal recreation – walking, cycling, sitting, socialising and children's play – and 'breathing spaces' to take time out from the stresses of modern life. They bring the countryside into our towns and cities, and make it accessible from our 'backdoors'. Greenspace Scotland (2011).

Sybrand Tjallingii (2005) argumenta extensivamente sobre el enfoque más adecuado de las estructuras verdes para las ciudades. Para este autor, la estructura verde, a través de una historia de amor-odio, relaciona la ciudad con el medio rural. También señala tres perspectivas, que aunque diferentes, están relacionadas: la perspectiva espacial, temporal y ecológica.

Una estructura verde desde una perspectiva espacial, resalta la importancia que tienen los conectores verdes para los usuarios y los corredores ecológicos para la flora y la fauna, ya que implican, no solo la cantidad total de espacios verdes, sino también las redes espaciales urbanas que conectan los espacios abiertos, los jardines públicos y privados, parques públicos, campos dedicados a los deportes, huertas y campos de recreo; así como las redes de bosques y planicies aluviales en el entorno más próximo (Tjallingii, 2005: 16).

Desde una perspectiva temporal, “la estructura verde expresa una historia larga y una política de planificación a largo plazo para hacer de la estructura espacial de los espacios verdes la base para un desarrollo sostenible urbano. [...] Como resultado el patrimonio natural se hace visible en una nueva identidad verde del paisaje urbano” (Tjallingii, 2005: 16). Este autor también señala la riqueza, tan impredecible, de especies que las ciudades tienen, hasta el punto que, en muchas ocasiones, las áreas urbanas poseen mayor biodiversidad que sus alrededores rurales (Tjallingii, 2005). Por lo tanto, desde una perspectiva ecológica, este autor sostiene que las estructuras verdes urbanas

terreno o estructura con vegetación, agua o formación geológica dentro de las áreas urbanas” (Waters y Smith, 2002: 7). En esta tesis, los términos serán usados de acuerdo a la definición de Waters y Smith.

consiguen un triple objetivo: protectores, mejoradores y creadores de corredores ecológicos que facilitan la supervivencia de las poblaciones vulnerables de flora y fauna al permitirles moverse entre las principales hábitats (Tjallingii, 2005). Tjallingii (2005) también identifica las potenciales sinergias que pueden ser creadas entre el agua y las estructuras verdes.

Desde la década pasada, los parques urbanos han sido reconocidos por su creciente importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en los medios urbanos, así como por su contribución al logro de las ciudades sostenibles (Tzoulas y James, 2004). Las primeras concepciones de los parques urbanos se llevaron a cabo en el siglo XIX y se caracterizan por: [1] la prestación de “aire fresco, verde, contacto con la naturaleza y un marco en el que las personas de todas los estratos de la sociedad se mezclan y sociabilizan” (Tzoulas y James, 2004: 2); [2] así como por el ‘embellecimiento’ del espacio urbano con áreas verdes con el claro propósito de crear “una imagen de esplendor y generosidad” (Tyrväinen *et al.*, 2005: 87) y [3] como una consecuencia de las condiciones dominantes creadas por la rampante industrialización en las ciudades con el objetivo de contrarrestar estrés y compensar por la falta de jardines privados en los hogares (Tyrväinen *et al.*, 2005: 87). Como Tjallingii (2005: 23) señala, “los parques tienen que ser los lugares donde respirar de las metrópolis”.

Del mismo modo, Maller *et al.* (2009) sostiene que en el ámbito urbano los parques han sido, frecuentemente, la única opción disponible para poder entrar en contacto con la naturaleza. Frederick Law Olmsted fue una figura significativa durante el periodo en el que se desarrolló la arquitectura paisajista. Olmsted seguía la tesis que pretendía que los parques urbanos fueran conectados con las áreas urbanas a través del desarrollo de un estilo basado en parques lineales a lo largo de los Estados Unidos (Little, 1990). Este periodo fue seguido por el que añadió al valor de los parques urbanos la noción de recreación activa, en la forma de deportes y movimientos al aire libre (Tzoulas y James, 2004; Tyrväinen *et al.*, 2005). Tjallingii (2005) también afirma que las estructuras verdes también se han desarrollado desde la noción de su accesibilidad a todos los ciudadanos, lo cual resultó en la conexión de tanto los distritos pobres como los ricos a través de una red de paseos verdes y parques. La segunda mitad del siglo XX contribuyó a la decadencia de los parques urbanos como consecuencia de cambios sociales, económicos y demográficos (Tzoulas y James, 2004).

Los espacios verdes públicos son esenciales para la mejora de la calidad de vida en las áreas urbanas y son muy valorados por sus beneficios ecológicos, medioambientales, sociales y económicos. Éstos son, por lo tanto, multifuncionales. Es importante ser

conscientes de los múltiples usos y valores de los espacios verdes urbanos, contrariamente a la funcionalidad que se les dotó en sus orígenes donde eran esencialmente utilizados como lugares de belleza y de recreación al aire libre. De hecho, los espacios verdes urbanos juegan un papel importante en la mejora de la biodiversidad y medioambiente urbano, en la recreación de la comunidad y la accesibilidad para la práctica de deportes al aire libre, en el desarrollo de una mejor actuación económica, en la cohesión social de la comunidad, en la mejora de la salud física y mental, entre otras. Las estructuras verdes y los parques en las actuales ciudades, caracterizadas por ser ruidosas y estresantes y estar abarrotadas y contaminadas, traen la calma y la relajación que la mayoría de las personas necesitan para alcanzar vidas más saludables a nivel personal.

V.2.1. BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

Los beneficios medioambientales de los espacios verdes en el ámbito urbano han sido caracterizados por la mejora de su calidad ecológica y, por lo tanto, del bienestar de los ciudadanos. No es inusual, por lo tanto, escuchar analistas que refieren al sistema de espacios verdes de una ciudad como sus ‘pulmones’. Después de la Cumbre de la Tierra en 1992, y su énfasis en la promoción de formas de vida más sostenibles en las ciudades, los espacios verdes urbanos se han convertido en una parte esencial de la gestión y la planificación urbana.

Uno de los beneficios de los espacios verdes, desde el punto de vista medioambiental, es el de regular el microclima local. Nowak *et al.* (2006) afirma que el arbolado urbano juega un papel esencial en la reducción de la temperatura en las ciudades, el llamado ‘urban heat island’ o ‘efecto isla calor’, al aportar oxígeno adicional y aire más fresco.

La vegetación urbana también es importante para la mejora de la calidad del aire que tiene implicaciones directas no solo en el ámbito medioambiental sino también en la salud de los ciudadanos. Existen principalmente dos maneras en las que el arbolado urbano afecta a la calidad del aire (Nowak *et al.*, 2006): [1] Las áreas verdes juegan un papel invaluable en la absorción de contaminantes del aire hasta el punto que la reducción total anual de la contaminación atmosférica por los árboles urbanos en Estados Unidos representa 711.000 toneladas métricas, o lo que es lo mismo, un valor monetario de 3,8 billones de dólares; [2] Reducción de los efectos energéticos en los edificios al descender

las temperaturas y dar sombra a los edificios durante el verano (reducción de consumo de energía en aires acondicionados) y obstruyendo los vientos fríos durante el invierno (reducción del consumo de energía por calefacción). Es inevitable, por lo tanto, reparar en que estos beneficios medioambientales también proporcionan beneficios económicos.

Los niveles de contaminación acústica que se producen en las ciudades, debido principalmente a factores como el tráfico, también se reducen a través de los espacios verdes. Bolund y Hunhammar (1999) abogan por una correlación negativa entre los niveles de ruido en las ciudades y los espacios verdes ya que un incremento de los últimos daría lugar a una reducción de los primeros. Estos autores también señalan que la vegetación en las ciudades puede actuar como un escudo protector ya que disminuiría la intrusión visual del tráfico.

Los entornos urbanos tienen que prestar especial atención a cuestiones como el almacenamiento del agua en las ciudades y el riesgo de inundaciones. Los espacios verdes tienen la función de absorber el agua de la lluvia que no ha conseguido penetrar en el suelo debido a que las áreas urbanas están cubiertas casi en su totalidad por edificios y asfalto y, por lo tanto, favorecen el drenaje (Sherer, 2003). Sin embargo, el arbolado urbano amortigua las lluvias torrenciales y la inundaciones al reducir la escorrentía y mejorando la eficacia de los sistemas urbanos de drenaje (CEA, 2012a).

Es también muy importante tener en cuenta que los espacios verdes más antiguos contribuyen significativamente a la preservación de la biodiversidad urbana ya que estos son los principales hábitats para las plantas y animales urbanos (Nilsson y Randrup, 1997). La literatura ha resaltado, en este sentido, la importancia que tienen los corredores verdes para conectar los espacios verdes y constituir hábitats continuos para las especies urbanas (Land Use Consultants, 2004: 18).

V.2.2. BENEFICIOS SOCIALES

El impacto que tienen los espacios verdes urbanos en la vida social de las ciudades también resulta positivo, ya que constituyen un espacio de comunidad donde se produce parte de la interacción social, la cual promueve el desarrollo de las redes sociales y el sentimiento de cohesión social e identidad (Land Use Consultants, 2004). Los parques locales aportan un espacio común que favorece el encuentro de los individuos y su

implicación en la comunidad contribuyendo así a la cohesión e inclusión social (Taylor y Coalter, 2001). Para autores como Greenhalgh y Worpole (1995) los parques urbanos atraen a un espectro mucho más amplio de la población que otros servicios como pueden ser los museos.

Un entorno natural refuerza el sentido de comunidad ya que se produce, en estos lugares, un mayor contacto entre los ciudadanos (Kuo *et al.*, 1998). Estos entornos naturales o espacios verdes se convierten así en lugares inclusivos donde se mejora la inclusión y cohesión social. Mackenzie y Paget (1999)³⁹ señalan que las comunidades inmigrantes se relacionan en las ciudades principalmente en parques y jardines de tal forma que estos entornos son los que ofrecen las mayores oportunidades para la inclusión de estos ciudadanos.

Kuo *et al.* (1998) afirman que el arbolado y la vegetación en los espacios públicos de las ciudades son vitales para atraer a sus ciudadanos. Estos autores citan un estudio suyo previo (Kuo *et al.*, 1998)⁴⁰ en el que se concluye que los lugares desprovistos de vegetación no gustan o son temidos por los residentes de la ciudad y que la simple incorporación en éstos de arbolado y hierba transforman sus respuestas siendo éstas ahora positivas. Por lo tanto, concluyen Kuo *et al.* (1998), el nivel de vegetación y arbolado en los espacios verdes urbanos puede afectar, en última instancia, al contacto social, es decir, cuanto más ‘verde’ es el espacio público, más fuertes serán los lazos sociales del vecindario:

Greener common spaces appear to attract people outdoors, increasing opportunities for casual social encounters among neighbors and fostering the development of social ties. Ultimately, the outcome of community based greening efforts might be physically and socially more supportive places to live. For individuals who live in poor inner-city neighborhoods and who face an array of difficult circumstances, greener outdoor common spaces may make the world a more supportive place. (Kuo et al., 1998: 848).

Se percibe, a través de estos estudios, la importancia que tiene el capital social en el contexto de los espacios verdes. De acuerdo con Field (2003: 1), el argumento fundamental del capital social se puede describir utilizando para ello una simple frase: “las relaciones importan”. El capital social se refiere a las redes a las que los individuos

³⁹ Citado en Land Use Consultants (2004: 34).

⁴⁰ Citado en Kuo *et al.* (1998: 826-827).

pertenecen, de tal manera que éstos obtienen beneficios de estas relaciones con otros agentes, ya que a través de estas conexiones, los individuos son capaces de trabajar juntos para conseguir sus objetivos, que de otra manera no hubieran podido alcanzar individualmente (Field, 2003). Portes (1998: 6), uno de los teóricos más importantes del concepto de capital social, lo define como “la habilidad que tienen los actores sociales para asegurarse beneficios en virtud a su pertenencia a diferentes redes u otras estructuras sociales”.

Woolcock (1998) desarrollo un modelo de capital social que incluía cuatro dimensiones del concepto y que hacía posible el análisis del capital social en diferentes niveles: la primera serían los llamados *vínculos* (lo que Granovetter (1973) definió como *lazos fuertes*), en segundo lugar, *integración* (*lazos débiles*, según Granovetter), y por último, *integridad* y *sinergia*. Los lazos fuertes están caracterizados por las relaciones que se fundamentan, principalmente, en la afinidad, la etnia y religión, y que son mecanismos de protección que aseguran la supervivencia al desarrollar redes de seguridad (Colleta y Cullen, 2000) o el llamado ‘*bonding social capital*’. Por otro lado, los lazos débiles están representados por las redes y asociaciones que vinculan a los individuos con una comunidad externa, más allá de las diferencias existentes en afinidades, etnia o religión (Colleta y Cullen, 2000) o el llamado ‘*bridging social capital*’.

Desde un punto de vista relacionado con la salud, es evidente que los espacios verdes no solo mejoran la calidad del medio ambiente y de los ecosistemas urbanos pero en consecuencia mejora la salud humana, tanto física como psicológica. Las infraestructuras verdes de las ciudades tienen como uno de sus objetivos reducir aquellos factores de riesgo que afectan a la salud y el bienestar de los ciudadanos, interviniendo directamente sobre las actitudes y los comportamientos de los individuos para que adopten estilos de vida más saludables (Pecurul *et al.*, 2006). “Es sobre este propósito donde los espacios verdes, tanto urbanos como rurales, pueden contribuir de una manera muy eficaz a la mejora de estas tendencias” (Pecurul *et al.*, 2006).

Un individuo físicamente saludable tiende a ser también un individuo psicológicamente sano y viceversa (Maller *et al.*, 2009). Uno de los beneficios indirectos de los espacios verdes es que su acceso en las ciudades permite a sus ciudadanos mejorar su actividad física, la cual es a su vez, un factor esencial en el bienestar personal de los individuos. Esta correlación positiva ha sido evidenciada a través de múltiples estudios: desde una perspectiva psicológica, Marcus y Barnes (1999) sostienen que los espacios verdes contribuyen a reducir el estrés de los ciudadano, así como facilita la recuperación de

pacientes convalecientes; cada vez más, los ciudadanos de las ciudades tienden a llevar vidas sedentarias y por lo tanto, la actividad física al aire libre debería ser un elemento importante en nuestra rutina diaria o lo que Pretty *et al.* (2007) se refieren como 'ejercicio verde' en una investigación llevada a cabo en el Reino Unido sobre sus efectos en la salud y en el bienestar psíquico.

V.2.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS

Los espacios verdes urbanos también tienen evidentes beneficios en el ámbito económico. Los espacios verdes urbanos contribuyen en gran medida a las economías locales ya que están íntimamente relacionados con procesos de regeneración urbana y con la mejora del entorno de la ciudad, tanto para sus ciudadanos como para sus actividades comerciales. Esto es así porque, aunque espacios degradados pueden proporcionar una serie de beneficios recreativos y biodiversidad a la zona local, éstos, indudablemente no tendrán el mismo impacto económico que un espacio más cuidado y agradable (Land Use Consultants, 2004: 60).

Se ha documentado que las propiedades inmobiliarias localizadas en las cercanías de un espacio verde de la ciudad son más valoradas (Luttik, 2000) ya que muchos compradores están dispuestos a pagar un precio superior por contar con esta oportunidad. Del mismo modo, los precios de las propiedades comerciales también se incrementan en aquellos barrios donde los espacios verdes se han desarrollado con gran calidad ya que éstos atraen a más gente en la zona (Tibbatts, 2002). El mercado inmobiliario en estas áreas también se vuelve más dinámico ya que la probabilidad de reventa de estas propiedades es más alta (Tibbatts, 2002). Esta regeneración de alta calidad de los barrios genera, a su vez, impuestos de la propiedad más altos (Tibbatts, 2002).

Los espacios verdes también juegan un papel muy importante a la hora de embellecer la ciudad. Rogers (1999) propone la creación de lugares bellos (en nuestras ciudades y pueblos) que sean socialmente cohesivos, evitando disparidad de oportunidades y promoviendo equidad y solidaridad social. Del mismo modo, Daley (2001:26) afirma que "árboles, flores, parques, espacios abiertos atractivos: estas cosas son contagiosas. Cuando la gente las experimenta, quieren más de ellas. Y están dispuestos a pagar por estos lugares, [...]. Considero que las ciudades que prestan atención real a la calidad de vida son aquellas que florecerán". En verdad, los diseños de parques de gran calidad arquitectónica

y una gestión buena son esenciales en atraer visitantes, tanto locales como extranjeros (DTLR, 2002).

Una vez que hemos discutido ampliamente la gran diversidad de beneficios y funciones que los espacios verdes traen al ámbito urbano y a sus ciudadanos, es obvio afirmar que las redes verdes en las ciudades son completamente justificables y deberían ser una prioridad en las estrategias de planificación de las instituciones locales y para aquellos encargados de la toma de decisiones y de las estrategias e iniciativas para el logro de la ciudad sostenible.

La Tabla 2 muestra de forma esquemática el valor de los espacios verdes en las ciudades, desde los tres puntos de vista examinados en este apartado, los beneficios ambientales, los beneficios sociales y los beneficios económicos.

Tabla 2. Beneficios de los espacios verdes urbanos

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES	Regulación del clima	Reducción de la temperatura urbana ('urban heat island')
	Mejora de la calidad del aire	Absorción de contaminantes del aire Reducción de los efectos energéticos
	Mejora de la calidad acústica	Reducción de la contaminación acústica
	Mejora de la calidad del agua	Absorción del agua que no ha penetrado en el suelo urbano Amortiguación de inundaciones Mejora del sistema urbano de drenaje
	Biodiversidad	Preservación de la biodiversidad urbana
BENEFICIOS SOCIALES	Mejora de la salud	Impacto en la salud física y mental Aumenta la actividad física de los ciudadanos Mejora el bienestar de los ciudadanos Facilita la recuperación de los pacientes Reduce el estrés "ejercicio verde"
	Mejora de calidad de vida	Cohesión social Inclusión social Ocio y esparcimiento
BENEFICIOS ECONÓMICOS	Contribución a la economía local	Aumento del valor de las propiedades privadas y comerciales Recaudación de mayores impuestos por el incremento de valor en las propiedades Ingresos derivados de la atracción de visitantes Reducción en el consumo de energía

Fuente: elaboración propia a partir del análisis bibliográfico

V.3. UN SISTEMA DE ESPACIOS VERDES URBANOS SOSTENIBLEMENTE JUSTO

El espacio verde multifuncional en la ciudad contribuye significativamente a la ciudad sosteniblemente justa. Los espacios verdes urbanos juegan un papel central en “llevar a cabo el desarrollo y la entrega de los ideales de sostenibilidad” (URGE, 2004), es decir, la mitigación del estrés ambiental, el desarrollo de oportunidades y el apoyo a las economías urbanas, así como la mejora de la calidad de vida de los urbanitas; mientras que contribuye a la creación y el enriquecimiento de la cohesión de la comunidad y la inclusión social, así como a la distribución equitativa de estos recursos naturales urbanos. En cualquier caso, los espacios verdes urbanos son consistentes con la definición de sostenibilidad justa que se ha mencionado en un capítulo anterior: “la necesidad de garantizar una mejor calidad de vida para todos, ahora y en el futuro, de una manera justa y equitativa, al mismo tiempo que se vive dentro de los límites de la capacidad de los ecosistemas” (Agyeman *et al.*, 2003: 5).

Por lo tanto, un estudio sobre el sistema de espacios verdes públicos en el ámbito urbano, que va de la mano con el anteriormente citado ‘terreno común’ entre la justicia ambiental y el desarrollo sostenible debe ser discutido en términos de: (1) inclusión versus exclusión; y (2) la forma en la que estos espacios verdes están siendo distribuidos en el ámbito urbano, en términos de accesibilidad y acceso.

V.3.1. EL PAPEL DEL ESPACIO VERDE EN UNA SOCIEDAD COHESIONADA SOCIALMENTE: CUESTIONES DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Anteriormente, se ha argumentado que el espacio, particularmente una expresión de espacio justo, es un elemento esencial de la forma en la que la sociedad construye relaciones, ya que fomenta un vínculo único entre las comunidades, que a su vez, contribuye a la consecución de la sostenibilidad urbana. Del mismo modo, los espacios verdes en el contexto urbano permiten a los ciudadanos alcanzar altos niveles de asociación y participación social.

Los espacios públicos abiertos en las ciudades han sido considerados capaces de actuar como agentes de democracia, en términos de provisión, accesibilidad y uso; así como provistos de una importante posición ideológica en las sociedades democráticas (Mitchell, 1995: 116). El exalcalde de la ciudad de Bogotá, en Colombia, Enrique Peñalosa, considera que los espacios públicos urbanos son importantes para una sociedad democrática porque

son uno de los pocos lugares donde los ciudadanos se encuentran como iguales (Peñalosa, 2001); o como Ward Thompson (2002: 60; énfasis en el original) afirma “lo que sigue siendo cierto para el espacio público abierto, [...] es que son los lugares donde la democracia está resuelta, literalmente, *sobre el terreno*”.

El espacio público abierto y particularmente, los parques y espacios verdes, integran gente perteneciente a diferente estrato social y económico, así como a gente de diferentes comunidades (Peñalosa, 2001), a pesar de la limitada temporalidad de estos encuentros. Es cierto, se ha argumentado que, particularmente los parques urbanos han sido retratados como los lugares donde todos los diferentes segmentos de urbanitas se encuentran e interaccionan (Ward Thompson, 2002) hasta el punto que en la sociedad moderna existen pocos lugares donde esta situación ocurre como lo hace en los parques urbanos (Ward Thompson, 1998)⁴¹.

Un sistema de espacios verdes públicos abiertos en la ciudad, por lo tanto, permite la diversidad y la pluralidad de los individuos. Por esta razón, Ward Thompson (1996)⁴² sugiere que los espacios públicos abiertos son necesarios como lugares “donde las diferentes culturas pueden encontrar una expresión individual”. O según afirma Agyeman (2010a), los espacios públicos abiertos deberían fomentar nociones ‘interculturales’ en vez de nociones ‘multiculturales’. El espacio público verde podría ser “diseñado y utilizado de una forma participativa en beneficio de todos” (Tyrväinen *et al.*, 2005: 88).

De acuerdo con Peñalosa (2001), uno de los roles más importantes de los espacios públicos urbanos en una sociedad democrática es el de contribuir a que las ciudades sean más igualitarias. Peñalosa (2001) se refiere a igualdad en la calidad de vida en lugar de igualdad de renta: “si realmente creemos en una sociedad de iguales, [...] un mínimo de bienes públicos debe estar disponible a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones si la sociedad pretende mantenerse junta y avanzar hacia la felicidad” (Peñalosa, 2001: 31).

Este argumento nos lleva inevitablemente al de acceso. Lo que se está sugiriendo es que un espacio democrático debería poner énfasis en el acceso (quién utiliza realmente el espacio) y en la accesibilidad (cómo se utiliza este espacio) (Agyeman, 2010a). Según Harrison *et al.* (1995: 2), acceso se refiere a “determinados derechos de acceso, entrada o uso que están legalmente o convencionalmente definidos”, mientras que accesibilidad se

⁴¹ Citado en Ward Thompson (2002: 66).

⁴² Citado en Ward Thompson (2002: 60)

refiere a “la medida en la que estos derechos pueden ser ejercitados en lugares determinados, en determinados momentos y por determinadas personas”.

La preocupación por la accesibilidad de los parques a todos los ciudadanos de la ciudad se remonta a los primeros planes de espacios verdes urbanos llevados a cabo por Olmsted donde buscaba “una red interconectada de paseos verdes y parques abriéndose camino a través de los distritos de los pobres y de los ricos” (Tjallingii., 2005: 23). Lo que es más, Botkin y Beveridge (1997: 4) afirman que “[C]uando Frederick Law Olmsted completó Central Park en Nueva York, estaba tan satisfecho con los beneficios del parque para todos los ciudadanos de la ciudad, que fue hasta la zona del *Lower Manhattan*, donde los inmigrantes más pobres vivían, y distribuyó folletos en los que se les hablaba del nuevo parque y se les invitaba a utilizarlo”. En verdad, las minorías étnicas y las comunidades caracterizadas por un perfil socioeconómico bajo encuentran el espacio público, y particularmente los espacios verdes, como la mejor opción para pasar su tiempo libre: “la gente que quizás tiene más necesidad de acceso a los parques públicos y la oportunidad de sociabilizar en un entorno seguro, al aire libre serán siempre aquellos con menor libertad de movilidad” (Ward Thompson, 2002: 61).

Consecuentemente, los espacios verdes públicos de gran calidad, en particular, son la confirmación de que la democracia funciona. Es, por lo tanto, muy importante la forma en la que el espacio público abierto es diseñado, gestionado y utilizado. De acuerdo con Low *et al.* (2005:1) en el siglo XXI, el espacio público está siendo amenazado por “patrones de diseño y gestión que excluyen algunas personas y reducen la diversidad cultural y social”. Por lo tanto, como Carr *et al.* (1992) sugieren, si se quiere que los espacios públicos sean exitosos, éstos deben de tener en cuenta las necesidades de los usuarios, ser democráticos en cuanto a cuestiones relacionadas con la accesibilidad y trascendental para la mayoría de la sociedad.

El diseño y la planificación de los espacios públicos abiertos en la ciudad, llevado a cabo por los grupos líderes de la sociedad, ha “expresado irreflexivamente las normas de la mayoría culturalmente dominante, incluyendo las normas de cómo la mayoría desea usar el espacio” (Sandercock, 2003: 21). Consecuentemente, en el último siglo, se ha producido la exclusión de determinados grupos en el acceso y accesibilidad ya que:

In this state-designated role, planners have acted as spatial police, regulating not only land uses but, often, who – that is, what categories of people – might use that

land; thereby regulating bodies in space, administering who can do what and be where, and even, when. (Sandercock, 2003: 21).

Por lo tanto, aquellos encargados de la planificación de la ciudad, tienen la capacidad de crear injusticias espaciales por la gestión que realizan del uso del suelo. Obviamente, existen aquellos que realizan decisiones sobre el uso del suelo que también deciden los patrones de inclusión y exclusión en el espacio público. Esta exclusión ha sido el resultado de una reducción progresiva en la disponibilidad de los espacios públicos abiertos, principalmente a través de la privatización, el vallado o el rediseño de actividades restrictivas (Low *et al.*, 2005). Estas formas de segregación también han sido retratadas por Mitchell como un ejemplo que trae injusticias espaciales, en una entrevista sobre el concepto de justicia espacial (Brown *et al.*, 2007). Mitchell, para quien el debate sobre las cuestiones de inclusión y exclusión en el espacio público abierto son de vital importancia, señala la necesidad de examinar de forma minuciosa las relaciones y los procesos de aquellas exclusiones o inclusiones; ya que exclusión de un espacio público abierto va en contra de la vida democrática (Brown *et al.*, 2007: 11).

En este punto, es claro que el espacio verde en las ciudades puede jugar un papel importante en el fomento de la inclusión social. Sin embargo, es muy importante ser conscientes de que únicamente con una buena gestión de estos espacios seremos capaces de dirigirnos hacia una ciudad más inclusiva. De otro modo, un espacio verde mal gestionado, uno que no es atractivo para la mayoría del público o está en proceso de decaimiento, podría producir exclusión social. Este es el caso de aquellos parques utilizados por personas con problemas de alcohol y de drogas.

V.3.2. DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA NATURALEZA

Vale la pena comenzar esta sección con una cita recogida de una entrevista realizada a Enrique Peñalosa en 2008: “[...] no deberíamos tener uno o dos sino cientos de parques, aceras y carriles-bici de gran calidad” (Peñalosa, 2008). Previamente, Peñalosa había argumentado que un parque es frecuentemente lo más cercano que los habitantes de las ciudades tienen a la naturaleza (Peñalosa, 2001). La construcción de parques en las ciudades es la forma en la que los ciudadanos pueden traer la naturaleza en sus ámbitos de vida y estilos de vida.

Las ciudades son las áreas más pobladas del planeta, así como las más degradadas debido a las consecuencias derivadas de la urbanización y la industrialización. Posiblemente, la cuestión del asfalto es una de los efectos más escandalosos y visibles de este desarrollo producido por el hombre en nombre del progreso. Es desgarrador comprobar cómo la naturaleza lucha por aflorar a través del pavimento urbano y los edificios. Sin embargo, es también positivo experimentar cómo la naturaleza en las ciudades se ha vuelto específica e idiosincrática, con sus propias normas y características. La naturaleza es, sobre todo, elástica y flexible. Una forma diferente de naturaleza, posiblemente, pero naturaleza al fin y al cabo, en constante lucha y con un horizonte temporal que es, a menudo, limitado: frecuentemente cuando la naturaleza se hace muy visible en el entramado urbano, los servicios de limpieza locales inmediatamente adoptan las medidas para su destrucción. No debería ser olvidado que la naturaleza estaba presente en las ciudades millones de años antes de que el primer edificio fuera erigido, la primera fábrica construida y la primera calle cimentada. Supongo que esto supone la supremacía de la naturaleza sobre la creación humana de las ciudades. No obstante, los humanos insistimos en ver que la naturaleza no tome su lugar en la escena urbana de nuevo.

En una ciudad sosteniblemente justa, es imperativo neutralizar esta supresión de la naturaleza a través del asfaltado, al crear un buen espacio verde en la ciudad. Es el momento de recuperar la naturaleza de y por la ciudad, como Mendoza ha comentado anteriormente: porque la naturaleza se ha convertido en un inmigrante de la ciudad.

Sin embargo, este es únicamente el primer paso si se quiere crear un sistema de espacios verdes sosteniblemente justo en las ciudades. El siguiente paso es la incorporación de un nuevo espacio verde en detrimento de la construcción de más áreas pavimentadas, de una forma justa y equitativa. Esta nueva naturaleza formada en las ciudades debe ser creada para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos, raza, género, etc. De este modo, todo el mundo en la ciudad sería igual de valioso (Peñalosa, 2008) independientemente de su nivel de ingresos o de su pertenencia a una comunidad específica. Ciertamente, la distribución equitativa de la naturaleza en las ciudades crea un gran reto para los planificadores urbanos y los que toman las decisiones, y según Lasley (2008: 139) las “políticas urbanas deberían dirigirnos a considerar el reverdecimiento del suelo tóxico urbanizado como el primer objetivo porque reduce las cargas en las comunidades minoritarias y de bajos ingresos mientras que se incorporan beneficios”.

La revitalización del suelo industrial urbano contaminado es una de las áreas más relevantes para el logro de un sistema de espacios verdes sosteniblemente justo. Por ejemplo, el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, ciudad de estudio en esta tesis doctoral, ofrece un buen ejemplo de cómo los planificadores de la ciudad han revitalizado una de las localizaciones más degradadas de la ciudad al crear un espacio verde de gran calidad en el que todos los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz pueden disfrutar.

CAPÍTULO VI

METODOLOGÍA

La sección metodológica es un elemento fundamental en cualquier estudio de investigación. En palabras de Valles (1999: 103; énfasis en el original) “[...] la *disciplina* metodológica es una exigencia en cualquier *acto de investigación*”. La razón de esta relevancia reside en el hecho de que el empleo de un método adecuado y preciso permitirá al investigador emitir unas conclusiones rigurosas e informadas, lo que se conoce como criterios de calidad o validez. Por lo tanto, el método elegido debe ser el resultado una profunda reflexión y razonamiento, de tal manera que la elección del mismo sea el apropiado para la investigación que se va a desarrollar.

Tal y como se ha avanzado en el capítulo introductorio, el enfoque metodológico elegido para la presente investigación es el estudio de caso, que a través de un análisis cualitativo pretende comprobar si los espacios verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz contribuyen a la sostenibilidad local y la justicia ambiental. Esta elección ha sido fruto de un proceso racional que se expondrá en este capítulo mediante el análisis y discusión de las siguientes secciones:

- * Exposición de las diferentes fases de la investigación.

- * Selección de una técnica cualitativa de investigación social como herramienta estratégica para la recogida de información y análisis.
- * Evaluación de la decisión de optar por el estudio de caso como mejor enfoque metodológico para esta investigación, particularmente en el complejo contexto de los estudios urbanos.
- * Examen de las razones por las que se ha elegido la ciudad de Vitoria-Gasteiz como estudio de caso.
- * Justificación del diseño del método mediante la evaluación de las decisiones tomadas con respecto a la muestra.
- * Exposición del proceso de la recogida de datos a través de la entrevista en profundidad.
- * Selección de la metodología para llevar a cabo el análisis e interpretación de los datos obtenidos.
- * Discusión de los criterios de calidad que se han utilizado en la investigación con el propósito de probar el rigor y la calidad de la misma.

VI.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La elaboración de un estudio doctoral requiere que el investigador atraviese por diferentes fases, desde que se toma la decisión de realizar el estudio hasta que se concluye el mismo mediante la exposición, sobre el papel, de las conclusiones obtenidas en el proceso. Estas fases no están en ningún caso claramente delimitadas, frecuentemente se solapan entre ellas debido a la naturaleza hipotética del mismo, y a que es imposible tomar decisiones que durante del estudio no deban ser cuestionadas. Sin embargo, se puede constatar que esta investigación ha seguido principalmente cuatro etapas que expongo a continuación.

Una primera etapa se caracterizó por ser eminentemente reflexiva, donde se proyectó el problema a tratar en la investigación doctoral. Esta etapa fue fruto de años de estudio exhaustivo en diferentes materias, todas ellas relacionadas con el desarrollo sostenible y su problemática en diversos ámbitos. Es en esta fase tan temprana donde se comienzan a articular la hipótesis de trabajo y los objetivos que se pretenden conseguir con el mismo. Tanto la hipótesis como los objetivos se fueron concretando y matizando con la revisión bibliográfica que se realizó a continuación.

VI.1.1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Las preguntas a las que se ha intentado dar respuesta a través de este estudio de investigación son las siguientes:

1. ¿Contribuyen las infraestructuras verdes urbanas a la Sostenibilidad Local y la Justicia Ambiental? ¿Y en particular la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz?
2. ¿Los actores sociales pertenecientes a una sociedad cuyas instituciones están fuertemente comprometidas con la responsabilidad ambiental perciben que los espacios verdes contribuyen a la Sostenibilidad Local y la Justicia Ambiental?

VI.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez que se han especificado las preguntas del estudio de investigación, se derivan los objetivos del mismo, que tienen como misión orientar los procedimientos de la investigación para dar respuesta a las mismas. En este estudio se han dividido en objetivos generales y objetivos intermedios.

VI.1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

- A. Investigar si la planificación de la infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz promueven la sostenibilidad local y la justicia ambiental.
- B. Examinar si los actores sociales perciben que los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz contribuyen al objetivo de la sostenibilidad local y la justicia ambiental.

VI.1.2.2. OBJETIVOS INTERMEDIOS

- Analizar el estado de la cuestión del corpus de conocimiento teórico y empírico de la relación entre las infraestructuras verdes y la sostenibilidad local y la justicia ambiental.
- Estudiar el caso concreto de la infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz.

- Recabar la opinión de actores sociales clave de Vitoria-Gasteiz sobre dicha conexión.

Estos objetivos y contenidos del estudio de caso se han derivado de la revisión bibliográfica en profundidad sobre el problema planteado, realizada en fases anteriores. Recordemos que esta revisión se fundamentó en el estudio de la literatura disponible relacionada con el propósito de la investigación desde un amplio espectro de áreas de conocimiento de las ciencias sociales y otras, como son la sociología, política, ciencias medioambientales, antropología, geografía y economía. Esta gran variedad de fuentes analizadas son el resultado de la naturaleza del concepto de desarrollo sostenible, caracterizado por ser eminentemente interdisciplinar.

Es una segunda etapa es donde se comienza a planificar tanto el enfoque – estudio de caso – como el análisis metodológico – perspectiva cualitativa. Así como la decisión de realizar entrevistas en profundidad para la obtención de datos. También se comienza a proyectar la selección de los actores sociales a entrevistar y la forma en la que se quiere formular el guion de las entrevistas. La tercera fase de la investigación corresponde a la obtención de los datos mediante las entrevistas en profundidad y un análisis preliminar de los mismos con el objetivo de esclarecer si existía la necesidad de ampliación del número de entrevistas. El análisis de estos datos a través de un método de análisis de contenido tradicional se realiza ya en una cuarta y última etapa y que se recogen en los resultados de la investigación, que dará lugar a la exposición de unas conclusiones y futuras necesidades de investigación relacionadas con el tema estudiado.

VI.2. ESTUDIO CUALITATIVO

La utilización de métodos de investigación cualitativos, en contraste con los métodos cuantitativos, se ajustan perfectamente con un enfoque de investigación de estudios de caso. Esto es así porque los métodos cualitativos son “la mejor manera de llevar a cabo una representación adecuada del estudio en profundidad de un fenómeno” (Ragin, 1994: 102), particularmente de los fenómenos sociales. De acuerdo con la literatura, las estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa tienen diferentes puntos

epistemológicos⁴³, aunque Bryman (1999: 35) difiere, ya que sostiene que “muchas de la discusión en la literatura de estas dos tradiciones de investigación ha creado una imagen un tanto exagerada de sus diferencias”.

El sentido de esta sección es explicar las razones por las que se ha elegido el método cualitativo en este proyecto de investigación, en vez de la utilización de otros métodos, quizás frecuentemente más utilizados, como son los cuantitativos. Este intento se realiza siguiendo la declaración de Lees (2003: 108), quien apunta que “ser explícito sobre nuestras prácticas de investigación nos lleva a ser reflexivos sobre ellas – por ejemplo, cuestionar porqué utilizamos un método en particular”. En este sentido, el diseño de las técnicas cualitativas necesitan ser reflexionadas, planeadas, y construidas de forma minuciosa para conseguir que los resultados sean lo más precisos posibles.

Probablemente, el punto fuerte de las técnicas cualitativas sea su flexibilidad intrínseca. Esta flexibilidad no se encuentra en otras técnicas de investigación, como es el caso de los métodos cuantitativos. Esta característica de las técnicas cualitativas tiende, por tanto, a seguir nuevas pistas si se produce un cambio de ideas durante el proceso (Bryman, 1999). Por ejemplo, Hancock (2008) remarca el éxito de su investigación sobre el empoderamiento de las mujeres en Sri Lanka ya que las técnicas cualitativas que utilizó le permitieron construir nuevas hipótesis a la vez que se involucraba cada vez más en el proceso de investigación. Hancock (2008: 182) afirma que la adopción de métodos cualitativos permitió a la investigación “convertirse en un proceso de aprendizaje y descubrimiento, en vez de un estudio cuantitativo fijo como fue planeado en un principio”.

Junto con esta distintiva ‘transparencia’, los métodos cualitativos también favorecen una creciente cercanía entre el investigador y el sujeto de su investigación; es decir, permiten convertirse en un ‘insider’ (Bryman, 1999: 38). En este sentido, un marco cualitativo permite al investigador recoger información más detallada al mirar íntimamente lo que se dice con palabras, y por lo tanto, generar datos más precisos y útiles del fenómeno que es demasiado complejo para ser analizado desde un formato más cerrado.

Del mismo modo, ya que el método cualitativo no busca repuestas simples a las preguntas, es más apropiado cuando tenemos que enfrentarnos con cuestiones de ambigüedad e inconsistencia (Brown, 2008). Generalmente, se ha reconocido que la

⁴³ En todo caso, no es el propósito de este apartado realizar una distinción conceptual entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Se indica esta diferencia epistemológica en este punto a modo de observación.

naturaleza de la información recogida a través de las técnicas cualitativas posee una mayor riqueza y profundidad (Bryman, 1999). Por lo tanto, en el contexto particular de los entornos urbanos, esta característica nos ayuda a entender las formas en las que los planificadores urbanos y los que llevan a cabo las políticas entienden, construyen y experimentan el contexto urbano. Sin embargo, existe una consecuencia negativa en la defensa de esta 'cercanía', y es el riesgo de 'volverse nativo' (Holloway (1997: 79; énfasis en el original) se refiere a esta posibilidad al señalar que los investigadores "se sumergen en la *cultura* que investigan y se vuelven parte de ella". Los investigadores pierden sus identidades originales al adoptar los valores y perspectivas de los participantes (Bryman, 1999; Holloway, 1997).

Esta investigación se propone ser analizada con una clara orientación política en conformidad con la tesis de Finch (1999) en la que argumenta que a pesar de la creciente utilización de métodos cualitativos en las investigaciones de las ciencias sociales, los investigadores no han tratado de generar trabajo cualitativo con una clara orientación política directa. Finch (1990: 180) sostiene que, en contraste con la experiencia en investigación de análisis con técnicas cuantitativas, hay una gran dificultad en investigación cualitativa orientada a la aplicación política porque "el uso directo de investigación para propósitos políticos favorece la noción no problemática de 'hechos' objetivos y un modelo del investigador como un técnico que produce esos hechos pero que no ha tomado parte en las decisiones de su interpretación y uso". Del mismo modo, "las técnicas cualitativas no se prestan a la separación de los 'hechos' de las opiniones de los 'investigadores' (Finch, 1999: 180). Sin embargo, Finch (1999) afirma que el desarrollo de un trabajo cualitativo orientado hacia la política es definitivamente posible y aconsejable.

VI.3. ENFOQUE METODOLÓGICO: ESTUDIO DE CASO

Esta sección tiene varios objetivos. En un primer lugar, explorará los fundamentos teóricos del estudio de caso en general de tal manera que se sentarán las bases para la decisión de la tipología que se utilizará en esta investigación.

Las dos etapas posteriores intentarán, en primer lugar, explorar la legitimidad y el valor del estudio de caso en el contexto particular de los estudios urbanos ya que la literatura nos demuestra que la investigación relacionada con el medio ambiente urbano ha sido extensivamente estudiada a través del uso de este método como enfoque metodológico. En segundo lugar, se justificará la elección de la categoría del estudio de caso presentando las

razones de la selección de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su contexto de espacios verdes como objeto de estudio en la presente investigación.

VI.3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso tiene como objetivo la investigación de una hipótesis o cuestión explorada dentro de un marco contextual a través del uso de fuentes diversas. En esta memoria, el estudio de caso será considerado como un enfoque o un tipo determinado del diseño del método cualitativo, de acuerdo a la tesis de Creswell (2013). Sin embargo, es necesario añadir que algunos autores, como Stake (2005: 443) no están de acuerdo con esta concepción y abogan por el estudio de caso no como “una metodología sino como una elección de qué es lo que se va a estudiar”.

Los estudios de caso como métodos de investigación “contribuyen a nuestro conocimiento del fenómeno individual, de grupo, organizacional, social, político” (Yin, 2009: 4). El estudio de caso es una herramienta muy valiosa para analizar un fenómeno complejo ya que “investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto en la vida real” (Yin, 2009: 18).

Stake (1995) distingue entre tres tipos diferentes de estudios de caso: *instrumental*, *intrínseco* y *colectivo*. Éstos no tienen por qué ser utilizados de forma separada o “compartmentalizada”, sino que en muchos casos los investigadores lo hacen de forma conjunta, ya que es frecuente que éstos no puedan decidir entre una u otra categoría (Stake, 1995).

Un estudio de caso *instrumental* se fundamenta en la generalización de los resultados obtenidos. Éste pretende que la investigación de un fenómeno particular pueda ser la base para el conocimiento de otro más amplio y construir a partir de la investigación una teoría. Los casos instrumentales identifican patrones con el propósito de realizar comparaciones con otros casos. Cuando la investigación tiene el objetivo de explorar múltiples estudios de caso instrumentales, Stake (1995) la categoriza como estudio de caso *colectivo*.

Por otro lado, el estudio de caso *intrínseco* es una herramienta que permite al investigador estudiar, investigar un fenómeno o un contexto de forma profunda debido a su singularidad o a su naturaleza única. Es el caso en sí mismo el que es objeto de interés

debido a su particularidad intrínseca. Este estudio no pretende llevar a cabo generalizaciones para construir teorías o transferir los resultados a otros contextos sino que la finalidad es el conocimiento, lo más amplio posible, del mismo. Los estudios de caso intrínsecos son análogos a los descriptivos tal y como los categoriza Yin (2009)⁴⁴. Tanto Yin como Stake acometen el estudio de los estudios de caso desde el constructivismo, el cual afirma que la realidad es relativa y depende de la perspectiva de cada uno (Baxter y Jack, 2008).

Para el propósito de esta investigación el estudio de caso considerado el más adecuado ha sido el intrínseco/descriptivo. La hipótesis de trabajo pretende conocer si en el contexto de las iniciativas y programas de espacios verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz contribuyen a la sostenibilidad local y a la justicia ambiental, así como las percepciones que los diferentes agentes sociales de la ciudad tienen sobre esta misma hipótesis.

Esta investigación intentará conseguir un conocimiento lo más profundo posible del contexto para poder llevar la a cabo una orientación de política pública clara en el mismo. No se pretende generalizar o transferir este análisis a otros contextos, en este caso a otros municipios, sino que el propósito es conseguir resultados que nos ayuden a construir recomendaciones de política pública en materia de espacios verdes en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Esto no quiere decir que, una vez analizados los resultados, éstos puedan tener implicaciones en otros contextos, como frecuentemente ocurre (Stake, 2005) aunque la generalización no sea el objetivo. La Figura 1 muestra el diseño del método elegido de una forma más visual.

El uso del estudio de caso como método metodológico es una de las técnicas más desafiantes en el estudio de las ciencias sociales en general, y en el estudio de los medio ambientes urbanos en particular, debido a cuestiones de validez y generalización. No obstante, se considera que las ventajas de utilizar el enfoque de estudio de caso en los estudios urbanos superan sus inconvenientes.

Muir (2008), a través de un análisis a fondo de las ventajas e inconvenientes del uso de los estudios de caso como los medios para facilitar la comprensión del medio ambiente urbano, identifica seis beneficios y dos inconvenientes.

⁴⁴ Este autor nos habla de tres tipos diferentes: exploratorios, explicativos y descriptivos.

Figura 1. Diseño del método

Fuente: Elaboración propia

Muir (2008) comienza explicando el enfoque espacial, tanto implícito como explícito, característico de los estudios urbanos. Esta autora señala la importancia del factor espacial en el contexto del medio ambiente urbano, y como, en este sentido, el diseño de estudio de caso ofrece un marco ideal para investigaciones en profundidad (Muir, 2008: 107). El enfoque espacial es esencial en la presente investigación, ya que el estudio de caso se basará en un área geográfica, una ciudad, Vitoria-Gasteiz, y más particularmente en sus espacios verdes.

Muir (2008: 107) también destaca la importancia del contexto en el estudio de las áreas urbanas porque aquellos valores que han sido “moldeados por la historia, las políticas y la cultura pueden ser complejos y disputados”. El investigador, por tanto, debe “buscar los detalles de la interacción dentro de sus contextos [caso único]” (Stake, 1995: xi) a través de la utilización de estudios de caso.

La importancia del contexto en esta tesis es fundamental. Vitoria-Gasteiz ha sido considerada en la vanguardia del compromiso por el fomento de un desarrollo sostenible urbano. Ha sido también públicamente reconocida por la ciudad su intención de incorporar

consideraciones de justicia social en los programas e iniciativas de sostenibilidad de la ciudad. Este interés parece ser particularmente robusto en la el área dedicado a la promoción, decisión política e implementación del espacio público urbano.

La flexibilidad es la tercera ventaja identificada por Muir (2008: 107) para la elección del estudio de caso en la investigación en los estudios urbanos ya que éste se adapta a su diversidad y permite “hacer cambios en respuesta a eventos no anticipados según progresa el estudio”.

Los estudios urbanos también están caracterizados por ser multifacéticos y complejos. Son multifacéticos debido a un reciente “alejamiento de las estructuras oficiales de gobierno local hacia un rango diverso de agencias públicas, privadas y voluntarias” (Manzi y Jacobs, 2008: 29). Estos autores nos transmiten que el investigador tiene que tener en cuenta no solo las relaciones informales sino también las institucionales, así como el papel que juegan una gran variedad de actores y sus interacciones en las estructuras de asociación (Manzi y Jacobs, 2008: 29). El investigador, por tanto, tiene un objetivo doble: por un lado, debe considerar la experiencia de los [diversos] actores que forman parte del proceso de planificación; por otro lado, debe explorar las posibles interacciones que puedan tener lugar entre ellos.

De acuerdo con este argumento, Muir (2008: 107) también destaca la experiencia de múltiples perspectivas, lo que sería su cuarto beneficio, en el uso de los estudios de caso en contextos urbanos ya que, en sus palabras, “sería inusual, y cuestionable, si no hubiera alguna diferencia de opinión entre tan amplia gama de participantes. El enfoque del investigador del estudio de caso en un área pequeña, [...], permite que estas opiniones puedan ser tenidas en cuenta”.

En este sentido, como el medio ambiente urbana se caracteriza por ser multifacético, Muir (2008) también identifica como una ventaja la fortaleza de los estudios de caso al permitir métodos de investigación diversos y variados que consiguen que las diferentes perspectivas encontradas en el contexto urbano puedan ser tomadas en consideración. Yin (2009: 115-116; énfasis en el original) destaca las ventajas de utilizar múltiples fuentes de evidencia porque “permiten a un investigador abordar un extenso rango de cuestiones históricas y de comportamiento” y admiten “el desarrollo de *líneas convergentes de investigación*”. De este modo, si los resultados o conclusiones de los estudios de caso están basados en diferentes fuentes de información, existe una mayor probabilidad de que éstos sean más convincentes y precisos (Yin, 2009). El uso de múltiples

métodos y fuentes se traduce en la obtención de grandes cantidades información, lo que Muir (2008: 108) no lo considera un “beneficio absoluto” ya que esta abundancia de información, que por un lado proporciona material para teorizar, puede generar grandes desafíos a la hora de manifestar conclusiones.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz este es precisamente el caso. Existe un amplio rango de agentes, tanto del ámbito público y privado, como desde las estructuras formales e informales, que participan en la decisión e implementación de aquellas políticas que se refieren a las cuestiones de sostenibilidad, y particularmente en la gestión del espacio verde. Es la intención de esta investigación dar voz a esta diversidad de actores involucrados y recibir la información más precisa y completa desde estas diferentes perspectivas. Esta característica diversidad de información y su riqueza permitirá al investigador crear la imagen más adecuada del medio ambiente urbano investigado.

Generalmente, se reconocen dos inconvenientes en la elección del estudio de caso como método de investigación: generalización y validez que serán analizados en un apartado posterior dedicado a los criterios de calidad tenidos en cuenta en esta investigación.

VI.3.2. LA ELECCIÓN DE VITORIA-GASTEIZ COMO CASO

Como punto de partida es importante reconocer las razones por las que se ha elegido un área urbana, particularmente Vitoria-Gasteiz, como estudio de caso para esta investigación.

Como se ha analizado meticulosamente en los capítulos previos de esta tesis, se ha reconocido que tanto el concepto de desarrollo sostenible como el de justicia ambiental se intentan alcanzar desde una perspectiva local. En el caso particular del estudio de un sistema de espacios verdes en un área determinada, esta tesis es consistente con la de Fairburn y Smith (2008: 98). Estos autores consideran que el nivel local, o el nivel urbano, es el mejor enfoque geográfico en una análisis de los espacios verdes. Fairburn y Smith (2008) señalan 3 razones fundamentales:

- * En primer lugar, las autoridades locales tienden a tener los mejores conjuntos de datos disponibles.

- * También éstas, desde su autoridad, son responsables de elaborar los estándares de espacios verdes.
- * Y por último, las autoridades locales tienen muchas formas de influenciar la prestación y el uso del espacio verde.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz ha sido seleccionada como estudio de caso para esta tesis debido a su compromiso público en el fomento de los principios señalados en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, como el medio principal para la implementación de los programas de desarrollo sostenible a nivel local. En 1995, Vitoria-Gasteiz firmó los compromisos de Aalborg e inmediatamente después, los principios y directrices de la Agenda 21 fueron adoptados por la ciudad. De forma similar, Vitoria-Gasteiz ha sido galardonada con múltiples premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por su sobresaliente logro en la búsqueda de la sostenibilidad urbana, quizás el más importante de todos ellos es el la capitalidad verde europea que ostentó a lo largo del año 2012.

Vitoria-Gasteiz es considerada un modelo de calidad de desarrollo urbano. En la ciudad prevalecen los criterios de fomento de calidad de vida, la cohesión social, las políticas de vivienda asequible, el respeto por el medio ambiente, la accesibilidad, la política de espacios verdes, la conservación y restauración del patrimonio, así como los programas de integración y participación social.

En el contexto específico de los espacios verdes, Vitoria-Gasteiz es la ciudad con el ratio más alto de áreas urbanas verdes por persona en España (BCN Ecología, 2010). Este ratio sobrepasa con creces el que la Organización Mundial por la Salud recomienda, de 10 a 15 m² de espacio urbano verde por persona. En el Capítulo VII se explorará con mayor profundidad a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, su compromiso con la sostenibilidad y, en especial, su apuesta por una infraestructura de espacios verdes de calidad.

VI.4. DECISIONES MUESTRALES

Las decisiones muestrales en los estudios cuantitativos son consideradas cruciales para el éxito de la investigación. Sin embargo, Onwuegbuzie y Leech (2007) consideran que en los estudios cualitativos estas decisiones no han tenido la misma trascendencia. Estos autores afirman que las decisiones muestrales deben ser consideradas en todos los

estudios cualitativos aunque especifican que es en aquellos que tienen como objetivo del estudio la generalización, donde el diseño muestral debe ser esencial (Onwuegbuzie y Leech, 2007). Tal y como se ha avanzado anteriormente, esta investigación no pretende generalizar los resultados a otros casos por lo que una transferibilidad limitada no afectaría al objetivo del mismo. Esto no quiere decir que las decisiones muestrales no sean significativas, ya que éstas deben ser seleccionadas de acuerdo a su idoneidad para la consecución del objetivo u objetivos del estudio.

VI.4.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Como no es objeto de este estudio la generalización de los resultados, se ha escogido como técnica de muestreo la *no probabilística* ya que al no cumplir unas pautas estadísticas, no es posible medir el error de estimación, y ello dificulta la inferencia de datos. Esta técnica es muy común en los estudios cualitativos y se caracteriza por ser el investigador quien utiliza su propio criterio para seleccionar la muestra del estudio, así como los participantes que van a ser escogidos, de acuerdo a unos razonamientos preestablecidos (Saumure y Given, 2008).

Sin embargo, al dejar la decisión exclusivamente en el criterio del investigador, el muestreo no probabilístico puede proporcionar una realidad sesgada. Es por tanto, importante minimizar este sesgo (Saumure y Given, 2008).

Existen diferentes métodos de muestreo no probabilístico: *de conveniencia*, *de cuotas*, *intencional* y *bola de nieve*. En muchos casos, estos métodos se utilizan de manera conjunta. En esta investigación se han utilizado el muestreo de conveniencia, intencional y de cuotas. También es cierto que el muestreo bola de nieve ha tenido cierta presencia en el estudio aunque en mucha menor medida; se podría decir que su utilización ha sido prácticamente anecdótica. Pero ¿en qué se caracterizan estos métodos?

En el muestreo de *conveniencia*, los participantes son escogidos porque son accesibles para el investigador, y su reclutamiento para formar parte de la investigación es, por tanto, mucho más sencillo. El muestreo *intencional* se fundamenta en la selección de los participantes de acuerdo a unos criterios que han sido previamente determinados por el investigador al considerarlos relevantes para la investigación. Por último, en el muestreo por

cuotas se deciden unas cuotas de participantes que satisfacen las condiciones que el investigador considera más representativas y adecuadas para el objetivo del estudio.

En esta investigación, la selección de la muestra se ha fundamentado en 3 tipologías de actores involucrados en la ciudad como representantes políticos, representantes técnicos y agentes sociales. Todas estas tipologías han sido seleccionadas por su trabajo en cuestiones relacionadas con los espacios verdes urbanos y, se ha creído, desde el punto de vista del investigador, que ha sido posible para ellos “toparse”, tanto de manera accidental como voluntaria, con el término justicia ambiental en el transcurso de sus actividades. Por lo tanto, se asume que, a través de sus percepciones, los participantes seleccionados pueden dar respuestas informadas a las preguntas planteadas.

VI.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA

En los estudios cualitativos, donde el objetivo principal es conocer en profundidad un fenómeno específico, el tamaño de la muestra es generalmente pequeño (Morgan, 2008; Ritchie *et al.*, 2003). Patton (1990: 185) señala que:

The validity, meaningfulness, and insights generated from qualitative inquiry have more to do with the information-richness of the cases selected and the observational/analytical capabilities of the researcher than with sample size.

Ritchie *et al.* (2003) nos ofrecen tres razones que determinan el tamaño muestral de un estudio cualitativo:

[1] No es necesario que la muestra sea lo suficientemente grande o estadísticamente significativa ya que el fin de la investigación cualitativa no pretende inferir los resultados;

[2] La información recogida en los estudios cualitativos es muy detallada lo que requiere un trabajo de recogida de datos y análisis muy intenso que ocupa mucho tiempo y sería, por lo tanto, inmanejable realizar este proceso en un gran número de entrevistas u otros métodos elegidos;

[3] En tercer lugar, estos autores señalan que la principal razón de la utilización de muestras pequeñas en los estudios cualitativos es el concepto de “saturación”.

La concepción de saturación⁴⁵ se fundamenta en la noción de que a partir de un punto determinado, cualquier información adicional que se recoge no aporta nuevos datos a la investigación. La saturación o redundancia es el criterio generalmente aceptado para la justificación de la selección del tamaño muestral en los estudios cualitativo ya que es “entonces cuando el conjunto de nuestra información adquiere la característica de *objetiva*” (Zapata Barrero y Sánchez Montijano, 2011: 78; énfasis en el original).

De acuerdo con Onwuegbuzie y Leech (2007), si el tamaño de la muestra es demasiado pequeño podemos incurrir en dificultades para conseguir saturación; del mismo modo, una muestra excesiva dificultaría llevar a cabo un análisis en profundidad.

Sin embargo, la literatura no ha sido capaz de ofrecer una descripción sobre cómo se puede determinar la saturación, ni tampoco proponer unas directrices prácticas que nos permitan estimar el tamaño muestral en la recogida de datos a través de entrevistas⁴⁶ (Guest *et al.*, 2006: 60). Tan solo unos pocos estudios lo han intentado, aunque éstos no han presentado argumentos empíricos que sustenten sus conclusiones (Mason, 2010). Tanto Guest *et al.* (2006) como Mason (2010) recogen en sus análisis estos ejemplos y ambos coinciden en citar dos estudios en los que se estima en qué punto es probable que ocurra la saturación cuando hablamos de un estudio de investigación:

- * Morse (1994) recomienda al menos 6 participantes.
- * Creswell (1998)⁴⁷ indica que el tamaño muestral debe estar entre 5 y 25 participantes.

Tal y como se ha discutido en esta sección, la literatura coincide en afirmar que no existen reglas que determinen el tamaño muestral en los estudios cualitativos. De acuerdo a Patton (1990: 184), este tamaño depende de varios criterios: qué se quiere investigar; el propósito de la investigación; qué información cumplirá con criterios de validez; y qué se puede hacer con la base de tiempo y recursos disponibles. Kvale (1996: 103) se decanta por el criterio de “calidad versus cantidad” que prioriza la calidad sobre la cantidad, en contraste con el supuesto de que a mayor número de entrevistas, más científica será nuestra investigación.

⁴⁵ Glaser y Strauss (1967) fueron los primeros en poner de relieve este concepto.

⁴⁶ Las entrevistas en profundidad son el método elegido para la recogida de datos en la presente investigación.

⁴⁷ Citado en Guest *et al.* (2006: 61).

Los participantes de la presente investigación han sido 14. Las razones para la elección de este número de participantes han sido:

- * Este tamaño muestral es consistente con las recomendaciones realizadas en la literatura especializada, discutida en profundidad, ya que se sitúa entre 5-6 y 25 participantes.
- * Cuestión de saturación.

VI.4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA

Lo que se pretende en este apartado es realizar un análisis descriptivo de la muestra objeto de esta investigación. Particularmente, se indican las distribuciones por tipología. La Tabla 3 muestra las características tipológicas de los participantes.

Tabla 3. Características tipológicas de los participantes

Entrevista número	Tipología
1	Representante Político
2	Representante Político
3	Representante Técnico
4	Representante Técnico
5	Representante Político
6	Agente Social
7	Representante Político
8	Representante Técnico
9	Agente Social
10	Agente Social
11	Representante Político
12	Agente Social
13	Representante Técnico
14	Representante Político

Fuente: elaboración propia

VI.5. RECOGIDA DE DATOS: LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Los métodos de recogida de datos utilizados en este proyecto de investigación han sido: el análisis de contenido a través de documentos estratégicos y entrevistas personales basadas en un guion.

La recogida de información se ha llevado a cabo a través de un método combinado. Por un lado, el estudio cuidadoso de los contenidos encontrados en documentos estratégicos como son las políticas locales, los informes gubernamentales disponibles, reportajes periodísticos, y crónicas realizadas por organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, a través de entrevistas personales a los representantes políticos, representantes técnicos y agentes sociales de la ciudad.

Las razones por las que se ha seleccionado la entrevista en profundidad como método de recopilación de información son la transparencia y el rigor científico. El objetivo de demandar respuestas abiertas a los entrevistados permite al investigador “entender el mundo como lo hacen los entrevistados” y “capturar los puntos de vista de otras personas sin predeterminar éstos a través de la selección previa de las categorías del cuestionario” (Patton, 1990: 24). Las entrevistas en profundidad se caracterizan por su versatilidad, por lo que son actualmente el método más utilizado en las investigaciones cualitativas (Cook, 2008).

No obstante, las entrevistas cualitativas tienen sus propios inconvenientes y limitaciones. La naturaleza subjetiva que caracteriza a las entrevistas cualitativas puede convertirse en un problema, ya que es el entrevistador quien decide qué contenidos van a someterse a análisis. Patton (1990: 26) reconoce esta limitación al referirse a la cantidad de información que el investigador puede captar de lo que dice la gente, ya que “las notas del observador se convierten en los ojos, los oídos y los sentidos perceptuales para el lector”.

Por otro lado, aunque generalmente no se dedica una gran cantidad de tiempo a la realización de las entrevistas en profundidad, su transcripción y análisis sí que requieren mucho tiempo (Kvale, 1996). Este factor no se ajusta a las limitaciones de tiempo que, por lo general, caracterizan a todas las investigaciones doctorales.

Es también muy importante añadir la falta de experiencia del entrevistador/investigador a la hora de realizar las entrevistas. Es necesaria una gran pericia para llevar a cabo las entrevistas cualitativas (Kvale, 1996), aunque es esta una

característica de la que la mayoría de los investigadores doctorales carecen ya que su formación específica resulta costosa tanto en tiempo como en dinero.

Patton (1990) identifica tres tipologías de entrevistas cualitativas abiertas: *la entrevista conversación informal*, *la entrevista basada en un guion* y *la entrevista estandarizada abierta*. En esta investigación se ha llevado a cabo la entrevista basada en un guion, ya que ésta permite al investigador crear un esquema con aquellas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y al que puede incorporar pequeñas variaciones en la redacción y orden de las preguntas a lo largo del encuentro, permitiéndole cierta flexibilidad. La mayor desventaja que tiene este tipo de entrevista es que el entrevistador (en el presente estudio, la propia investigadora) requiere determinada pericia y experiencia para poder guiar o reconducir el encuentro si pretende cubrir todas las cuestiones del guion (Patton, 1990).

VI.5.1. GUION DE LA ENTREVISTA

En palabras de Valles (1999: 203) “[E]l guion de la entrevista es a las entrevistas en profundidad lo que el cuestionario a las entrevistas de encuestas”. Si bien se han consultado varios documentos sobre la metodología más adecuada a utilizar en la elaboración de los guion es de las entrevistas en general, particularmente, el guion de esta investigación ha sido elaborado después de una profunda revisión bibliográfica y de acuerdo a los propósitos específicos del estudio.

El guion utilizado en las 14 entrevistas realizadas se incluye en el Anexo 2 y, tal y como se ha avanzado anteriormente, todas las preguntas son abiertas. Este guion ha pretendido ir “centrando” la cuestión a tratar a lo largo de la entrevista, comenzando con preguntas de carácter más general para ir avanzando hacia cuestiones mucho más particulares y específicas.

VI.5.2. CONTACTO Y PRESENTACIÓN

El primer contacto con los participantes en las entrevistas fue realizado a través del envío de un correo electrónico donde la investigadora se presentaba como doctoranda del Programa de Doctorado en Análisis y Evaluación de los Procesos Políticos y Sociales

perteneciente al Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid.

En ese correo electrónico se hacía una breve referencia al propósito de la tesis doctoral en curso y las razones por las que creía necesaria la participación del agente en cuestión en el estudio.

Se les informaba también de la intención de grabar la entrevista, al mismo tiempo que se les ofrecía la oportunidad de declinar esta opción y buscar alternativas a este formato. Por descontado, se les aseguraba en el mensaje que la información recogida sería tratada con el máximo cuidado y seriedad; y en el caso de que no quisieran utilizar su nombre y cargo en la tesis doctoral, se les garantizaba el total anonimato y confidencialidad⁴⁸.

VI.5.3. REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Las entrevistas fueron realizadas en el lugar y momento elegidos por los participantes. El periodo de tiempo en el que se realizaron las entrevistas transcurrió entre el 28/10/2011 y el 20/01/2012. Las entrevistas tuvieron una duración máxima de 90 minutos siendo la media de unos 60 minutos.

VI.5.4. REGISTRO Y TRANSCRIPCIÓN DE LOS DATOS

La grabación de las entrevistas se realizó mediante un reproductor y grabadora de sonido mp3 sin posibilidad de grabación de imágenes. La posibilidad de tomar notas exhaustivas durante la entrevista se rechazó por ser un proceso muy largo y que hubiera interrumpido el flujo de la conversación en numerosas ocasiones. En todo caso, sí se tomaron notas sobre ciertos puntos que el entrevistador consideró de interés y a los que pretendía volver durante el transcurso de la entrevista.

El proceso de transcripción de las entrevistas supone el registro de las conversaciones en un formato de texto (transcripciones) que será la principal fuente de

⁴⁸ El correo enviado a los participantes se muestra en el Anexo 3.

datos para el análisis posterior. Es, por lo tanto, un proceso de suma importancia y al que es necesario aplicar criterios de validez y rigor (Poland, 2008: 885):

Transcription is not just a phase of data preparation and data management; it is interpretive work that occurs early in the analysis phase of most qualitative research projects. As such, transcription calls for the same attention to reflexivity and rigor as other components of data analysis – perhaps more so, insofar as transcriptions involves the production of the raw material upon which subsequent analytic work is based.

Esta naturaleza interpretativa característica de las transcripciones puede ser minimizada creando unas convenciones de transcripción (Drew, 1995)⁴⁹ donde elementos como el ritmo, el tono o los sentimientos se reflejen en el texto de tal manera que no estén “*lost in translation*” (Poland, 2008: 885). Sin embargo, Flick (2007: 189) nos alerta de que en las entrevistas de estudios sociológicos, “estándares exagerados de exactitud en la transcripción únicamente están justificados en casos excepcionales” ya que “parece más razonable transcribir solo tanto y solo con tanta exactitud como lo requiera la pregunta de la investigación” (Strauss, 1987)⁵⁰

En esta investigación, la transcripción de las entrevistas ha seguido la tesis de Flick y se ha optado por no caer en una exagerada exactitud. Sí que se han seguido, en cualquier caso, unos criterios de convención de transcripción muy básicos. Lo que se pretende en esta investigación es, por tanto, no caer en la trampa y subestimar la etapa de la transcripción cuya significancia se ha puesto de relieve en este apartado.

VI.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El factor más importante del análisis cualitativo es que los datos están formados por textos, por palabras y no por números como sí ocurre en los análisis cuantitativos (Schutt, 2012) por lo que es necesario formular métodos determinados para el análisis de los mismos. Uno de estos métodos para analizar mensajes escritos, verbales o visuales es el

⁴⁹ Citado en Flick (2007: 189).

⁵⁰ Citado en Flick (2007: 189).

‘análisis de contenido’ cuyo principal propósito es el conocimiento del fenómeno objeto de estudio (Downe-Wamboldt, 1992)⁵¹ de forma objetiva y sistemática (Sandelowski, 1995)⁵²

En esta investigación se ha utilizado como método analítico el análisis de contenido convencional (Hsieh y Shannon, 2005), ya que su propósito es describir un fenómeno, en este caso el de las iniciativas y programas de espacios verdes en Vitoria-Gasteiz, y si éstos integran conceptualizaciones relacionadas de desarrollo sostenible y justicia ambiental.

El uso del contenido de análisis convencional es el más adecuado cuando las teorías o la literatura relativas al fenómeno objeto de estudio no existen, son limitadas o están fragmentadas, como ocurre en la presente investigación, de manera que el investigador no usa categorías preconcebidas sino que genera nuevas categorías de los datos obtenidos (Elo y Kyngäs, 2007; Hsieh y Shannon, 2005). A esta aproximación se le conoce como inductiva.

Todo proceso de análisis de contenido ha de seguir un procedimiento secuencial. En este estudio, nos hemos guiado por el trabajo de Elo y Kyngäs (2007), Hsieh y Shannon (2005) y Graneheim y Lundman (2004) quienes muestran este desarrollo de forma clara, integral y desde una gran riqueza de fuentes en sus respectivos trabajos. Las fases, a grandes rasgos, que se han llevado a cabo son las siguientes:

- * El primer paso en el proceso debe ser la selección de la unidad de análisis del estudio: las entrevistas realizadas.
- * La siguiente aproximación al análisis de los datos se ha realizado con una lectura repetida de los textos transcritos para conseguir sumergirse completamente en los mismos y familiarizarse con ellos⁵³.
- * Durante estas lecturas el investigador ha recogido todas sus impresiones mediante notas al margen y el uso de colores en el propio texto de acuerdo a la finalidad del estudio y se produce, por tanto, lo que Elo y Kyngäs (2007) denominan ‘codificación abierta’ y se considera a esta etapa como de categorización inicial.

⁵¹ Citado en Hsieh y Shannon (2005: 1278)

⁵² Citado en Elo y Kyngäs (2007: 108).

⁵³ En este punto, es necesario decidir si también se analiza el contenido “latente”, es decir, aquellos elementos no verbales como son los silencios, las risas, los énfasis, la postura, etc. En esta investigación tan solo se tendrá en cuenta como contenido latente los énfasis de los participantes.

- * Seguidamente, al ser el método elegido el inductivo, será el investigador quien, desde esta codificación inicial, formula las categorías y subcategorías, así como que englobar en cada una de ellas.

Como se ha indicado, la interpretación de los datos se realizará a través de un sistema de categorías, que nos ayudará a “de-construir la realidad para conocer sus distintas relaciones/interacciones” (Zapata Barrero y Sánchez Montijano, 2011: 172). Como indican estos autores: “supone identificar los elementos diferenciadores de las bases de información que obtenemos y establecer clasificaciones (las propias categorías) de manera que podamos organizar toda la información que tenemos. Pero esta tarea de categorizar no es neutra. Siempre es dependiente de la pregunta de investigación” (Zapata Barrero y Sánchez Montijano, 2011: 172).

VI.7. CRITERIOS DE CALIDAD

La calidad de un estudio se refiere a su “rigor científico, fiabilidad, veracidad, confiabilidad, plausibilidad, adecuación metodológica, credibilidad, congruencia, etc.” aunque “el término más utilizado sea el de ‘validez’” (Sandín Esteban, 2000: 225). En palabras de esta misma autora, una investigación que no es válida, no se puede considerar verdadera ni tampoco puede tener credibilidad (Sandín Esteban, 2000: 225).

La preocupación por la cuestión de la validez en el contexto de los estudios de caso se refiere a la precisión de las observaciones realizadas o de la información obtenida por los investigadores, basadas en la información disponible. La investigación cualitativa presenta un elemento ‘interpretativo’ ya que es el propio investigador quien filtra, interpreta y representa esta información dotando de gran complejidad al proceso “ya que podemos transformar el mundo en una serie de representaciones personales y sesgadas” (Moral Santaella, 2006: 148-149, énfasis en el original).

Existen múltiples conceptualizaciones de validez que difieren de forma drástica, las dos corrientes más opuestas abogan, una, por no realizar ningún tipo de criterio de validez

en la investigación ya que iría en contra de la propia esencia de una investigación interpretativa (Wolcott, 1990)⁵⁴.

Hammersley (1992: 78-79) por ejemplo, recoge 3 paradigmas diversos sobre la forma en la que los criterios de calidad se aplican al método cualitativo⁵⁵. La primera postura se inclina por no distinguir al método cualitativo del cuantitativo y, por lo tanto, no debe ser asociado con una filosofía metodológica distintiva. Por el contrario, un segundo punto de vista, refiere al método cualitativo como un paradigma alternativo al método cuantitativo por lo que los criterios de calidad aplicados deben ser los más adecuados para éste. Una última posición defendería la incompatibilidad que supone la utilización de criterios de calidad en los estudios cualitativos debido a la propia naturaleza de los mismos.

Este apartado detallará los pasos seguidos en esta tesis doctoral para garantizar su 'confiabilidad' y así demostrar rigor (en el proceso) y relevancia (en el resultado final) (Finlay, 2006) y, por lo tanto, demostrar su 'validez'. Lo que se pretende es llevar a cabo una auditoria de calidad para asegurarnos de que los resultados de la presente investigación sean aceptados y susceptibles de revisión (Lincoln y Guba, 1985).

En la presente investigación optaremos por la segunda posición argumentada por Hammersley, si bien la complementaremos con la implementación de unos criterios de calidad alternativos, aunque lo importante, como dice Valles (1999: 103), es que "tanto unos como otros [3 posiciones anteriores] parecen afanarse en la mejora de los estándares de calidad de la investigación social".

Tomaremos como referencia para realizar la auditoria de calidad de esta investigación los criterios desarrollados por Lincoln y Guba (1985) para los estudios cualitativos y que se derivan del paradigma positivista⁵⁶: credibilidad, transferibilidad, dependencia y posibilidad de ser confirmados. Estos criterios tienen su correspondencia en la investigación cuantitativa: validez externa, validez interna, fiabilidad y objetividad, respectivamente (Tabla 4)

⁵⁴ Citado en Creswell (2007: 205)

⁵⁵ Aunque Hammersley se refiere específicamente a la etnografía en su obra, ésta recoge la amplitud de la metodología cualitativa.

⁵⁶ Predominantemente, el paradigma positivista favorece a metodologías cuantitativas. Sin embargo, el trabajo de Guba y Lincoln ha sido el referente, durante mucho tiempo, para la valoración de los estudios interpretativos (cualitativos) (Sandín Esteban, 2000).

Tabla 4. Criterios de calidad

Criterios Cualitativos	Criterios Cuantitativos
Credibilidad	Validez externa
Transferibilidad	Validez interna
Dependencia	Fiabilidad
Confirmabilidad	Objetividad

Fuente: Lincoln y Guba (1985)

VI.7.1. CREDIBILIDAD

La credibilidad es uno de los criterios de calidad más importantes ya que pretende determinar la congruencia de los resultados con la realidad, es decir, que todos los datos derivados del estudio sean creíbles. Las estrategias empleadas en este estudio para conseguir la credibilidad del mismo se basan mayoritariamente en las propuestas por Shenton (2004: 64-69) y Valles (1999: 104):

- Descripción exhaustiva del fenómeno investigado.
- Relación de datos: entrevistas y revisión de documentos.
- Diversidad de participantes, ya que la selección de participantes de diferentes organizaciones da lugar a una mayor diversidad de percepciones y por lo tanto reduce los efectos que puedan producir las percepciones únicas de participantes de una misma organización.
- Registro de las entrevistas mediante la transcripción de las mismas con el fin de poder utilizar su cita literal en la discusión de los resultados de la investigación.
- Acopio de documentación visual (fuente principal el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
- Medidas empleadas para asegurar la honestidad de los participantes en su contribución a la investigación. Para ello se ha realizado:
 - A todos los participantes se les dio la oportunidad de rechazar la oferta de participación en el proyecto. De esta manera, nos aseguramos de que los participantes están convencidos de su participación y que se disponen a hacerlo de forma libre.

- La independencia del investigador se indica en la parte introductoria del correo electrónico enviado a los participantes para solicitar su participación.
- También en este correo electrónico se les ofrece la posibilidad de retirarse del proyecto cuando lo soliciten.

VI.7.2. TRANSFERIBILIDAD

Una crítica muy común de la metodología basada en el estudio de caso se refiere a su incapacidad para realizar generalizaciones (Erlandson *et al.*, 1993). Yin (2009) señala que la cuestión de la generalización (o validez externa como él lo denomina) de los resultados de un proyecto de investigación a otros casos, es un obstáculo importante para el uso y el valor de esta metodología.

No resulta sencillo, debido a la naturaleza propia de los estudios de caso, generalizar o transferir los resultados obtenidos en la investigación a otros contextos similares ya que, tal y como señalan Erlandson *et al.* (1993) y Shenton (2004), todos y cada una de los estudios están definidos por los contextos específicos en los que se producen. Recae, por lo tanto, en el investigador la responsabilidad de proporcionar una descripción completa del fenómeno que se ha estudiado, de tal manera que permita a los lectores su correcta comprensión y, así éstos puedan determinar si el trabajo puede ser transferible a sus propios contextos (Shenton, 2004: 70).

En esta investigación, la exploración a fondo del compromiso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con la justicia ambiental y la sostenibilidad local será el principal objetivo, y tal y como se ha comentado anteriormente, no persigue la transferibilidad de los resultados. Si bien se ha realizado una descripción detallada de los resultados con el objetivo de permitir a los lectores determinar su aplicabilidad en contextos similares.

VI.7.3. DEPENDENCIA

El criterio de dependencia se refiere a la solidez de los datos aportados por el investigador en su estudio, de tal manera que permita a otros investigadores la réplica del

mismo. Para determinar la consistencia de una investigación es necesario que el investigador aporte información metodológica adecuada y relevante.

Para ello, y tal y como recomienda Shenton (2004: 71-72), en apartados anteriores de este mismo capítulo se facilita información detallada sobre: [1] el diseño metodológico y su implementación a nivel estratégico; [2] el detalle de los pasos seguidos en la recogida de datos; [3] las razones de las decisiones metodológicas tomadas.

VI.7.4. CONFIRMABILIDAD

La confirmabilidad en un proceso cualitativo tiene su correspondencia en los estudios cuantitativos con el criterio de la objetividad. De esta manera, el investigador debe asegurarse de que las interpretaciones que realiza de las palabras de los entrevistados sean consistentes con las percepciones de estos últimos, es decir, que el investigador sea imparcial. Este criterio no niega, sin embargo, que cada investigador aporte su propia perspectiva única al estudio (Jensen, 2008: 112).

El uso de la triangulación es el elemento más recomendado para reducir una perspectiva sesgada por parte del investigador (Shenton, 2004). De nuevo, una descripción lo más detallada posible de cómo se ha recogido los datos y cómo se han analizado es también importante para asegurar la confirmabilidad del estudio (Jensen, 2008: 112).

CAPÍTULO VII

VITORIA-GASTEIZ: ‘EUROPEAN GREEN CAPITAL 2012’

Fascinado hasta entonces por el brillo de otros tantos destinos a su alcance, el viajero descubre un buen día a la vecina de al lado. Una ciudad discreta, sencilla y tímida que de forma inesperada se revela ante sus ojos llena de encanto y magnetismo. ¿Dónde se escondía hasta la fecha? Una pregunta recurrente, y una respuesta fácil: esperaba paciente. Enamorarse resulta inevitable. Le ocurrió a Víctor Hugo; le ocurrió a José Bonaparte, aunque no fue correspondido; le ocurrió a Ken Follet, y de aquel idilio nació un libro; le ocurrió a Wynton Marsalis, y el fruto fue un disco; y a tantos y tantos visitantes antes y después de ellos.

Lonely Planet (2015)

VII.1. EL DESARROLLO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz fue fundada en el siglo XII, concretamente en 1181, por el Rey Sancho VI, también llamado Sancho el Sabio. Fue este monarca quien bautizó la ciudad

con el nombre de Victoria. Anteriormente, desde el siglo VIII, la ciudad era meramente un asentamiento conocido con el nombre de Gasteiz (Villapún Ansótegi, sin fecha).

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se localiza en el norte de España y es la capital administrativa y de gobierno tanto de la provincia de Álava/Araba como de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Vitoria-Gasteiz se puede considerar una ciudad de tamaño medio ya que su población supera los 237.000 habitantes. Si se tiene en cuenta a la municipalidad, esta cifra se incrementa hasta los 243.000 habitantes⁵⁷ (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014). Estas cifras nos indican que el 98% de la población de la municipalidad reside en el núcleo urbano de la ciudad, y únicamente el 2% restante pertenecen a entidades menores pertenecientes al municipio como son los pueblos. La municipalidad de Vitoria-Gasteiz, con un total de 277,28 km², aglomera, además de a la propia ciudad, a 64 núcleos rurales, la mayoría de ellos pequeños (CEA, 2006). La densidad de población es, por lo tanto, de 876,11 personas por km².

Figura 2. Ubicación geográfica de Vitoria-Gasteiz



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Según datos del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz (CEA, 2006), la municipalidad está compuesta por áreas rurales caracterizadas por su gran calidad

⁵⁷ Las cifras exactas de habitantes en el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz es de 237.911 y en la municipalidad de 242.924 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014).

agrícola. Al norte y sur de la misma, la configuración es boscosa; estos bosques cubren un área muy extensa de aproximadamente 6.000 hectáreas, donde predominan especies como el haya, el quejigo y la encina. Este sistema montañoso se compone de los Montes de Vitoria, en el sur, y de la Sierra de Arrato y Badaia en el noreste (CEA, 2006). Los Montes de Vitoria y el bosque de la Isla de la Llanada son actualmente pequeños reductos que sobreviven de un bosque de roble que cubría el lugar en tiempos antiguos (CEA, 2006).

Vitoria-Gasteiz ocupa, geográficamente, un lugar central en la municipalidad y está situada a una altitud bastante alta, prácticamente los 600 metros (CEA, 2006). Justo en los límites de la ciudad, y más allá del Anillo Verde que la circunvala, existe una gran zona agrícola donde se pueden encontrar una miríada de pequeños pueblos rurales, junto con colinas cubiertas con vegetación natural, pequeños ríos y riberas (CEA, 2009).

El río Zadorra delimita la frontera norte de la ciudad en su paso de oeste a este (CEA, 2006). La frontera este de la ciudad está demarcada por los Humedales de Salburua, declarados Humedal de Importancia Internacional por la Convención de Ramsar en 2002 (CEA, 2006). Estos espacios están incluidos en la Red Natura 2000 (CEA, 2006). La ciudad está también prácticamente rodeada por el Anillo Verde, un área verde semi-natural, asimétrica y estrecha (CEA, 2009).

No fue hasta la década de 1950 cuando Vitoria-Gasteiz comenzó a expandirse y se transformó de una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes a la ciudad de medio tamaño que conocemos en la actualidad (CEA, 2006). Esta expansión fue el resultado de un crecimiento importante de la industria metalúrgica y mecánica que atrajo hacia la ciudad a miles de personas, no solo de las zonas rurales de la provincia de Álava/Araba sino también de diferentes regiones de la geografía española (CEA, 2006). De forma paralela, la situación demográfica de la ciudad también se transformó, al incrementarse el número de habitantes significativamente entre 1950 y 1970 (CEA, 2006).

La expansión territorial de la ciudad durante este periodo fue muy importante. El 80% del área total urbanizado en la ciudad en 1975 correspondía con el crecimiento experimentado entre 1950 y 1975 (Villapún Ansótegi, sin fecha). Sin embargo, Vitoria-Gasteiz sufrió otra expansión significativa después de ser designada como la capital administrativa y de gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Villapún Ansótegi, sin fecha). De acuerdo a Villapún Ansótegi (sin fecha), en Vitoria-Gasteiz, esta expansión urbana se llevó a cabo de forma organizada, y, desde 1956, siguiendo una serie de Planes Generales de Ordenación Territorial.

VII.2. EL COMPROMISO DE VITORIA-GASTEIZ CON LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

La ciudad de Vitoria-Gasteiz comenzó su compromiso con el desarrollo sostenible en etapas muy tempranas. Vitoria-Gasteiz fue una de las primeras ciudades en España en firmar la Carta de Aalborg. Lo hizo en 1995, y desde ese momento comenzó a trabajar hacia el fomento y la implementación del desarrollo sostenible a través del documento operativo de la Carta Aalborg, la Agenda Local 21 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015a). La cronología de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de sostenibilidad se indica en la Tabla 5 que se muestra a continuación.

Tabla 5. Cronología de las actuaciones de Vitoria-Gasteiz hacia la sostenibilidad.

1995	*Firma de la Carta de Aalborg *Puesta en marcha de la Agenda 21
1996-1997	*Elaboración del Borrador técnico "Estrategias y acciones hacia la sostenibilidad"
1998	*Aprobación de un sistema de indicadores para la evaluación y comunicación de las condiciones de sostenibilidad de la ciudad/municipio. *Publicación anual de un Boletín que revisa estos indicadores
2002	*1º Plan de Acción Ambiental (2002-2007) *Incorporación a la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (UDALSAREA 21)
2006	*Creación del Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz
2010	*2º Plan de Acción de la Agenda 21. 2010-2014. Sustituye y actualiza el anterior

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015a)

El Informe Brundtland preparó el camino para la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Entre los resultados de la Cumbre el más prominente fue la creación de la Agenda Local 21; una agenda de acción integral que reconoce la importancia que el nivel local tiene en el fomento del desarrollo sostenible.

La Agenda Local 21⁵⁸ se ha convertido en la principal medio para abordar la práctica del desarrollo sostenible al nivel de gobierno local. La Agenda Local 21 ha intentado que las comunidades participen en un cambio de estilo de vida más cercano a la sostenibilidad. Se

⁵⁸ Ver Anexo 4 para leer el Capítulo 28 de la Agenda Local 21.

diferencia de otros instrumentos de gestión medioambiental dedicados a la promoción del desarrollo sostenible porque integra las diferentes dimensiones de este concepto: la dimensión social, económica y medioambiental (Fort, 2006). Es también diferente el rol que la Agenda Local 21 asigna a las ciudades y a las municipalidades en el proceso de desarrollo sostenible global (Fort, 2006). El Capítulo 28 de la Agenda específicamente señala la importancia de los planes de acción de sostenibilidad local y el papel significativo que las autoridades locales juegan en su búsqueda:

Como tantos de los problemas y de las soluciones de que se ocupa el Programa 21 se relacionan con las actividades locales, la participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor determinante para el logro de los objetivos del Programa. Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1993: párrafo 28.1).

Los municipios, como órganos de gestión que se basan en un conocimiento real de los problemas, deberían promover este tipo de iniciativas y proporcionar servicios públicos tan necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Fort, 2006). Fort (2006) también sostiene que, indudablemente, muchos municipios han aceptado esta tarea y que, actualmente, la Agenda Local 21 es el instrumento más extendido y aceptado por las autoridades locales para hacer frente a sus graves problemas medioambientales, bajo el lema: ‘piensa globalmente y actúa localmente’. Este autor afirma que las causas de esta aceptación son cuatro (Fort, 2006): La primera causa reside en el hecho de que las ciudades son uno de los nodos más grandes de insostenibilidad del planeta y actuar sobre ellas es un asunto prioritario. En segundo lugar, es a nivel local donde se pueden tomar las decisiones más viables y participativas. La tercera causa es el incremento en la demanda de calidad ambiental por parte de los ciudadanos. Finalmente, las políticas medioambientales globales son un incentivo para obtener fondos financieros, aunque también suponen un riesgo en caso de no cumplir con los objetivos fijados por los estatutos de dicho fondo.

Entre 1996 y 1997, se elabora el primer Borrador técnico “Estrategias y acciones hacia la sostenibilidad” que fue presentado en la *II Conferencia Europea de Ciudades*

Sostenibles de Lisboa. Este Informe fue el resultado de un trabajo interdisciplinar entre diferentes departamentos municipales⁵⁹ de revisión y análisis de las políticas locales que se estaban llevando a cabo relacionadas con el desarrollo sostenible (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015b). Este trabajo se fue matizando al mismo tiempo que la elaboración de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz fue ganando en precisión, incorporando, por ejemplo, temáticas relacionadas tanto con la dimensión social como económica del desarrollo sostenible que en el Borrador anterior no se habían tenido en cuenta (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 1997).

Sin embargo, solo un año después, en 1998, se acuerda que los aspectos sociales y económicos de la estrategia de sostenibilidad serán incorporados en fases posteriores, centrándose así en 10 áreas de trabajo⁶⁰, puramente medioambientales, a través de elaboración de un sistema de 21 indicadores de sostenibilidad, que fueron ampliados a 35 en 2004 al incorporar⁶¹, ya en esta fase, indicadores sociales y económicos (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015c).

Finalmente, en 2002 se redactó y aprobó el 1º Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 cuyo horizonte temporal era de 5 años, entre 2002 y 2007. Este trabajo se fundamentó en una visión medioambiental de la sostenibilidad, al centrarse exclusivamente en áreas temáticas de competencia del Área de Medio Ambiente (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015d). Ese mismo año, Vitoria-Gasteiz se adhirió a la red Udalsarea 21 iniciada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y la Asociación de Municipios Vascos, para impulsar las Agendas 21 Locales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo, por tanto, que adaptarse a un sistema de indicadores común que trajo consigo la ampliación de los 21 indicadores a 35 en 2004 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015e).

En 2006 se creó el Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz cuyo objetivo era el de “promover e impulsar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el ámbito local. Se plantea como un órgano coordinador de planes y programas de

⁵⁹ Estos departamentos fueron: Ordenación del Territorio y Urbanismo, Salud Ambiental y Consumo, Medio Ambiente, Deportes, Intervención Social, Cooperación al Desarrollo, Aguas Municipales, Gabinete de Comunicación y Centro de Estudios Ambientales.

⁶⁰ Las áreas de trabajo fueron: *contaminación urbana, tráfico y transporte, agua, energía, industria, residuos, urbanismo, naturaleza y biodiversidad, salud y riesgos ambientales e información, educación y participación ciudadana*

⁶¹ Los sistemas de indicadores se muestran en el Anexo 5.

sostenibilidad, así como un agente aglutinador y potenciador de iniciativas y experiencias en distintos campos temáticos” (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015f).

Una vez transcurridos los 5 años de vigencia del Plan de Acción Ambiental (2002-2007) se realizó una evaluación con la finalidad de analizar los resultados de su aplicación. Esta evaluación concluyó que el Plan “había cumplido el objetivo de ordenar, dar coherencia y servir de factor aglutinador y de impulso de las políticas y acciones ambientales” (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010a: 9). Sin embargo, “como principal factor limitante, la evaluación reveló la circunscripción del Plan al ámbito ambiental, factor que impidió abordar aspectos con gran incidencia en el desarrollo sostenible” (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010a: 9).

Es a finales de 2010 cuando se publica el 2º Plan de Acción Local de la Agenda 21 Local, que reemplazará al Plan de Acción Ambiental (2002-2007), y cuyo objetivo es dar “respuesta a través de una serie de acciones a los retos ambientales, sociales y económicos del municipio”, constituyendo así la estrategia y compromiso de la ciudad con la sostenibilidad (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015g). Este Plan está caracterizado por ser integral, ya que recurre a “acciones y actuaciones dirigidas a fomentar y compatibilizar el progreso económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente, todo ello mejorando la calidad de vida de la ciudadanía”, transversal, participativo, operativo y dinámico (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010a: 12).

El Plan está estructurado en 11 líneas estratégicas u objetivos generales (ver Tabla 6), que se desarrollan a través de 47 objetivos operativos, 228 acciones y 304 actuaciones. El marco de referencia de este Plan han sido los Compromisos de Aalborg+10 que establecen las líneas de actuación a seguir a la hora de llevar a cabo la gestión local de las ciudades europeas (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010a: 14) y que se detallan en el Anexo 6.

Tabla 6. Las 11 líneas estratégicas del Plan de Acción Local de Vitoria-Gasteiz

1.	Mejorar el acceso a la información y promover la participación ciudadana en la gestión municipal.
2.	Desarrollar una gestión municipal hacia la sostenibilidad.
3.	Proteger y mejorar los sistemas naturales, la biodiversidad y el paisaje.
4.	Mejorar la calidad ambiental y reducir la contaminación.
5.	Promover activamente formas de consumo y producción más sostenibles.
6.	Incluir criterios de sostenibilidad en el planeamiento, diseño y construcción urbanística.
7.	Reducir el tráfico motorizado en la ciudad, desarrollando el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
8.	Proteger la salud y fomentar hábitos y estilos de vida saludables en la ciudadanía.
9.	Impulsar una economía diversificada, próspera y respetuosa con el medio ambiente.
10.	Promover la inclusión y la cohesión social, garantizando el acceso a servicios básicos
11.	Promover la cooperación internacional para el desarrollo y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente global, en especial sobre el clima

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015g)

La ciudad de Vitoria-Gasteiz, a través de la adhesión a los compromisos de Aalborg+10, se ha comprometido a la promoción del principio de justicia ambiental a través de las políticas locales destinadas a la consecución de la sostenibilidad local, ya que el compromiso número 10 “de lo local a lo global”, en su punto cuarto indica “reducir nuestro impacto en el medio ambiente global, y promover el principio de justicia ambiental”.

El continuo compromiso de Vitoria-Gasteiz con la sostenibilidad urbana se ha reconocido internacionalmente al designarle en 2012 como Capital Verde Europea (*European Green Capital 2012*). Este premio, otorgado por la Comisión Europea, es la forma de reconocer “el importante papel que las autoridades locales juegan en la mejora del medio ambiente, y su nivel de compromiso con progreso genuino (Comisión Europea, 2010) al mismo tiempo que “marca los deseos de una ciudad y su capacidad para resolver los problemas medioambientales con el fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y reducir la contribución que realiza al medio ambiente global (Comisión Europea, 2010).

VII.3. LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN VITORIA-GASTEIZ

La ciudad de Vitoria-Gasteiz siempre se ha constituido como un modelo de desarrollo urbano de gran calidad, incluso antes de que el concepto de desarrollo sostenible saliera a la luz en 1987, ya que criterios como la cohesión social, la habitabilidad, las políticas de espacios verdes, la accesibilidad, así como la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico siempre han sido prioritarios (Villapún Ansótegi, sin fecha). El medio ambiente físico local ha jugado un papel importante para la actual huella ecológica de la

ciudad. Aunque Vitoria-Gasteiz es esencialmente una ciudad compacta, sin zonas aisladas, la gran cantidad de espacios abiertos y zonas verdes hacen posible una densidad moderada.

Esta buena práctica en urbanismo se ha traducido en la creación de una ciudad esencialmente funcional, donde las áreas residenciales han sido específicamente separadas de las áreas industriales (Villapún Ansótegi, sin fecha). De esta manera, el urbanismo de la ciudad ha permitido alcanzar niveles aceptables de calidad en el desarrollo de las viviendas y en sus entornos ecológicos (principalmente espacios verdes), así como en la dotación de servicios (Villapún Ansótegi, sin fecha). Además, la Administración local siempre ha desarrollado programas específicos con el propósito de prevenir problemas de marginalización en las nuevas áreas de expansión que pudieran ocurrir en el futuro (Villapún Ansótegi, sin fecha).

La estrategia de espacios verdes de la ciudad está incluida en la, más extensa, estrategia urbana de la ciudad, los Planes de Acción Urbanos y los Planes de Ordenación Territorial. De hecho, en el diseño de los planes urbanos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, el medio ambiente está presente y es considerado de forma cuidadosa con el propósito de prevenir cualquier impacto medioambiental negativo que la expansión de la ciudad pueda provocar (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b). De esta forma, los planes de desarrollo urbano están bien coordinados y son equilibrados en línea con la idea de que el uso del suelo debe ser evaluado de acuerdo a criterios no sólo económicos, sino también medioambientales (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b).

Vitoria-Gasteiz es completamente consciente de la necesidad de defender, mantener y desarrollar su estructura verde ya que los espacios verdes representan una contribución muy significativa para el desarrollo sostenible de la ciudad al mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La ciudad, a través de su compromiso con el desarrollo sostenible, es también sensible al papel que juegan los espacios verdes en mejorar el espacio urbano.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz utiliza herramientas tanto formales como informales en el proceso de planificación de la estructura verde de la ciudad. Los instrumentos formales que utiliza son 3 ordenanzas municipales aprobadas por el Ayuntamiento con el propósito de regular el espacio verde urbano de la ciudad: (1) La regulación de usos en zonas verdes; (2) Gestión y protección del arbolado urbano; (3) Creación de zonas verdes en las áreas de expansión de la ciudad (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b). Según el Ayuntamiento

de la ciudad, esta última ordenanza municipal ha generado una mejora considerable tanto estética como ecológicamente (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b).

La eficacia del proceso de planificación de la ciudad en relación con sus espacios verdes parece que es positivo. En el periodo comprendido entre 1974 y 2010, los espacios verdes de la ciudad se han incrementado significativamente; prácticamente se han doblado en tamaño (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b).

En este trabajo, hemos categorizado la infraestructura verde en tres niveles o escalas: zona urbana, zona periurbana o Anillo Verde y el ámbito rural.

VII.3.1. ZONA URBANA: PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD

La red de espacios verdes de la ciudad está compuesta por jardines, parques, paseos arbolados y otras zonas verdes como son las deportivas o los patios interiores, extendida en una superficie de 400 ha, lo que supone una dotación de 14 m² por habitante (CEA, 2012b). Según el Centro de Estudios Ambientales (2012b), los espacios verdes de la ciudad poseen tamaños y formas diversas, aunque se ha evitado que se conviertan en áreas excesivamente grandes. Al estar repartidos de forma equilibrada por la ciudad, prácticamente la totalidad de los ciudadanos reside a menos de 300 metros de un espacio verde, además, las calles de la ciudad están cubiertas de arbolado, más de 130.000 árboles de diferentes especies (CEA, 2012b).

VII.3.2. ZONA PERIURBANA: ANILLO VERDE

El Anillo Verde es un gran espacio semi-natural de 731 ha que circunvala la ciudad (CEA, 2014) a través de sus 35 km. de perímetro (Orive, 2009). Se compone, actualmente, de 6 de parques periurbanos (ver Figura 3 para plano del Anillo Verde y sus parques) “de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos”: Salburua, Zadorra, Zabalgana, Armentia, Olarizu y Errekaleor (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015i).

Figura 3. Parques del Anillo Verde



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El proyecto del Anillo Verde comenzó a gestarse a principios de los años 90 y lo que pretendía, en sus comienzos era solucionar los problemas de degradación que presentaban las zonas periféricas de la ciudad, tanto desde el punto de vista ambiental como social (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015i; 2015j). Aunque se ha conseguido restaurar gran parte de esta periferia y dotar a este área de un uso recreativo, aún quedan algunas zonas degradadas pendientes de recuperación ya que este proyecto continúa actualmente (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015i) y está prevista su ampliación (CEA, 2014).

El Anillo Verde posee una gran riqueza naturalística gracias a su diversidad de ecosistemas: bosques, ríos, humedales, praderas, campos de cultivo (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015i). Algunos de estos ecosistemas han sido reconocidos internacionalmente por su gran valor ambiental, como son los humedales localizados en el Parque de Salburua. Éstos fueron incluidos en el año 2002 entre los humedales de

Importancia Internacional de la Convención Ramsar⁶² y declarados Lugar de Importancia Internacional dentro de la Red Natura 2000 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015k).

Figura 4. Parque de Salburua



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Si nos movemos en sentido opuesto a las agujas del reloj, inmediatamente después del Parque de Salburua, nos encontramos con el Parque del Zadorra, cuyo río, del mismo nombre, actúa como su eje vertebrador, creando un ecosistema fluvial de alto valor ecológico que ha motivado su declaración como Lugar de Interés Comunitario dentro de la Red Europea Natura 2000 de Espacios Naturales Protegidos (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015m).

En este ecosistema fluvial se pueden encontrar una gran variedad de fauna y flora de gran interés, entre ellos, el visón europeo (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015m). En cualquier caso, aunque actualmente constituyen un espacio idóneo para el esparcimiento, este parque fluvial y su entorno se encuentran en proceso de ambientación y se prevé que en un futuro próximo éste disponga de 13 km de longitud y 213 ha de superficie (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015m).

⁶² La inclusión de un humedal en esta Lista supone que los gobiernos tienen que comprometerse a asegurar el mantenimiento de sus características ecológicas ya que “se reconoce que tienen un valor significativo no solo para el país o los países donde se encuentran, sino también para la toda la humanidad” (Ramsar, 2015).

Figura 5. Parque del Zadorra



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Al igual que ocurría en el resto de Parques que actualmente conforman el Anillo Verde, Zabalgana era una zona altamente deteriorada y degradada, como resultado, principalmente, de 2 factores: por un lado, en la zona se localizaba una explotación para la obtención de grava con fines para el sector de la construcción donde se acumulaban residuos y en algunas zonas se producían inundaciones con aguas fangosas y vertidos incontrolados; y por otro, el pastoreo intensivo, un desmedido aprovechamiento de leña e incendios (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015n). Por todo ello, el Ayuntamiento comienza las labores de restauración en una época muy temprana, ya en 1993, “con el fin de crear un área de ocio que sirviera al mismo tiempo para la realización de actividades de educación ambiental”. El acondicionamiento de este Parque ha permitido que estos espacios degradados se hayan convertido en “zonas de pradera, con cerros y lomas de suaves desniveles y pequeñas plantaciones dispuestas a modo de bosquetes dispersos. Las lomas del terreno sirven de atalayas desde las que pueden contemplarse los Montes de Vitoria, con sus cumbres de Zaldiaran y Eskibel, la sierra de Badaia, el monte Gorbea y las crestas del Anboto” (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015n).

Figura 6. Parque de Zabalgana



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Según constata el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015o), el Parque o Bosque de Armentia, es un bosque natural de quejigo de gran extensión (104 ha que suponen el 70% de su superficie) que se encuentra situado entre la ciudad y los Montes de Vitoria

convirtiéndolo, de este modo, en un “verdadero corredor biológico” entre la zona rural, las zonas verdes periurbanas y el ecosistema urbano, dando lugar, por tanto, a un espacio con una gran importancia para la infraestructura verde del Territorio.

Al igual que el resto de Parques que componen el Anillo Verde, el estado en el que se encontraba lo que es, actualmente, el Parque de Armentia, era muy precario debido a los vertidos y a zonas erosionadas. Las actuaciones de acondicionamiento llevadas a cabo por el Ayuntamiento, han dado lugar a una gran red de senderos peatonales, ciclistas y ecuestres (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015o).

Figura 7. Parque de Armentia



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El Parque de Olarizu se ha consolidado entre los ciudadanos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz como un lugar de encuentro y de celebraciones populares. El Ayuntamiento (2015l) de la ciudad apunta que, quizás por esta razón, es el parque menos naturalizado de los que componen el Anillo Verde ya que, originariamente, se concibió para el uso público, la formación y la educación medioambiental. Cabe destacar, en este Parque, 2 lugares de interés: Por un lado, podemos encontrar el Jardín Botánico de Olarizu, donde en su Arboreto, con una superficie de 30 ha, se albergan más de 500 especies de árboles característicos del continente europeo. Por otro lado, encontramos los huertos municipales que fueron creados con el propósito fundamental del uso público donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la horticultura ecológica, la jardinería y la fruticultura (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015l).

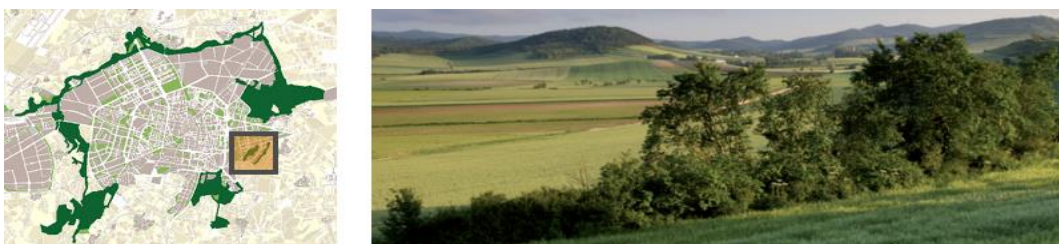
Figura 8. Parque de Olarizu



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Finalmente, el Parque de Errekaleor, que cerraría el Anillo Verde entorno a la ciudad, uniendo los Parques de Olarizu y Salburua, y sirviendo, por tanto, como un elemento de conexión de vital importancia para la consolidación de esta área periurbana y semi-natural.

Figura 9. Parque de Errekaleor



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Son estos 6 Parques los que integran el proyecto del Anillo Verde y que “conforman un corredor natural entre los Montes de Vitoria y el río Zadorra y entre la ciudad y el anillo agrícola, que atesora una elevada biodiversidad a las puertas de la ciudad” (CEA, 2014: 30).

VII.3.3. ZONA RURAL

Como hemos visto en los epígrafes anteriores, El municipio de Vitoria-Gasteiz se dibuja, desde dentro hacia fuera, en primer lugar, de acuerdo a un núcleo urbano compuesto de una dotación importante de parques y jardines de diferentes dimensiones y características. A este ‘corazón’ geográfico de la municipalidad, le circunvala un espacio semi-natural de gran valor naturalístico, llamado Anillo Verde. Por último, en su ‘capa’ más

externa, la zona rural de la municipalidad ‘envuelve’ tanto al Anillo Verde como al centro de la ciudad, a través de una miríada de campos de cultivos (principalmente cultivo de patata, cereal y remolacha), prados y bosques de ribera que ocupan, en total, una superficie superior a las 10.700 ha. (Prats y Ozcáriz, 2012).

Asimismo, entorno a esta zona agrícola se encuentran aproximadamente 11.300 ha de áreas forestales, principalmente de propiedad pública, y que representan una dotación de 479 m² de bosque por habitante (Prats y Ozcáriz, 2012). Estas montañas “conectan dos importantes reservorios de biodiversidad: la Cordillera Cantábrica, por el oeste, y la Cordillera Pirenaica, por el este, desempeñando por tanto un papel esencial en el mantenimiento de la conectividad ecológica del norte ibérico, y constituyendo un eslabón clave para la configuración de la Red Ecológica Paneuropea” (CEA, 2014: 22).

Figura 10. Vista de la zona rural del municipio de Vitoria-Gasteiz



Fuente: Centro de Estudios Ambientales, 2012b

Según el Centro de Estudios Ambientales (CEA, 2014), esta zona rural es especialmente rica en términos naturalísticos, debido fundamentalmente a tres factores: [1] la municipalidad de Vitoria-Gasteiz está influenciada tanto por el clima atlántico como el mediterráneo, por lo que en una radio geográfica muy pequeño, confluyen paisajes vegetales diversos; [2] la zona posee un recurso de gran importancia ecológica, como es el

acuífero cuaternario de Vitoria; [3] el aprovechamiento de sus recursos naturales ha sido durante siglos eficiente debido a que el 80% de la superficie forestal y el 50% del territorio es de propiedad pública.

Desde el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz se ha dado, desde siempre, una importancia significativa al marco territorial que engloba a la ciudad ya que parte de la premisa de que “para que los espacios verdes urbanos sean ecológicamente funcionales se ha de asumir una perspectiva territorial y sistémica en su planificación, que tenga en cuenta e integre los procesos y flujos ecológicos que tienen lugar en el territorio” como “las particulares condiciones bióticas, hidrogeológicas, etc.”(CEA, 2014: 22).

CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Este capítulo tratará sobre los resultados generados tras el análisis exhaustivo de las 14 entrevistas en profundidad realizadas en el contexto de este estudio. Para la presentación de los resultados se ha seguido una estructura separada en tres grandes bloques que pretenden seguir el mismo orden con el que se formularon las preguntas los participantes a través del guion⁶³ de las entrevistas.

Un primer bloque examinará las perspectivas de los participantes del estudio sobre la aportación que realizan los espacios verdes a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Seguidamente, se tratará de comprobar si existen referencias entre los entrevistados sobre el término justicia ambiental. En último lugar, el apartado VIII.3. analizará la percepción que los participantes tienen sobre los espacios verdes como factor para la sostenibilidad local y la justicia ambiental.

Será esta última sección la de mayor relieve por responder de forma directa a las preguntas de la investigación formuladas para este trabajo. De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los entrevistados, este apartado se ha subdividido en cuatro epígrafes

⁶³ El guion de la entrevistas se presenta en el Anexo 2.

relevantes: potenciar los recursos locales; liderazgo político y conciencia ciudadana; cohesión social/capital social; y distribución de espacios verdes.

VIII.1. PERSPECTIVAS SOBRE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS EN VITORIA-GASTEIZ

La primera pregunta, mediante la introducción realizada sobre la importancia que asigna la ciudad de Vitoria-Gasteiz a su sistema de espacios verdes urbanos, pretende indagar sobre el significado que otorga cada uno de los entrevistados a los espacios verdes urbanos. Tal y como se puede observar en el guion de la entrevista, la pregunta está planteada de tal manera que permite la posibilidad de dar varios significados como respuesta.

En todos los casos, los entrevistados no se centran en una respuesta, percepción o significado, sino que responden con varios elementos. Esta variedad de respuestas es consistente con la tesis, mencionada anteriormente en este estudio, que se fundamenta en la noción de que los espacios verdes son multifuncionales y, por lo tanto, presentan una gran variedad de usos y valores.

Una vez realizado el análisis de las respuestas obtenidas de los diferentes entrevistados, se ha elaborado la siguiente Tabla 7 en la que se indican las categorías más representativas y que se discutirán en mayor profundidad a lo largo de este apartado.

Tabla 7. Perspectivas sobre los espacios verdes urbanos en Vitoria-Gasteiz

RAZONES	RESPUESTAS
1. Valor medioambiental	9
2. Ocio y esparcimiento personal	9
3. Calidad de vida	7
4. Cohesión social	7
5. Contacto con la naturaleza	6
6. Salud	3
7. Espacio público	3
8. Labor educativa / sensibilización ambiental	3
9. Significado sentimental para el entrevistado	1

d) Calidad de vida

Como se indica en el cuadro anterior, los espacios verdes urbanos como propulsores de la calidad de vida entre los habitantes de las ciudades es la tercera respuesta más repetida entre los participantes de este estudio. Sin embargo, se ha debatido sobre la conveniencia de incluir esta categoría, jerárquicamente, en primer lugar dentro de ese estudio.

Esto es así porque, si bien no todos los participantes relacionan explícitamente a los espacios verdes con la calidad de vida en las respuestas que ofrecen, sí que de una forma u otra, todos ellos los perciben como un elemento positivo y de mejora; que promueven, en última instancia, el bienestar de los ciudadanos. Como hemos visto en detalle en la primera parte de este estudio, la calidad de vida en general, pero particularmente la calidad de vida en las ciudades, incluye una miríada de aspectos que se engloban en elementos medioambientales, sociales y económicos.

Por lo tanto, aunque la estructura organizativa de este apartado, que apuesta por un análisis puramente objetivo de las respuestas, nos dicta que coloquemos a esta categoría en tercera posición para su examen, se ha decidido ascenderlo a la primera posición. Entendemos que es justo afirmar que, para todos los participantes de este estudio, los espacios verdes son sinónimo de calidad de vida ya que todos los factores ofrecidos en sus respuestas procuran, en última instancia, una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Cabe en este punto mencionar el estudio sobre las áreas verdes urbanas de Priego González de Canales (2011), en el que argumenta que pocas personas relacionarían ‘ciudad’ con ‘calidad de vida’ en caso de ser preguntadas. Sin embargo, la mayoría de los participantes del presente estudio sí han relacionado los espacios verdes urbanos con calidad de vida y, al mismo tiempo, los han identificado como un elemento de identidad y referencia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, parece que la noción que promueve Priego González de Canales (2011: 48) sobre apostar por “nuevos desarrollos urbanos, donde los espacios verdes jueguen un papel primordial en el aumento de la calidad de vida de la población”, se cumple desde el punto de vista de los participantes, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, este autor afirma que los espacios verdes son uno de los indicadores que tenemos para medir la calidad de vida urbana: “la mera presencia de espacios verdes

urbanos en las ciudades constituye uno de los aspectos empleados hoy en día para medir el grado de calidad de vida de los ciudadanos” (Priego González de Canales, 2011: 52). De hecho, el manual de la Unión Europea sobre infraestructuras verdes señala como éstas fomentan una mejor calidad de vida al ofrecer un medio ambiente de gran calidad donde vivir y trabajar (Unión Europea, 2014).

Los participantes de este estudio han utilizado, específicamente, el término ‘calidad de vida’ en sus respuestas: “[los espacios verdes] reúnen una serie de circunstancias que probablemente no valoras porque no tienen un coste económico, tú no pagas por ese servicio, lo mismo que pagas por ir a la piscina del centro cívico pero que aporta mucho bienestar y mucha calidad de vida” (Entrevista nº 1); “Desde el punto de vista de un ciudadano, está claro que es calidad de vida, evidentemente siempre que sea un espacio verde que esté cuidado, vamos a decirlo así. En todo caso es calidad de vida” (Entrevista nº 2). Otro de los participantes ha optado por el término “bienestar humano”:

El disfrutar de la naturaleza es un elemento que contribuye al bienestar humano. A todos nos ha pasado que irnos simplemente a la orilla del mar produce una satisfacción, un cierto bienestar, algo tan elemental como eso. Uno vive más a gusto en una ciudad donde haya muchas zonas verdes, que en una ciudad donde todo es cemento y donde no hay más que automóviles y grandes edificios.

Entonces, yo creo que la naturaleza en la ciudad, contribuye, indudablemente, también al bienestar humano y la razón de ser de la ciudad pues es naturalmente eso, el propiciar el bienestar humano. La ciudad es el lugar donde todos esperamos alcanzar ese bienestar y ese recurso, ese disfrutar de los recursos naturales, de la naturaleza en todas sus manifestaciones es un componente esencial del bienestar humano.

(Entrevista nº 5)

“Bueno, yo creo que los espacios verdes, en general, lo que suponen es calidad de vida. [...] En Vitoria, el hecho de que cualquier ciudadano a menos de 300 metros de su casa tenga un espacio verde o que a un 1,5 kilómetros de cualquier punto de la ciudad puedas encontrar un espacio verde natural, o sea un espacio verde en la periferia de la ciudad como el Anillo Verde por ejemplo, pues yo creo que le da a Vitoria una calidad de la que no todas las ciudades pueden presumir” (Entrevista nº 7).

Una de las participantes entiende los espacios verdes como el elemento esencial que hace que las ciudades sean ‘vivibles’: “creo que, en general, pensamos en lo urbano como lo no natural, entonces el espacio verde es lo que aparece para hacer la ciudad vivible” (Entrevista nº 12).

Como ya se ha argumentado anteriormente en este estudio, tendemos a medir el progreso en bienestar humano utilizando indicadores económicos restrictivos. Sin embargo, los individuos también perciben como calidad de vida a otros productos o bienes medioambientales, en este caso el acceso y disfrute de espacios verdes de la su ciudad.

a) Valor medioambiental

El valor medioambiental que otorga una infraestructura de espacios verdes urbanos bien gestionada es una noción aceptada por prácticamente la totalidad de los analistas medioambientales involucrados en la planificación urbanística. De hecho, los espacios verdes urbanos han sido denominados, en muchas ocasiones, como los “pulmones” de las ciudades.

Es interesante observar como esta perspectiva es también compartida por la mayoría de los participantes de este estudio, ya que es la respuesta más repetida entre los mismos. En concreto, el 64% identifican esta categoría, siendo el mismo 4 y 3 el número de representantes políticos y agentes sociales, respectivamente, quienes dan esta respuesta. En cambio, son 2 representantes técnicos quienes lo mencionan.

Los matices relacionados con el valor medioambiental que proporcionan los espacios verdes urbanos son variados y se refieren a diferentes aspectos que los entrevistados comentan brevemente y de forma general, sin llegar a profundizar la mayoría de ellos: “por simple proceso metabólico urbano es necesario para ir limpiando el propio ambiente urbano” (Entrevista nº 1); “desde un punto de vista de lo que es estrictamente medioambiental son calidad urbana” (Entrevista nº 2); “significa proteger el entorno natural, para mí el Anillo Verde ha sido una excusa para proteger determinados espacios de valor natural como son el bosque de Armentia, Salburua y el entorno del río Zadorra” (Entrevista nº 3); “funciona como una protección, un blindaje de la ciudad a las inundaciones” (Entrevista nº 10); “son espacios verdes [...] que están dando solución a problemas medioambientales, fundamentalmente al ciclo del agua, y por tanto el espacio verde es

funcional también desde un punto de vista de los problemas de infraestructura básica de la ciudad. Esto es importante” (Entrevista nº 14).

Un participante, sin embargo, trata el tema con mayor precisión al indicar en qué se concreta este valor medioambiental que proporcionan los espacios verdes, si bien es cierto que lo hace relacionándolo explícitamente con la ciudad de Vitoria-Gasteiz:

“Las zonas verdes en Vitoria realizan muchas funciones que son básicas, una de ellas es aumentar la bio-capacidad de la ciudad, es decir, la capacidad de asumir impactos y mitigar los impactos ambientales que los procesos urbanos generan. Por otro lado, pues son unos espacios que aportan biodiversidad urbana, es decir, las zonas verdes, tanto las urbanas como las periurbanas dentro de la ciudad sí que presentan, a pesar de su excesivo mantenimiento en algunos casos, o de su configuración más ajardinada pues presentan unos niveles de biodiversidad bastante elevados que se intentan potenciar”.

(Entrevista nº 8)

El análisis de las entrevistas también ha identificado a un participante que da una respuesta un tanto contradictoria, al afirmar, en primer lugar, la importancia que los espacios verdes tienen a nivel natural, para seguidamente señalar su ‘anti-naturalidad’:

“Digamos que es un elemento urbano más, y no solo es un elemento urbano más, sino un elemento urbano, yo creo, de gran trascendencia por todo lo que supone, no solo desde el punto de vista natural, de regeneración atmosférica, de regeneración del oxígeno, de vegetación, entre comillas, natural. De natural nada porque los parques urbanos son totalmente ‘antropizados’ y hechos a la medida del hombre”.

(Entrevista nº 9)

Existe una amplia literatura que estudia el valor medioambiental que ofrecen los espacios verdes urbanos y que ha sido analizada anteriormente en este trabajo, donde se han destacado los beneficios medioambientales que reporta como: la regulación del clima, a través de la reducción de la temperatura urbana; la mejora de la calidad del aire, a través de absorción de contaminantes del aire y la reducción de los efectos energéticos; mejora de la calidad acústica, a través de la reducción de la contaminación acústica; mejora de la

calidad del agua, a través de la absorción del agua que no ha penetrado en el suelo urbano, la amortiguación de inundaciones o la mejora del sistema urbano de drenaje; la preservación de la biodiversidad urbana.

b) Ocio y esparcimiento personal

En este caso, prácticamente la mitad de los entrevistados, 2 representantes políticos, 2 representantes técnicos y 2 agentes sociales, coinciden en afirmar que los espacios verdes realizan una función importante en relación al ocio y el esparcimiento personal de los ciudadanos de las ciudades.

“[...] yo creo que es muy necesario en cuanto al ocio se refiere y al esparcimiento personal” (Entrevista nº 1); “[...] son zonas de esparcimiento, de ocio, que ayudan a relajarte” (Entrevista nº 8); “[...] como sitio de ocio, como sitio de reunión, como sitio de paseo, como sitio de relax visual, etc.” (Entrevista nº 9); “como zona de esparcimiento” (Entrevista nº 10); “[En Vitoria...] los paseos se utilizan para hacer deporte (Entrevista nº 14).

Una participante da una razón un tanto bucólica y muy romántica de los espacios verdes en su relación con el esparcimiento personal:

“[...] escuchando a los pájaros, en primavera viendo las flores cómo van saliendo, bueno el espacio verde siempre tiene algo que regalarte en cualquier estación del año y en cualquier día. En un día lluvioso tendrá unas características y unos olores especiales que a ti te pueden transmitir algo y que te pueden ayudar a sentirte más feliz o a evadirte de tus problemas. Una helada, una nevada, bueno, a mí personalmente todas esas cosas me parecen fascinantes y siempre puedes encontrar algo agradable. Pero es que además los rincones verdes de tu ciudad o los espacios verdes pueden esconder rincones que signifiquen algo para ti o que te pueden traer algún recuerdo, o que simplemente te maravillan o hay el caso de árboles singulares en la ciudad”.

(Entrevista nº 1)

Otro participante, en este caso, un representante técnico, observa como los espacios verdes deben ser un derecho, comparable con el de la vivienda, para recalcar, inmediatamente después, la necesidad de proporcionar un lugar de esparcimiento.

“[...] creo que son un derecho. Creo que forman parte igual que tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a espacios verdes. Deben ser un lugar de esparcimiento y de entrar en contacto con la naturaleza, de paz, de remanso, de reflexión, de disfrute, de solaz, etc.”

(Entrevista nº 13)

c) Cohesión social

El tercer motivo más mencionado en relación al significado que tienen los espacios verdes para los participantes es la cohesión social. Destaca la gran diversidad entre aquellos que han respondido con esta categoría aunque solo 4 la han elegido, apareciendo las 3 tipologías entrevistadas en esta investigación: 2 representante político, 1 representante técnico, 1 agente social.

Tiene un significado de cohesión social, desde ese punto de vista, en el que, es en ese tipo de espacios, aunque a veces parezcan pequeñitos. Pero es en ese tipo de espacios donde se producen la mayor parte de las relaciones entre las personas que no nos conocemos. Es decir, una zona ajardinada, una zona verde con unos juegos infantiles no tiene nada que ver con una simple acera donde transitas y no hay ningún espacio en el que siquiera poder sentarte, como pasa en muchos sitios. [...] Son espacios donde se establecen relaciones que no tienen nada que ver, efectivamente, ni con la capacidad económica ni con tu pensamiento ideológico, pero se produce ese ejercicio de cohesión social que es muy importante

(Entrevista nº 2)

Son puntos de encuentro, en muchos casos, para los barrios. Ha habido incluso movimientos vecinales que han estado defendiendo zonas verdes en Vitoria porque de alguna forma las interiorizan y las sienten como suyas, es decir, esa labor de dulcificar de alguna forma la vida estatal estresante que llevamos y el propio estrés de la ciudad y

disponer de unos espacios de encuentro, de relax donde todo va más despacio, donde puedes encontrar algo de naturaleza pues evidentemente para mí es una de las claves del sistema de espacios verdes de Vitoria.

(Entrevista nº 8)

Un participante aboga por espacios urbanos más pequeños y equitativamente distribuidos en contraposición con una masa grande de espacio verde y única como puede ser Central Park en Nueva York. De esta manera, señala este agente social, se propicia mucho más la cohesión social:

A mí ese tipo de urbanismo no es el que más me gusta, yo creo que es mejor integrar de una forma equitativamente distribuida por el espacio urbano, espacios verdes más pequeños, más digamos espacios de barrio, de barrio o de parque de un barrio, y que sea un centro de reunión, que sea un centro donde sobre todo los chavales, los críos, con los padres y las madres puedan ir allí, a divertirse con sus juegos infantiles o lo que sea.

(Entrevista nº 9)

Priego González de Canales (2011: 50) señala que la literatura “sugiere que una mayor interacción de los ciudadanos con los espacios naturales y la existencia de zonas verdes en las barriadas de las grandes ciudades, para el ocio y el esparcimiento de los vecinos, pueden inducir entre ellos al desarrollo de valores compartidos, es decir, el enraizamiento de los individuos en sus comunidades de referencia”. Las instituciones de Vitoria-Gasteiz comparten esta reflexión ya que sostienen que “algunos espacios, como los jardines comunitarios, crean un fuerte sentido de comunidad, ya que permiten la participación de la sociedad civil a través de acciones de voluntariado, ayudando a combatir la exclusión social y el aislamiento” (CEA, 2014: 8).

d) Contacto con la naturaleza

Analizaremos en este apartado como categoría con entidad propia al “contacto con la naturaleza” que han respondido 4 de los entrevistados.

“[...] yo creo que eso es lo que sobre todo aporta: calidad de vida, sensibilización ambiental y contacto de los ciudadanos con la naturaleza” (Entrevista nº 7).

“[Respecto al Anillo Verde] no hay mobiliario urbano, no hay papeleras, es naturaleza bordeando la ciudad, [...], de contacto con la ecología, con la fauna, con la flora” (Entrevista nº 10).

“Todo eso te lo aporta el verde de la ciudad en lo urbano y, por supuesto, en lo periurbano. Si hablamos de lo urbano, pues es ese refugio que puedes tener a dos minutos de tu casa, pero si ya te vas a los parques periurbanos de la ciudad, bueno pues ahí te estás realmente trasladando a una naturaleza más salvaje, estás consiguiendo traspasar ya una frontera mucho más clara, te estás adentrando en el medio rural, te estás adentrando en la rivera de un río, en una pradera, [...], te estás adentrando en un bosque, como el bosque de Armentia o los bosques de Zabalgana, bueno pues estás consiguiendo traspasar esa frontera real urbana en lo que es una transición amable entre lo urbano y lo rural y el medio natural de nuestro municipio”

(Entrevista nº 1)

Otro de los entrevistados refiere esta idea pero desde otro punto de vista en el que los espacios verdes introducen la naturaleza en la ciudad: “esa introducción, en lo posible, de la naturaleza en la vida de la ciudad [...] En definitiva, es introducir parte de la naturaleza en la vida urbana” (Entrevista nº 5).

e) Otras categorías

Este último apartado analiza las categorías mencionadas por los participantes con una menor frecuencia y que se han decidido no incluir en secciones individuales, aunque no por ello sean menos importantes.

- Labor educativa y sensibilización ambiental: “para mí tiene el valor de poner en contacto más cercano a la gente de Vitoria con su entorno y de alguna manera sensibilizar, tiene un papel muy pedagógico y educativo en el sentido de que tienes al lado la naturaleza y que vives aquí y que la naturaleza la tienes ahí al lado” (Entrevista nº 3). En este sentido, el

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entiende que “otros espacios tienen una componente educativa importante, como es el caso de los huertos urbanos, que promueven la conexión entre la producción y el consumo local de alimentos” (CEA, 2014: 8).

- Los espacios verdes como beneficio de la salud tanto física como mental entre sus usuarios: “¡Cuántas veces los médicos lo que te recomiendan es un paseo!” (Entrevista nº 1); “Yo creo a pies juntillas esto que dicen los expertos de que cuanto más verde hasta incluso mejor humor tenemos, mejor salud tenemos” (Entrevista nº 10).
- Significado sentimental para el entrevistado: una participante, en concreto, afirma que los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz han tenido, y tienen en la actualidad, un papel muy importante en sus decisiones personales: “[...] yo las decisiones más importantes que he tomado en mi vida en pareja, decidí comprar una furgoneta, o decidí tener perro, decidí tener hijos, pues probablemente esas decisiones las hemos tomado paseando por el anillo verde, con lo cual para mí significa mucho más los espacios verdes de la ciudad porque están ligados a lo más íntimo de mi historia, de cómo he creado una familia, bueno entonces es algo mucho más importante” (Entrevista nº 1).

VIII.2. REFERENCIAS SOBRE EL TÉRMINO JUSTICIA AMBIENTAL

El guion de la entrevista se estructuró para que la pregunta ‘justicia ambiental’ se realizara una vez la entrevista con el participante estuviera avanzada. Esta pregunta tiene una doble función ya que se pretende indagar, por un lado, si los participantes conocen el término y, si ese es el caso, qué es lo que entienden por el mismo. Como se ha mencionado en el Capítulo III de este estudio, en muchas ocasiones, aunque se tiene una noción clara de lo que es justicia ambiental, no se le conoce por esa terminología sino con términos como cohesión social o equidad ambiental, entre otros.

La estructura de este apartado utilizará, de nuevo, un sistema de categorías muy simple basado en si la respuesta a la pregunta es afirmativa o negativa. A partir de éste, se creará un subsistema de categorías que analizará los significados de este término para los participantes.

Prácticamente se ha producido un empate entre los entrevistados que respondieron afirmativamente como los que lo hicieron negativamente, a la pregunta sobre su conocimiento de la justicia ambiental, un 57% y un 42% respectivamente (Tabla 8). Desde un análisis tipológico, fueron 4 los representantes políticos, 3 representantes técnicos y 1 agente social quienes conocían el término previamente. Por otro lado, los participantes que no conocían el concepto de justicia ambiental de forma previa a la entrevista se engloban en 3 agentes sociales, 2 representantes políticos y 1 representante técnico.

Tabla 8. Conocimiento del término justicia ambiental

RESPUESTA	Nº	PORCENTAJE
SÍ	8	57%
NO	6	42%

Comenzaremos analizando aquellas respuestas dadas por los participantes que respondieron afirmativamente sobre su conocimiento de la noción justicia ambiental.

Prácticamente todos los participantes que respondieron afirmativamente a esta pregunta, entienden el concepto de justicia ambiental desde su naturaleza distributiva. Para ellos, el término justicia ambiental está intrínsecamente relacionado con una distribución equitativa de los recursos ambientales: “El término en sí, yo creo que no lo he usado nunca, pero sí que lo tengo interiorizado y lo expongo. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, todo el mundo” (Entrevista nº 1); “Sí, he oído hablar de ello. A ver, bueno, pues me imagino, cuando se habla de justicia ambiental todo el mundo tiene derecho a tener parte del espacio público para uso y disfrute de sí mismo. Que no lo use unas determinadas personas y otras no” (Entrevista nº 4); “Bueno, sí. Más o menos. La idea de justicia ambiental es que los servicios ambientales que puedan producirse estén equitativamente repartidos entre la población” (Entrevista nº 9).

Quizás, la respuesta más completa y atinada entre todos los participantes ha sido la de un representante técnico, en la que menciona incluso a la Agencia Medioambiental estadounidense, que, como ya hemos visto anteriormente en la parte dedicada a la justicia ambiental, tiene una Oficina dedicada en exclusiva a la justicia ambiental en el país:

Sí, sí, lo conozco. Bueno, es un término que, vamos, yo lo he oído en diferentes ámbitos del medio ambiente. Naciones Unidas lo utiliza mucho, lo utiliza también la EPA, la agencia americana de protección del medio ambiente. Entonces, en realidad, tal y como yo lo entiendo y de lo que he leído por ahí, en su sentido más global, el término justicia ambiental tiene que ver con la capacidad que todos los ciudadanos, con independencia de su raza, de sus creencias, de su edad, de su clase social, deben de tener para ser agentes activos en lo que es la materia ambiental, la gestión del medio ambiente, los derechos que se deben tener en relación con el medio ambiente, la necesidad de protección del medio ambiente, yo lo entiendo así.

Entrevista nº 8.

Uno de los entrevistados, precisamente uno de los representantes políticos, contempla, además, que el término justicia ambiental también engloba a las implicaciones que se derivan de la aplicación de las normativas y políticas públicas en materia de urbanismo:

La posibilidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder y disfrutar de los espacios naturales y por otro lado también, que las actuaciones de los ciudadanos y el propio modelo urbano respecto a la naturaleza contemple ese equilibrio y ese respeto necesario para el sostenimiento del medio, si se refiere a eso.

Entrevista nº 11.

Un representante político, incluso refiere a responsabilidad ambiental de las organizaciones: “Sí, es un término muy amplio que yo creo que de lo que trata es que se tienda a una mejor distribución de los recursos, incluso entre países, a una mejor gestión de los recursos naturales, habla también de las tasas ecológicas, etc. y por lo que yo sé, el término justicia ambiental en España se está derivando más, o concretando más, siendo como es muy amplio, hacia la responsabilidad ambiental de empresas e instituciones” (Entrevista nº 7). Sin embargo este entrevistado pidió expresamente el guion de la entrevista unos días antes de la misma, por lo que no podemos inferir si el conocimiento del término justicia ambiental era anterior a la entrevista.

Uno de los agentes sociales entrevistados concreta este término al relacionarlo con la deuda ecológica y con el contexto Norte-Sur:

El término justicia ambiental, sí. Lo que yo entiendo por justicia ambiental pero claro yo lo tengo enfocado, claro desde mi campo que es más relaciones Norte-Sur, lo tengo más desde la deuda ecológica de los países del Norte con los del Sur, a huella ecológica y la justicia ambiental. Lo tengo más enfocado a esa relación, a la deuda ecológica que es la deuda que nosotros tenemos para con los países del Sur y la justicia ambiental es la necesidad de equilibrar eso.

Entrevista nº 3.

En cuanto a los participantes que respondieron negativamente a la pregunta sobre si conocían el término justicia ambiental, se puede decir que existe un 'antes' y un 'después' en sus respuestas. El entrevistador les expone la definición de lo que es justicia ambiental y éste espera a que los participantes le correspondan con su opinión sobre el tema.

Uno de los representantes políticos admite que no conoce el término justicia ambiental aunque sí que contempla cuestiones de legislación medioambiental: "No, pues yo la verdad no te voy a engañar, es la primera vez que lo oigo como tal. Es decir, la justicia sobre la base de la nueva legislación medioambiental, que en los últimos años ha sido muy fructífera, eso sí pero como tal el término justicia ambiental, no. Pero, desde luego, como tal me parece muy sugerente, es así" (Entrevista nº 2).

Una vez se le ha dado la definición que se utiliza en el presente estudio, desde una base sociológica, da su percepción en base a un posible derecho constitucional a disfrutar del medio ambiente:

Pues en ese sentido Vitoria puede ser uno de los ejemplos a seguir. [...] Pero sí que es cierto que el futuro, vinculado a la planificación de los espacios urbanos, será tratado desde el punto de vista de lo que son hoy aspiraciones, terminarán regulándose como derechos subjetivos medioambientales. Es verdad que, por ejemplo, la ley del suelo, la legislación del suelo establece por ejemplo que los espacios verdes van en función del número de viviendas. Se establece que por tantos metros cuadrados mínimo de zona verde, pero claro una cosa es cumplir con la obligación matemática y otra cosa es que haya una planificación que vaya vinculada a esa idea de que habrá derechos medioambientales que serán

tratados como derechos subjetivos de los ciudadanos y terminarán formando parte de las reformas que se harán de los textos constitucionales.

Entrevista nº 2.

Uno de los agentes sociales al que se le enviaron las preguntas por previa petición, reconoce que hasta que no vio en el documento el término justicia ambiental, no lo conocía. Se infiere de su respuesta que, después de analizar y reflexionar sobre esta noción, lo relaciona con su ámbito de trabajo en una Fundación dedicada a la alimentación sostenible: “No, si conozco, por ejemplo, el de justicia alimentaria” (Entrevista nº 12).

Los cuatro participantes restantes responden categóricamente que no conocen este término. Dos de ellos, una vez conocida la definición del mismo, lo aplican a una perspectiva social del desarrollo sostenible: “Sí, me imagino que será algo así como la sostenibilidad aplicada a lo social” (Entrevista nº 13); “Ésta en definitiva es la base de la perspectiva de la sostenibilidad, que ya en la propia definición de las Naciones Unidas de lo que hablan es de 3 aspectos, ninguno de los cuales debe ser ignorado porque son 3 cosas” (Entrevista nº 14).

VIII.3. PERCEPCIÓN SOBRE LOS ESPACIOS VERDES COMO FACTOR PARA LA SOSTENIBILIDAD LOCAL Y LA JUSTICIA AMBIENTAL EN VITORIA-GASTEIZ

En los capítulos anteriores se ha argumentado en profundidad sobre los beneficios que producen los espacios verdes urbanos para los residentes de las ciudades. En esta investigación estamos intentando comprobar si los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz, categorizados en zonas verdes urbanas, periurbanas, y medio rural, contribuyen al objetivo de la sostenibilidad local y a la justicia ambiental. El 2º Plan de Acción Local de Vitoria-Gasteiz manifiesta que sus líneas estratégicas trazadas siguen el ejemplo de los Compromisos de Aalborg+10, documento establecido dentro del “paraguas” de la Agenda Local 21 y que promueve el desarrollo sostenible a nivel local. En concreto, el décimo Compromiso, en su punto cuarto, obedece a la promoción de la justicia ambiental.

En la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo en la primera parte de esta tesis doctoral, se ha destacado que el concepto de la justicia ambiental puede ser percibido con una lente diferente a lo que supusieron sus orígenes en Estados Unidos y que es la

estrategia decidida por la Unión Europea. Históricamente, la justicia ambiental se centró, principalmente, en los vertidos industriales y su proximidad con diferentes comunidades así como en su lucha contra estas injusticias. En Europa este alcance se amplía significativamente para dar cabida a diferentes ámbitos como son la construcción de espacios verdes en las ciudades⁶⁴.

Las preguntas realizadas a los participantes de este estudio en la segunda parte de la entrevista han tenido como objeto que éstos nos den su visión sobre de una Vitoria-Gasteiz sostenible, y qué importancia, en su opinión, tienen los espacios verdes urbanos en la consecución de la sostenibilidad local. Asimismo, en preguntas posteriores el entrevistador se interesó por su perspectiva sobre la dimensión social de la sostenibilidad y la justicia ambiental, de nuevo indagando en cómo este concepto se ha podido implementar en las políticas de espacios verdes urbanos llevadas a cabo por la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Se han aglutinado en este apartado, por tanto, el análisis de las respuestas dadas por los participantes a estas preguntas.

Las respuestas que nos ofrecieron los participantes se han clasificado en cuatro grandes temas recurrentes: potenciar los recursos locales, principalmente el uso de los huertos urbanos; la unanimidad política en las instituciones encargadas de la implementación de la Agenda 21 en Vitoria-Gasteiz para conseguir acercar a la ciudad al logro de la sostenibilidad local y al mismo tiempo, las encargadas de incluir dentro de esta Agenda Local 21 cuestiones relacionadas con la justicia ambiental, tal y como propone el décimo compromiso de Aalborg+10, la cuestión del capital social como impulsor de la justicia ambiental en el ámbito de los espacios verdes de la ciudad y, finalmente, el acceso y accesibilidad a la infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz.

a) Potenciar los recursos locales: huertos urbanos

Uno de los entrevistados, perteneciente a los representantes políticos, destaca que la clave para acercarnos hacia una ciudad sostenible debe ser centrarnos en lo “local”, de tal manera que se facilita el control del consumo de la propia ciudad, sus entradas y salidas:

⁶⁴ Por supuesto, en Estados Unidos también se está ampliando este alcance y son numerosos los estudios llevados a cabo en los que se relaciona la justicia ambiental y los espacios verdes, tal y como se puede comprobar por la propia bibliografía utilizada en este estudio.

Es conseguir reducir todo lo posible los prejuicios que tú causas sobre tu entorno, armonizar de la mejor manera posible la vida cotidiana con ese entorno, integrarlo de la mejor manera posible, preservar la biodiversidad de nuestro municipio [...] Que consigamos ir cerrando todos los ciclos de ese metabolismo urbano y que en la medida de lo posible nos escapemos lo mínimo de la ciudad.

Entrevista nº 1

Este participante expone este argumento desde el prisma de los espacios verdes urbanos al afirmar que: “Una gran apuesta, por ejemplo, es el consumo de producción local, muy difícil pero bueno, se avanza con las huertas, por qué no pensar en jardines que se utilicen también para cultivo ecológico de un número de vecinos que estén comprometidos con llevar a cabo un proyecto” (Entrevista nº 1).

De una forma mucho más específica, uno de los representantes técnicos valora a los huertos municipales como una forma de utilización del exceso de espacios verdes:

Bueno, yo creo que los espacios verdes en exceso que pueda haber ahora mismo en la ciudad, claro, tienen su ubicación, entonces lo que podían dar lugar es a aprovechar esas zonas verdes para otros usos, otros usos, más equipamientos o, yo qué sé, o usos incluso productivos, es decir yo creo que, en algunos casos, parte de esas zonas verdes se podrían destinar, con mucho cuidado, con mucho cuidado, y estudiando muy bien cada situación. Hay otra opción que es muy interesante que es reconvertir parte de ese exceso de, y que se está estudiando, de zonas verdes dentro de la ciudad en huertos ecológicos o huertos ciudadanos. Esa es otra opción que a mí personalmente me gusta mucho y que se está estudiando.

Entrevista nº 8

Además, este participante expresa de forma clara el papel que tienen los huertos urbanos en el contexto de la justicia ambiental y la sostenibilidad local: “huertos ecológicos en Vitoria y están funcionando aportando, incluyendo, cuestiones de justicia social y de justicia ambiental.” (Entrevista nº 8).

Del mismo modo, otro de los participantes incide en la potenciación de los recursos locales, siguiendo así, las postulaciones referidas en la Agenda Local 21 donde el papel de la territorialidad cobra particular importancia. De nuevo, se menciona a las huertas urbanas como uno de los motores que contribuirían a la sostenibilidad local.

A mí me gustaría que, no te voy a decir todo, pero que mucho de la alimentación que hacemos en vitoria se pudiera hacer con las huertas que hay por aquí cerca, o con trigo que hay por aquí, vamos que es lo tenemos aquí, no es que digas...para mí eso sería una ciudad sostenible, que la energía que necesitamos la produjésemos nosotros, no tendríamos que ir a comprarla fuera, que el CO2 que producimos lo consuma el arbolado urbano, todas las zonas verdes que nosotros tenemos, pues ya te digo, básicamente eso sería la ciudad idílica.

Entrevista nº 6

Otra de las participantes, indica que una manera de ampliar el discurso de la sostenibilidad, centrado principalmente en la cuestión medioambiental, para incorporar cuestiones de justicia social, es a través de los huertos urbanos.

Me parece que la excepción son iniciativas como las huertas de ocio, en la medida en la que da acceso al conjunto de la población porque, de hecho, al principio era para población mayor de 55 años, pero visto el interés, sí que dieron un paso más y lo abrieron al conjunto de la población al menos adulta de tener la posibilidad de acercarse al origen del alimento, a la actividad hortelana y eso en sí, depende de la experiencia de cada persona, pero en sí ya tiene mucho mayor recorrido vincularse a la justicia alimentaria, a la soberanía, bueno, a otros muchos aspectos, no tiene porqué ocurrir pero sí abre un espacio que sino lo que son los parques, jardines, Anillo Verde, en sí no propicia.

Entrevista nº 12

Esta participante ha incorporado en su respuesta el término 'justicia alimentaria'. Este concepto se ha tratado brevemente en el Capítulo III en su terminología 'pobreza alimentaria'. Existen numerosas fuentes sobre esta conceptualización. Es importante conocer si la justicia alimentaria es parte del, cada vez más amplio, paraguas de la justicia ambiental y la sostenibilidad local.

En un estudio realizado por Purifoy (2014) se trata de comprobar si es posible la integración de la justicia alimentaria dentro del marco de la justicia ambiental. En este extenso artículo, Purifoy toma como referencia la experiencia que los ‘Food Policy Councils’ han tenido en los E.E.U.U., ya que éstos “reflejan el deseo de muchas comunidades de reconectar a la sociedad con alimentos frescos y saludables, con la gente que los produce y el suelo donde se cultivan” (Winne, 2012)⁶⁵. Esta idea es coherente con la de los huertos urbanos de ocio municipales de Vitoria-Gasteiz, uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad y cuyos objetivos aglutinan diferentes terrenos de la vida urbana.

Otros autores también han argumentado que las ciudades pueden contribuir al objetivo de promover la justicia ambiental a través del desarrollo de huertos urbanos comunitarios (Jermé y Wakefield, 2013; Ferris *et al.*, 2001: 561) ya que reconcilian ciudadanía, terreno y sostenibilidad local (Holland, 2004; Ferris *et al.*, 2001: 561). Los huertos urbanos municipales son unos espacios públicos que tienen la capacidad de potenciar y fortalecer las relaciones entre los ciudadanos ya que son lugares de encuentro y relación, que propician la cohesión social, al mismo tiempo que contemplan la protección medioambiental. Esto es así, ya que tal y como argumenta Gottlieb (2005)⁶⁶, la justicia ambiental debe ir más allá de la conservación del espacio público urbano para redirigirlo hacia actividades como los huertos urbanos en los que participen todos los estratos de la ciudadanía.

Purifoy (2014) hace un análisis sobre la capacidad que tienen los conceptos de justicia ambiental y justicia alimentaria para crear un terreno común. Esta autora señala en su argumentación dos puntos clave que pondrían a estos dos conceptos bajo el mismo paraguas: En primer lugar manifiesta que tanto la justicia ambiental como la justicia alimentaria se definen por sus ideales de equidad y justicia en el terreno medioambiental y que, por tanto, se produciría una intersección de estos conceptos en tres puntos críticos: salud pública, impacto medioambiental y justicia social. En segundo lugar, los proyectos como los huertos municipales⁶⁷ en Vitoria-Gasteiz, serían ideales para integrar a la justicia ambiental y la justicia alimentaria ya que cuentan con una gran capacidad para promover la participación democrática y un cambio social igualitario dentro de las propias organizaciones.

⁶⁵ Citado en Purifoy (2014: 375)

⁶⁶ Citado en McIlvaine-Newsad y Porter (2013: 70).

⁶⁷ En su artículo se refiere a los ‘Food Policy Councils’

Esta aparente alianza entre conceptos ha generado que cada uno de los movimientos sociales a los que pertenecen entiendan que comparten una agenda común (Gottlieb y Fisher, 2000)⁶⁸ y, según apunta Purifoy (2014: 382), si se pretende que ésta se institucionalice, ambos movimientos deberían formular un discurso común en el que tanto el medio ambiente como la alimentación se relacionen en términos de justicia social. Para ello, propone Purifoy (2014), la justicia alimentaria debería reconocerse como un componente de la justicia ambiental, ya que este último concepto se basa en reducir las diferencias que se producen en la calidad medioambiental y en aquellas sociedades que viven en él, propiciando así un acceso equitativo a una alimentación saludable y sostenible, que se convertiría en una parte integral de un medioambiente justo. Esta autora concluye afirmando que las iniciativas locales relacionadas con la agricultura, como son los huertos urbanos en Vitoria-Gasteiz, crean numerosas oportunidades determinar enfoques más completos de los problemas sociales (Purifoy, 2014).

Priego González de Canales (2011: 61) apunta varios factores que se derivarían de lo positivo que resulta la creación en las ciudades de huertos urbanos: [1] los jubilados rememoran sus orígenes rurales al entrar en contacto, de nuevo, con tierra de cultivo; [2] el estilo de vida creado en las ciudades, caracterizado por las prisas y el hacinamiento en pisos pequeños, dificulta el contacto de sus habitantes con el medio rural, tan necesario por otra parte; [3] la necesidad de que alguna faceta de nuestra vida entre en contacto directo con la naturaleza. Asimismo, señala también este autor sobre los huertos urbanos que “este acercamiento del mundo urbano al rural crea ciudades cada vez más ricas y productivas convirtiéndolas en ciudades multifuncionales” (Priego González de Canales, 2011: 61).

Los primeros huertos urbanos que la ciudad de Vitoria-Gasteiz puso a disposición de sus ciudadanos surgieron en el Parque de Olarizu, uno de los 6 grandes parques que componen el Anillo Verde. Bárcena Ortiz de Urbina (sin fecha) hace una cronología sobre la aparición de las huertas urbanas en Vitoria-Gasteiz. Según este autor, algunos ciudadanos habían comenzado a cultivar en las márgenes de los ríos del municipio ilegalmente, por lo que el Centro de Estudios Ambientales abordó esta problemática en 1998, mediante la implantación en la zona de Olarizu de los huertos ecológicos de ocio, dentro de un marco regularizado que refería a cuestiones de ocupación de terrenos y la utilización de determinadas técnicas de cultivo. En el terreno donde se localizan actualmente las Huertas de Olarizu se podían encontrar, previamente a su acondicionamiento en 1998, praderas degradadas y vertidos incontrolados (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015).

⁶⁸ Citado en Purifoy (2014: 382).

Una vez que se acondicionaron las huertas, la actividad principal de las mismas era la horticultura ecológica y los usuarios, personas mayores de 55 años “que compartían la ilusión de producir alimentos sanos, en un espacio de huerta cercano y en un ambiente agradable” (Orive, 2009: 149).

Figura 11. Huertas de Olarizu y Urarte



(Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

Debido al interés surgido desde los inicios de esta iniciativa, el espacio destinado a los huertos urbanos en Vitoria-Gasteiz se amplió con las huertas de Urarte en 2006, localizadas en uno de los barrios más aislados de la ciudad, Abetxuko. Actualmente, el concepto de huerto urbano ha ampliado su enfoque incluyendo diferentes ámbitos: los mencionados huertos municipales; los huertos comunitarios o vecinales, públicos o privados, cedidos u ocupados; o la red de huertos ecológicos en el entorno de los Centros Cívicos repartidos por la ciudad. Vitoria-Gasteiz es el municipio del País Vasco más comprometido con estas prácticas ya que cuenta con el mayor número de huertos urbanos de la Comunidad Autónoma.

Los huertos municipales de Vitoria-Gasteiz surgieron con el objetivo de frenar el uso indiscriminado por parte de la población de diversas localizaciones de la periferia de la ciudad que producía degradación. Este proyecto ha intentado desde sus inicios aunar la ecología urbana, la cohesión social y la educación medioambiental, creando espacios que sean accesibles para todos los miembros de la ciudad, desde jóvenes, personas de la tercera edad y grupos minoritarios. Tal y como McIlvaine-Newsad y Porter (2013: 69) argumentan, los huertos comunitarios consiguen “hermanar ciudadanos diversos en un espacio medioambientalmente positivo”.

En Vitoria-Gasteiz, estas huertas están reguladas por la Ordenanza municipal de uso de huertos urbanos (BOTH A, 27 de abril de 2015) y que específicamente define 13 objetivos, reflejados en la Tabla 9, con los que la ciudad quiere contribuir a la sostenibilidad local (BOTH A, 2015; artículo 3) y que la investigadora ha aglutinado en 3 categorías diferenciadas: ecología urbana (objetivos 1, 4, 5 y 9), cohesión social (objetivos 2, 3, 7, 10, 11 y 12) y educación medioambiental (objetivos 6, 8, 9 y 13).

Tabla 9. Objetivos de los huertos urbanos municipales

ECOLOGÍA URBANA	[1] Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje del Municipio;
	[4] Generar espacios de biodiversidad;
	[5] Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc.;
COHESIÓN SOCIAL	[9] Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente;
	[2] Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas;
	[3] Fomentar la participación ciudadana;
	[7] Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas;
	[10] Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural;
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	[11] Promover la actividad del tejido social mediante la autorización de uso a entidades sin ánimo de lucro;
	[12] Fomentar espacios de encuentro y socialización de los vecinos y vecinas, la corresponsabilidad y la iniciativa social y vecinal en los huertos, y especialmente en los huertos promovidos en los diferentes barrios;
	[6] Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos;
	[8] Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables y más sostenibles;
	[9] Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente;
	[13] Impulsar y concienciar a la población en la producción y consumo de productos locales y ecológicos, y avanzar en la estrategia agroalimentaria municipal

Fuente: elaboración propia a partir del BOTH A

Iniciativas de huertos urbanos han calado recientemente en otras ciudades de Europa. Por ejemplo, en Berlín existe una resolución del Senado que obliga a incorporar 2 huertos urbanos en cada distrito de la ciudad (Bunge *et al*, 2011).

Existen actualmente en Vitoria-Gasteiz asociaciones de vecinos interesadas en la idea de formar “barrio”, donde ideales de cohesión y educación ambiental son sus objetivos. La creación y la expansión de estas asociaciones son unos de los propósitos del Ayuntamiento que se concreta en el objetivo 12 de la Ordenanza: “Fomentar espacios de encuentro y socialización de los vecinos y vecinas, las corresponsabilidad y la iniciativa social y vecinal en los huertos, y especialmente en los huertos promovidos en los diferentes

barrios”. Una de estas asociaciones es la de Zabalortu, en cuya página web se describen como:

Zabalortu es una asociación de vecinos de Zabalgana, interesados en el barrio, en la idea de vida de barrio, además de compartir un enfoque en cuanto a la alimentación saludable, ecológica y de calidad. Además de estas premisas nos une el interés de cohesionar el entramado urbano del barrio y facilitar las relaciones sociales entre los vecinos en nuevos espacios de interacción

Así pues, nos juntamos un día con la idea de construir unos huertos urbanos auto-gestionados donde dar cabida a nuestras inquietudes y aportar al barrio un entorno de relación, aprendizaje y socialización (Zabalortu, 2015).

Otra asociación es la de Basalburu que también pretende incorporar la naturaleza en el barrio, a través de lo que ellos han dado en llamar “Bosque comestible”:

Somos un grupo de vecinos y vecinas de Salburua constituidos como asociación, en el proceso de conseguir la cesión de una de las parcelas del barrio para crear un bosque comestible. La creación del bosque nos permite acercarnos a la naturaleza recuperando el espacio público y fomentando la participación de los vecinos (Basalburu, 2015).

En estas manifestaciones podemos ver elementos que pretenden diversos objetivos como son el desarrollo de sentido de comunidad, los programas educativos y la provisión de alimentos de calidad cultivados directamente por los consumidores de forma ecológica. El propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015p) entiende que estos huertos ofrecen numerosas oportunidades ya que son “espacios auto-gestionados que fortalecen las relaciones comunitarias, son lugares de encuentro y construcción colectiva de identidad en la que todo el mundo puede aportar ideas y conocimientos (emigrantes, personas mayores, jóvenes...)”. Algunos autores, que a la vez son agentes sociales, como McIlvaine-Newsad y Porter (2013), concluyen sobre la experiencia de las huertas de su ciudad en EE.UU. que se han convertido en un vehículo para el cambio social.

En Vitoria-Gasteiz también podemos encontrar los llamados huertos escolares y sociales. El último Boletín de la Agenda 21, publicado en 2015, dedica un apartado a los huertos escolares, cuya experiencia se ha ido extendiendo de manera significativa en los últimos años, ofreciendo aspectos didácticos ligados al currículo escolar e incluso con posibles contribuciones a los propios comedores escolares (Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, 2015). Para Priego Gonzáles de Canales (2011: 61), los huertos urbanos “son excelentes vías para educar a la población infantil en los valores de la naturaleza, propiciando el contacto con los ciclos naturales de producción de la los alimentos”.

Otra de las iniciativas en relación a los huertos urbanos es la de los huertos sociales creados en los Centros Cívicos⁶⁹ de la ciudad, localizados en los barrios. Consisten en pequeñas parcelas o mesas de cultivo, según las capacidades de cada Centro y promueven principalmente la educación ambiental de aquellos ciudadanos que estén interesados. La Figura 12 muestra la localización de los diferentes huertos que se pueden encontrar en los Centros Cívicos repartidos por toda la ciudad.

Figura 12. Huertos ecológicos en los Centros Cívicos



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

⁶⁹ La red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz es muy extensa y uno de los emblemas de la ciudad en su faceta más social. Fueron creados por José Ángel Cuerda y han continuado hasta nuestros días proporcionando a la ciudadanía con instalaciones de calidad en cada barrio de la ciudad.

Los huertos urbanos, por tanto, tal y como McIlvaine-Newsad y Porter (2013) apuntan, tienen mucho de mecanismos de cambio social. Una de las formas para producir este cambio social es a través del comportamiento de los individuos y de la manera en la que éstos entienden el medio ambiente y responden ante sus impactos. Según señala Priego Gonzalez de Canales (2011: 49), la educación ambiental debe ser el resultado de “una experiencia directa y constante, asimilada a través del contacto diario con la naturaleza en los lugares donde vivimos”.

Uno de los entrevistados, manifiesta que es necesario educar a los ciudadanos si queremos acercarnos hacia el objetivo de la sostenibilidad. En concreto, se refiere a lo que él denomina el ‘ciudadano eco-eficiente’:

Creo que las mejores apuestas y las más inteligentes tienen que ir volcadas sobre todo en el ámbito educativo, es decir, que normalmente cuando hablamos de un espacio urbano, o aun no siendo urbano, un espacio medioambientalmente correcto vamos a decirlo así en su diseño, en su planificación, en su conservación, nos estamos fijando digamos que en cosas, pero una parte muy importante de los impactos que generamos el ser humano tienen que ver con nuestros comportamientos. ¿Cómo se apuesta por una Vitoria sostenible? Educando al ciudadano, es decir, buscando al ciudadano eco-eficiente que seguramente además terminará siendo un ciudadano mucho más exigente con sus representantes públicos a la hora de que se haga una planificación de los futuros crecimientos de la ciudad en ese mismo sentido o que haya una especial presión social sobre la conservación de nuestro patrimonio natural.

(Entrevista nº 2)

La noción de que las sociedades con mayor conciencia ambiental son también aquellas en las que sus ciudadanos menos tolerancia tienen hacia las implicaciones negativas del medio ambiente y los que demandan mayor calidad medioambiental en sus entornos, se ha discutido anteriormente en este estudio en los primeros capítulos del mismo.

Y desde ese punto de vista yo creo que el papel que juegan los espacios verdes en la consecución de un objetivo matemático muy concreto, pero luego también en un elemento que es fundamental, que es que cuando tú estás acostumbrado como ciudadano a estar en un entorno muy amable, te vuelves mucho más exigente. Cuando, tanto estando en la oposición como en el gobierno, he contado por ahí que las quejas que nos llegan a través del Buzón Ciudadano tienen que ver con: “oye que hay una papelería que han quemado o

que hay una papelería que está estropeada”, ¡cómo! ¿En Vitoria recibís quejas de papelerías? Se quedan alucinando porque el tipo de reivindicación que hay en otros sitios, vamos no tiene nada que ver con esto, ¡qué en Vitoria se te quejan porque hay una papelería que se ha estropeado o que las han quemado! Pues sí, recibimos quejas, ¿para qué? para sustituirlas inmediatamente o para repararlas inmediatamente, es decir, conforma el espacio verde, hace un ciudadano más reivindicativo, un ciudadano mucho más exigente, cosa que en otros sitios precisamente no lo encuentras o no lo ves tan habitual por esa ausencia de los espacios verdes, porque los espacios públicos son más para pasar que para estar.

(Entrevista nº 2)

Parece justo concluir por tanto, que los huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz son una muestra de cómo se puede implementar la justicia ambiental dentro de la Agenda Local 21 y las políticas de sostenibilidad local.

Cabe destacar en este punto otra de las iniciativas que está llevando a cabo la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y que está en esta misma línea, aunque ninguno de los participantes de las entrevistas lo han mencionado en el marco de sus respuestas. Como resultado de la Capitalidad Verde Europea en 2012, el Ayuntamiento de la ciudad, a través de su Centro de Estudios Ambientales, se propuso que la sociedad vitoriana, desde sus diferentes ámbitos: ciudadanía, empresas, escuelas, profesionales y organizaciones, se implicara en la consolidación física del Anillo Verde de la ciudad con el objetivo de “reforzar el vínculo y apoyo social que dicha iniciativa ha suscitado a lo largo de su historia” (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015q).

A este proyecto se le ha denominado ‘Las raíces del mañana: 250.000 árboles y ciudadanos para cerrar el Anillo Verde’ y pretende llevar a cabo, en un espacio temporal de 3 años, la plantación de 250.000 árboles y arbustos, que supondrían un ejemplar por cada ciudadano de Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2015q) y que “pasarán a formar parte del rico patrimonio vegetal que se extiende en torno a la ciudad y que aporta importantes beneficios ambientales, sociales y económicos” (CEA, 2012a: 3).

El Anillo Verde, por tanto, entraría en la siguiente fase y pasaría de ser un modelo de zonas verdes sin terminar de conectarse completamente entre sí, a producir “naturaleza hacía dentro y hacia fuera” (CEA, 2012a: 3):

La conexión en red del Anillo con los montes que circundan la ciudad proyecta a Vitoria-Gasteiz a una nueva dimensión ecológica, enlazando la ciudad con el cinturón de espacios naturales que rodean a la comarca de La Llanada Alavesa, conocido como el Anillo de la Tierras Altas, y por extensión la incluye en el gran corredor ecológico paneuropeo que arranca en las montañas galaicas y se extiende hasta los Alpes.

Esta iniciativa contribuye a la sostenibilidad local y a la justicia ambiental ya que contempla, en esencia, el concepto de bosques comunitarios, donde la ciudadanía participa de la reforestación de los bosques urbanos incrementando, de ese modo, mayor cohesión social e integración, al reunir los individuos en la persecución de un interés común en relación con la mejora del medio ambiente (Burne, 2001)⁷⁰.

Figura 13. Participantes de la iniciativa 'Las raíces del mañana'



Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Según Land Use Consultants (2004), los bosques comunitarios representan un aspecto fundamental en la gestión de las infraestructuras verdes ya que su principal objetivo consiste en asegurar que la ciudadanía se involucre de tal forma que se genere un interés en llevar a cabo actividades en comunidad que contribuyan a su vez, al desarrollo de la misma, creando nuevos vínculos de confianza y familiaridad entre los individuos. Este

⁷⁰ Citado en Land Use Consultants (2004: 27).

aspecto se relaciona de forma muy directa con lo que se ha expuesto más arriba sobre la creación de huertos urbanos en algunos barrios de Vitoria-Gasteiz.

Del mismo modo, se crea un sentimiento de propiedad hacia los recursos medioambientales del medio urbano (Land Use Consultants, 2004). Este último argumento ha sido expuesto por varios de los participantes de este estudio:

Yo creo que una ciudad como Vitoria, como te he dicho antes, lo tiene absolutamente interiorizado y, vamos, no hay más discusión, y tiene que haber espacios verdes y la gente los demanda.

(Entrevista nº 1)

Tú cuando identificas un animal te sientes más cercano de él, conoces algo más, pues vive no sé cuánto tiempo, se reproduce así, y entonces te interesa y entonces hace que eso lo respetes que no te sea indiferente.

(Entrevista nº 10).

b) Liderazgo político y conciencia ciudadana

Varios participantes han incidido en que la unanimidad y la continuidad en el trazado de las políticas ambientales locales por parte de las instituciones, sean éstas del color que sean, ha contribuido a que Vitoria-Gasteiz camine hacia la sostenibilidad local: “hay unanimidad a la hora de marcar las políticas ambientales” (Entrevista nº 1).

Todos los barrios van dotados de sus equipamientos sanitarios, culturales, educacionales, religiosos, es decir, que eso Vitoria lo ha trabajado muy bien, y eso es una pieza clave de la sostenibilidad en Vitoria y eso no se debe perder, y de hecho, los siguientes alcaldes que han habido en Vitoria, independientemente de sus color político

(Entrevista nº 8)

Salkin *et al.* (2012) postulan para la consecución de la justicia ambiental desde la sostenibilidad. Estos autores manifiestan que existen cuatro formas de lograrlo, una de ellas alude a la necesidad de que exista una gobernanza visionaria y pragmática desde las instituciones. En su argumentación, Salkin *et al.* (2012: 29-30), refieren al ámbito nacional aunque es obvia la necesidad de extrapolar esta noción al ámbito local:

Sustainability requires not only laws that support and encourage the right kind of activities, but also an approach to governance that is at once visionary and pragmatic. That is, governance must be based on a long-term view of where the country is going and what challenges it faces, but also must be attentive to new information and developments on the ground.

The commitments that government makes, in other words, must be kept in substantially the same form from election to election, from decade to decade. Of course, pragmatism is also needed because adjustments often need to be made in policy. Still, the adjustments should be made in a manner that is consistent with the goals and structure of the overall policy.

Jorge Ozcariz (2012: 16) manifiesta que el liderazgo y el consenso logrados por la clase política de Vitoria-Gasteiz en materia de sostenibilidad, junto con manifestaciones precoces y tempranas en la ciudad del movimiento ecologista, “han contribuido a una notable concienciación y corresponsabilización ciudadana” y, por lo tanto, “no es de extrañar que la sensibilidad y el respeto hacia lo ambiental haya sido una seña de identidad de Vitoria-Gasteiz desde hace ya décadas”.

Este liderazgo y conciencia ciudadana sobre las políticas medioambientales de Vitoria-Gasteiz y sobre los espacios verdes de la ciudad han sido relatadas por uno de los participantes en este estudio:

Las políticas sociales en el Ayuntamiento de Vitoria siempre han sido muy potentes, capaces de cubrir, no voy a decir todas las necesidades pero sí todas las necesidades básicas de cualquier familia, de cualquier ciudadano. Entonces yo creo que es un factor que además ha servido para que no haya grandes, vamos a decirlo así, paquetes de ciudadanos o sectores de ciudadanos que no entiendan la importancia que tiene la calidad medioambiental y el desarrollo sostenible porque la cohesión social hace que encuentres un caldo de cultivo mejor, precisamente para introducir ese tipo de conceptos y de elementos, tanto en el discurso político como lo que es la acción, en este caso, institucional. Yo creo que los espacios verdes, es decir, este urbanismo amable de Vitoria, que ahora lo

calificamos automáticamente como medioambientalmente de calidad es uno de los factores que ayuda a provocar esa cohesión social”.

(Entrevista nº 2)

c) Cohesión social y capital social

Varios participantes han coincidido en su percepción de que los espacios verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz contribuyen a la justicia ambiental y la sostenibilidad local a través de la cohesión social y la sociabilización de sus ciudadanos. Por ejemplo, el primer entrevistado nos cuenta de manera desenfadada que los parques pueden contemplarse como una alternativa a los bares y cafeterías: “Y si te apetece relacionarte con gente, no hace falta que te vayas a tomar un café que te cuesta dinero, te puedes ir a un parque y sentarte en un banco, sobre todo cuando hace buen tiempo” (Entrevista nº 1). Esta tesis es refrendada por Orr *et al.* (2014), al argumentar que los espacios verdes urbanos ofrecen un gran número de beneficios sociales y de comunidad que, en ocasiones, no son reconocidos e incluso infravalorados por aquellos encargados de llevar a cabo las políticas locales. Los parques urbanos, por ejemplo, aportan un espacio común en donde los ciudadanos pueden encontrarse, de tal manera que se estimula que las redes sociales se mantengan al dar lugar a una actividad social “de bajo coste” y de gran atractivo (Orr *et al.*, 2014).

Una cohesión social en una ciudad es fundamental para una sostenibilidad, una sociedad con desigualdades, una sociedad fraccionada, no sólo desde punto de vista social, de grupos sociales, de grupos de peso económico, o de grupos de peso por diferenciación, por grupos culturales [...] pues eso es una ciudad poco sostenible, una sociedad problemática y, además, es una sociedad más cara, que también hay que tenerlo en cuenta.

(Entrevista nº 9)

Ya se ha tratado anteriormente en este trabajo, señalando la tesis de Peñalosa (2001), quien afirma que los espacios públicos urbanos, en las sociedades democráticas, deben contribuir a que las ciudades sean más igualitarias. De la misma manera, otro entrevistado refiere a los espacios verdes como lugares favorables para el encuentro y la sociabilización entre ciudadanos:

Entonces en la medida en la que tú tienes acceso, como ocurre en el caso de Vitoria, al medio natural de una forma tan cercana, tan fácil, tan próxima, que es un lugar de esparcimiento, seguramente en un ambiente cordial, o sea, en un ambiente agradable, relajante, te encuentras con alguien e igual te apetece más hablar que no en el ascensor o cuando entras en la oficina.

(Entrevista nº 10)

La cuestión del capital social, junto con la de cohesión social, aparece en la respuesta de uno de los participantes:

Los espacios verdes urbanos de Vitoria han servido para coger algunas actividades de colectivos, y sirven para coger algunas actividades de colectivos que demandan. Por ejemplo, colectivos de inmigrantes o colectivos de personas mayores, sí que están funcionando como unos espacios que acogen ese tipo de actividades y que, de alguna forma, apoyan actuaciones de estos colectivos. Desde la celebración del día de Andalucía, donde se juntan todos los andaluces en el Parque de Arriaga y celebran su día y toda la sociedad vitoriana comparte con ellos ese día, sus puestecitos y tal. Desde actividades deportivas que promueven colectivos de la tercera edad, relacionados con la petanca, con los bolos...ahí desde la Administración si se les facilita la ocupación e incluso las infraestructuras que necesitan para trabajar de esa manera. O sea, que ese tipo de actuaciones, ese tipo de funcionamiento los parques sí que lo tienen y lo aportan y yo creo que es beneficioso en este sentido, en el planteamiento global de justicia ambiental.

(Entrevista nº 8)

Otra entrevista nos refiere:

Además [los espacios verdes] cumplen una función importantísima [...] desde el punto de vista de la socialización, que también es muy importante, es decir, que en esos espacios se crean espacios de socialización, espacios de comunicación, espacios de relación entre ciudadanos. Es decir, para crear una ciudad, que antes hablábamos, más sostenible, por lo tanto, tiene que ser más cohesionada, más relacionada, una vida más humana, más de relación humana.

(Entrevista nº 9)

De nuevo, los huertos ecológicos se refieren desde el punto de vista de la cohesión social y el capital social: “huertos ecológicos en Vitoria y están funcionando aportando, incluyendo, cuestiones de justicia social y de justicia ambiental y también incluso de ayuda a colectivos que de alguna forma están algo excluidos y que con su huertecito no solamente consiguen unas lechugas o unas zanahorias sino que extienden su radio de conocidos y de amistades pues de forma muy amable. Esa es una opción importante” (Entrevista nº 8).

Cabe, por tanto, señalar la importancia que tiene el capital social en el contexto de los espacios verdes y su importante contribución al logro de la justicia ambiental en los mismos. Según Boyce (1994), en aquellos lugares donde existe un capital social fuerte, sus residentes se encuentran en mejor posición para promover y defender un medio ambiente de más calidad.

De acuerdo con Pastor (2001), uno de los elementos vitales para que la justicia ambiental sea una realidad, sería incidir tanto en el “bonding social capital”, unificando y congregando a los diferentes grupos de ciudadanos, como en el “bridging social capital”, que puede unir a estos grupos con otros aliados externos, y que hemos discutido en el Capítulo V. De esta manera, prosigue en su argumento Pastor (2001), al incrementarse el capital social, se producen impactos positivos tanto en el medio ambiente como en el desarrollo, a diferentes niveles, de las comunidades.

Orr *et al.* (2014) en su argumentación sobre el valor que tienen los espacios verdes urbanos, y que hemos mencionado más arriba, manifiestan que las relaciones que se dan en los parques locales refuerzan el concepto de “bonding social capital”. Esto es así porque dan lugar a un espacio de interacción intercultural espontánea, lo que a su vez incrementa la integración social y expande la cohesión social al dar lugar a espacios donde los grupos sociales, que en otras circunstancias hubieran estado geográficamente segregados, pueden encontrarse y formar tanto “bridging” como “bonding social capital” (Orr *et al.*, 2014). Los espacios verdes en las ciudades, concluyen estos autores, dan lugar a un mecanismo único y multifuncional que contribuya al fomento del localismo.

d) Distribución de espacios verdes

Muchos de los entrevistados respondieron que la distribución de los espacios verdes en Vitoria-Gasteiz es un factor fundamental para el logro de la sostenibilidad local y la justicia ambiental:

O el simple hecho de tú puedas tener una ciudad equilibrada en espacios verdes va a permitir que cualquier ciudadano pueda disfrutar de esos espacios verdes sin tener que coger y decir: no, es que como yo vivo en este barrio que es un chorro, no me queda más narices que cogerme el coche y largarme hasta Armentia si quiero disfrutar de naturaleza. No, en Vitoria, cualquier ciudadano en 10 minutos en autobús, en 5 minutos en bici puede disponer de un espacio.

(Entrevista nº 1)

Yo creo que con el hecho de que estén ahí al alcance del ciudadano y que, lo que te decía antes, que no existan diferencias entre los ciudadanos de una zona y los ciudadanos de otra respecto del acceso a los espacios verdes creo también es un ejemplo de justicia social, quizás ahí en el más relacionado con la igualdad, todos los ciudadanos, en ese sentido, tienen las mismas posibilidades de acceso. Además, no hay, nunca ha habido, creo que de eso los ciudadanos de Vitoria son conscientes, yo creo que no hay una reivindicación nunca en ese sentido de que estos barrios son de segunda porque no tenemos zonas verdes, yo creo que eso no existe aquí, sino al revés, yo creo que son conscientes de esa equidistancia.

(Entrevista nº 7)

Los parques, en cuanto a justicia ambiental, en sí mismos, dado que en Vitoria están bien distribuidos.

(Entrevista nº 8)

[...] parte con esa distribución que antes hablábamos, digamos, distribución locacional o geográfica de espacios verdes, que cada barrio tenga su o sus espacios verdes a una

distancia muy corta de la residencia de cada persona y de utilización pública, etc. yo creo que eso es una forma, me parece a mí, importante, de colaborar hacía esto que decíamos.

(Entrevista nº 9)

Tú no vas a encontrar grandes diferencias por barrios, en términos de justicia social entendiendo como el acceso que esas personas tienen a una zona verde, a un centro cívico o a otro tipo de servicios, sanitarios y desde luego que la justicia social, que todo el mundo al margen de su cultura, raza, lo que sea, tenga el mismo acceso que otras personas a todo tipo de servicios es esencial y yo creo que, afortunadamente, en esta ciudad se cumple bastante bien”.

Entrevista nº 10

Los espacios verdes, aparte de lo que aportan paisaje, tienen un elemento de democratización de las infraestructuras urbanas porque las puede disfrutar todo el mundo sin necesidad de pagar más impuestos o menos o de ser más rico o más pobre.

(Entrevista nº 11)

Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades europeas con mayor ratio de espacios verdes por habitante (CEA, 2014) y la capital de provincia en España con el índice más alto (BCN Ecología, 2010). El espacio dedicado a zonas verdes en la ciudad representa el 32,67% del área urbana (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2010b).

Según un estudio llevado a cabo por la Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona en 2010, la dotación de superficie verde por habitante en la ciudad, excluyendo el Anillo Verde, era de 14 m² por habitante, lo que supone un incremento importante respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que propone un mínimo de 10 m²

por habitante⁷¹. Si se contabiliza el Anillo Verde, el ratio de zonas verdes por habitante se incrementa a 46 m² (BCN Ecología, 2010: 219). Asimismo, prácticamente la totalidad de la población de Vitoria-Gasteiz tiene acceso a los espacios verdes mayores (> 5.000 m², >1ha y >10ha) y un 81% de la población tiene acceso a los espacios verdes menores (de 1.000 m²) (BCN Ecología, 2010).

⁷¹ Me remito en este punto al comentario realizado por Lamela *et al.* (2011) en el que señala la imposibilidad de encontrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud la fuente original de esta afirmación aunque ésta es citada en numerosos documentos.

CONCLUSIONES

En este apartado se expondrán las principales conclusiones a las que se han llegado en este estudio y que se presentarán en dos bloques:

- A. Conclusiones derivadas del análisis teórico que se ha realizado en la primera parte de esta investigación.
- B. Conclusiones derivadas de los resultados y la discusión realizada en el Capítulo VIII.

A. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS TEÓRICO

1. Los principios de equidad y justicia social son fundamentales para el concepto de desarrollo sostenible. Y, por ello, esta noción debe abordar las injusticias sociales a fin de lograr sus principios básicos establecidos en el Informe Brundtland; para ello debe resolver el problema de la equidad no solo entre las generaciones actuales, sino también entre las futuras.
2. Se debe incidir en la importancia de la sostenibilidad social, en los criterios de justicia social y solidaridad en el marco de un desarrollo sostenible, ya que de

esta manera, difícilmente se podrían legitimar los valores dirigidos a la protección ambiental sin hacerlo también, o antes incluso, con los sociales. Los objetivos sociales y medioambientales deben ser tenidos en cuenta de forma conjunta para que el desarrollo sostenible, definido en el Informe Brundtland, pueda lograrse. Quedan así la justicia y la equidad vinculadas a la protección medioambiental.

3. Es la noción de la justicia ambiental la que pretende llevar a cabo un ejercicio de re-conceptualización del impacto medioambiental al abordar cuestiones medioambientales también como cuestiones de justicia social. Sin embargo, este movimiento no implica únicamente un cambio conceptual, sino que también comporta un alcance político claro ya que la cuestión distributiva es el eje vertebral de este paradigma y el aspecto fundamental de las políticas medioambientales públicas.
4. A pesar de que la justicia ambiental es un fenómeno estadounidense, su discurso ha irrumpido en el contexto europeo desde principios de esta década. Sin embargo, este concepto no se ha construido de forma similar en Europa, donde su política medioambiental está fundamentada en la consecución de la sostenibilidad. La justicia ambiental, en este marco, ha sido considerada como un elemento vital del desarrollo sostenible, lo que ha hecho que su búsqueda sea inherente a la política pública ambiental.
5. Aunque los conceptos de desarrollo sostenible y justicia ambiental difieren en tanto en sus orígenes como en su estructura, ambos engloban cuestiones de justicia social y equidad dentro de un marco medioambiental. Por ello, se ha reconocido la existencia de un terreno común donde estos dos conceptos se puedan perseguir de forma conjunta y simultánea ya que hay voces que afirman que la justicia ambiental se ha convertido en un prerrequisito fundamental para la consecución del desarrollo sostenible ya que ésta es percibida como un componente esencial del mismo.
6. La justicia ambiental se presenta, por tanto, como un elemento fundamental para la consecución de comunidades sostenibles, expandiendo su discurso inicial, basado principalmente en la distribución espacial de los impactos ambientales negativos para cambiar su perspectiva y concentrarse en la

distribución de los beneficios ambientales, como son los espacios verdes en los núcleos urbanos.

7. Se ha argumentado que las zonas verdes urbanas proporcionan a los ciudadanos de mayores niveles de calidad de vida como resultado de los beneficios tanto ambientales, sociales como económicos que se derivan de su uso y disfrute. Los espacios verdes urbanos juegan un papel importante en la mejora de la biodiversidad y el medioambiente urbano, en la recreación de la población y la accesibilidad para la práctica de deportes al aire libre, en el desarrollo de una mejor actuación económica, en la cohesión social de la comunidad, en la mejora de la salud física y mental, entre otros.
8. La justicia ambiental, como elemento esencial del desarrollo sostenible, debe ser un factor a tener en cuenta en las políticas relacionadas con la dotación y planificación de espacios verdes en las ciudades ya que es un gran recurso para la consecución de sociedades más sostenibles.

B. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Los actores sociales entrevistados en esta investigación dan un gran valor a los espacios verdes urbanos en general, y a los de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en particular. Todos los entrevistados dan respuestas positivas sobre el significado que éstos aportan a la ciudad. Los factores más importantes que los entrevistados perciben en relación a la importancia que los espacios verdes urbanos tienen para la ciudad de Vitoria-Gasteiz son la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el valor medioambiental que éstos aportan a la ciudad y el ocio y esparcimiento personal que éstos permiten a los individuos. A estos factores les siguen: la cohesión social, el contacto con la naturaleza, la salud, la labor educativa y la sensibilización ambiental.
2. Estos resultados son consistentes con las tesis propuestas en este estudio y que se fundamentan en la noción de la multifuncionalidad de los espacios

verdes al representar una gran variedad de usos y valores ambientales, sociales y económicos.

3. El 57% de los participantes en este estudio conocían el término 'justicia ambiental' frente a un 42% que no habían oído hablar de él anteriormente. Aunque se ha comprobado que la tendencia sitúa a la justicia ambiental cada vez con más presencia en el contexto europeo, los estudios y trabajos sobre la cuestión han sido escasos hasta la última década. Asimismo, las instituciones en Europa se han referido a la justicia ambiental con un léxico diferente como son la cohesión social, la igualdad o equidad ambiental. Es grato, por tanto, comprobar que más de la mitad de los participantes en este estudio conocían el término justicia ambiental y lo entendían tanto por su naturaleza distributiva como por la responsabilidad ambiental de las organizaciones.
4. Las respuestas de los participantes sobre la percepción de los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz como propulsores de la sostenibilidad local y la justicia ambiental en la ciudad han sido: promoción de los recursos locales, principalmente el uso de los huertos urbanos municipales; la unanimidad política y la conciencia ciudadana; la cohesión social y la cuestión del capital social y, finalmente, el acceso y la accesibilidad a la infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz.
5. Los huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz están aportando cuestiones de justicia ambiental dentro del marco de la sostenibilidad local. Son iniciativas que se han desarrollado con unos objetivos claros de: cohesión social e inclusión, a través del fomento de la participación ciudadana y de espacios donde grupos pertenecientes a diferentes contextos pueden reunirse y sociabilizar entorno a un espacio natural; y de conservación del medio urbano, a través de la recuperación de espacios que permanecían degradados medioambientalmente.
6. El liderazgo político, su unidad y la conciencia ciudadana, necesarias para la consecución del binario desarrollo sostenible-justicia ambiental, son una señal de identidad en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El compromiso de las instituciones de la ciudad, independientemente del color de su gobierno en cada legislatura, ha contribuido a que ésta se acerque cada vez más a la consecución de la sostenibilidad local, lo que ha hecho a su vez, que la ciudadanía tome

conciencia del respeto que debe tener a las políticas ambientales promovidas por las instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

Acción Ecológica (1999): "Initial Proposal". Acción Ecológica.

Achterberg, W. (1996): "Sustainability and associative democracy", en: Lafferty, W.M. y Meadowcroft, J. (eds.), *Democracy and the environment: problems and prospects*, pp: 157-174. Cheltenham: Edward Elgar.

Agyeman, J. (2002): "Constructing Environmental (in)Justice: Transatlantic Tales", *Environmental Politics*, Vol. 11(3): 31-53.

Agyeman, J. (2005): *Environmental Justice and Sustainable Communities*. New York: New York University Press.

Agyeman, J. (2005): *Sustainable Communities and the Challenge of Environmental Justice*. New York: New York University Press.

Agyeman, J. (2007): "Environmental Justice and Sustainability", en: G. Atkinson, S. Dietz y E. Neumayer (eds): *Handbook of Sustainable Development*, pp. 171-189. Cheltenham: Edward Elgar.

Agyeman, J. (2008a): "Toward a 'just' sustainability?" *Continuum: Journal of Media and Cultural Studies*, Vol. 22(6): 751-756.

Agyeman, J. (2008b): "Equity? 'That's not for us. We're here to save the world'", *Projections. MIT Journal of Planning*, Vol. 8: 10-15.

Agyeman, J. y Evans, B. (2003): "Toward Just Sustainability in Urban Communities: Building Equity Rights with Sustainable Solutions". *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 590: 35- 53.

- Agyeman, J. y Evans, B. (2004): "‘Just sustainability’: the emerging discourse of environmental justice in Britain?" *The Geographical Journal*, Vol. 170(2): 155-164.
- Agyeman, J.; Bullard, R. D. y Evans, B. (2002): "Exploring the Nexus: Bringing Together Sustainability, Environmental Justice and Equity", *Space and Polity*, Vol. 6(1): 77-90.
- Amundsen, E. S. y Asheim, G. (1991): *The Notion of Sustainable Development*, *The Nordic Journal of Environmental Economics*, Vol. 2: 10-14.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1997): *Progreso de Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz*. Vitoria-Gasteiz: Oficina Agenda Local 21.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2010a): *2º Plan de Acción de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz. "Vitoria-Gasteiz hacia el desarrollo sostenible"*. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2010b): *Capital Verde Europea 2012-2013*. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014): *Anuario Estadístico 2014*. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015): *Boletín de la Agenda 21 (2015)*. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Baker, S. (2006): *Sustainable Development*. London: Routledge.
- Baker, S.; Konsis, M.; Richardson, D. y Young, S. (eds) (1997): *The Politics of Sustainable Development: Theory and Practice within the European Union*. London: Routledge.
- Banco Mundial (2007): *World Development Indicators 2007*. Washington D.C: The World Bank.
- Barbier, E. B.; Burgess, J. C. y Folke, C. (1994): *Paradise Lost? The Ecological Economics of Biodiversity*. London: Earthscan.
- Bárcena Ortiz de Urbina, Y. (sin fecha): *Huertos Urbanos Municipales en Vitoria: Un Nuevo Equipamiento para la Ciudad*. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Baxter, P. y Jack, S. (2008): "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers", *The Qualitative Report*, Vol 13(4): 544-559.
- BCN Ecología (2010): *Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz*. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona.
- Bebbington, J. y Dillard, J. (2009): "Social sustainability: An organizational-level analysis", en: Dillard, J.; King, M. y V. Dujon (eds.) *Understanding the Social Dimension of Sustainability*, pp: 157-173. London: Routledge.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: towards a new modernity*. London: Sage.

- Beckerman, W. (1999): "Sustainable Development and Our Obligation to Future Generations", en A. Dobson (ed): *Fairness and Futurity*, pp. 71-92. Oxford: Oxford University Press.
- Been, V. (1994): "Locally Undesirable Land Uses in Minority Neighborhoods: Disproportionate Siting or Market Dynamics?" *Yale Law Review*, Vol. 103: 1383-1422.
- Best Foot Forward (BFF) (2002): *City limits: a resource flow and ecological footprint analysis of Greater London*. Oxford: BFF. En línea: <http://www.citylimitslondon.com/downloads/Complete%20report.pdf>.
- Boerner, C. y Lambert, T. (1995): "Environmental Injustice", *The Public Interest*, (Winter): 61-82.
- Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTH A, 27 de abril de 2015): *Ordenanza municipal de uso de huertos urbanos*.
- Bolund, P y S. Hunhammar (1999): "Ecosystem services in urban areas", *Ecological Economics*, Vol. 29: 293-301.
- Bosque Sendra, J.; Díaz Castillo, C. y Díaz Muñoz, M. A. (2001-2002): "De la Justicia Espacial a la Justicia Ambiental en la Política de Localización de Instalaciones para la Gestión de Residuos en la Comunidad de Madrid", *Boletín de la Real Sociedad Geográfica*, CXXXVII-CXXXVIII: 89-114.
- Boström, M. (2009): "Challenges in incorporating the social dimension in a transnational sustainability project. The case of the FSC". Paper to the *9th European Sociological Association Conference*, RN 12, 02-05 September 2009.
- Botkin, D. E. y Beveridge, C. E. (1997): "Cities as environments", *Urban Ecosystems*, Vol. 1: 3-19.
- Bowers, J. (1997): *Sustainability and Environmental Economics: An Alternative Text*. Harlow: Longman.
- Boyce, J. K. (1994): "Inequality as a Cause of Environmental Degradation", *Ecological Economics*, Vol. 11: 169-178.
- Boyce, J. K. (2007): *Is Inequality Bad for the Environment?* Political Economy Research Institute. Working Paper nº 135. Amherst: University of Massachusetts Amherst.
- Boyce, J. K.; Klemer, A. R.; Templet, P. H. y Willis, C. E. (1999): "Power distribution, the environment, and public health: A state-level analysis", *Ecological Economics*, Vol. 29(1): 127-140.
- Brainard, J. S.; Jones, A. P.; Bateman, I. J.; Lovett, A. A. y Fallon, P. J. (2002): "Modelling environmental equity: access to air quality in Birmingham, England", *Environment and Planning A*, Vol. 34: 695-716.
- Brown, N.; Griffis, R.; Hamilton, K.; Iris, S. y Kanouse, S. (2007): "What Makes Justice Spatial? What Makes Spaces Just? Three Interviews on the Concept of Spatial Justice. Interview with Don Mitchell". *Critical Planning*, (Summer): 7-28.

- Brown, P. (2008): "Immigration, Settlement and Cultural Diversity: Towards Narrative Research Methods", en: P. J. Maginn; S. M. Thompson y M. Tonts (eds.): *Volume 9 - Qualitative Urban Analysis: An International Perspective*, pp: 135-153. Oxford: Elsevier.
- Bryant, B. (1995): "Introduction", en: B. Bryant (ed.): *Environmental Justice. Issues, Policies, and Solutions*, pp: 1-8. Washington D.C.: Island Press.
- Bryman, A. (1999): "The debate about quantitative and qualitative research", en: A. Bryman y R.G. Burgess (eds.): *Issues in Qualitative Research Vol. IV*, pp: 35-69. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Bullard, R. D. (1983): "Solid Waste Sites and the Houston Black Community", *Sociological Inquiry*, Vol. 53(Spring): 273-288.
- Bullard, R. D. (1990): *Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality*. Boulder: Westview Press.
- Bullard, R. D. (2005): "Environmental Justice in the Twenty-first Century", en: R. D. Bullard (ed.): *The Quest for Environmental Justice. Human Rights and the Politics of Pollution*, pp: 19-42. San Francisco: Sierra Club Books.
- Bullard, R. D. y Wright, B. H. (1986): "The Politics of Pollution: Implications for the Black Community", *Phylon*, Vol. 47(1): 71-78.
- Bunge, C.; Hornberg, C. y A. Pauli (2012): "Towards environmental justice – fields of action for research, politics and practice", *UMWELT und MENSCH – INFORMATIONSDIENST*, Vol. 2: 9-17.
- Byrne, J.; Glover, L. y Martinez, C. (2002): *Environmental Justice: Discourses in International Political Economy Energy and Environmental Policy*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
- Cabeza Gútes, M. (1996): "The concept of weak sustainability", *Ecological Economics*, Vol. 17: 147-156.
- Campbell, S. (1996): "Green Cities, Growing Cities, Just Cities?: Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development", *Journal of the American Planning Association*, Vol. 62(3): 296-312.
- Carr, S.; Francis, M.; Rivlin, L. G. y Stone, A. M. (1992): *Public Space*. New York: Cambridge University Press.
- Carter, N. (2007): *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Center for International Environmental Law (CIEL) (2002): *One Species. One Planet: Environmental Justice and Sustainable Development*. Washington D.C.: CIEL.

- Centro de Estudios Ambientales (CEA) (2006): *Vitoria-Gasteiz hacia la Sostenibilidad. Transformando las Ideas en Acción (2002-2007) Memoria*. Centro de Estudios Ambientales: Vitoria-Gasteiz.
- Centro de Estudios Ambientales (CEA) (2009): *Geo Vitoria-Gasteiz. Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad*. Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Centro de Estudios Ambientales (CEA) (2012a): *250.000 árboles y arbustos para el Anillo Verde. Tejiendo la infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz*. Centro de Estudios Ambientales: Vitoria-Gasteiz.
- Centro de Estudios Ambientales (CEA) (2012b): *El Anillo Verde Interior. Hacia una infraestructura verde urbana en Vitoria-Gasteiz*. Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales.
- Centro de Estudios Ambientales (CEA) (2014): *La infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz*. Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales.
- Cohen, S.; Demeritt, D., Robinson, J. y Rothman, D. (1998): "Climate Change and Sustainable Development: towards dialogue", *Global Environmental Change*, Vol. 8 (4): 341-371.
- Cole, L. W. y Foster, S. R. (2001): *From the Ground Up. Environmental Racism and the Rise of the Environmental Justice Movement*. New York: New York University Press.
- Colletta, N. J. y Cullen, M. L. (2000): *Violent Conflict and The Transformation of Social Capital. Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala and Somalia*. Washington, D.C: The World Bank.
- Commoner. B. (1987): "A Reporter at Large (The Environment)", *The New Yorker*, Vol. 63(17): 46-71.
- Connelly, S. (2007): "Mapping Sustainable Development as a Contested Concept", *Local Environment*, Vol. 12(3): 607-621.
- Constanza, R. (1991): *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*. New York: Columbia University Press
- Constitución Española (1978): *Constitución Española*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Cook, K. E. (2008): "In-Depth Interviews", en: L.M. Given (ed.): *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, pp: 422-423. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2013): *Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches (3rd edition)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dale, A. (2001): *At the Edge. Sustainable Development in the 21st Century*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Daley, R. M. (2001): "Revitalizing Chicago through Parks and Public Spaces", *Places*, Vol. 15(3): 26-29.

- Daly, H. E. (1990): "Toward Some Operational Principles of Sustainable development". *Ecological Economics*, Vol. 2(1): 1-6.
- Dawson, J. I. (2000): "The two faces of environmental justice: lessons from the eco-nationalism phenomenon", *Environmental Politics*, Vol. 9(2): 22-60.
- Dawson, J. I. (2001): "Latvia's Russian minority: balancing the imperatives of regional development and environmental justice", *Political Geography*, Vol. 20(7): 787-815.
- Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (2005): *Securing the future. Delivering UK sustainable development strategy*. London: The Stationery Office.
- Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) (2006): *The UK Fuel Poverty Strategy. 4th Annual Progress Report*. London: DEFRA.
- Dobson, A. (1997): *Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI*. Paidós Ibérica.
- Dobson, A. (1998) *Justice and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Dobson, A. (1999): "Introduction", en: A. Dobson (ed.): *Fairness and Futurity: Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, pp: 1-18. Oxford: Oxford University Press.
- Dobson, A. (2003): "Social Justice and Environmental Sustainability: Ne'er the Twain Shall Meet?" en: J. Agyeman; R. D. Bullard y B. Evans (eds.): *Just Sustainabilities. Development in an Unequal World*, pp: 83-95. London: Earthscan.
- Dresner, S. (2002): *The Principles of Sustainable Development*. London: Earthscan Publications Ltd.
- DTLR (2002): *Green Spaces, Better Places. Final Report of the Urban Green Spaces Taskforce*. London: DTRL.
- Elliott, J. R. y Pais, J. (2006): "Race, class, and Hurricane Katrina: Social differences in human responses to disaster", *Social Science Research*, Vol. 35(2): 295-321.
- Elo, S. y Kyngäs, H. (2008): "The qualitative content analysis process", *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 62(1): 107-115.
- Elvers, H.; Gross, M. y Heinrichs, H. (2009): "The Diversity of Environmental Justice", *European Societies*, Vol. 10(5): 835-856.
- Erlandson, D. A.; Harris, E. L.; Skipper, B. L. y S. D. Allen (1993): *Doing naturalistic inquiry: a guide to methods*. London: Sage.
- Estes, R.J. (1993): "Toward Sustainable Development: From Theory to Praxis", *Social Development Issues*, Vol.15: 1-29.
- European Commission Expert Group on the Urban Environment (1996): *European Sustainable Cities Report*. Brussels: European Commission.

- European Environment Agency (2005): *Environment and Health*. EEA Repot No 10/2005. Luxembourg: EEA.
- European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE) (2009): *Evaluation of fuel poverty in Belgium, Spain, France, Italy and the United Kingdom*. EPEE Project WP2 - Deliverable 6.
- European Union Expert Group on the Urban Environment (1994): *European Sustainable Cities. First Report*. Brussels: European Union.
- European Union Sustainable Development Strategy (2006): *Renewed EU Sustainable Development Strategy*. Brussels: European Commission.
- European Union Sustainable Development Strategy (2009): *Review of the European Union Strategy for Sustainable Development*. Brussels: European Commission.
- Faber, D. y McCarthy, D. (2003): "Neo-Liberalism, Globalization, and the Struggle for Ecological Democracy: Linking Sustainability and Environmental Justice", en: J. Agyeman; R. D. Bullard y B. Evans (eds.): *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, pp: 38-63. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fainstein, S. S. (2005): "Cities and Diversity", *Urban Affairs Review*, Vol. 41(1): 3-19.
- Fainstein, S. S. (2006): *Planning and the Just City*. Conference on Searching for the Just City, GSAPP, Columbia University, April 29, 2006.
- Fairburn, J. y Smith, G. (2008): *Working towards a better quality of life. Environmental justice in South Yorkshire*. Leeds: Environmental Agency.
- Ferris, D. y Hahn-baker, D. (1995): "Environmentalists and Environmental Justice Policy", en: B. Bryant (ed.): *Environmental Justice. Issues, Policies, and Solutions*, pp: 66-75. Washington D.C: Island Press.
- Ferris, J; Norman, C. y J. Sempik (2001): "People, Land and Sustainability: Community Gardens and the Social Dimension of Sustainable Development", *Social Policy & Administration*, Vol. 35(5): 559-568.
- Field, J. (2003): *Social Capital*. New York: Routledge.
- Fielding, J. y Burningham, K. (2005): "Environmental Inequality and Flood Hazard", *Local Environment*, Vol. 10(4): 379-395.
- Finch, J. (1999): "Developing Policy-oriented Qualitative Research", en: A. Bryman y R. G. Burgess (eds.): *Issues in Qualitative Research Vol. IV*, pp: 180-188. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Finlay, L. (2006): "Rigour", 'ethical integrity' or 'artistry'? Reflexively reviewing criteria for evaluating qualitative research", *British Journal of Occupational Therapy*, Vol. 69(7), 319-326.
- Flick, U. (2007): *Introducción a la investigación cualitativa (2ª edición)*. Madrid: Ediciones Morata.

- Foladori, G. (1999): "Sustentabilidad ambiental y contradicciones sociales", *Ambiente & Sociedade*, Vol. 5: 19-34.
- Foley, J. (2004): "Overview", en: J. Foley (ed.): *Sustainability and Social Justice*, pp: 1-14. London: Institute for Public Policy Research.
- Fort, M. (2006): "La Agenda 21 Local. Sus Propuestas y Características", en: M. A.Murga Menoyo (Coord.): *Desarrollo Local y Agenda 21. Una Visión Social y Educativa*, pp: 73-102. Madrid: Pearson Education.
- Fuel Poverty Advisory Group (FPAG) (2008): *Fuel Poverty Advisory Group Seventh Annual Report (For England)*. London: Department of Energy and Climate Change.
- García, E. (1999): *El trampolín fáustico: Ciencia, mito y poder en el desarrollo sostenible*, Valencia: Tilde.
- García, E. (2004): *Medio ambiente y sociedad. La civilización industrial y los límites del planeta*. Madrid: Alianza Editorial.
- Giradet, H. (1999): *Creating Sustainable Cities. Schumacher Briefing number 2*. Devon: Green Books.
- Glaser, B. y Strauss, A. (1967): *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. New York: Aldine Publishing Company.
- Gow, D. (1992): "Poverty and Natural Resources: Principles for Environmental Management and Sustainable Development", *Environmental Impact Assessment Review*, Vol. 12(1-2): 49-65.
- Graneheim, U.H. y Lundman, B. (2004): "Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness", *Nurse Education Today*, Vol. 24: 105-112.
- Granovetter, M. S. (1973): "The Strength of Weak Ties", *American Journal of Sociology*, Vol. 78(6): 1360-1380.
- Grass, R. (1995): "Environmental Education and Environmental Justice: A Three Circles Perspective", *Pathways to outdoor Communication*, Vol. 5(1): 9-13.
- Greenhalgh, L y K. Worpole (1995): *Park Life. Urban Parks and Social Renewal*. London: Demos.
- Guest, G.; Bunce, A. y L. Johnson (2006): "How Many Interviews Are Enough? An Experiment With Data Saturation and Variability", *Field Methods*, Vol. 18(1): 59-82.
- Guha, R. y Martinez Alier, J. (1997): *Varieties of environmentalism: essays North and South*. London: Earthscan.
- Hammersley, M. (1992): *What's wrong with Ethnography? Methodological Explorations*. London: Routledge.

- Hancock, P. (2008): "The Utility of Qualitative Research: A Study of Gender Empowerment in Sri Lanka", en: P. J. Maginn; S. M. Thompson y M. Tonts (eds.): *Qualitative Urban Analysis: An International Perspective*, pp: 177-196. Oxford: Elsevier.
- Hanley, N.; Shogren, J. F. y B. White (2001): *Introduction to Environmental Economics*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Hardin, G. (1968): "The Tragedy of the Commons". *Science*, Vol.162 (3859): 1243–1248.
- Harper, K.; Steger, T. y R. Filčák (2009): "Environmental Justice and Roma Communities in Central and Eastern Europe", *Environmental Policy and Governance*, Vol. 19(4): 251-268.
- Harrison, C.; Burgess, J.; Millward, A. y G. Dawe (1995): "Accessible natural greenspace in towns and cities: A review of appropriate size and distant criteria", *English Nature Research Reports No. 153*.
- Harvey, D. (1996): *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Haughton, G. (1999): "Environmental Justice and the Sustainable City", *Journal of Planning Education and Research*, Vol.18: 233-243.
- Heerink, N.; Mulatu, A. y E. Bulte (2001): "Income inequality and the environment: aggregation bias in environmental Kuznets curves", *Ecological Economics*, Vol. 38: 359-367.
- Heiman, M. K. (1996): "Race, waste, and class: new perspectives on environmental justice", *Antipode*, Vol. 28(2): 111-121.
- Heinrich, J.; Mielck, A.; Schäfer, I. y W. Mey (2000): "Social inequality and environmentally-related diseases in Germany: Review of empirical results", *Sozial- und Präventivmedizin*, Vol. 45: 106-118.
- Helfand, G. E. y J. L. Peyton (1999): "A Conceptual Model of Environmental Justice", *Social Science Quarterly*, Vol. 80(1): 68-83.
- Holifield, R. (2001): "Defining Environmental Justice and Environmental Racism", *Urban Geography*, Vol. 22(1): 78-90.
- Holland, L. (2004): "Diversity and Connections in Community Gardens: a contribution to local sustainability", *Local Environment*, Vol. 9(3): 285-305.
- Holloway, J. (1997): *Basic Concepts for Qualitative Research*. Oxford: Blackwell Science.
- Hsieh, H. y Shannon, S.E. (2005): "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", *Qualitative Health Research*, Vol. 15(9): 1277-1288.
- Hurrell, A. y Kingsbury, B. (1992): "The international politics of the environment. An Introduction", en: Hurrell, A. y Kingsbury, B. (Eds.). *The international politics of the environment. Actors, Interests and Institutions*, pp: 1-50. Oxford: Clarendon Press.

- Ikeme, J. (2003): "Equity, environmental justice and sustainability: incomplete approaches in climate change politics", *Global Environmental Change*, Vol. 13: 195-206.
- Inglehart, R. (1977): *The Silent Revolution - Changing Values and Political Styles among Western Mass Publics*. Princeton: Princeton University Press.
- IPCC (2013). *Climate Change 2013. The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- IUCN-UNEP-WWF (1980): *The World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*. Gland: International Union for Conservation of Nature (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) and World Wide Fund for Nature (WWF).
- Jacobs, M. (1991): *The Green Economy*. London: Pluto.
- Jacobs, M. (1995): *Reflections on the Discourse and Politics of Sustainable Development: Part I - Faultlines of Contestation and the Radical Model*. Lancaster, Centre for the Study of Environmental Change, University of Lancaster.
- Jacobs, M. (1999): "Sustainable Development as a Contested Concept", en: A. Dobson (ed.): *Fairness and Futurity. Essays on Environmental Sustainability and Social Justice*, pp: 21-45. Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, D. (2008): "Confirmability", en: L. M. Given (ed.): *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, pp: 112. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Jermé, E.S y S. Wakefield (2013): "Growing a just garden: environmental justice and the development of a community garden policy for Hamilton, Ontario", *Planning Theory & Practice*, Vol. 14 (3): 295-314.
- Jimenez Beltran, D. (2008): *Desafíos para la Sostenibilidad*. Conferencia. Sociedad y Medio Ambiente. Preparando Escenarios de Futuro. Pamplona, 29 y 30 de Mayo de 2008.
- Jordan, C. y D. Snow (1992): "Diversification, Minorities, and the Mainstream Environmental Movement", en: C. Snow (ed.): *Voices from the Environmental Movement*, pp: 71-109. Washington D. C.: Island Press.
- Kameri-Mbote, P. y P. Cullet (1996): "Environmental justice and sustainable development: integrating local communities in environmental management international environmental law research centre (IELRC)", *IELRC Working Paper* No. 1996-1.
- Kuo, F. E.; Sullivan, W.C.; Coley, R.L. y L. Brunson (1998): "Fertile Ground for Community: Inner-City Neighborhood Common Spaces", *American Journal of Community Psychology*, Vol. 26 (6): 823-841.
- Kvale, S. (1996): *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Lafferty, W. M. y Langhelle, O. (1999): "Sustainable development as concept and norm", en: Lafferty, W. M. y Langhelle, O. (eds.): *Towards sustainable development: on the goals of development - and the conditions of sustainability*, pp: 1-29. Houndmills: MacMillan Press Ltd.
- Lamela, A.; Molini, F. y M. Salgado (2011): "En búsqueda de unas recomendaciones urbanísticas mundiales de densidad y espacios verdes", *Nimbus*, Vol. (27-28): 98-118.
- Land Use Consultants (2004): *Making the links: greenspace and quality of life*. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 060 (ROAME No. F03AB01).
- Langhelle, O. (2000): "Sustainable Development and Social Justice. Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice", *Environmental Values*, Vol. 9(3): 295-323.
- Lasley, C. B. (2008): "Creating an Environmentally Just Park System in Louisville, Ky.", *Projections*, Vol. 8: 134- 155.
- Laurian, L. (2008): "Environmental Injustice in France", *Journal of Environmental Planning and Management*, Vol. 51(1): 55-79.
- Lee, C. (1992): "Toxic Waste and Race in the United States", en: Bryant, B. y P. Mohai (eds.): *The Proceedings of the Michigan Conference on Race and the Incidence of Environmental Hazards. A Time for Discourse*, pp: 10-27. Boulder: Westview Press.
- Lees, L. (2003): "Urban geography: 'New' urban geography and the ethnographic void", *Progress in Human Geography*, Vol. 27(1): 107-113.
- Lehtonen, M. (2004): "The environmental-social interface of sustainable development: capabilities, social capital, institutions", *Ecological Economics*, Vol. 49: 199-214.
- Lélé, S. (1991): "Sustainable development: a critical review", *World Development*, Vol.19 (6): 607-621.
- Levine, R. S.; Dumreicher, H.; Radmard, T. y E. J. Yanarella (no date): *The Sustainable City of the 21st Century: Westbahnhof, Vienna – Theory and Practice*. En línea: http://www.cscdesignstudio.com/r_xxuia.html
- Lincoln, Y.S. y Guba, E.G. (1985): *Naturalistic Enquiry*. Londres. Sage.
- Littig, B. y Grießler, E. (2005): "Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory", *International Journal of Sustainable Development*, Vol. 8: 65-79.
- Little, C. E. (1990): *Greenways for America*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Lonely Planet (2015): *Vitoria-Gasteiz de cerca*. Barcelona. Lonely Planet Publications Pty. Ltd.
- Low, N. y B. Gleeson (1998): *Justice, Society and Nature. An exploration of political ecology*. London: Routledge.

- Low, S.; Taplin, D. y S. Scheld (2005): *Rethinking Urban Parks. Public Space and Cultural Diversity*. Austin: University of Texas Press.
- Lucas, K.; Walker, G.; Eames, M.; Fay, H. y M. Poustie (2004): *Environment and Social Justice: Rapid Research and Evidence Review*. London: Sustainable Development Research Network.
- Luttik, J. (2000): "The value of trees, water and open space as reflected by house prices in the Netherlands", *Landscape and Urban Planning*, Vol. 48: 161-167.
- Maller, C.; Townsend, M.; St Leger, L.; Henderson-Wilson, C.; Pryor, A.; Prosser, L. y M. Moore (2009): "Healthy Parks, Healthy People: The Health Benefits of Contact with Nature in a Park Context", *The George Wright Forum*, Vol. 26(2): 51-83.
- Manzi, T. y Jacobs, K. (2008): "Understanding Institutions, Actors and Networks: Advancing Constructionist Methods in Urban Policy Research", en: P. J. Maginn; S. M. Thompson y M. Tonts (eds.): *Qualitative Urban Analysis: An International Perspective*, pp: 29-50. Oxford: Elsevier.
- Marcus, C. C. y Barness, M. (1999): *Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations*. Wiley: New York.
- Martinez Iglesias, M. (2014): *Experts and Campaigners: scientific information and collective action in socio-ecological conflicts*. Valencia: Universitat de Valencia.
- Martinez-Alier, J. (2000): *Environmental Justice, Sustainability and Valuation*. Harvard Seminar on Environmental Values Tuesday, March 21, 2000.
- Martinez-Alier, J. (2003): "Scale, Environmental Justice, and Unsustainable Cities", *Capitalism Nature Socialism*, Vol.14 (4): 43-63.
- Maslow, A. (1954): *Motivation and Personality*. New York: Harper.
- Mason, M. (2010): "Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews", *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol. 11 (3): Art. 8.
- McIlvaine-Newsad, H. y Porter, R. (2013): "How Does Your Garden Grow? Environmental Justice Aspects of Community Gardens", *Journal of Ecological Anthropology*, Vol. 16(1): 69-75.
- McLaren, D. (2003): "Environmental Space, Equity and the Ecological Debt", en: J. Agyeman; R. D. Bullard y B. Evans (eds.): *Just Sustainabilities. Development in an Unequal World*, pp: 19-38. London: Earthscan
- McLaren, D.; Cottray, O.; Taylor, M.; Pipes, S. y S. Bullock (1999): *The geographic relation between household income and polluting factories*. London: Friends of the Earth Publishing.

- McLeod, H.; Langford, I.H.; Jones, A.P.; Stedman, J.R.; Day, R.J.; Lorenzoni, I. y I.J. Bateman (2000): "The relationship between socio-economic indicators and air pollution in England and Wales: implications for environmental justice", *Regional Environmental Change*, Vol. 1(2): 78-85.
- Mega, V. (1996): "Our city, our future: towards sustainable development in European cities", *Environment and Urbanization*, Vol. 8(1): 133-154.
- Melosi, M. V. (2004): *Garbage in the Cities. Refuse, Reform, and the Environment (Revised Edition)*. Pittsburgh: University of Pittsburgh
- Mendoza, E. (2010, 2 de diciembre): Entrevista. *Diario de Noticias de Álava*.
- Milbrath, L. W. (1984): *Environmentalists: Vanguard for a New Society*. Albany: SUNY Press.
- Miller, D. (2004): *Measuring Environmental Justice – The Third Dimension of Sustainable Development*. Paper for presentation to the 6th International Symposium on Urban Planning and Environment. Louisville, September 2004.
- Mitchell, D. (1995): "The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public and Democracy", *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 85(1): 108-133.
- Mitchell, G. y Dorling, D. (2003): "An environmental justice analysis of British air quality", *Environment and Planning A*, Vol. 35: 909-929.
- Mitchell, R. C. (1980): *Public Opinion on Environmental Issues: Results of a National Opinion Survey*. Washington, D.C.: President's Council on Environmental Quality.
- Moffatt, I. (2007): "Environmental space, material flow analysis and ecological footprinting", en: G. Atkinson; S. Dietz y E. Neumayer (eds.): *Handbook of Sustainable Development*, pp: 319-344. Cheltenham: Edward Elgar.
- Moffatt, I.; Hanley, N. y M. D. Wilson (2001): *Measuring and Modelling Sustainable Development*. New York and London: Parthenon Publishing.
- Mohai, P. (1990): "Black Environmentalism", *Social Science Quarterly*, Vol. 71(4): 744-765.
- Mohai, P. y B. Bryant (1992a): "Race, Poverty and the Environment", *EPA Journal*, Vol. 18(1): 6-9.
- Mohai, P. y B. Bryant (1992b): "Environmental Racism: Reviewing the Evidence", en: P. Mohai y B. Bryant (eds.): *Race and the Incidence of Environmental Hazards: A Time for Discourse*, pp: 163-176. Boulder, CO: Westview Press.
- Moral Santaella, C. (2006): "Criterios De Validez En La Investigación Cualitativa Actual", *Revista de Investigación Educativa*, Vol. 24 (1): 147-164.
- Moreno Jiménez, A. (2007): "¿Está equitativamente repartida la contaminación sonora urbana? Una evaluación desde el principio de justicia ambiental en la ciudad de Madrid", *Estudios Geográficos*. LXVIII, 263 (Julio-Diciembre): 595-626.

- Moreno Jiménez, A. y Cañada Torrecilla, R. (2007): "Justicia Ambiental y Contaminación Atmosférica por Dióxido de Azufre en Madrid: Análisis Espacio-Temporal y Valoración con Sistemas de Información Geográfica", *Boletín de la Asociación Geógrafos Españoles*. Vol. 44: 301-324.
- Morgan, D. L. (2008): "Sample Size", en: L.M. Given (ed.): *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, pp: 798. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Morse, S. y Stocking, M. (eds.) (1995): *People and Environment*. London: UCL Press.
- Muir, J. (2008): "Are you taking notes on us?" Reflections on case study research in urban environments", en: P. J. Maginn; S. M. Thompson y M. Tonts (eds.): *Qualitative Urban Analysis: An International Perspective*, pp: 105-134. Oxford: Elsevier.
- Munasinghe, M. (2001): "Exploring the linkages between climate change and sustainable development: A challenge for transdisciplinary research", *Conservation Ecology*, Vol. 5(1): 14.
- Murphy, R. (1994): "Environmental Classes and Environmental Conflict", en: *Rationality and Nature: A Sociological Inquiry into a Changing Relationship*, pp: 163-173. Boulder, CO: Westview, pp. 163-173.
- Naciones Unidas (1972): *Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano*. Naciones Unidas.
- Naciones Unidas (1993): *Agenda 21: Earth Summit - The United Nations Programme of Action from Rio*. New York: United Nations.
- Naciones Unidas (1995): *Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social*. Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995.
- Naciones Unidas (2007): *Urban Population, Development and the Environment*. New York: United Nations.
- Naredo, J. M. (1996): *Sobre el Origen, el Uso y el Contenido del Término Sostenible*. En línea: <http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html>.
- Nilsson, K. y Randrup, T. B. (1997): *Urban and peri-urban forestry*. Proceedings of the XI World Forestry Congress, pp: 97-110. Antalya, 13-22 de octubre: FAO.
- Norgaard, R. B. (1992): "Sustainability as Intergenerational Equity: Economic Theory and Environmental Planning", *Environmental Impact Assessment Review*, Vol. 12: 85-124.
- Novotny, P. (2000): *Where We Live, Work, and Play: The Environmental Justice Movement and the Struggle for a New Environmentalism*. Westport, Connecticut: Praeger.
- Nowak, D. J.; Crane, D. E. y J.C. Stevens (2006): "Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States", *Urban Forestry & Urban Greening*, Vol. 4(3-4): 115-123.

- O'Riordan, T. (1988): "The Politics of Sustainability", en: R. K. Turner (ed.): *Sustainable Environmental Management: Principles and Practice*, pp: 37-69. London: Belhaven.
- O'Connor, M. y Martínez Alier, J. (1998): "Ecological Distribution and Distributed Sustainability", en: Faucheux, S.; O'Connor, M. y Van der Straaten, J. (ed.). *Sustainable Development: Concepts, Rationalities and Strategies*, pp: 33-53. London: Kluwer Academic Publishers.
- Onwuegbuzie, A. J. y Leech, N. L. (2007): "A Call for Qualitative Power Analysis", *Quality and Quantity*, Vol. 41: 105-121.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (1994): *Cities for the 21st Century*. Paris: OECD Publishing.
- Orive, L.A. (2009): "Paisajes de relación ciudad-naturaleza. Ensayo de modelos de planificación territorial más sostenible en Vitoria-Gasteiz", en: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Centro de Estudios Ambientales (eds.) *Ciudades+Verdes*, pp. 137-152. Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales.
- Orr, S; Paskin, J. y S. Chaytor (2014): *Valuing Urban Green Space: Challenges and Opportunities*. UCL Policy Briefing, octubre 2014.
- Ozcáriz, J. (2012): "Vitoria-Gasteiz. Green Capital 2012. *Hacia un sistema urbano más sostenible*", en Centro de Estudios Ambientales (CEA) (ed.): Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012 *Propuestas Para La Reflexión*, pp: 15-27. Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales.
- Pardo, M. (1998): "Sociología y Medio Ambiente: Estado de la Cuestión", *Revista Internacional de Sociología (RIS)*, Vol. 19-20: 329-367.
- Pardo, M. (2010): "Cambio Climático y Pobreza: Una Mala Combinación", en: Pardo, M y Rodríguez, M. (eds.): *Cambio Climático y Lucha contra la Pobreza*. Siglo XXI, pp: 1-24. Fundación Carolina. Madrid.
- Pastor, M. (2001): *Building Social Capital to Protect Natural Capital: The Quest for Environmental Justice*. Working Paper Series Number 11. University of Massachusetts Amherst: Political Economy Research Institute.
- Patel, Z. (2006): "Of questionable value: The role of practitioners in building sustainable cities", *Geoforum*, Vol. 37: 682-694.
- Patton, M. Q. (1990): *Qualitative Evaluation and Research Methods [2nd Edition]*. London: Sage.
- Pearce, D. (1993): *Economic values and the natural world*. London: Earthscan.
- Pearce, D. y Barbier, E. B. (2000): *Blueprint for a sustainable economy*. London: Earthscan.
- Pearce, D., Markandya, A. y E. B. Barbier (1989): *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.

- Pecurul, M; Cristóbal, R. y D. Moscoso (2006): "La contribución de los espacios verdes y los bosques a la mejora de la salud y el bienestar", IESA Working Paper Series.
- Pellow, D. N. (2000): "Environmental Inequality Formation: Toward a Theory of Environmental Injustice", *American Behavioral Scientist*, Vol. 43(4): 581-601.
- Pellow, D. N. (2009): "We Didn't Get the First 500 Years Right, So Let's Work on the Next 500 Years: A Call for Transformative Analysis and Action", *Environmental Justice*, Vol. 2(1): 3-6.
- Peñalosa, E. (2001): "Parks for Livable Cities: Lessons from a Radical Mayor", *Places*, Vol. 15(3): 30-33.
- Peñalosa, E. (2008, 2 de mayo): "Feature Interview". *Urbanage*.
- Pennycook, F.; Barrington-Craggs, R.; Smith, D. y S. Bullock (2001): *Environmental Justice. Mapping transport and social exclusion in Bradford*. London: Friends of the Earth.
- Pepper, D. (1984): *The Roots of Modern Environmentalism*. Croom Helm: London.
- Pezzullo, P. C. y Sandler, R. (2007): "Introduction. Revisiting the Environmental Justice Challenge to Environmentalism", en: R. Sandler y P. C. Pezzullo (eds.): *Environmental Justice and Environmentalism. The Social Justice Challenge to the Environmental Movement*, pp: 1-24. Cambridge, MA: MIT Press.
- Poland, B. D. (2008): "Transcription", en: L. M. Given (ed.): *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, pp: 884-885. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Portes, A. (1998): "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", *Annual Review Sociology*, Vol. 24: 1-24.
- Poustie, M. (2004): *Environmental Justice in SEPA's Environmental Protection Activities: A Report for the Scottish Environmental Protection Agency*. SEPA
- Prats, F. (2008): "Energía/Clima y Ciudades en España ¿Cambio Climático o Cambio Global?", *Ambienta*. Vol. 74 (Feb.): 16-20.
- Prats, F. y Ozcáriz, J. (2012): "Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Nuevos tiempos, nuevos paradigmas. Una salida urbana a la crisis en clave sostenible", en Centro de Estudios Ambientales (CEA) (ed.): *Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012 Propuestas Para La Reflexión*, pp: 99-128. Vitoria-Gasteiz: Centro de Estudios Ambientales.
- Press, V. y Mwatsama, M. (2004): *Nutrition + food poverty: A toolkit for those involved in developing or implementing a local nutrition and food poverty strategy*. London: National Heart Forum.
- Pretty J.; Peacock J; Hine R; Sellens M; South N. y M. Griffin (2007): "Green exercise in the UK countryside: effects on health and psychological well-being", *Journal of Environmental Planning and Management*, Vol. 50(2), 211-231.

- Priego González de Canales, C. (2011): "Áreas verdes en las ciudades: Nuevas formas de entender la naturaleza urbana", *Ambienta*, Vol. 97: 46-63.
- Prugh, T.; Constanza, R. y H. Daly (2000): *The Local Politics of Global Sustainability*. Washington D.C: Island Press.
- Purifoy, D. (2014): "Food Policy Councils: Integrating Food Justice and Environmental Justice", *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. XXIV: 375-398.
- Ragin, C. C. (1994): *Constructing Social Research*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Ramos Torre, R. (2003). "Al hilo de la precaución: Jonas y Luhmann sobre la crisis ecológica", *Política y Sociedad*, Vol. 40 (3): 23-51.
- Rawls, J. (1971): *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Redclift, M. y Woodgate, G. (1997): *Sociología del medio ambiente. Una perspectiva internacional*. Madrid: McGraw Hill.
- Rees, W. E. y Westra, L. (2003): "When Consumption does Violence: Can there be Sustainability and Environmental Justice in a Resource-limited World?" en: J. Agyeman; R. D. Bullard y B. Evans (eds.): *Just Sustainabilities. Development in an Unequal World*, pp: 99-124. London: Earthscan
- Rhodes, E. L. (2003): *Environmental Justice in America. A New Paradigm*. Indiana University Press: Bloomington & Indianapolis.
- Richardson, D. (1997): "The Politics of Sustainable Development", en: S. Baker; M. Konsis; D. Richardson y S. Young (eds.): *The Politics of Sustainable Development: Theory and Practice within the European Union*, pp: 41-58. London: Routledge.
- Riechmann, J. (1995): "Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación", en: Riechmann, J. (ed.): *De la economía a la ecología*, pp: 11-36. Madrid: Trotta.
- Ritchie, J.; Lewis, J. y G. Elam (2003): "Designing and Selecting Samples", en: J. Ritchie y J. Lewis (eds.): *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers*, pp: 77-108. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Rogers, R. (1999): *Towards a Strong Urban Renaissance*. An independent report by members of The Urban Task Force.
- Roseland, M. (2005): *Toward Sustainable Communities (Revised edition)*. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers.
- Salkin, P.E; Dernbach, J.C. y D.A. Brown (2012): "Sustainability as a Means of Improving Environmental Justice", *Journal of Sustainability and Environment Law*, Vol. 19(1): 1-34.
- Sandercock, L. (2003): *Cosmopolis II. Mongrel Cities in the 21st Century*. London: Continuum.

- Sandín Esteban, M. Paz (2000): "Criterios de validez en la investigación cualitativa: de la objetividad a la solidaridad", *Revista de Investigación Educativa*, Vol. 18(1): 223-242.
- Saumure, K. y Given, L. M. (2008): "Nonprobability Sampling", en L. M. Given (ed.): *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, pp: 562. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Scandrett, E. (2007): *Environmental justice in Scotland: policy, pedagogy and praxis*. Edinburgh: Queen Margaret University.
- Schlosberg, D. (1999): *Environmental Justice and the New Pluralism. The Challenges of Difference for Environmentalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Schlosberg, D. (2007): *Defining Environmental Justice. Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Schutt, R. K. (2012): *Investigating the Social World. The Process and Practice of Research (7th edition)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Scruggs, L. A. (1998): "Political and economic inequality and the environment", *Ecological Economics*, Vol. 26: 259-275.
- Sen, A. (1987): *The Standard of Living*. The Tanner Lectures on Human Values. Clare Hall, Cambridge University, 11-12 March, 1985.
- Serageldin, I. (1996): "Sustainability and the Wealth of Nations: First Steps in an Ongoing Journey". En: *Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series*, nº 5. Washington D.C.: World Bank.
- Shellenberger, M. y Nordhaus, T. (2004): *The Death of Environmentalism. Global Warming Politics in a Post-Environmental World*. San Francisco: Breakthrough Institute.
- Shenton, A. K. (2004): "Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects", *Education for Information*, Vol. 22: 63-75.
- Sherer, P. M. (2003): *The Benefits of Parks*. San Francisco: The Trust for Public Land.
- Smith, D. y Blowers, A. (1992): "Here today, there tomorrow: the politics of hazardous waste transport and disposal", en M. Clark; D. Smith y A. Blowers (eds.): *Waste location: spatial aspects of waste management, hazards and disposal*, pp: 208-226. London: Routledge.
- Sneddon, C., Howarth, R. B. y Norgaard, R. B. (2006): "Sustainable development in a post-Brundtland world", *Ecological Economics*, Vol. 57(2): 253-268.
- Social Exclusion Unit (2001): *A New Commitment to Neighbourhood Renewal: National Strategy Action Plan*. London: Cabinet Office.
- Spangenberg, J. H. (ed.) (1995): *Towards Sustainable Europe. A Study from the Wuppertal Institute for Friends of the Earth Europe*. Brussels: FoE Publications Ltd.

- Stake, R. E. (1995): *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Stake, R. E. (2005): "Qualitative Case Studies", en: N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (eds.): *The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd edition)*, pp: 443-466. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Steger, T. (ed.) (2007): *Making the Case for Environmental Justice in Central & Eastern Europe*. Budapest: CEU Centre for Environmental Policy and Law.
- Stephens, C.; Bullock, S y A. Scott (2001): *Environmental justice. right and means to a healthy environment for all*, Special Briefing No. 7. University of Sussex. Published by the ESRC Global Environmental Change Programme.
- Stevenson, S.; Stephens, C.; Landon, M.; Pattendon, S.; Wilkinson, P. y T. Fletcher (1998): "Examining the inequality and inequity of car ownership and the effects of pollution and health outcomes such as respiratory disease. Summary of a presentation at the 10th Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Boston", *Epidemiology*, Vol. 9(4): S29.
- Strauss, A. L. (1987): *Quality Analysis for Social Scientists*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stymne, S. y Jackson, Tim (2000): "Intra-generational equity and sustainable welfare: a time series analysis for the UK and Sweden", *Ecological Economics*, Vol. 33: 219-236.
- Taylor, D. E. (2000): "The Rise of the Environmental Justice Paradigm: Injustice Framing and the Social Construction of Environmental Discourses", *American Behavioral Scientist*, Vol. 43(4): 508-580.
- Taylor, J y F. Coalter (2001): *Realising the potential of cultural services. The case of urban parks, spaces and the countryside*. London: Local Government Association.
- Tibbatts, D. (2002): *Your Parks. The Benefits of Parks and Green Space*. Urban Parks Forum.
- Tjallingii, S. (2005): "Green structure and urban planning, general outcomes of COST C11", en Werquin, A.C.; Duhem, B.; Lindholm, G.; Opperman, B.; Pauleit, S y S. Tjallingii (eds.): *Green Structure and Urban Planning. Final Report*, pp: 15-38. Brussels: COST Action C11.
- Torgerson, D. (1995): "The uncertain quest for sustainability: Public discourse and the politics of environmentalism", en: F. Fisher y M. Black (eds.): *Greening Environmental Policy: The Politics of a Sustainable Future*, pp: 3-20. London: Paul Chapman Publishing.
- Torras, M. y Boyce, J. K. (1998): "Income, inequality, and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets Curve", *Ecological Economics*, Vol. 25(2): 147-160.
- Turner, R. K. (1992): *Speculations on Weak and Strong Sustainability*. University of East Anglia and University College London: Centre for Social and Economic Research on the Global Environment.

- Turner, R. K. (1993): "Sustainability: Principles and Practice", en: R. K. Turner (ed.): *Sustainable Environmental Economics and Management*, pp: X-X. London: Belhaven Press.
- Tyrväinen, L.; Pauleit, S.; Seeland, K. y S. de Vries (2005): "Benefits and Uses of Urban Forests and Trees", en: Konijnendijk, C.C.; K. Nilsson; T.R. Randrup y J. Schipperijn (eds.): *Urban Forests and Trees: A Reference Book*, pp: 81-114. Berlin: Springer.
- Tzoulas, K. y James, P (2004): *Our Natural Heritage: Urban Parks*. The Research Institute for the Built and Human Environment. Manchester: University of Salford.
- UN Economic Commission for Europe (1998): *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)*. Geneva: UNECE.
- UNDP (2009): *Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development*. New York: United Nations Development Program.
- Unión Europea (2014): *Construir una infraestructura verde para Europa*. Unión Europea.
- United Church of Christ Commission for Racial Justice (1987): *Toxic Wastes and Race in the United States*. New York: United Church of Christ Commission for Racial Justice.
- URGE (2004): *Making Greener Cities*. URGE - Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions. Leipzig: Centre for Environmental Research.
- US General Accounting Office (1983): *Siting of Hazardous Waste Landfills and their Correlation with Racial and Economic Status of Surrounding Communities*. Washington, DC: GPO.
- Valles, M. S. (1999): *Técnicas cualitativas de Investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Varga, C.; Kiss, I. y I. Ember (2002): "The Lack of Environmental Justice in Central and Eastern Europe", *Environmental Health Perspectives*, Vol. 110 (11): A662-A663.
- Villapún Ansótegui, E. (sin fecha): *Vitoria-Gasteiz. Geografía Urbana*. En línea: <https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http.../adjuntos/es/27/.../2790.doc>
- Wackernagel, M. y W. E. Rees (1996): *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Walker, G. Bulkeley, H. (2006): "Geographies of Environmental Justice (Editorial)", *Geoforum*, Vol. 37: 655-659.
- Walker, G.; Burningham, K.; Fielding, J.; Smith, G.; Thrush, D. y H. Fay (2006): *Addressing Environmental Inequalities: Flood Risk*. Bristol: Environment Agency.
- Walker, G.; Demery, S.; Petts, J. y G. Smith (2007): *Addressing environmental inequalities: flood risk, waste management and river water quality in Wales*. Bristol: Environment Agency.

- Walker, G.; Fairburn, J. y K. Bickerstaff (2001): *Ethnicity and risk: the characteristics of populations in census wards containing major accident hazards in England and Wales*. Occasional Papers, Series A: Geographical Research, Department of Geography: Staffordshire University.
- Walker, G.; Fairburn, J.; Smith, G. y G. Mitchell (2003): *Environmental quality and social deprivation*. R&D Technical Report E2-067/1/TR. Environment Agency.
- Ward Thompson, C. (2002): "Urban open space in the 21st century", *Landscape and Urban Planning*, Vol. 60(1): 59-72.
- Warner, K. (2002): "Linking Local Sustainability Initiatives with Environmental Justice", *Local Environment*, Vol. 7(1): 35-47.
- Waters, T y Smith, M. (2002): *The planning and management of urban open space in Scotland. a case study based on the development of Dundee's Public Open Space Strategy*. Scottish Natural Heritage Report No. 130.
- Williams, D. R. y C. Collins (2001): "Racial Residential Segregation: A Fundamental Cause of Racial Disparities in Health", *Public Health Reports*, Vol. 116: 404-416.
- Wolff, R. (1965): "Beyond Tolerance", en: R. Wolff; B. Moore y H. Marcuse (eds): *A Critique of Pure Tolerance*. Boston: Beacon.
- Woolcock, M. (1998): "Social Capital and Economic Development. Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", *Theory and Society*, Vol. 27(2):151-208.
- World Commission on Environment and Development (WCED) (1987): *Our Common Future*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- WWF (2007): *Gross Domestic Product and Ecological Footprint*. Brussels: WWF.
- Yin, R. K. (2009): *Case Study Research: Design and Methods (4th Edition)*. London: Sage.
- Zapata Barrero, R. y Sánchez Montijano, E. (2011): *Manual de investigación cualitativa en la ciencia política*. Madrid: Editorial Tecnos.

PÁGINAS WEB

Agyeman, J. (2010a): "Inclusive or Exclusive Spaces?" *Julian Agyeman's Blog: Just Sustainabilities: Re-imagining equality, living within limits*. En línea: <http://julianagyeman.com>

Agyeman, J. (2010b): "Spatial Justice on Södra Vägen". *Julian Agyeman's Blog: Just Sustainabilities: Re-imagining equality, living within limits*. En línea: <http://julianagyeman.com>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015a): *Medio Ambiente y Sostenibilidad - Agenda 21 Local*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=8fa483c11ae76f52d67fd2>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015b): *Agenda 21 Local - 1996/97 - Borrador técnico "Estrategias y acciones hacia la sostenibilidad"*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=bc1f4661221609f35e7fe7>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015c): *Agenda 21 Local - 1998 - Modelo de Agenda 21 estructurada en 10 áreas temáticas y 21 indicadores ambientales*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=bc1f4661221609f35e7fe2>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015d): *Agenda 21 Local - 2002 - Plan de Acción Ambiental 2002-2007*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=bc1f4661221609f35e7f8f>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015e): *2002 - Adhesión a la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udalsarea 21)*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=bc1f4661221609f35e7f8f>

[gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203_7ff3](http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203_7ff3)

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015f): *Agenda 21 Local - 2006 - Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203_7fba

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015g): *Plan de Acción 2010-2014 de la Agenda Local 21 (PALVG 2010-2014)*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=713e4472_1221ace2203_7fb5

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015h): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz*. En línea: <http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=anilloVerde>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015i): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz - ¿Qué es el Anillo Verde?* En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1e8934a8_12e47a4954c_7ffd

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015j): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Historia*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_43a9ea96_12e27c9932e_7fb3

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015k): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Parque de Salburua*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_3d0924cc_12da3712de4_7fde

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015l): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Parque de Olarizu. Huertas de Olarizu*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_14a5f892_12e6abb0446_7f9e

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015m): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Parque del Zadorra*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_14508e8c_12dbba3c544_7fde

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015n): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Parque de Zabalgana*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_14508e8c_12dbba3c544_7fde

[gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_49df602a_12db67d0cd4_7ff3](http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_49df602a_12db67d0cd4_7ff3)

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015o): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz – Parque de Armentia*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u46de0ce0_12dc0c7eca6_7ffb

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015p): *Huertos Urbanos Comunitarios*. En línea: <http://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/tag/huertos-urbanos/>

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2015q): *Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz - Las raíces del mañana: Deja tu huella*. En línea: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u561cbbb6_14975bb93c0_7ff6&alias

Basalburu (2015): *¿Quiénes Somos?* En línea: <https://bcsalburua.wordpress.com/>

Environmental Justice Network (2015): *Environmental Justice Principles*. En línea: <http://www.ejnet.org/ej/principles.html>

European Commission (2002): *6th Environmental Action Programme*. En línea: <http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm>

European Commission (2010): *European Green Capital*. En línea: <http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about.html>

European Environment Agency (2010): *Environment and Health*. En línea: <http://www.eea.europa.eu/themes/human/intro>

Greenspace Scotland Website (2011): *What is greenspace?* En línea: <http://www.greenspacescotland.org.uk/default.asp?page=26>

McConnell, J. (2002): *Speech on the Scottish Executive policy on environment and sustainable development*. En línea: <http://www.scotland.gov.uk/pages/news/extras/00005700.aspx>

Natural England (2011): *Accessible Natural Greenspace Standard*. En línea: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605090108/http://www.naturalengland.org.uk/regions/east_of_england/ourwork/gi/accessiblenaturalgreenspacestandardangst.aspx

Ramsar (2015): *Humedales de Importancia Internacional*. En línea: <http://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional>

Sze, J. (2006): *Toxic Soup Redux: Why Environmental Racism and Environmental Justice Matter after Katrina*. En línea: <http://understandingkatrina.ssrc.org/Sze/>

Unión Europea (2015a): *Medio Ambiente y Cambio Climático*. En línea: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D20&locale=es.

Unión Europea (2015b): *Eurobarometer Special Surveys*. En línea: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Wingspread Conference on the Precautionary Principle (1998): En línea: <http://www.sehn.org/wing.html>.

Zabalortu (2015): *¿Quiénes Somos?* En línea: <http://www.zabalortu.org/quienes-somos/>

ANEXO 1: Executive Order 12898 (11 de febrero 1994)

Federal Actions To Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

Section 1-1. Implementation.

1-101. Agency Responsibilities.

To the greatest extent practicable and permitted by law, and consistent with the principles set forth in the report on the National Performance Review, each Federal agency shall make achieving environmental justice part of its mission by identifying and addressing, as appropriate, disproportionately high and adverse human health or environmental effects of its programs, policies, and activities on minority populations and low-income populations in the United States and its territories and possessions, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the Commonwealth of the Mariana Islands.

1-102. Creation of an Interagency Working Group on Environmental Justice.

a) Within 3 months of the date of this order, the Administrator of the Environmental Protection Agency ("Administrator") or the Administrator's designee shall convene an interagency Federal Working Group on Environmental Justice ("Working Group"). The Working Group shall comprise the heads of the following executive agencies and offices, or their designees: (a) Department of Defense; (b) Department of Health and Human Services; (c) Department of Housing and Urban Development; (d) Department of Labor; (e) Department of Agriculture; (f) Department of Transportation; (g) Department of Justice; (h) Department of the Interior; (i) Department of Commerce; (j) Department of Energy; (k) Environmental Protection Agency; (l) Office of Management and Budget; (m) Office of Science and Technology Policy; (n) Office of the Deputy Assistant to the President for Environmental Policy; (o) Office of the Assistant to the President for Domestic Policy; (p) National Economic Council; (q) Council of Economic Advisers; and (r) such other Government officials as the President may designate. The Working Group shall report to the President through the Deputy Assistant to the President for Environmental Policy and the Assistant to the President for Domestic Policy.

(b) The Working Group shall:

1. provide guidance to Federal agencies on criteria for identifying disproportionately high and adverse human health or environmental effects on minority populations and low-income populations;
2. coordinate with, provide guidance to, and serve as a clearinghouse for, each Federal agency as it develops an environmental justice strategy as required by section 1-103 of this order, in order to ensure that the administration, interpretation and enforcement of programs, activities and policies are undertaken in a consistent manner;
3. assist in coordinating research by, and stimulating cooperation among, the Environmental Protection Agency, the Department of Health and Human Services, the Department of Housing and Urban Development, and other agencies conducting research or other activities in accordance with section 3-3 of this order;
4. assist in coordinating data collection, required by this order; 59 FR 7630
5. examine existing data and studies on environmental justice;
6. hold public meetings as required in section 5-502(d) of this order; and
7. develop interagency model projects on environmental justice that evidence cooperation among Federal agencies.

1-103. Development of Agency Strategies.

(a) Except as provided in section 6-605 of this order, each Federal agency shall develop an agency-wide environmental justice strategy, as set forth in subsections (b)-(e) of this section that identifies and addresses disproportionately high and adverse human health or environmental effects of its programs, policies, and activities on minority populations and low-income populations. The environmental justice strategy shall list programs, policies, planning and public participation processes, enforcement, and/or rulemakings related to human health or the environment that should be revised to, at a minimum:

- (1) promote enforcement of all health and environmental statutes in areas with minority populations and low-income populations;
- (2) ensure greater public participation;
- (3) improve research and data collection relating to the health of and environment of minority populations and low-income populations; and
- (4) identify differential patterns of consumption of natural resources among minority populations and low-income populations. In addition, the environmental justice strategy shall include, where appropriate, a timetable for undertaking identified revisions and consideration of economic and social implications of the revisions.

(b) Within 4 months of the date of this order, each Federal agency shall identify an internal administrative process for developing its environmental justice strategy, and shall inform the Working Group of the process.

(c) Within 6 months of the date of this order, each Federal agency shall provide the Working Group with an outline of its proposed environmental justice strategy.

(d) Within 10 months of the date of this order, each Federal agency shall provide the Working Group with its proposed environmental justice strategy.

(e) Within 12 months of the date of this order, each Federal agency shall finalize its environmental justice strategy and provide a copy and written description of its strategy to the Working Group. During the 12 month period from the date of this order, each Federal agency, as part of its environmental justice strategy, shall identify several specific projects that can be promptly undertaken to address particular concerns identified during the development of the proposed environmental justice strategy, and a schedule for implementing those projects.

(f) Within 24 months of the date of this order, each Federal agency shall report to the Working Group on its progress in implementing its agency-wide environmental justice strategy.

(g) Federal agencies shall provide additional periodic reports to the Working Group as requested by the Working Group.

1-104. Reports to the President.

Within 14 months of the date of this order, the Working Group shall submit to the President, through the Office of the Deputy Assistant to the President for Environmental Policy and the Office of the Assistant to the President for Domestic Policy, a report that describes the implementation of this order, and includes the final environmental justice strategies described in section 1-103(e) of this order.

Sec. 2-2. Federal Agency Responsibilities for Federal Programs.

Each Federal agency shall conduct its programs, policies, and activities that substantially affect human health or the environment, in a manner that ensures that such programs, policies, and activities do not have the effect of excluding persons (including populations) from participation in, denying persons (including populations) the benefits of, or subjecting persons (including populations) to discrimination under, such programs, policies, and activities, because of their race, color, or national origin. 59 FR 7631

Sec. 3-3. Research, Data Collection, and Analysis.

3-301. Human Health and Environmental Research and Analysis.

(a) Environmental human health research, whenever practicable and appropriate, shall include diverse segments of the population in epidemiological and clinical studies, including segments at high risk from environmental hazards, such as minority populations, low-income populations and workers who may be exposed to substantial environmental hazards.

(b) Environmental human health analyses, whenever practicable and appropriate, shall identify multiple and cumulative exposures.

(c) Federal agencies shall provide minority populations and low-income populations the opportunity to comment on the development and design of research strategies undertaken pursuant to this order.

3-302. Human Health and Environmental Data Collection and Analysis.

To the extent permitted by existing law, including the Privacy Act, as amended (5 U.S.C. section 552a):

(a) each Federal agency, whenever practicable and appropriate, shall collect, maintain, and analyze information assessing and comparing environmental and human health risks borne by populations identified by race, national origin, or income. To the extent practical and appropriate, Federal agencies shall use this information to determine whether their programs, policies, and activities have disproportionately high and adverse human health or environmental effects on minority populations and low-income populations;

(b) In connection with the development and implementation of agency strategies in section 1-103 of this order, each Federal agency, whenever practicable and appropriate, shall collect, maintain and analyze information on the race, national origin, income level, and other readily accessible and appropriate information for areas surrounding facilities or sites expected to have a substantial environmental, human health, or economic effect on the surrounding populations, when such facilities or sites become the subject of a substantial Federal environmental administrative or judicial action. Such information shall be made available to the public, unless prohibited by law; and

(c) Each Federal agency, whenever practicable and appropriate, shall collect, maintain, and analyze information on the race, national origin, income level, and other readily accessible and appropriate information for areas surrounding Federal facilities that are:

1. 1) subject to the reporting requirements under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, 42 U.S.C. section 11001-11050 as mandated in Executive Order No. 12856; and

2) expected to have a substantial environmental, human health, or economic effect on surrounding populations. Such information shall be made available to the public, unless prohibited by law.

(d) In carrying out the responsibilities in this section, each Federal agency, whenever practicable and appropriate, shall share information and eliminate unnecessary duplication of efforts through the use of existing data systems and cooperative agreements among Federal agencies and with State, local, and tribal governments.

Sec. 4-4. Subsistence Consumption of Fish and Wildlife.

4-401. Consumption Patterns.

In order to assist in identifying the need for ensuring protection of populations with differential patterns of subsistence consumption of fish and wildlife, Federal agencies, whenever practicable and appropriate, shall collect, maintain, and analyze information on the consumption patterns of populations who principally rely on fish and/or wildlife for subsistence. Federal agencies shall communicate to the public the risks of those consumption patterns. 59 FR7632

4-402. Guidance.

Federal agencies, whenever practicable and appropriate, shall work in a coordinated manner to publish guidance reflecting the latest scientific information available concerning methods for evaluating the human health risks associated with the consumption of pollutant-bearing fish or wildlife. Agencies shall consider such guidance in developing their policies and rules.

Sec. 5-5. Public Participation and Access to Information.

(a) The public may submit recommendations to Federal agencies relating to the incorporation of environmental justice principles into Federal agency programs or policies. Each Federal agency shall convey such recommendations to the Working Group.

b) Each Federal agency may, whenever practicable and appropriate, translate crucial public documents, notices, and hearings relating to human health or the environment for limited English speaking populations.

(c) Each Federal agency shall work to ensure that public documents, notices, and hearings relating to human health or the environment are concise, understandable, and readily accessible to the public.

(d) The Working Group shall hold public meetings, as appropriate, for the purpose of fact-finding, receiving public comments, and conducting inquiries concerning environmental justice. The Working Group shall prepare for public review a summary of the comments and recommendations discussed at the public meetings.

Sec. 6-6. General Provisions.

6-601. Responsibility for Agency Implementation.

The head of each Federal agency shall be responsible for ensuring compliance with this order. Each Federal agency shall conduct internal reviews and take such other steps as may be necessary to monitor compliance with this order.

6-602. Executive Order No. 12250.

This Executive order is intended to supplement but not supersede Executive Order No. 12250, which requires consistent and effective implementation of various laws prohibiting discriminatory practices in programs receiving Federal financial assistance. Nothing herein shall limit the effect or mandate of Executive Order No. 12250.

6-603. Executive Order No. 12875.

This Executive order is not intended to limit the effect or mandate of Executive Order No. 12875.

6-604. Scope.

For purposes of this order, Federal agency means any agency on the Working Group, and such other agencies as may be designated by the President, that conducts any Federal program or activity that substantially affects human health or the environment. Independent agencies are requested to comply with the provisions of this order.

6-605. Petitions for Exemptions.

The head of a Federal agency may petition the President for an exemption from the requirements of this order on the grounds that all or some of the petitioning agency's programs or activities should not be subject to the requirements of this order.

6-606. Native American Programs.

Each Federal agency responsibility set forth under this order shall apply equally to Native American programs. In addition, the Department of the Interior, in coordination with the Working Group, and, after consultation with tribal leaders, shall coordinate steps to be taken pursuant to this order that address Federally-recognized Indian Tribes.

6-607. Costs.

Unless otherwise provided by law, Federal agencies shall assume the financial costs of complying with this order.

6-608. General.

Federal agencies shall implement this order consistent with, and to the extent permitted by, existing law.

6-609. Judicial Review.

This order is intended only to improve the internal management of the executive branch and is not intended to, nor does it create any right, benefit, or trust responsibility, substantive or procedural, [*7633] enforceable at law or equity by a party against the United States, its agencies, its officers, or any person. This order shall not be construed to create any right to judicial review involving the compliance or noncompliance of the United States, its agencies, its officers, or any other person with this order.

WILLIAM J. CLINTON THE WHITE HOUSE,

February 11, 1994.

En línea: <http://www.hud.gov/offices/ftheo/FHLaws/EXO12898.cfm>

ANEXO 2: Guion de la entrevista

1. El sistema de espacios verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz se publicita como la identidad de la ciudad. ¿Podría describir lo que significa para usted los espacios verdes urbanos?
2. ¿Qué importancia tienen los espacios verdes para la vida de la ciudad de Vitoria-Gasteiz?
3. ¿Cree que existen diferencias en los espacios verdes dependiendo del lugar en donde se reside en la ciudad?
 - a. En caso afirmativo ¿podría indicar algunas?
 - b. ¿Cómo cree que pueden ser resueltas estas diferencias?
4. ¿Conoce el término 'justicia ambiental'?
5. El plan ambiental de la ciudad está fundamentalmente comprometido con el logro de la sostenibilidad en la misma. ¿Cuál es su visión de una Vitoria-Gasteiz sostenible?
6. En la introducción del Plan de Acción de la A21 de Vitoria-Gasteiz se señala: "Como principal factor limitante, la evaluación reveló la circunscripción del Plan al ámbito ambiental, factor que impidió abordar aspectos con gran incidencia en el desarrollo sostenible" ¿A qué factores se refiere?
7. ¿Qué importancia tienen los espacios verdes en el plan ambiental de la ciudad y en el logro de su sostenibilidad?
 - a. ¿Promueven los espacios verdes de Vitoria-Gasteiz únicamente la sostenibilidad ambiental o también la sostenibilidad social?
8. ¿Cree Ud. que los planes ambientales deberían tener en cuenta cuestiones relacionadas con temas de igualdad y justicia social?
9. Vitoria-Gasteiz subscribe los compromisos de Aalborg. Son 10 grandes líneas de actuación en los que basar la gestión urbana hacia la sostenibilidad. En el 10º compromiso se contempla como objetivo "procurar la justicia ambiental". Así está señalado en el Plan de Acción (2010-2014). ¿Cómo ha incorporado la ciudad cuestiones de igualdad y justicia social en el plan ambiental? ¿o no lo ha hecho? ¿cómo se plantea hacerlo en esta nueva etapa?

- a. ¿Y en el caso específico de los espacios verdes?
 - i. ¿Podría poner algún ejemplo?
- 10. ¿Cuáles son los retos a los que tiene que enfrentarse la ciudad para conseguir que la justicia ambiental sea un pilar importante en el plan ambiental de la ciudad, y concretamente en el plan de desarrollo de sus espacios verdes?

ANEXO 3: Contacto con los participantes

Estimado X:

Mi nombre es Alicia Arriaga Legarda y actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre la interrelación de la justicia ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto urbano español, particularmente en el caso de Vitoria-Gasteiz. Soy alumna del Programa de Doctorado "Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales" impartido por el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. También pertenezco al grupo de investigación "Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible" perteneciente al mismo Departamento.

Esta investigación tiene como objetivo examinar el plan de acción de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, particularmente las políticas e iniciativas relacionadas con sus espacios verdes.

Dado el cargo que ocupa como Y, considero que su participación en este estudio es de crucial importancia para el éxito de la tesis doctoral. Me preguntaba, por ello, si estaría usted dispuesto a ser entrevistado con el fin de colaborar a la realización de esta investigación. Por supuesto, esta entrevista, la cual no se extenderá más de 45 minutos, se llevaría a cabo en el momento y el lugar que sea para usted más conveniente.

En este momento puedo confirmarle que:

La Directora del Programa de Doctorado al que pertenezco, quien también es mi directora de tesis, la Dra. Mercedes Pardo Buendía, me ha dado los permisos necesarios para que esta entrevista se lleve a cabo. Puede contactar con ella a través de su correo electrónico (mpbuendi@polsoc.uc3m.es) o de su número de teléfono (91 624 89 06) si necesita información institucional de primera mano.

Si usted da su permiso, durante la entrevista utilizaré un dispositivo electrónico para grabar la conversación, concretamente un mp3. Este dispositivo no captará ninguna imagen, únicamente su voz. Se tomarán notas si usted prefiere que no se utilice la grabadora. En todo caso, inmediatamente después de la entrevista, se le enviará una copia, en el formato que usted decida, de la conversación mantenida. De esta manera, ambas partes tendrán una constancia de lo que ambos digamos.

Puedo asegurarle que este estudio no supone ningún riesgo para usted ni tampoco para su organización. En cualquier caso, si usted así lo decide puede optar por utilizar en la tesis doctoral su nombre y su cargo bajo seudónimo.

Usted tendrá la libertad de retirarse de la investigación en cualquier momento y/o solicitar que la transcripción de su entrevista no sea utilizada.

Si así lo prefiere, se le enviará una copia de las preguntas que se harán en la entrevista una semana antes de la misma.

Una vez la investigación esté finalizada, me pondré en contacto de nuevo con usted para enviarle una copia de mi informe/tesis final si así lo desea. Existe la posibilidad de que los resultados de la investigación se publiquen en la revista científica pertinente. Si es así, se le comunicará.

Espero que pueda ayudarme en mi investigación, como le digo su participación es de vital importancia para el éxito de esta tesis doctoral. Si tiene cualquier duda sobre la naturaleza de la investigación o sobre el alcance de su participación en ella, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en esta dirección de correo electrónico o bien en el teléfono 628 499 302.

Asimismo, le adjunto en este correo electrónico una copia de mi curriculum vitae donde podrá comprobar la seriedad de mi trabajo, así como los artículos que he publicado y los congresos en los que he participado exponiendo el progreso de esta investigación.

Por último, quiero darle las gracias por tomarse el tiempo para considerar mi petición.

Cordialmente,

Alicia Arriaga Legarda

ANEXO 4: Agenda Local 21 – Capítulo 28

LOCAL AUTHORITIES' INITIATIVES IN SUPPORT OF AGENDA 21

PROGRAMME AREA

Basis for action

28.1. Because so many of the problems and solutions being addressed by Agenda 21 have their roots in local activities, the participation and cooperation of local authorities will be a determining factor in fulfilling its objectives. Local authorities construct, operate and maintain economic, social and environmental infrastructure, oversee planning processes, establish local environmental policies and regulations, and assist in implementing national and subnational environmental policies. As the level of governance closest to the people, they play a vital role in educating, mobilizing and responding to the public to promote sustainable development.

Objectives

28.2. The following objectives are proposed for this programme area:

- (a) By 1996, most local authorities in each country should have undertaken a consultative process with their populations and achieved a consensus on "a local Agenda 21" for the community;
- (b) By 1993, the international community should have initiated a consultative process aimed at increasing cooperation between local authorities;
- (c) By 1994, representatives of associations of cities and other local authorities should have increased levels of cooperation and coordination with the goal of enhancing the exchange of information and experience among local authorities;
- (d) All local authorities in each country should be encouraged to implement and monitor programmes which aim at ensuring that women and youth are represented in decision-making, planning and implementation processes.

Activities

28.3. Each local authority should enter into a dialogue with its citizens, local organizations and private enterprises and adopt "a local Agenda 21". Through consultation and consensus-building, local

authorities would learn from citizens and from local, civic, community, business and industrial organizations and acquire the information needed for formulating the best strategies. The process of consultation would increase household awareness of sustainable development issues. Local authority programmes, policies, laws and regulations to achieve Agenda 21 objectives would be assessed and modified, based on local programmes adopted. Strategies could also be used in supporting proposals for local, national, regional and international funding.

28.4. Partnerships should be fostered among relevant organs and organizations such as UNDP, the United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) and UNEP, the World Bank, regional banks, the International Union of Local Authorities, the World Association of the Major Metropolises, Summit of Great Cities of the World, the United Towns Organization and other relevant partners, with a view to mobilizing increased international support for local authority programmes. An important goal would be to support, extend and improve existing institutions working in the field of local authority capacity-building and local environment management. For this purpose:

- (a) Habitat and other relevant organs and organizations of the United Nations system are called upon to strengthen services in collecting information on strategies of local authorities, in particular for those that need international support;
- (b) Periodic consultations involving both international partners and developing countries could review strategies and consider how such international support could best be mobilized. Such a sectoral consultation would complement concurrent country-focused consultations, such as those taking place in consultative groups and round tables.

28.5. Representatives of associations of local authorities are encouraged to establish processes to increase the exchange of information, experience and mutual technical assistance among local authorities.

Means of implementation

A) Financing and cost evaluation

28.6. It is recommended that all parties reassess funding needs in this area. The Conference secretariat has estimated the average total annual cost (1993-2000) for strengthening international secretariat services for implementing the activities in this chapter to be about \$1 million on grant or concessional terms. These are indicative and order-of-magnitude estimates only and have not been reviewed by Governments.

B) Human resource development and capacity-building

28.7. This programme should facilitate the capacity-building and training activities already contained in other chapters of Agenda 21.

ANEXO 5: Indicadores de la Agenda Local 21 de Vitoria-Gasteiz

PRIMER SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES DE LA AGENDA 21 DE VITORIA-GASTEIZ. 1998- 2004

Contaminación Urbana

1. Número de días al año en que se registran calidades de aire “regular” y/o “mala”
2. Número de veces al año que se supera el umbral de información a la población para el ozono
3. Población expuesta durante las horas diurnas y nocturnas a niveles de ruidos superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Tráfico y Transporte

4. Número de viajeros que utilizan el autobús urbano
5. Número de vehículos que circulan diariamente por las principales calles de acceso al centro de la ciudad

Agua

6. Consumo doméstico de agua por habitante y día
7. Porcentaje de agua que se recicla
8. Proporción de carga orgánica aportada al río Zadorra por la ciudad

Energía

9. Consumo doméstico de gas y electricidad por habitante y año
- Industria
10. Número de empresas de la ciudad que han conseguido el certificado de gestión ambiental

Residuos

11. Peso de residuos domésticos producidos por habitante y día
12. Porcentaje de residuos reciclados frente a los producidos

Urbanismo

13. Número de licencias concedidas para la rehabilitación de viviendas
14. Porcentaje de la población que tiene acceso a pie (< 1 km.) a los servicios básicos
15. Número de edificios que han conseguido el certificado de eficiencia energética

Naturaleza y Biodiversidad

16. Número de especies de aves acuáticas reproductoras existentes en el municipio
17. Superficie (m²) de áreas degradadas recuperadas
18. Superficie de terrenos agrícolas que se acogen a algún programa de prácticas agrícolas ambientales

Salud y Riesgos Ambientales

19. Número de fumadores

Información, Educación y Participación Ciudadana

20. Número de consultas de información ambiental
21. Porcentaje de la población escolar que accede a programas de educación ambiental organizados por el Ayuntamiento

AGENDA 21 DE VITORIA-GASTEIZ, NUEVO SISTEMA DE INDICADORES. 2004-2006

Contaminación urbana

1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire “regular”, “mala” o “muy mala”
2. Número de veces al año en que se supera el umbral de información a la población para el ozono

3. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad
4. Población residente en calles expuestas durante el periodo nocturno a niveles de ruido exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad

Tráfico y transporte

5. Movilidad local
 - 5.a. Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario
 - 5.b. Distancia media diaria recorrida por cada habitante
 - 5.c. Duración media de los desplazamientos diarios de cada habitante
 - 5.d. Porcentaje de viajes sistemáticos vs. no sistemáticos
 - 5.e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte
6. Número de viajeros que utilizan el autobús urbano
7. Intensidad de tráfico
8. Superficie dedicada a infraestructuras de transporte

Agua

9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra (DQO)
10. Depuración de aguas residuales
11. Consumo doméstico de agua
12. Demanda total de agua
13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
14. Rendimiento de la red de distribución de agua potable

Energía

15. Consumo doméstico de electricidad y gas natural
16. Número de viviendas que han conseguido el certificado de eficiencia energética

Industria

17. Empresas con certificado de gestión ambiental

Residuos

- 18. Generación de residuos domésticos y comerciales
- 19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos

Urbanismo y territorio

- 20. Accesibilidad a servicios básicos y a zonas públicas abiertas
- 21. Uso sostenible del suelo
 - 21a. Suelo artificializado
 - 21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
 - 21c. Intensidad de uso del suelo
 - 21d. Localización de los nuevos desarrollos
 - 21e. Restauración de superficies urbanas
 - 21f. Protección y recuperación del espacio rural y natural

Naturaleza y biodiversidad

- 22. Número de especies de aves acuáticas que nidifican en el municipio de Vitoria-Gasteiz
- 23. Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura ecológica
- 24. Estado ecológico de los cursos fluviales (índice BMWP⁹)

Salud y riesgos ambientales

- 25. Porcentaje de fumadores (habituales u ocasionales)
- 26. Número anual de accidentes de tráfico en ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
- 27. Número anual de atropellos de peatones en ámbito urbano por cada 10.000 habitantes

Información, educación y participación ciudadana

- 28. Número de consultas de información ambiental
 - 28a. Número de accesos a información y documentación ambiental
 - 28b. Número de consultas dirigidas a los servicios técnicos municipales
- 29. Participación escolar en las actividades de educación ambiental organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Medio socioeconómico

- 30. Satisfacción ciudadana con la comunidad local

- 31. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para el desarrollo
- 32. Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para el desarrollo
- 33. Tasa de dependencia demográfica
- 34. Porcentaje de familias receptoras del salario social
- 35. Tasa de paro

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (www.vitoria-gasteiz.org)

ANEXO 6: Compromisos de Aalborg+10

1. FORMAS DE GOBIERNO

Nos hemos comprometido a impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor democracia participativa.

1. desarrollar una visión común a largo plazo de una ciudad o pueblo sostenible.
2. aumentar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en las comunidades locales y las administraciones municipales.
3. invitar a todos los sectores locales a la participación activa.
4. hacer que nuestras decisiones sean abiertas, responsables y transparentes.
5. cooperar con eficacia y en acuerdo con otras ciudades y otros niveles de gobierno.

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Nos hemos comprometido a elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación.

1. consolidar la Agenda Local 21 así como otros procesos de sostenibilidad local y enraizarlos en la gestión municipal.
2. posibilitar una gestión integrada hacia la Sostenibilidad, basada en los principios preventivos y en línea con la Estrategia Temática Urbana de la UE.
3. fijar objetivos y determinar plazos en el marco de los Compromisos de Aalborg y crear instrumentos de monitorización que faciliten su seguimiento.
4. asegurar que los temas de sostenibilidad son parte central de los procesos de toma de decisión municipal y que la asignación de recursos está basada en criterios sólidos y amplios de sostenibilidad.

5. cooperar con la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles y sus redes para que supervise y evalúe nuestro progreso hacia la consecución de nuestros objetivos de sostenibilidad.

3. BIENES NATURALES COMUNES

Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes.

1. reducir el consumo de energía primaria y aumentar el porcentaje de energías limpias y renovables.
2. mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de la misma.
3. promover y aumentar la biodiversidad y aumentar y cuidar los espacios verdes y las áreas naturales.
4. mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica y promover la agricultura y la silvicultura sostenible.
5. mejorar la calidad del aire.

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES

Nos hemos comprometido firmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.

1. evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
2. gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
3. eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma.
4. asumir la compra sostenible.
5. promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO

Nos hemos comprometido a asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana y a enfocar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común.

1. regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas.
2. evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a zonas verdes.
3. asegurar un urbanismo de usos del suelo mixtos, con un balance equilibrado entre la actividad laboral, residencial y de servicios, dando prioridad a un uso residencial en el núcleo urbano.
4. asegurar una conservación, renovación y reutilización apropiada de nuestra herencia cultural urbana.
5. aplicar requerimientos para un diseño y construcción sostenibles y promover la arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías de construcción.

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO

Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles.

1. reducir la dependencia del transporte privado motorizado y promover alternativas atractivas que sean accesibles para todos.
2. aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, peatonal y en bicicleta.
3. promover el cambio a vehículos con bajas emisiones.
4. desarrollar planes integrados de movilidad urbana sostenible.
5. reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la salud pública.

7. ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

Nos hemos comprometido a promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.

1. Aumentar la conciencia pública y realizar actuaciones sobre un amplio conjunto de determinantes para la salud, la mayoría no relacionada directamente con el sector sanitario.
2. Promover el desarrollo de planes de salud municipales que proporcionen a nuestras ciudades los medios para construir y mantener alianzas estratégicas para el bienestar.
3. Reducir desigualdades sanitarias y ocuparnos de la pobreza, lo que requiere estudios regulares del progreso realizado en la reducción de estas desigualdades.
4. Promover la evaluación de los impactos en la salud, como una vía para que todos los sectores trabajen en una mejora en la salud y la calidad de vida.
5. Movilizar a los agentes de planificación urbana para que incorporen consideraciones hacia la salud pública en sus estrategias e iniciativas de planificación.

8. ECONOMIA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE

Nos hemos comprometido a crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio ambiente.

1. adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo local y la creación de empresas.
2. cooperar con las empresas locales para promover e implantar buenas prácticas corporativas.
3. desarrollar e implantar principios de sostenibilidad en la localización de las empresas.
4. incentivar a los mercados hacia los productos locales y regionales de alta calidad.
5. promover el turismo local sostenible.

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Nos hemos comprometido a asegurar comunidades integradoras y solidarias.

1. Desarrollar e implementar medidas para prevenir y paliar la pobreza.
2. Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos, educación, empleo, formación e información, así como a las actividades culturales.
3. Promover la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.
4. Mejorar la seguridad ciudadana.
5. Asegurar condiciones de vida y alojamiento de buena calidad y socialmente integradas.

10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL

Nos hemos comprometido a asumir nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima.

1. desarrollar y seguir un enfoque estratégico e integrado para mitigar el cambio climático, y trabajar para conseguir un nivel sostenible de emisión de gases invernadero.
2. integrar la política de protección medioambiental en el núcleo de nuestras políticas en el área de la energía, el transporte, el consumo, los residuos, la agricultura y la silvicultura.
3. aumentar la concienciación sobre las causas y los impactos probables del cambio climático, e integrar acciones preventivas en nuestras políticas sobre el cambio climático.
4. reducir nuestro impacto en el medio ambiente global, y promover el principio de justicia ambiental.
5. fomentar la cooperación internacional de pueblos y ciudades y desarrollar respuestas locales a problemas globales, en asociación con gobiernos locales, comunidades y partes interesadas.

Fuente: Diputación Foral de Álava (www.alava.net)

